

Lo que ofrece una oportunidad histórica especial a las ocupaciones de fábrica vinculadas al colapso del 2001 es el contexto histórico nuevo que produce la rebelión popular del argentinazo y la transformación del movimiento piquetero (...) en un movimiento de masas de características nacionales. Se abre la posibilidad de una tentativa excepcional en la lucha contra los despidos (...) y la desocupación, mediante la ocupación de empresas, su expropiación y el control y la gestión obreras (...)

Mientras una opinión convencional aborda el problema de las empresas vaciadas y ocupadas como un tema de 'modelos de gestión' o de 'reinención del trabajo', lo cierto es que ese problema ha sido planteado por la bancarrota capitalista y que, por lo tanto, será replanteado por esa misma bancarrota (...) En definitiva, cuando el lector haya llegado a la última página del libro de Pablo Heller, seguramente saldrá mucho más capacitado para abordar la crisis social en curso y las bancarrotas financieras que ya se prefiguran.

Jorge Altamira
(Extractos del Prólogo)



EDICIONES
RUMBOS

Fábricas Ocupadas Argentina 2000-2004

✠ Pablo Heller

Ediciones Rumbos

Fábricas Ocupadas

Argentina 2000-2004

Prólogo de Jorge Altamira



Pablo Heller

Pablo Heller

ARGENTINA 2000/2004
FABRICAS OCUPADAS

EDICIONES RUMBOS

2004 - 1° Edición
ISBN 987-20134-3-8

IMPRESO EN LA ARGENTINA

Queda hecho el depósito que dispone la ley 11.723

Ediciones Rumbos - Ayacucho 448

E-mail: prensaobrera@po.org.ar

Este libro se terminó de imprimir en Abril de 2004

en Talleres Ripari SA - J.G. Lemos 246 - Bs. As. - Argentina

Índice

Prefacio	7
Prólogo	9
Introducción.....	17
Condicionamientos de la gestión obrera	25
Autogestión y movimiento de empresas recuperadas	43
“Construyendo poder”, pero... ¿para quién?.....	63
Autogestión y cooperativas	69
Autogestión y mercado	81
Estatización burguesa y burocrática	99
Financiamiento	121
Injerencia estatal	135
Expropiación y Ley de Quiebras	145
La expropiación de Sasetru	159
Brukman	187
Zanón	213
La gestión obrera en las empresas de transporte.....	229
Conclusiones y perspectivas	259
Anexos	281
Cronología	322
Bibliografía	327

Prefacio

La publicación en las páginas de *Prensa Obrera* en el curso de estos tres últimos años de centenares de artículos donde se analiza pormenorizadamente la experiencia de las fábricas ocupadas, sus implicancias, sus alcances, contradicciones y perspectivas, constituye el basamento del que se nutre este libro. Esos artículos, a los que hago mención, procuraron dar cuenta de este fenómeno, abordándolo desde diferentes ángulos y facetas. Este amplio trabajo de elaboración volcado en las páginas de *Prensa Obrera* fue lo que impulsó a algunos compañeros y lectores a sugerir la idea de reunir todo ese material y editar un libro.

Aunque confieso que tardíamente, este libro intenta satisfacer ese pedido. La obra procura sistematizar todo lo que venimos escribiendo sobre el tema y se incorpora en el mismo, en lo posible, las valiosas contribuciones que han realizado otros compañeros en ese ámbito. Se ha procurado actualizar toda la información que se vuelca en la obra sobre la evolución de este movimiento y se ha incluido un examen crítico de la bibliografía escrita en la materia, en especial la más reciente, cuya publicación ha tenido lugar a fines del 2003. La obra no se limita, de todos modos, a la reunión del material existente sino que se ha procedido a una reelaboración crítica de ese material y lo más importante, se procura avanzar en una conclusión y trazar una perspectiva a la luz de la evolución más reciente de este movimiento y el escenario vivo de la lucha de clases.

No pude dejar de agradecer la colaboración de Lucila Fitte, estudiante avanzada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, quien tomó en sus manos con entusiasmo y una paciencia infinita, el trabajo de búsqueda de bibliografía, ya sea gráfica o en Internet referida al tema, la selección de las citas adecuadas y el ordenamiento del trabajo existente. Del mismo modo, mi reconocimiento por la labor desempeñada por Alejandro Guerrero quien

colaboró en la redacción de tres capítulos referidos a las experiencias desarrolladas en tres de las empresas ocupadas y asumió la pesada tarea de hacer las correcciones de estilo del libro, aportando su experiencia política y su oficio como periodista y escritor.

He aquí la obra que sometemos al examen crítico de los lectores.

Pablo Heller
Buenos Aires, marzo de 2004

Prólogo

El fenómeno de ocupaciones de empresa, control obrero o gestión obrera, e incluso el de las fábricas recuperadas (que es distinto de lo primero) tiene una larga tradición en el movimiento obrero internacional y también en el argentino. No hace falta siquiera decir que no nace con la crisis económica que eclosionó en diciembre del 2001, ni siempre ha tenido una causa directamente económica, aunque sí ligado con la crisis del capitalismo como régimen social. Esta gran tendencia histórica se manifiesta en la revolución rusa, entre marzo y julio de 1917, cuando se desarrollan los comités de fábrica que habían debutado como tentativa revolucionaria del proletariado en la revolución de 1905. Ocupan luego un lugar histórico prominente las ocupaciones de fábrica en Turín y en Baviera, en 1920, y la ocupación generalizada de empresas en Francia en junio de 1936 y en mayo de 1968, pero por sobre todo la gran gesta del proletariado de España y más que nada de Cataluña, en 1936-37, que estableció una organización de gestión obrera generalizada e incluso la gestión obrera colectiva de algunas ramas enteras de la economía. Una importancia especial merece las ocupaciones de empresa y la gestión de los trabajadores en Japón, en 1946 y 1947, porque se produjeron bajo la ocupación militar norteamericana y fueron enfrentadas, al cabo de un tiempo, como una verdadera guerra civil de la cual la clase obrera nipona salió claramente derrotada. Lo que algunos descubren como un novedoso método de explotación del trabajo en el llamado "toyotismo", nace simplemente del resultado negativo que tuvo para los trabajadores aquella gran tentativa histórica del proletariado de Japón.

En América de Sur se destacan como gestas heroicas la ocupación de las salitreras en Chile, de las minas de estaño en Bolivia y del cobre en Perú. Un lugar muy especial ocupan en esta historia las ocupaciones de empresas y el control obrero en julio-setiembre de 1973, en Chile, acompañadas por la formación de los cordones industriales, que fueron combatidos en forma iraplacable por el gobierno de la Unidad Popular de Allende, y la gran ocupación generalizada de empre-

sas de la clase obrera uruguaya, en junio del mismo año, para enfrentar el golpe militar. Un lugar especial lo tienen las ocupaciones de tierras, de fincas y de latifundios en toda la historia del continente, pero en especial en Centroamérica en la década de 1930

En Argentina, las ocupaciones de empresa se manifestaron intermitentemente a lo largo de toda la historia del movimiento obrero, pero se generalizan en una escala nunca vista antes a partir del golpe fusilador de 1955. La ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre en enero de 1959 dio lugar a una huelga general por tiempo indeterminado y una lucha de barricadas contra el ejército en el barrio de Mataderos y tuvo una enorme repercusión social y política en la escena nacional. Dos importantes plenarios sindicales, en La Falda (1957) y Huerta Grande (1960) consagraron a las ocupaciones y al control obrero como puntos centrales de programa. Las más de las veces, las ocupaciones de fábrica en Argentina se combinaron con el "paro activo" y las manifestaciones callejeras, dando lugar a las huelgas políticas de masas que caracterizaron, en especial, al período que arranca poco antes del cordobazo. Pero hubieron numerosísimas ocupaciones de empresa puntuales; a fines de los 60 la justicia argentina validó, en los tribunales inferiores, a las ocupaciones de empresas como un medio de acción sindical legítimo. En 1964 la burocracia sindical organizó una ocupación general de fábricas, que fue ampliamente seguida, pero que no tenía una finalidad proletaria sino golpista, contra el gobierno de Illia, que luego se verificó en junio de 1966 con el asalto al poder por parte de Onganía-Alsogaray. En 1970, sin embargo, los trabajadores clasistas de las fábricas Fiat, en Córdoba, ocuparon la empresa para expulsar a la burocracia sindical y dar paso, más tarde, a los sindicatos Sitrac-Sitram.

Un estudioso del movimiento obrero italiano entiende a las ocupaciones de fábrica como una tentativa de reapropiación de sus métodos de lucha por parte de las bases obreras, frente a la huelga que es manipulada a la distancia y sin debido control por parte de la burocracia de los sindicatos. Replegadas sobre sí mismas, sin embargo, incluso las ocupaciones de empresa más avanzadas acaban en el aislamiento; es que el cuestionamiento que implican de la propiedad capitalista

plantea de inmediato la necesidad de cuestionar el poder político estatal de esa clase — lo cual exige una acción política de masas y la revolución. Es un hecho incuestionable, sin embargo, que, teórica y empíricamente, las ocupaciones de fábrica constituyen un cuestionamiento al capital como potencia social de dominación, y cuando van acompañadas del control obrero y de la gestión obrera representan una tentativa de reorganización social sobre nuevas bases.

Lo que sorprende del movimiento de ocupaciones de empresas (incluidas clínicas y líneas de transporte) que tiene lugar en Argentina en los alrededores del 2001 no es la repercusión que adquirió sino el escaso número de esas ocupaciones, ligadas muy estrictamente a casos de vaciamiento empresarial, esto si se lo compara con la inmensidad de los despidos masivos y de la desocupación que arrancan en 1992 con las privatizaciones menemistas y con la tradición del país en la lucha obrera y sindical contra las cesantías. El movimiento de ocupaciones y de organización de una gestión obrera, que estudia Pablo Heller en este libro, debería impresionar, en primer lugar, por su debilidad, al menos en cuanto al número. Aunque la explicación de esta situación es manifiestamente compleja, porque es la consecuencia de una combinación determinada de factores históricos diversos, es claro que está relacionada con la derrota del movimiento de resistencia a las privatizaciones, en particular en petroleros, telefónicos y ferroviarios. Estas derrotas significaron un quiebre de lo que se consideraban conquistas, no solamente obreras sino nacionales. No faltaron las tentativas de resistencia, incluso enérgicas, pero consiguieron ser doblegadas por la traición de la burocracia sindical y un derroche de fondos para indemnizaciones obtenidos a costa de un extraordinario endeudamiento externo; nos referimos a la gran huelga petrolera de Tartagal-Mosconi y a la ocupación de la sede central de YPF, a la ocupación de edificios de Entel y a la larga huelga ferroviaria. Aunque exceda el marco de este prólogo, dejamos constancia para el registro que el saqueo nacional fue impulsado por el movimiento nacional peronista, que tenía por presidente a Menem y por gobernador de Santa Cruz a Kirchner, y que fue apoyado por el 99% de los dirigentes y punteros del partido justicialista.

Lo que ofrece una oportunidad histórica especial a las ocupacio-

nes de fábrica vinculadas al colapso del 2001 es el contexto histórico nuevo que produce la rebelión popular del argentinazo y la transformación del movimiento piquetero, desde el corte de la ruta 3 en La Matanza, en noviembre del 2000, y desde su primera asamblea nacional, en junio del 2001, en un movimiento de masas de características nacionales. Se abre la posibilidad de una tentativa excepcional en la lucha contra los despidos, que hacen furor a partir de enero, y la desocupación, mediante la ocupación de empresas, su expropiación y el control y la gestión obreras. Es lo que, efectivamente, ocurre, aunque sólo en parte, porque durante el 2002 tienen lugar destacadas ocupaciones de empresa, que llegan a los ámbitos legislativos con planteos de expropiación. El lugar que ocupan los movimientos de ocupación de empresas del período contemporáneo lo da su relación con la eclosión política popular que es el argentinazo y con la posibilidad que abre de acabar con el régimen político existente. La experiencia se destaca, sin embargo, por las limitaciones en su radiación; ni siquiera se prestó atención en su momento, ni tampoco más tarde, en la literatura obrera o socialista, a la adaptación de los trabajadores bancarios a las duras imposiciones laborales del verano del 2001-02 y a la limitada movilización que produjo el cierre de algunos bancos. Los bancarios venían con el antecedente de la derrota de luchas anteriores importantes, por ejemplo los cierres del Patricios y del Mayo, y de haber tenido que aceptar una dura flexibilización laboral.

Dentro del conjunto del movimiento de recuperaciones de empresas en este período se destacan, en lo que tiene que ver con los planteos, tres tendencias. Una, los "movimientos de recuperación de empresas", responden a una viejísima tradición en el país, que postula la reconversión cooperativa, con asistencia estatal, de las empresas capitalistas fallidas. Uno de los ejemplos de este planteo que simbolizaron una época fue la transformación del frigorífico Smithfield, de Zárate, en los 60, en la Cooperativa Martín Fierro, luego de una lucha obrera de las más largas y profundas que se tenga memoria. Los obreros se transforman en sus propios patronos, o sea que asumen la disciplina de la explotación capitalista como algo de su propio in-

terés. Más allá de esta desintegración 'sui generis' de la clase obrera, el porvenir de la cooperativa de producción dependerá de la marcha del mercado capitalista, es decir de la competencia y de la disponibilidad de capitales. En el marco de la bancarrota capitalista del 2001 representa, sin embargo, algo de mayor alcance – un intento de contener a la clase obrera en el marco del capitalismo. Los ideólogos de la "recuperación de empresas" se explican en términos 'productivistas' o defensores de una 'fuente de trabajo', o sea con un planteo de conservación del régimen capitalista bajo la forma de una defensa de la producción versus la especulación y del trabajo como "dignidad", no como alienación o explotación. El balance que ofrece, con todo rigor, Pablo Heller en este libro, es que las "fábricas recuperadas" han quedado en un estado precario como consecuencia de leyes de expropiación parcial que, de un lado, condicionan el mantenimiento del emprendimiento a un rescate del capital de la empresa por parte de los trabajadores al cabo de dos años de vigencia de la medida y, del otro lado, carecen de las mínimas condiciones de financiación, con la consecuencia de que los salarios son, en algunos casos, misérrimos y, en otros, se pagan sin tener en cuenta la amortización y la reposición del activo fijo de la industria en cuestión. Desde el punto de vista político, los obreros de la empresa recuperada tienen mediatizada (o directamente suplantada) su soberanía a aparatos vinculados total o parcialmente a los gobiernos locales o al nacional y a los partidos patronales. Como quiera que la cuestión de la ocupación obrera de las fábricas vaciadas debería ser vista desde un punto de vista transformador como parte de la oportunidad para que participen en forma destacada en un movimiento de masas que golpee al régimen capitalista, la orientación de los 'recuperadores' es una tentativa de salida históricamente regresiva que defiende las bases del sistema capitalista dominante.

Otra tendencia postula la estatización de las fábricas ocupadas y argumenta en su favor, precisamente, las limitaciones insuperables y las características reaccionarias de los planteos favorables a la constitución de pymes – cooperativizadas o no. La estatización de empresas no es, sin embargo, un fenómeno inhabitual bajo el capita-

lismo, cuyo estado interviene reiteradamente para impedir "la caída de los muy grandes" (too big to fall), o en el caso de los países oprimidos cuando los gobiernos nacionalistas chocan con el capital extranjero y procuran ampliar el horizonte de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y de la burguesía nacional. Pero la ocupación de la fábrica por los obreros introduce un factor histórico nuevo, que es la emergencia de los explotados como dirección histórica y social. La estatización significa reemplazar la dirección obrera por la intervención de la burocracia del Estado capitalista. Con esta intervención, la posibilidad de transformar a la dirección obrera en un fenómeno de movilización nacional independiente del proletariado y constituirse en una alternativa de poder, es sustituido por una posibilidad de restauración del capital por medio de la intervención del Estado. Aunque se puede y se debe admitir que una estatización burguesa pudiera ser un paso progresivo en el marco de una ocupación obrera aislada o que procede fuera de un marco de colapso capitalista y de extraordinaria movilización popular, esto no vale en las condiciones del argentinazo y en una situación en que se generalizaban los vaciamientos capitalistas y la oportunidad de ocupaciones obreras de empresas. Aunque el movimiento de ocupaciones no adquirió, más allá de su repercusión, un carácter extenso, no debe subestimarse el hecho cualitativo de que alcanzó a sectores en extremo sensibles como son las clínicas y unas pocas líneas de transporte. Una digresión sobre estas últimas es que mucho antes del argentinazo habían sido derrotadas o contenidas importantes huelgas en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario y en Salta.

El libro que el lector tiene en sus manos expresa una tendencia diversa. A partir de una caracterización de conjunto de la situación histórica creada por el argentinazo, caracteriza a las ocupaciones de empresas y a los esfuerzos de gestionarlas por parte de los trabajadores, como una tendencia del proletariado a reconstruir la sociedad sobre nuevas bases. Por eso pone en primer plano la tarea común de esas empresas ocupadas, que es defender colectivamente frente al Estado y al capital la expropiación de esas empresas y la gestión obrera. Esta defensa colectiva debe tener un doble sentido, político y económico.

Políticamente, debe estimular la lucha contra los despidos masivos, la quiebra industrial y la desocupación, precisamente mediante la ocupación de empresas, de modo de transformar al movimiento, dándole alcance geográfico nacional, en un componente fundamental de la alternativa de poder de la clase obrera. La necesidad de este planteo se manifiesta en este momento en la empresa Gatic, que tiene más de una decena de plantas. El sentido económico de una acción colectiva de defensa consiste en llevar la cuestión de la sobrevivencia de las empresas ocupadas al corazón del sistema capitalista, los bancos, de los cuales depende su financiación. Un frente de empresas ocupadas que planteara la nacionalización de los bancos y un lugar en los bancos estatales empalmaba, además, con un asunto más general de toda esta crisis, que es el vaciamiento nacional propiciado por esos bancos mediante la fuga de capitales; el financiamiento que recibían y siguen recibiendo con emisión del Banco Central; y, finalmente, lo más monstruoso, si cabe, el nuevo endeudamiento espectacular, por unos 40.000 millones de dólares, que ha provocado el rescate de esos bancos por medio de las "compensaciones". Se trata de un planteo que interesa al conjunto de la crisis y al conjunto de las clases sociales. Estimula, además, al movimiento de los desocupados a ocupar las empresas inactivas, como ocurrió con Sasetru, y a dar un ejemplo histórico de lucha contra la miseria social.

La "recuperación de empresas" se ha transformado en el programa oficial del gobierno de Kirchner. Claro que a su modo. Esto se manifiesta en que, más allá de los enormes privilegios que han recibido los pulpos exportadores en general, y en particular los pesqueros, los petroleros y los mineros, el clan pingüino ha tratado de establecer, en los acuerdos con las empresas de servicios que deben renegociar los contratos, una cláusula que separa las inversiones de la gestión del servicio y las financia por medio de un Fondo Fiduciario en el cual el Estado pone plata y tiene derecho al pataleo. Es así que en la selección de la tercerización de la provisión a las privatizadas, el clan de Kirchner se ha adjudicado la prerrogativa de repartir prebendas y ventajas para la "burguesía nacional" o incluso las "pymes" – las cuales, no hay que olvidarlo, gozan de ventajas inusuales en materia de flexibiliza-

ción laboral. Las "empresas recuperadas" forman parte de esta política de recuperación capitalista en la medida en que aprovechan las ventajas 'competitivas' de la devaluación, los salarios históricamente más bajos y el reflujó que ha sufrido la tendencia a la expropiación bajo gestión obrera. Pero la mayoría de ellas se encuentra en las vísperas de la fecha en que vence la expropiación parcial votadas en algunas legislaturas y ante la obligación de rescatar el capital con los ingresos de los trabajadores. Que estos vencimientos clausuren la vigencia de estas pretendidas pymes o que se les renueve lo que es una agonía depende de la situación política general, más precisamente de la solidez que el gobierno crea tener debajo de sus pies.

Mientras una opinión convencional aborda el problema de las empresas vaciadas y ocupadas como un tema de 'modelos de gestión' o de 'reinvención del trabajo', lo cierto es que ese problema ha sido planteado por la bancarrota capitalista y que, por lo tanto, será replanteado por esa misma bancarrota. La 'recuperación' piloteada por Lavagna demuestra sus límites en el hecho de que luego de un crecimiento del PBI del 15% en pesos constantes, en dos años, la desocupación se mantiene en el 20% y que los nuevos empleos son en negro y en todo caso con salarios muy bajos. El ajuste contra los trabajadores impuesto por la devaluación es el eje del llamado 'modelo' productivo de Kirchner. No por nada los obsesiona el tipo de cambio y la política de "metas de inflación" del Banco Central, porque ella podría provocar una revalorización del peso. El gobierno de la burguesía nacional es el de los salarios 'recontrabajos'. Es el gobierno del rescate del capital, al cual debe servir con el pago de la deuda nueva y vieja. En definitiva, cuando el lector haya llegado a la última página del libro de Pablo Heller, seguramente saldrá mucho más capacitado para abordar la crisis social en curso y las bancarrotas financieras que ya se prefiguran.

Jorge Altamira
Buenos Aires, marzo de 2004

Introducción

"Cualquier científico, salvo los economistas burgueses, sabe que las cosas, al manifestarse, suelen adoptar formas opuestas a lo que realmente son."

Carlos Marx

León Tolstoi solía contar que cierta vez vio, a la distancia, a un hombre en cuclillas que hacía movimientos convulsos. El escritor, a primera vista, pensó que se encontraba en presencia de un chiflado. Sin embargo, al acercarse, comprobó que aquel hombre llevaba a cabo una labor necesaria: afilaba un cuchillo con una piedra. Lenin gustaba mucho de esa anécdota y la repetía a menudo.

Observado desde lejos, o a través del cristal de los grandes medios de la burguesía, lo sucedido en las plantas fabriles puestas a trabajar bajo gestión obrera, puede parecer al ciudadano poco avisado que está ante cosas de locos. He ahí la parábola del afilador que, visto a la distancia, sólo parecía un chiflado. O la alegoría de la caverna, que Platón empleaba para referirse al conocimiento. Empero, en cuanto, como Tolstoi, se aproxime al fenómeno, podrá deschar las distorsiones y observar en toda su magnitud un complejo, y contradictorio entramado social.

Si acudimos a *La Nación*¹, en un editorial que tituló *La obsesión que tiene el presidente*, referido, desde luego, a los piqueteros, Joaquín Morales Solá, dice: "El mayor obstáculo (para la política oficial) está en los militantes de aquellas organizaciones que no buscan una solución, sino una revolución en serio, como sus propios dirigentes lo han escrito o lo han dicho". Al vincular, siquiera a su modo, la idea de "solución" con la de "revolución en serio", Morales Solá, aun si tenemos en cuenta su proclividad a exagerar cuando se asusta en demasía, nos aproxima a la sustancia del debate.

1-Vcr *La Nación*, 26 de noviembre de 2003.

¿Cómo se explica que las patronales huyan de las fábricas, las vacíen, las quiebren, que les tiren las llaves por la cabeza a los trabajadores y éstos se hagan cargo de la producción, que reviertan la quiebra, que demuestren, no en el terreno de la teoría, sino en el de los hechos puros, en qué manos deben estar las unidades productivas para sacar a las plantas fabriles y a la sociedad entera del marasmo capitalista?

Muchas veces, en las crisis cíclicas del capitalismo, han ocurrido cierres de fábricas, de grandes pulpos devorados por otros, de empresas de servicios, de instituciones financieras. La década oprobiosa del menemismo fue abundante en ejemplos sobre ese punto. Sin embargo, no siempre los trabajadores defendieron sus fuentes de subsistencia del modo en que ahora lo hacen. Hubo, ciertamente, algún caso aislado como el del diario *Tiempo Argentino* en 1985, pero la experiencia fracasó, no logró extenderse y el gobierno de Raúl Alfonsín pudo solucionar el problema mediante el simple recurso de la represión, como hizo en la Ford más o menos en la misma época.

Un fenómeno de esta magnitud sólo puede entenderse en el cuadro de la rebelión popular que hizo eclosión el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Como telón de fondo de esas jornadas excepcionales que conmovieron los cimientos de la sociedad argentina, está presente la bancarrota capitalista. Cuando en un país se le mete la mano en el bolsillo y se confiscan de un plumazo los ahorros de millones de habitantes, cuando desaparecen la moneda y el crédito, se desconocen los contratos, se paralizan las transacciones y la circulación económica, todo esto, en fin, es signo inconfundible de un sistema social en estado de disolución. La huida de los capitalistas de las fábricas es un síntoma de ese mismo proceso. El capital caduca en su función histórica, en cuanto motor de la propia acumulación capitalista.

La otra cara de la moneda, vista del lado de los explotados, está dada por la condena de millones de argentinos a un descenso sin precedentes de sus condiciones de vida. Con niveles récord de desempleo, el cierre de una empresa y el telegrama de despido son el pasaporte para un ingreso sin retorno a la legión de desocupados crónicos. Esto es lo que distingue la crisis actual de las anteriores,

en las que los trabajadores tenían la posibilidad, ante un despido, de pasar el chubasco y reinsertarse nuevamente en el mercado laboral, una vez que la economía superaba temporalmente su crisis. En el estado de cosas actual, en cambio, los trabajadores se aferran a sus puestos de trabajo porque son conscientes de que les está vedada otra salida. El capitalismo, como siempre ha ocurrido, actúa de principal revulsivo. La crisis capitalista es la madre de la criatura, de la proliferación de las fábricas ocupadas, que tanto fastidia y atemoriza a nuestra clase dirigente.

En el año 2000 y con más intensidad en 2001, varios meses antes de que estallara lo que se dio en llamar el Argentinazo —lo que era, a su turno, un anticipo y un presagio de lo que se estaba incubando— empezaron a producirse ocupaciones de fábricas que se prolongaban en el tiempo, cuyos trabajadores se aferraban a su fuente de producción y no soltaban la presa. En vez de resignarse al cierre de la empresa, se quedaban en ella y tomaban la resolución, ante el abandono patronal, de asumir su conducción y ponerla nuevamente a funcionar, prescindiendo de sus antiguos dueños.

Según estimaciones oficiales, hay alrededor de 1.200 empresas vaciadas, ya sea porque han quebrado, están en convocatoria o fueron directamente abandonadas por sus dueños. Ese dato constituye una medida de la caducidad del actual régimen social.

Ante ese abandono patronal, los trabajadores tomaron en sus manos la conducción de las plantas, las pusieron a funcionar y garantizaron la continuidad de la producción. De acuerdo con los cálculos de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina, “unas 1.800, de un total de 200.000 pequeñas y medianas empresas en el país, son manejadas por sus empleados, luego de haber quedado a la deriva cuando sus titulares las dejaron en bancarrota”.

Ese fenómeno se fue extendiendo. En 2003 prosiguió la ola de ocupaciones. A finales de ese año, y ya en los umbrales de 2004, somos testigos de nuevas empresas en conflicto, pero de mayor envergadura. Tal el caso de Parmalat (1.200 trabajadores), Transporte del Oeste, (casi 1.000 choferes), para no hablar de Gatic con sus 4.500

operarios. Los trabajadores discuten qué hacer ante el cierre de sus empresas, la cuestión de la gestión obrera queda en el orden del día y es objeto de una viva discusión en cuanto alternativa de salida frente a la catástrofe capitalista.

En otras palabras, el fenómeno de las fábricas ocupadas empieza a irradiarse hacia sectores más concentrados y estratégicos de la economía. Por otro lado, a la par de los trabajadores, los desocupados y vecinos, por medio de las organizaciones piqueteras y las asambleas populares, toman la iniciativa de recuperar empresas inactivas y se movilizan para ponerlas nuevamente en funcionamiento. La ocupación de Sasetru es la expresión más avanzada de ese proceso: centenares de trabajadores de la zona, respaldados por el Polo Obrero, están empeñados en una batalla para vencer los escollos del Estado capitalista y reabrir la planta de pastas que formaba parte de ese vasto complejo empresarial, inactivo durante 19 años.

Ese vaciamiento general de empresas que encontró su pico a comienzos de 2000 y se prolonga hasta hoy, es una señal inconfundible del derrumbe de un orden social. Lo que antes era la excepción pasó a ser la regla. Los patrones huyen de las fábricas y ni siquiera aparecen otros candidatos dispuestos a sustituirlos. En los contados casos en que surge un capitalista interesado, la operación no es más que una pantalla para algún negocio inmobiliario o especulativo, o un proyecto de brutal racionalización.

El principal obstáculo para la producción es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión (hay, incluso, trabajadores subsidiados por el Estado, con planes Trabajar), mientras el ritmo de producción y precariedad laboral fue llevado, como contrapartida, a su máximo nivel. Esa política de flexibilidad laboral extrema no sirvió, sin embargo, para que las empresas salieran a flote. Mientras los obreros veían reducirse sus condiciones de vida a niveles inauditos, los patrones vaciaban las empresas, desviaban los recursos y los invertían en otros negocios o los giraban al exterior.

Las más de 1.200 empresas abandonadas hablan de la incompa-

tibilidad existente entre las posibilidades de producción y las relaciones de producción imperantes. Establecimientos enteros, con capacidad para dar empleo a miles de obreros, parques de maquinarias modernos e instalaciones adecuadas están abandonados, en riesgo de desaparecer, mientras millones de compañeros no tienen trabajo y subsisten con sus demandas desesperantes de alimentos, de vestimenta y de vivienda, sin satisfacer.

El problema no reside, por tanto, en el costo laboral sino en el "costo" empresario. Grissinópolis, Chilavert, Ghelco, Brukman, Zanón, y las decenas de plantas en su misma situación son viables; lo que las vuelve inviables es la voracidad y el parasitismo patronal. La mejor demostración de que esto es así la dan los propios trabajadores, quienes han reabierto cantidad de plantas o están en preparativos para hacerlo. Los capitalistas cierran las fábricas, los trabajadores las ponen nuevamente a producir: así se destruye el mito, según el cual la propiedad privada es el medio excluyente y natural de organización de la producción.

Ahora bien, ¿cómo se fue gestando este proceso?

La ocupación de Gip Metal, una metalúrgica de Avellaneda y la lucha de Zanón en Neuquén —aunque no hay que olvidar el antecedente del frigorífico Yaguané y, a su manera, la lucha de Transportes del Oeste— son el punto de arranque de decenas de empresas que pasaron a manos de sus trabajadores, como sucedió, entre otras, con Baskonia y Panificación Cinco en territorio bonaerense; o Ghelco, Chilavert, Grissinópolis y Brukman en Capital. Es imposible entender esta irrupción sin considerar el Argentinazo. El movimiento de ocupaciones y gestión obrera fue uno de los fermentos de la rebelión popular y, simultáneamente, uno de sus resultados. Las ocupaciones no habrían podido perdurar en el tiempo si no hubieran empalmado con ese gigantesco movimiento popular, empezando por los piqueteros y siguiendo por las asambleas populares.

En abril de 2001, los trabajadores de Zanón protagonizaron una huelga de 34 días, ante la falta de pagos de sus salarios. Era un adelanto de lo que se avecinaba y que se corporizó, meses más tarde, a finales de 2001, con la ocupación de la empresa y los primeros pasos

de la naciente gestión obrera de la fábrica. En octubre de 2001 tuvo lugar la histórica movilización de Transporte del Oeste, que culminó imponiendo el control obrero en la empresa, tanto de la recaudación como de su movimiento operativo.

Vale la pena recordar que Brukman se tomó el 18 de diciembre de 2001, cuando ya los saqueos se extendían en el Gran Buenos Aires y había decenas de muertos.

En esos días, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa agitaba el fantasma de los saqueos, de la invasión de los bárbaros, las clases medias urbanas salieron a las calles contra el propio De la Rúa, como si dijeran: "entre los saqueadores de abajo y los saqueadores de arriba, me alío con los saqueadores de abajo en contra de los saqueadores de arriba".

Esa situación derivó en otra: el domingo 17 de marzo de 2002, apenas producido el primer intento gubernamental de desalojar Brukman por la fuerza, se hizo en Parque Centenario la I Interbarrial Nacional. Al atardecer, cuando la Interbarrial terminó de sesionar, más de cuatro mil manifestantes llegaron hasta la fábrica para dar su respaldo activo a los trabajadores. Las asambleas populares llegaron a deliberar a las puertas de la planta, cortando la avenida Jujuy, de modo de estar listas para la defensa si la represión llegaba.

Chilavert, fábrica gráfica ubicada en Pompeya, recibió el caluroso respaldo de la Asamblea Popular de la zona, que armó una red solidaria, proporcionó alimentos a los compañeros de la fábrica y puso el cuerpo cuando hubo amagos de desalojo o intentos patronales de sustraer la maquinaria.

En Grissinópolis, otra fábrica tomada, los vecinos hicieron instalar una gran sirena en la planta, que los trabajadores debían hacer sonar si se intentaba desalojarlos, de modo que todo el barrio saliera, a la hora que fuese y con lo que tuviesen a mano, para hacer frente a la represión.

Las organizaciones piqueteras constituyeron un verdadero escudo humano a las puertas de Lavalán (lavadero industrial de lana ubicado en Avellaneda) cuando la patronal intentó llevarse la materia prima acumulada en los depósitos de la empresa.

Otro tanto ocurrió en la Baskonia (metalúrgica de La Matanza), donde el movimiento de desocupados de las barriadas cercanas tuvo un papel determinante en la resistencia a las tentativas de desalojo. Esas escenas se repitieron en gran parte de las empresas autogestionadas por sus trabajadores.

Ante la imposibilidad de desalojar a los operarios por la fuerza, se ha acudido al método de las expropiaciones fraudulentas, que dan en concesión a los obreros el uso precario de inmuebles y maquinarias —a veces ni siquiera eso— a plazo fijo; por ejemplo, dos años. Luego, quienes salvaron la empresa, los que la pusieron a producir, deberán comprarla y no en moneda de quiebra sino a precios de mercado. Esto es: si la gestión obrera prospera, si no termina quebrada por la competencia capitalista, por la falta de insumos y de capital de trabajo, el esfuerzo de los trabajadores se volverá en contra de ellos mismos por la valorización de los activos. Mientras tanto, el verdadero administrador de la planta será el síndico de la quiebra y, al tiempo que los obreros no tendrán asegurado ni siquiera un salario mínimo, los ex dueños —los vaciadores— o los acreedores de la quiebra recibirán un canon o un alquiler por el uso de las instalaciones. Una trampa formidable. Si se observa con cuidado, se puede advertir que la gestión obrera termina por ser un eslabón, un interregno, de un proceso que lleva a la reconstrucción de esas empresas —y del aparato productivo en general— sobre sus antiguas bases sociales. La gestión obrera se transforma en parte de un engranaje que termina por devorarla. Por eso no debe llamar la atención que en la mayoría de las fábricas recuperadas que se "reinauguran" vayan a cortar las cintas figurones del gobierno y hasta leguleyos vinculados con Aldo Rico, nada menos.

Las expropiaciones, por tanto, tienen un doble carácter. Concebidas para canalizar la presión obrera, esas expropiaciones fraudulentas apuntan, paralelamente, a confinar el movimiento en los estrechos márgenes de la autogestión, al aislar a las fábricas ocupadas del movimiento de lucha más general de la clase obrera y, en esa medida, preservan esas empresas para su ulterior reconstrucción sobre bases capitalistas. Esa orientación constituye la tendencia domi-

nante hasta el día de hoy en el seno del movimiento de las fábricas recuperadas, cuyas direcciones alientan una salida autogestionaria.

En definitiva, el fenómeno de las fábricas ocupadas está recorrido por tendencias contradictorias y enfrentadas: las que ponen en tela de juicio la propiedad privada capitalista de los medios de producción y las que pretenden restablecer esa hegemonía. ¿Cuál de ellas prevalecerá? No lo podemos saber de antemano, pero está claro que el desenlace, la suerte y el porvenir de este movimiento se vincula con el escenario más general de la lucha de clases. Asistimos a un período de transición con final abierto: o se cierra el ciclo de la rebelión popular inaugurado el 19 que quedó inconclusa en esas jornadas históricas. El destino de la gestión obrera está indisolublemente asociado a esa disyuntiva. Las fábricas en manos de los trabajadores no pueden desenvolverse como si fueran compartimentos estancos, ni sustraerse a las leyes de la economía capitalista. El control y la gestión obrera de las fábricas sólo pueden concebirse como un aspecto de una transformación social integral que, en cuanto tal, formula la cuestión del poder.

En definitiva: la clase obrera pone fin al capitalismo o éste termina con las fábricas ocupadas. Por eso se asusta tanto Morales Solá y apunta que el verdadero problema está dado por quienes intentan hacer “una revolución en serio”.

Los condicionamientos de la gestión obrera

Las flamantes gestiones obreras tropiezan con grandes condicionamientos que pueden transformarse en trampas mortales contra las fábricas en manos de los trabajadores. Esos condicionamientos son moneda corriente y saltan a la superficie en cada oportunidad en que hay encuentros o cónclaves de “Empresas Recuperadas”.

La primera cuestión consiste en la pretensión de que los obreros se hagan cargo de las deudas empresarias. Una extensión de ese mismo tipo de propuestas es que los trabajadores pongan plata, renuncien a sus indemnizaciones o a los créditos laborales que la patronal les adeuda por atrasos y diferencias salariales. Por esa vía, los propios obreros deberían reunir los fondos necesarios para poner en funcionamiento la planta.

Esa puede ser una salida para los dueños, que les permite desembarazarse de su deuda; pero no lo es para los trabajadores, a quienes se pretende arrebatar los pocos pesos que les corresponden legalmente por su trabajo y hacerles cargar sobre sus espaldas una hipoteca imposible de levantar.

La Ley de Quiebras, modificada en el año 2002 y presentada como una supuesta solución para preservar las fuentes de trabajo, no es más que una encerrona para los trabajadores. La “continuidad” establecida por la nueva normativa —que contempla la posibilidad de que los trabajadores asuman la conducción de la empresa— significa que los obreros heredan los bienes pero también las deudas. Por ejemplo, Ciam arrastró la deuda dejada por Aurora y ése fue uno de los factores principales que incidieron para que se fundiera. Ni hablar del frigorífico Yaguané, que en los pocos años que lleva funcionando ya ha cancelado tres millones de pesos. Y eso es apenas una ínfima porción de la deuda que debieron asumir los trabajadores, por 80 millones de pesos, de modo que esa cooperativa es un rehén de los acreedores.

Otro ejemplo muy ilustrativo es el de Impa.

“...La nueva gestión llevó a cabo una serie de rondas de negociacio-

nes con los acreedores que culminaron con la firma de un acuerdo homologado en el año 1999, en el cual se le concedió a las cooperativas tres años de gracia y diez años de plazo para pagar. No obstante ello, la condición de "sociedad concursada" determinó la calificación de insolvencia para la evolución crediticia de la firma, según las normas vigentes del Banco Central. Dicha calificación le impidió a Impa el acceso al sistema formal de créditos hasta que la cancelación de la deuda alcanzare el cuarenta por ciento. En este caso, a diferencia de las experiencias que se presentarán en adelante, en las cuales la constitución en cooperativa desligó a los trabajadores de la situación financiera anterior, la continuidad de la forma jurídica como cooperativa de Impa implicó que la nueva gestión debiera hacerse cargo de deudas contraídas con anterioridad¹.

Un segundo obstáculo está dado por el hecho de que los trabajadores cuentan apenas con el uso precario de la planta, de las instalaciones y la maquinaria. Están sometidos por tanto al arbitrio del dueño o del juez. Las cooperativas tienen que soportar un canon o alquiler por el uso del edificio, las instalaciones y las maquinarias. Ese dinero va a parar al bolsillo del dueño o al juicio de quiebra. La propiedad de la fábrica (maquinarias e instalaciones incluidas) sigue en manos de sus antiguos propietarios o del síndico. En cualquier momento, éstos pueden exigir la devolución de los bienes, la restitución de la fábrica y dejar en la calle a los trabajadores. Para evitar ese desenlace, los trabajadores deberían tomar la decisión de comprar la fábrica, con lo cual la carga pasaría a ser mayúscula y prohibitiva.

En tercer lugar, las expropiaciones aprobadas hasta el momento en las legislaturas no pasan de "declaraciones". El Poder Ejecutivo no hace efectiva la expropiación en el plazo autorizado, con lo cual los obreros se encuentran forzados a asumir la compra de los activos si quieren evitar el cierre.

En cuarto lugar, la falta de capital de trabajo (materias primas, servicios, salarios) convierte a los trabajadores en rehenes del propio dueño o de otro grupo económico que adelanta los fondos para el pago de insumos. Bajo la fachada de una gestión independiente, se cae

en una *tercerización* encubierta, con la pérdida y desconocimiento del convenio.

Los trabajadores que han tomado en sus manos las fábricas están soportando un verdadero ahogo. Tempranamente, los medios de prensa dieron cuenta de ese proceso que soportaban las flamantes gestiones obreras e informaron que, salvo en casos aislados, no recibieron ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Los subsidios multimillonarios para los bancos y grupos capitalistas en crisis —y no tan en crisis— contrastan con la falta de fondos para las fábricas ocupadas por los trabajadores: "Los subsidios están cortados debido a la crisis", declaró uno de los titulares del Inaes, organismo oficial que controla las cooperativas.

Esas fábricas tampoco pudieron acceder a créditos, ni siquiera por parte de los bancos oficiales. La ausencia de capital de trabajo (materias primas, insumos, mantenimiento de las instalaciones y maquinarias) que permitiera poner en marcha el proceso de producción, coloca a los trabajadores entre la espada y la pared, y compromete seriamente la posibilidad de poner en funcionamiento la planta. Tal es el caso de Papelera Platense, que a partir de junio de 2001 volvió a funcionar bajo control de los trabajadores. "La reapertura —según afirma Héctor Garay, presidente de la cooperativa que se hizo cargo de la planta— fue posible porque quedaba algo de materia prima; si no, debería haber cerrado". Otras empresas, como La Baskonia o Panificación Cinco, se vieron forzadas a demorar varios meses su relanzamiento productivo —y aún hoy soportan grandes penurias—, pues les faltan insumos indispensables para mantener la actividad en el tiempo.

Este panorama ha persistido e incluso se ha agravado. ¿Qué dice la bibliografía sobre la cuestión?

Desde fines de 2003, dada la magnitud del problema, han comenzado a publicarse diversas obras referidas a las fábricas ocupadas.

En todas ellas, el trabajo a facon tiene especial importancia. Este se refiere a "la venta del servicio de procesado industrial a clientes que proveen la materia prima y retiran el producto para su comercialización o transformación posteriores. Esta modalidad de trabajo permite lograr el objetivo inicial de preservar la fuente laboral y reanu-

¹Empresas recuperadas, Buenos Aires, Estudios de casos, Impa, pág. 41

dar el ciclo productivo, así como también los lazos con clientes y proveedores, aunque tiene el inconveniente de reducir los niveles de ingresos y generar lazos de dependencia con los clientes-proveedores. Por estas razones, la mayoría de los trabajadores la considera una etapa transitoria hasta tanto lograr hacerse de capital de giro suficiente para autoabastecerse de materia prima².

Los comentarios hechos por los propios trabajadores son coincidentes. "Cuando empezamos a trabajar no había efectivo, no había stock propio de mercadería. Entonces lo que se hizo fue hablarle a los clientes para trabajar a facon, por la mano de obra: el cliente traía los materiales, se manufacturaba y se le cobraba solamente la mano de obra, que quedaba acá, en fábrica, y de a poquito se fue haciendo un stock de mercadería. Y, bueno, hoy tenemos 120, 130 toneladas propias y aparte seguimos trabajando por la mano de obra³".

"Los escollos son muy difíciles de vencer... Estos emprendimientos no son muy bien vistos, dependen de que la empresa que nosotros proveemos crea en nosotros. Nosotros empezamos con mucha voluntad pero sin capital de trabajo, por lo cual algunos clientes que confiaron en nosotros mandaron la materia prima y nosotros los hicimos el proceso, hoy estamos ahí... es uno de los problemas críticos que enfrentamos: la falta de crédito... la materia prima que insume un capital importante... la tenemos que pagar... al contado y nosotros a la vez debemos financiar a nuestros clientes... En este rubro siempre hubo algunos clientes que aportaron la materia prima porque tienen saldos importantes de ingreso de materiales. Entonces nos derivan a nosotros, acá es una cosa convenida, pero indudablemente necesitamos capitalizarnos. También nos hemos tenido que hacer cargo de algunas deudas..., que después son negociadas con los antiguos dueños, deducidas del alquiler o del canon que le pagamos, pero en algunos casos el proveedor de determinada materia prima nos condicionó con pagos de deuda anteriores, no es nada fácil⁴".

²Fábricas y empresas recuperadas, Capítulo 3, "Los procesos Autogestivos", pág. 59. Centro Cultural de la Cooperación.

³Idem, entrevista a "Cooperativa Unión y Fuerza", ex Gip Metal, metalúrgica, pág. 59.

⁴Idem, entrevista a "Cooperativa de Trabajo MVH", ex MVH, metalúrgica, pág. 59 y 60.

La cooperativa Artes Gráficas del Sol enfrentó una situación similar. Su gran dificultad para reiniciar la producción devino por el lado de la provisión de sus insumos básicos. Aquellos de mejor calidad, especialmente las tintas y el papel, provenían del exterior, con los consecuentes problemas en el abastecimiento dadas las limitaciones a la importación derivadas de la devaluación y las nuevas condiciones de pago —al contado y en dólares— que resultaban inalcanzables para la cooperativa.

A los efectos de reunir recursos para la compra de insumos, decidieron vender todo el stock de mercadería que tenían en la gráfica en mal estado (fundamentalmente papel y cartón para reciclaje). Así pudieron comprar el papel y las planchas de chapa requeridas para la impresión. Además, consiguieron que un proveedor de tintas les adelantase la mercadería. De ese modo pudieron realizar los primeros pedidos. En lo sucesivo, solicitaron a los clientes un adelanto para la compra de insumos, dadas las condiciones de pago impuestas en el mercado. Para incrementar sus volúmenes de compras —aunque el dólar se estabilizó en torno de los tres pesos— los proveedores les exigían el pago al contado⁵.

La Cooperativa La Nueva Esperanza (Grissinópolis) está transitando un cuadro parecido: "La falta de capital inicial pudo ser subsanada parcialmente mediante la modalidad de trabajo a facon en las condiciones descriptivas, pero los niveles de producción requeridos han sido mínimos, alcanzando apenas para la cobertura de la organización y una escasa distribución de retiros entre los socios. En este sentido, resulta imprescindible implementar una activa gestión comercial y de diversificación del producto tendiente a sustentar en el corto plazo la actividad productiva de la Cooperativa⁶".

El peligro de depender de terceros (léase proveedores o clientes) se constata con mucha claridad en Viniplast, expropiada hace apenas unos meses por la Legislatura: "La producción para un único cliente, a través de la modalidad a facon, si bien les permitió reiniciar la actividad productiva y contar con los primeros ingresos, ha implicado ni-

⁵Según informe de Empresas Recuperadas, Ciudad de Buenos Aires, pág. 57.

⁶Idem, pág. 63.

veles de producción y rentabilidad muy escasos. Sumado a ello, en algunas oportunidades, la calidad de los insumos entregados por su cliente derivó en la pérdida completa de la producción. En este sentido, cabe mencionar que la Cooperativa no ha podido reestablecer los controles de calidad de insumos necesarios —que podrían efectuarse en el laboratorio existente— al no disponer del personal especializado y ante la falta de los materiales necesarios para realizar los ensayos⁷.

A la descripción ya realizada, habría que agregar la concentración monopólica del mercado y el encarecimiento de los productos (ya sea importados o producidos a nivel local, pero susceptibles de ser comercializados con el exterior) que actúa o puede actuar como un valla importante y hasta prohibitiva para las gestiones obreras. “Respecto a las dificultades señaladas en la recuperación en materia de provisión de los insumos y repuestos para la maquinaria, las mismas se derivan en gran parte de la falta de competencia en los mercados locales proveedores de insumos básicos. Aunque en el período de la Convertibilidad esta concentración estuvo moderada por la competencia de los productos importados, el poder de monopolio volvió a sentirse tras la devaluación. Si bien son destacables las soluciones experimentadas por las cooperativas en torno al suministro de insumos, las mismas constituyen soluciones marginales y transitorias forzadas en gran medida por la ausencia de una debida regulación en materia de defensa de la competencia que establece la normativa vigente”.

Considerando que la rentabilidad de la producción metalúrgica está dada esencialmente por la escala, “estas dificultades de aprovisionamiento de insumos —en materia de disponibilidad de volúmenes y calidad del reciclado— pueden restringir las potencialidades abiertas en el nuevo escenario postdevaluación, en el cual Impa podría incrementar su producción, aprovechando la capacidad instalada y aumentar su participación en el mercado. Por otra parte, las características de los proveedores de chatarra en cuanto cuentapropistas o trabajadores informales restringen las posibilidades de acordar mejores condiciones de pago para el abastecimiento de los

insumos necesarios, al no permitirles utilizar instrumentos alternativos de financiamiento ni generar reducciones de costos por compras masivas de material⁸.

En estas condiciones, la mayoría de las empresas se encuentran trabajando en un nivel muy inferior al de su capacidad instalada. Cálculos hechos en la materia indican que, entre las empresas recuperadas “el promedio de utilización de la capacidad de producción ronda el 55%, siendo menor al 30% para la mitad de las mismas⁹”.

Los trabajadores enfrentan este ahogo, en muchos casos, sacrificando su salario y sus condiciones de trabajo, imponiéndose a sí mismos jornadas de trabajo mucho más prolongadas que las normales y ritmos agotadores, incluso por encima de las fábricas más flexibilizadas.

“Uno de los peligros inherentes a esta situación es la posibilidad de caer en situaciones de autoexplotación, con largas jornadas de trabajo y bajos niveles de remuneración. Si bien nada parece indicar a primera vista que estas situaciones sean particularmente intensas en estas empresas, la falta de capital para realizar inversiones y/o tomar personal para enfrentar situaciones potencialmente conflictivas junto con el bajo rendimiento general de las fábricas, conlleva el peligro de generar situaciones de autoexplotación y desgaste de los trabajadores en el esfuerzo por llevar adelante la empresa¹⁰”.

La existencia de mano de obra disponible barata y hasta gratuita (resultado de la autoexplotación que describimos) por referencia a la escasez de capital fijo (instrumentos y máquinas) y la imposibilidad de acceder a él, hace que las fábricas autogestionadas por sus propios trabajadores se valgan casi exclusivamente del primer factor en detrimento del segundo, y así alimentan un círculo vicioso que redundará en una baja productividad del trabajo, que se prolonga en el tiempo. “La lenta recuperación de la capacidad productiva de estas empresas impulsa la permanencia de mecanismos de trabajo de bajo rendimiento. Así, aun entre las empresas que han logrado una mayor recupera-

⁷Idem; pág. 70.

⁸Empresas Recuperadas, Ciudad de Buenos Aires, pág. 44-45.

⁹Fábricas y empresas recuperadas. Centro Cultural de la Cooperación, pág. 60.

¹⁰Idem.

ción de su capacidad de producción, continúa existiendo una alta proporción de trabajo a fañón (de alrededor del 40% sobre la producción total)".

Esta situación lleva "a alertar sobre el peligro de caer en situaciones de autoexplotación cuando la necesidad de inversión supere la capacidad de autofinanciamiento de estas empresas"¹¹.

El problema se agrava porque, de un modo general, el parque de maquinarias de estas empresas es anticuado, lo que trae inconvenientes y demoras en la producción, y obliga a destinar recursos para repararlas y reacondicionarlas.

"En cuanto al capital físico de las firmas, el equipamiento de las firmas recuperadas, si no se incluye a las empresas del sector gráfico, tiene una antigüedad promedio, de alrededor de cuarenta años, muy superior al promedio de casi seis años de antigüedad del equipo durable de producción para toda la economía argentina. Aunque desde el punto de vista contable, los equipos se encuentran completamente amortizados; desde el punto de vista económico, tiene en valor en la medida que se encuentran aplicados al proceso productivo. En los planes de negocios elaborados desde la dirección general de industria y comercio se contemplaron gastos de mantenimiento y eventuales mejoras de los equipos y las maquinarias de las empresas recuperadas con el objetivo de que el excedente de las mismas no sea en realidad producto de su descapitalización."

En el caso específico de Impa, una de las pioneras en este campo "...la maquinaria tiene una antigüedad superior a los cincuenta años y las incorporaciones realizadas por la nueva gestión de la cooperativa no constituyeron una actualización tecnológica sino que permitieron resolver, en forma transitoria, algunos de los inconvenientes presentados en la producción."

El estado de la planta "condiciona la continuidad en la producción, la cual es frecuentemente interrumpida por desperfectos técnicos. Asimismo, otro de los factores que influyen en la productividad está asociado con la disposición de la maquinaria en la planta, la cual no resulta adecuada teniendo en cuenta que en la sucesión de las distin-

tas etapas de producción (fundición, laminado, elaboración de envases, impresión, etc.) se registran tiempos muertos"¹².

Aunque en algunos casos, las administraciones anteriores "habían adquirido maquinarias usadas en buen estado inicial, no realizaron las inversiones necesarias en reparaciones y mantenimiento que permitiesen optimizar su rendimiento y evitar su consecuente deterioro. Por otra parte, a esa situación tecnológica heredada se le sumaron, en algunas cooperativas, las dificultades asociadas a las extracciones de piezas claves de las máquinas y rodados durante el cierre de la planta, que implicaron el desmantelamiento de las líneas de producción".

Ante la falta de recursos para la puesta a punto de las máquinas y la adquisición de las piezas faltantes, "las tareas de reparación fueron realizadas por algunos técnicos, que en la etapa anterior de las empresas estaban a cargo del mantenimiento las mismas. No obstante, los arreglos realizados fueron transitorios y parciales, y eso ha implicado una vez iniciada la actividad, que se presenten fallas en el funcionamiento de algunas etapas del proceso productivo"¹³.

A su vez, debido a esta situación, los trabajadores se vieron obligados a realizar adaptaciones en algunas etapas del proceso productivo o contratar servicios a terceros en condiciones mayoritariamente desfavorables. "Cabe destacar la iniciativa de los trabajadores en las cooperativas Diógenes Taborda e Impa, en la medida que realizaron readaptaciones en los procesos productivos que, pese a las condiciones de la maquinaria y la falta de algunos repuestos, les permitieron reducir los costos de producción. Repasando los casos en que se acudió a la tercerización, esta modalidad no implicó una mejora en la rentabilidad, como aseguran las proposiciones teóricas hegemónicas en el campo de la administración. La escasa especialización productiva de las firmas Pymes locales, sumadas a la alta concentración de los mercados proveedores de insumos y el encarecimiento comentado de los productos provenientes del exterior, aumentaron notablemente los costos de producción. Estas circunstancias han implicado que resulte más rentable la integración de los procesos al interior de las plantas.

¹¹Fábricas y empresas recuperadas. Centro Cultural de la Cooperación, pág. 70.

¹²Empresas recuperadas, Ciudad de Buenos Aires, pág. 43.

¹³Idem, pág. 45.

Pero esta opción se encuentra actualmente condicionada por las restricciones financieras y económicas de las cooperativas.

En función de las dificultades mencionadas, las cooperativas han trabajado en niveles muy inferiores a los que sus capacidades instaladas les permitirían. Por lo general, sus cantidades producidas se ajustan a los pedidos que, simultáneamente, han conseguido, ya que no cuentan con capacidad de estocaje y buscan asegurarse la colocación de toda la producción antes de continuar produciendo.”

Esta situación convierte a las cooperativas en fácil presa de los grupos capitalistas. Aparecen en acción estudios y asociaciones de profesionales que terminan haciéndose cargo de la administración gerencial de las empresas y que preparan las condiciones para su copiamiento. La cooperativa Ciam, que en su momento tomó en sus manos el control de la fábrica Aurora Grundig, en Avellaneda, cedió la gerencia de la planta a la Cooperativa Huella de Bilbao (nombre con que se dan a conocer en sociedad estos “gerenciadores”), y ésta absorbió la fábrica más que por la planta en sí misma y sus posibilidades de producción, por el valioso predio que la rodea. Está en marcha un meganegocio inmobiliario y no hay que descartar que en su ejecución el pato de la boda termine siendo la fábrica, con sus trabajadores dentro.

Frente a la situación expuesta, se plantea un conjunto de medidas cruciales, imprescindibles para la defensa y el porvenir de la gestión obrera:

- a. Expropiación de los activos y su entrega gratuita a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días.
- b. Las deudas deben ser asumidas por los dueños, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal.
- c. Otorgamiento de un subsidio no reintegrable, que permita a los trabajadores contar con el capital de trabajo necesario para hacer arrancar el proceso de producción y garantizar el cobro puntual de los salarios. La remuneración no debe ser inferior a la fijada por el convenio, para lo cual es necesario establecer una garantía salarial respaldada en un fondo compensador sostenido por el Estado. En lugar de rescatar al capital en quiebra, es menester rescatar a los trabajadores y apuntalar el emprendimiento obrero.

d. Transformación de todas las fábricas en manos de los trabajadores en proveedores privilegiados del Estado, de modo que los productos elaborados en ellas sirvan para abastecer las necesidades de hospitales, escuelas, asistencia social, vivienda y otras áreas públicas.

Zanello: caso aleccionador I

Uno de los ejemplos, quizá, más ilustrativos de los condicionamientos a los que hicimos referencia lo constituye la experiencia de Zanello, instalada en Córdoba.

Esa fábrica atrajo la atención general en la reciente exposición de la Rural. Presentó un tractor único, que mereció un premio a la innovación.

Desde que fue salvada por sus trabajadores, Zanello ha experimentado un crecimiento prodigioso. Pasó de fabricar repuestos y proyectar una escasa venta de tractores a una producción anual de 500 unidades. La misma expansión se verifica en el empleo, pues la dotación inicial de trabajadores se ha cuadruplicado, ascendiendo en la actualidad a 240 compañeros.

Esa planta, productora de tractores y una de las centenares de “fábricas recuperadas” por sus trabajadores, firmó, a principios de 2003, un convenio con el Banco de la Provincia de Córdoba, el principal acreedor de la firma, para comprar la deuda que ésta mantiene con la entidad financiera. “Se compró más del cincuenta por ciento del total de las acreencias y estamos en excelentes condiciones para esperar el trámite judicial y ofertar lo que resta de la quiebra cuando salga el remate”, explicó Luis Visconti, integrante de la empresa.

Esta operación contó con el respaldo del gobierno de la provincia, particularmente de Schiaretti, en su condición de ministro de Producción y Finanzas. El Banco de Córdoba cedió en favor de la empresa el privilegio por los derechos sobre el inmueble afectado a la quiebra, cuyo acreedor era él mismo.

Zanello está en manos de una sociedad anónima especial (Pauny S.A.), de la que los trabajadores poseen el 33 por ciento de las acciones. Otro 33 por ciento lo tienen los concesionarios y el último 33 per-

tenece al personal jerárquico y superior. El uno por ciento restante lo tiene el Estado municipal de Las Varillas.

Es decir, estamos en presencia de un consorcio donde los trabajadores son minoría. El capital de trabajo fue puesto por los concesionarios, que tienen un peso gravitante en la marcha de la empresa. Al día de hoy, desde el gerente general hasta el último operario ganan el salario de convenio más el laudo 29 de la UOM, en total 540 pesos.

La empresa ha tenido una expansión gigantesca en un breve lapso. Proyectaba fabricar, en un principio, 120 tractores, pero ya vendió 260, de los cuales 200 ya fueron entregados, y proyecta armar 500 en el 2004. En la actualidad, concentra el 80 por ciento de la producción nacional de tractores. Como resultado de ello, pasó de 60 a 240 trabajadores en marzo y tiene previsto, si se cumplen las proyecciones, incorporar 40 operarios más.

El consorcio venía pagando un alquiler al juez de la quiebra por el uso precario del establecimiento. Nunca se avanzó en la expropiación de la firma, medida que tropezaba, por otra parte, con la cerrada negativa de De la Sota y de la Legislatura provincial, que no querían sentar un precedente.

Es decir, los obreros venían sosteniendo el canon locativo y subsidiaban a los acreedores. Pero, con la decisión de comprar la empresa, se da un salto. El acuerdo prevé, a cambio de la cesión de derechos en favor del fabricante, la entrega inmediata de un millón de pesos y 60 cuotas mensuales con un interés del 15 por ciento anual. La cuota se ubicaría en torno de los 150 mil pesos.

El esfuerzo obrero, que ha sacado a flote y reconstruido a la empresa, ha ido a parar al pago de las deudas que la patronal vaciadora de Zanello mantenía con sus acreedores. El Banco de Córdoba, que es el banco oficial de la provincia, actúa igual o peor que cualquier banco privado. No aportó un solo peso en estos meses críticos para el financiamiento del naciente emprendimiento obrero, actitud que contrasta con la generosidad con que el banco se manejó con los capitalistas de la provincia, incluidos los antiguos dueños de Zanello. No sólo no pone un peso sino que ahora, a través de este acuerdo, les quita a los trabajadores el ahorro que habían logrado reunir. Tal como lo

destacó el propio Schiaretta, la operación no es ningún regalo, constituye un "buen negocio para el banco", que se alza con seis millones de pesos y rescata un crédito que daba por perdido y había pasado a la lista de incobrables.

La cuota de 150 mil pesos es equivalente a la suma de salarios que los trabajadores cobran mensualmente. Ahora, esos 150 mil pesos permitirían aumentar los salarios y situarlos por encima de la línea de pobreza. Esto nos da una medida de la sangría que este pago representa para los obreros de Zanello; para no hablar del desembolso inicial del millón de pesos. Ese acuerdo —y esto es lo más grave— se prolonga en el tiempo, con lo cual los salarios han quedado condicionados para los próximos cinco años. El riesgo es que, en la búsqueda de superar este corsé salarial, el consorcio se abstenga de tomar nuevos trabajadores y haga recaer la mayor producción entre el personal ya existente; es decir, que pretenda superar el escollo apelando a una mayor autoexplotación de los trabajadores.

El caso de Zanello es altamente instructivo, pues nos brinda una radiografía de las contradicciones que se presentan en una de las empresas recuperadas "exitosas", a una a la que "le va bien". Esas contradicciones se plantean y se agigantan, con más razón, en las restantes empresas bajo gestión obrera.

• La experiencia de Zanello vuelve a poner de relieve la necesidad de un programa que apuntale la independencia de clase de los emprendimientos de la clase obrera.

• No a la injerencia patronal. La gestión obrera debe concentrar en sus manos el control, la administración y la propiedad sobre la totalidad de los bienes afectados a la explotación.

Yaguané: caso seleccionador II

Yaguané es más que un frigorífico donde trabajan 470 personas: fue la primera fábrica recuperada después de que la dejara en la quiebra el empresario y asesor presidencial de Menem, Alberto Samid.

Los trabajadores, luego de un durísimo esfuerzo, la sacaron a flote. De la quiebra, Yaguané pasó a ser una empresa pujante, líder en

su ramo, pero ahora sus trabajadores corren el peligro de perderlo todo. Expropiada hace dos años, el plazo para que el gobierno provincial pagara la indemnización ya venció. El síndico inició, entonces, el juicio de "expropiación inversa", reclamando al Estado diez veces más de lo que valía cuando Samid la abandonó. Los funcionarios de la quiebra incluyen las mejoras y la revalorización que ha tenido la planta como resultado del esfuerzo obrero; cuando se precipitó la quiebra, el valor económico de la planta prácticamente era nulo. En los últimos dos años, los integrantes de la cooperativa invirtieron en ella más de un millón de pesos y pusieron en mano de obra, trabajo de albañilería y pintura, otro monto similar.

En su momento, en 1997, cuando se barajaban distintas alternativas para darle continuidad a la fábrica, el Banco Nación había tasado el frigorífico en 3.250.000 pesos. El síndico pide ahora 38 millones de pesos, cuatro veces más y no en pesos sino en dólares. Según trascendidos, el Estado provincial estaría dispuesto a otorgar cinco millones y otros seis por compensación de deudas fiscales de la antigua administración. Aunque la oferta es menor que la pretensión de los síndicos, los once millones representan una exacción monumental e inadmisibles. Todo el presupuesto asignado para las fábricas recuperadas en la provincia asciende a siete millones de pesos.

Yaguáné es un espejo donde tienen, necesariamente, que mirarse las fábricas "recuperadas". Una parte importante de ellas está en la situación previa a la que ahora transita el frigorífico bonaerense.

Comercio y Justicia: caso aleccionador III

La provincia de Córdoba ha pasado a ser pionera en la materia. Al caso de Zanello, ahora se le ha sumado el de Comercio y Justicia, cuyos trabajadores no han tenido más remedio que comprar la empresa. De la Sota ha bloqueado los proyectos de expropiación de distintas empresas de la provincia, que siguen "cajoneados" en la Legislatura. Entre los casos más renombrados está el de la Clínica Junín, en la congeladora desde hace más de diez meses.

Los trabajadores de "Comercio y Justicia", un diario económico-ju-

rídico, ocuparon la planta hace más de un año y consiguieron sacarla a flote en poco tiempo. La recuperación fue incluso sorprendentemente rápida: los trabajadores arreglaron las máquinas, normalizaron los servicios y lograron ampliar la cartera de clientes.

En agosto, cuando la liquidación judicial era impostergable, los trabajadores ofrecieron al juzgado comprar los bienes. Pero los activos de la empresa tienen, en la actualidad, un valor comercial muy superior al que poseían un año atrás, cuando tuvo lugar el vaciamiento patronal. El éxito de la gestión obrera se terminó convirtiendo, paradójicamente, en la fuente de su desgracia. La editorial fue valuada en 1.121.000 pesos (muy por encima del precio que se habría obtenido doce meses atrás, si cada activo se hubiera vendido por separado). La mitad se compensó con créditos laborales; es decir, con los sueldos e indemnizaciones impagos. La otra mitad tendrá que salir del giro del negocio, esto es del esfuerzo que hagan los trabajadores de ahora en más. En pocas palabras, estamos ante una doble confiscación a los trabajadores: primero, de los ingresos pasados; segundo, de sus ingresos presentes y futuros.

El apoyo del Estado nacional y provincial al que hacen mención las noticias periodísticas no es tal. Por supuesto, no hay previsto ningún subsidio, como sí se le vienen otorgando generosamente a los bancos. Los trabajadores de Comercio y Justicia deberán hacer frente a un préstamo que, por otra parte, ni siquiera cubre la totalidad de la deuda. El excedente necesario para hacer frente al pago de la deuda saldrá, como lo testimonia la experiencia de Zanello y otras fábricas recuperadas, del sacrificio y postergación salarial de los propios compañeros.

"Comercio y Justicia" ilustra en forma descarnada el chantaje capitalista al que están siendo sometidas las empresas bajo gestión obrera. El esfuerzo obrero, como bien lo refleja este caso, termina en las arcas de la vieja patronal vaciadora o en las de sus acreedores.

Obra social, jubilación y afiliación sindical

Una medida de las ataduras a las que están sometidas las gestiones obreras es el estado de orfandad e indefensión en que se encuen-

tran los compañeros que intervienen en estas empresas. A la ausencia de capital de trabajo, a la incertidumbre respecto del cobro de los salarios, se une el desamparo en materia sindical, previsional y de cobertura médica.

Los sindicatos, en manos de la burocracia, dan la espalda a las fábricas bajo gestión obrera. No reconocen la afiliación de sus trabajadores y, en esa medida, éstos no tienen acceso a sus beneficios, en primerísimo lugar de la obra social.

"Los movimientos de fábricas y empresas recuperadas intentan que los trabajadores continúen afiliados a los sindicatos pero, en muchas ocasiones, se hace dificultoso ya que en los inicios las empresas no tienen el dinero necesario para pagar las cuotas adeudadas, incluso cuando les ofrecen reinstalar el servicio a muy bajo costo. La cuestión es simple, si las empresas no están trabajando tampoco pueden afrontar gastos. Por último, en algunos casos, los trabajadores ya no desean estar afiliados a los sindicatos porque no se sienten identificados con estas entidades que, en varias oportunidades, fueron las que solicitaron la quiebra de las empresas"¹⁴.

La legislación vigente, además, perjudica a los trabajadores asociados a cooperativas, a quienes toma como trabajadores "autónomos", sujetos al régimen de monotributo. Esto constituye un gran atropello pues, en carácter de monotributistas, los trabajadores carecen de jubilación. La cuota mensual que pagan por ese tributo excluye el beneficio de la jubilación, de modo que si el trabajador quiere tener derecho a ella, debe hacer un pago adicional voluntario. Pero aun con ese pago "voluntario", los beneficios en carácter de trabajadores autónomos son inferiores a los que les correspondería en carácter de trabajadores en relación de dependencia.

Como resultado de luchas y reclamos hechos por los trabajadores, la Afip-DGI autorizó, en ciertos casos, a aquellos trabajadores a quienes les estuviera faltando poco tiempo para jubilarse, a continuar realizando sus aportes en las mismas cuentas en que venían haciéndolo, de modo que se puedan retirar al momento de cumplir con la edad

prevista en la ley con los mismos beneficios que cualquier otro trabajador en relación de dependencia.

El problema ha pasado a estar más candente que nunca a partir de la proliferación de fábricas ocupadas, que reclaman el mismo tratamiento que el resto de la clase obrera.

Esa inquietud no ha pasado inadvertida en las esferas oficiales. Por lo pronto, el Inaes (Instituto que centraliza las cooperativas), que está más directamente sometido a la presión de los trabajadores envueltos en esta lucha, tiene en preparación un proyecto que otorgaría a los trabajadores constituidos en cooperativas, los mismos beneficios que cualquier otro trabajador en relación de dependencia.

El trabajador bajo el régimen de monotributo tiene derecho a una obra social, pero esa cobertura es inferior a la que sería acreedor bajo relación de dependencia. En primer lugar, porque las prestaciones a las que el monotributista tiene acceso son, en general, menores. Además, la elección de obra social está circunscripta a una cartilla más restringida de entidades. Para tener derecho a un servicio superior, hay que pagar adicionales por encima de la cuota básica.

De un análisis simple de lo expuesto, surge que el trabajador de las fábricas ocupadas es considerado una suerte de paria. Aquí salta a la vista el papel que cumplen los sindicatos. Teóricamente, las organizaciones gremiales deberían ser las principales interesadas por la suerte de las fábricas abandonadas y por la gestión obrera, que presenta una alternativa superadora al cierre y a los despidos en masa. Los sindicatos se hacen, sin embargo, deliberadamente los distraídos y rehuyen todo tipo de responsabilidad, pues no quieren tener en el interior de sus organizaciones a fábricas que, por lo general, representan a los sectores más combativos del gremio. Para ratificar esa presunción, puede verse que las fábricas puestas en funcionamiento por sus propios trabajadores se han convertido en una referencia para reforzar las tendencias a una renovación sindical. Ceramistas de Neuquén es, quizás, el ejemplo más emblemático. La irrupción de Zanón conmovió los cimientos de la estructura sindical. Sin alcanzar todavía esa misma dimensión, procesos parecidos se constatan en la UTA respecto de TDO y se empiezan a advertir en Gatic y en Parmalat.

¹⁴Fábricas y empresas recuperadas. Centro Cultural de la Cooperación, Capítulo 4, pág. 87

Hay antecedentes favorables en el pasado, en la historia del movimiento sindical argentino —como es el caso del gremio gráfico—, que, a contramano de esas tendencias de las direcciones sindicales, los trabajadores de las cooperativas fueron reconocidos como afiliados en iguales condiciones que el resto de los trabajadores asociados.

Así, privadas de respaldo sindical y discriminadas por la legislación vigente, la mayoría de las fábricas autogestionadas por sus trabajadores no tienen más remedio que trabajar en “negro”, sobre todo, cuando están expuestos a condiciones ultraprecarias de trabajo y a grandes penurias económicas.

Del panorama expuesto se desprende un programa que necesita ser asumido como plataforma de lucha común por todas las fábricas ocupadas y bajo gestión obrera:

- Derecho a afiliarse libremente a los sindicatos, en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores.
- Reconocimiento de la obra social del sindicato, con la misma cobertura y prestaciones que el resto de los asociados.
- Respeto del convenio y garantía salarial por parte del Estado, por medio de un fondo compensador que asegure a los trabajadores bajo gestión obrera un salario mensual no inferior al piso fijado por el convenio.
- Acceso a la jubilación, en las mismas condiciones y con los mismos beneficios que el resto de los trabajadores del gremio.

Existen iniciativas orientadas a organizar una atención médica mediante una suerte de obra social de las fábricas recuperadas. Esas propuestas, del todo legítimas para paliar transitoriamente la situación, no pueden sin embargo reemplazar la lucha por este programa. Sería equivocado transformar en un *ghetto* a las fábricas recuperadas, lo que terminaría por aislar la lucha planteada —que es, en definitiva, a lo que aspira la burocracia—; hay que luchar para fusionar a los trabajadores de las empresas ocupadas con el conjunto de los trabajadores del gremio. Es necesario ganar un lugar en los sindicatos y salir a disputarle a la burocracia sindical ese terreno.

Autogestión y movimiento de empresas recuperadas

“Dime con quién andas... y qué propones”. La “autogestión” es defendida con entusiasmo por nucleamientos que reúnen a gran parte de las empresas conducidas por sus trabajadores. Ahí tenemos, por citar a los más fuertes, al Movimiento de Empresas Recuperadas, encabezado por Eduardo Murúa, y al Movimiento de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores, dirigido por Luis Caro. Ambos formaban parte de una única organización, hasta que se produjo su ruptura a comienzos de 2003. Esa partición se precipitó con la llegada de las elecciones, en tanto Caro fue candidato de Aldo Rico, Murúa se inclinaba por Aníbal Ibarra, quien, a su vez, ya había anudado su alianza con Néstor Kirchner. Mas allá de sus diferencias —que ninguna de las fracciones se encargó de explicar—, las dos tienen un punto de vista estratégico común. Según uno y otro, la perspectiva de los trabajadores de las fábricas ocupadas sería convertirse en dueños, en nuevos patronos. De acuerdo con ese punto de vista, la competencia y el mercado capitalista no serían un obstáculo insalvable; los trabajadores terminarían comprando, si hiciera falta, los activos de la empresa. La autoexplotación hasta el extremo de no cobrar un peso (“vivir a pan y agua”), se justificaría en función de ese objetivo. En consecuencia, el propósito privilegiado de las leyes de expropiación debe ser, simplemente, impedir el desalojo y todo lo demás pasa a un segundo plano. Conseguido ese objetivo, los trabajadores tendrían la vía despejada para abordar “autónomamente” la reconstrucción de la empresa.

Esta orientación autogestiva tiene una larga tradición y es el fundamento histórico del reformismo. La autogestión reduce la emancipación obrera a poner empresas individuales en manos de sus trabajadores. Se trataría de articular una economía solidaria, que estaría en condiciones de progresar gradualmente a la sombra de la economía capitalista. Ese progreso, lento y gradual, culminaría alguna vez con la transformación socialista de la socie-

dad¹. De ese modo, sería innecesaria la conquista del poder, la destrucción del Estado burgués y su reemplazo por un gobierno obrero, por la dictadura del proletariado. Todo esto resultaría, ciertamente, gran comodidad. Pero, por desgracia, el desenvolvimiento histórico nunca ha sido cómodo.

Abordar la cuestión en términos de una empresa individual es equivocado porque, precisamente, lo que distingue a la economía contemporánea es su carácter global, interconectado, cuyo desenvolvimiento se produce a escala de todo el planeta al punto que las fronteras nacionales se han vuelto una antigüedad. La tendencia inevitable, y hasta compulsiva, de las fuerzas productivas modernas es a centralizarse y socializarse, en el sentido objetivo del término; esto es, a involucrar simultáneamente en su desarrollo a masas enormes de productores, cuyos destinatarios son masas cada vez más enormes de consumidores. La coordinación de todas las actividades económicas es una exigencia absoluta del actual nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. O esa coordinación es ejercida por la clase obrera, lo cual supone tomar las riendas del Estado y organizar una coordinación consciente, que permita un uso racional de los recursos; o, caso contrario, esa coordinación la establece la burguesía por medio de la competencia ciega y despiadada del mercado, y la intervención despótica del Estado capitalista.

Cuando se gira, como hacen los "autogestionarios," en torno de una empresa individual y no del régimen social tomado en su totalidad, es lógico que se ponga énfasis, a la hora de hacer un diagnóstico, en los supuestos problemas de gestión de la empresa. El hundimiento de ésta sería el resultado de una mala administración o, cuando mucho, de un acto de vaciamiento, pero siempre considerado desde el punto de vista de la conducta individual del empresario. Estaríamos en presencia de una crisis de un capitalista en par-

¹Algo así, ya se le había ocurrido a fines del siglo XIX al socialdemócrata alemán Eduard Bernstein, quien pensaba que por ese camino, podría llegarse al socialismo gradualmente, sin necesidad de revoluciones ni de violencia alguna. Esas posturas fueron combatidas duramente por Rosa Luxemburgo y, en su momento, por Karl Kautsky. Como se ve, se trata de una vieja polémica en el movimiento obrero internacional.

ticular, o de un grupo de capitalistas, no ante una crisis del capitalismo.

Vale la pena subrayar que no por casualidad, los autogestionarios atribuyen la crisis y quiebra de un conjunto de fábricas al llamado "modelo neoliberal". No asistiríamos a una crisis sistémica. Lo que fracasó es una determinada orientación económica y política del Estado que, como tal, es reversible. Una obra recientemente publicada, identificada con la concepción autogestionaria, sintetiza muy bien esta orientación: "A partir de la asunción del nuevo gobierno en mayo de 2003, la política destinada hacia las empresas recuperadas parece tener otro rumbo, orientándose a la búsqueda de nuevas negociaciones e iniciativas, aunque recién en el futuro se podrá evaluar el grado de desarrollo de las políticas implementadas"².

Estas expectativas son coincidentes con las que abrigó el Mner, quien sostuvo que Kirchner iba "a tener una oportunidad histórica de, por lo menos, ser el Cardoso de Brasil y ser una especie de bisagra entre lo nuevo y lo viejo que puede tener nuestro país, que se puede consolidar una fuerza política distinta, no quizá con una proyección de una revolución socialista, pero sí de un cambio serio del país con respecto al mundo... Kirchner perteneció a lo que era la juventud peronista en esos tiempos. Pero no ponemos demasiada expectativa en Kirchner, como sí la ponemos en cuál va a ser la política de nuestro pueblo, la pelea de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Seguramente, el 26 de mayo seamos opositores. Y quizás él no haga lo que nuestro pueblo requiere, lo que nuestro país requiere, pero sí creo que se abre una posibilidad de construir algo nuevo y en las próximas elecciones empezar a plantear otra cosa"³.

Se manifiestan tales aseveraciones desconociendo que el gobierno ha firmado los acuerdos con el FMI, que sigue la fuga de capitales —en 2003 ha sido de 8.000 millones de dólares— que se ha compensado a los bancos con subsidios por varios miles de millones de

²Fábricas y empresas recuperadas. Centro Cultural de la Cooperación, página 146.

³Entrevista a Eduardo Murúa. El cambio silencioso, Esteban Magnani, Editorial Prometeo, pág. 65.

dólares, con 750 millones a los exportadores y 200 a los concesionarios privados de los ferrocarriles. La continuidad de Lavagna es la continuidad de esa política. En las listas que acompañaron a Kirchner hay destacados menemistas, empezando por el salteño Romero y el santiagueño Juárez, para no nombrar a Ruckauf o a Camaño y a una larga nómina de diputados, gobernadores e intendentes. No hacía falta esperar a que el nuevo Presidente asumiera y comenzara su gestión para desayunarse sobre la orientación de su gobierno. Kirchner avisó por adelantado hacia dónde apuntaba su gestión. Ni hablar de las condiciones de vida de la población, peores aun que durante la década menemista.

El gobierno aplicó la infame ley de reforma laboral por medio de paritarias clandestinas que aceptan convenios por empresa y mayor flexibilización, esto cuando manifiestamente se quiere transformar a los 150 pesos de los Jefes de Hogar en un nuevo piso salarial. Conviene recordar que mientras no llegó el "arrepentido" y desató una crisis, no formaba parte de la agenda oficial la derogación de la ley "Banelco" de reforma laboral. Pero —hagamos hincapié en esto— la nueva ley mantiene el andamiaje de flexibilidad laboral impuesto por el menemismo y por la Alianza de De la Rúa y Alvarez: entre otras cosas, sigue el período de prueba de tres meses ideado por Julio Mera Figueroa y Domingo Cavallo; perfecciona el "procedimiento de crisis", que permite a las empresas desconocer los convenios y los derechos laborales de los trabajadores; autoriza a las direcciones sindicales a firmar convenios por empresa. Todas éstas eran aspiraciones clave de las patronales, que impusieron esas demandas con Menem y las mejoraron con De la Rúa primero y con Duhalde después. Lo que prevalece ahora, por tanto, no es una ruptura sino una continuidad con el menemismo y con el duhaldismo. Escribimos esto cuando el gobierno acaba de pagar, con las reservas del Banco Central, 3.100 millones de dólares para no entrar en cesación de pagos también con el FMI. En otras palabras: cuando el gobierno ha capitulado sin cerrar por eso la crisis argentina; por el contrario, la ha agravado. Y, como durante los gobiernos de sus antecesores, la mayor crisis se paga con mayor desocupación y des-

nutrición, y con un mayor desmantelamiento de los sistemas de salud y educación. En ese panorama se desenvuelve el fenómeno de las fábricas ocupadas.

Según Murúa, el nuevo rumbo consistiría en que *"el gobierno nacional y los gobiernos provinciales puedan intervenir desarrollando políticas específicas para las empresas recuperadas"*⁴. Pero, esa "política activa" que se reclama, es la que el gobierno ya intenta poner en marcha y no han faltado ni faltan ensayos en ese sentido. Explícitamente, Kirchner, la UIA y la Fundación Mediterránea pretenden, según ellos mismos han dicho y con esas palabras, "reconstruir una burguesía nacional". Pero pretenden reconstruirla —y aun así el objetivo se revela utópico— en base a salarios de hambre, del saqueo presupuestario —el pago de subsidios a las patrias de la construcción y de la exportación— y de un nuevo pacto con el FMI y con la banca internacional. Estamos frente a una nueva estrategia de superexplotación y de retroceso nacional, y se puede señalar por adelantado que fracasarán, como fracasaron sus antecesores. Las "políticas específicas" para las empresas recuperadas estarán en sintonía con esta orientación dominante.

Dentro del horizonte autogestionario, el lugar que le está reservado a los trabajadores no sería otro que reemplazar a los malos administradores, ocupar la gerencia de empresas en la lona o al borde del colapso. En cambio, la dirección de empresas sanas y exitosas es terreno vedado para la clase obrera, ése es un coto exclusivo de los capitalistas, donde no hay por qué meter mano. Los autogestionarios circunscriben la autogestión a las empresas quebradas. Cualquiera se da cuenta que semejante división de funciones transforma a los trabajadores en un engranaje más del proceso de salvataje capitalista.

Así las cosas, lo primordial para el éxito de una gestión obrera, obviamente, consistiría en desenvolver una gestión eficiente, que tendiera a resaltar, a modo de panacea, todo aquello referido a una administración eficaz de las empresas arruinadas. No debe sorprender que en este cuadro, la tendencia dominante sea que los

⁴Idem anterior.

obreros se confinen entre las cuatro paredes de "su" empresa y se desvinculen del escenario más general de la lucha de clases. Empieza a tomar vuelo la fantasía de una salida individual de ese núcleo de obreros, al margen y en detrimento de una salida colectiva, de conjunto. Se pretende estafar a los trabajadores con la ilusión de convertirse en dueños, en nuevos patronos.

El programa de estos nucleamientos ha girado en torno de la reforma de la Ley de Quiebras y la creación de un fondo fiduciario. Una vez decretada la quiebra, se pretende otorgar a los trabajadores el manejo de la empresa por el plazo de dos años: una medida que tira la pelota hacia adelante. Vencidos los dos años, se vuelve al punto de partida: la patronal retoma el control total de la empresa y tiene la facultad de desalojar a los trabajadores, quienes deberían comprar la planta si decidieran continuar con su actividad. Mientras tanto, en el curso de esos dos años, la empresa continúa bajo la tutela del juez y del síndico de la quiebra, encargados de velar por los intereses de la masa de acreedores. Salta a la vista el carácter absolutamente precario de una "autogestión" así, pero, además, esa reforma es funcional al rescate del capital: en caso de que la empresa saliera a flote, el esfuerzo obrero —expresado en la revalorización de los activos de la empresa— terminaría siendo apropiado por los acreedores. Por un desvío, se llega al mismo objetivo que señalamos en el capítulo sobre los condicionamientos que se oponen a la gestión obrera.

El período de dos años coincide, por otra parte, con las expectativas que tiene cifradas el capital en una salida de la crisis actual y en una nueva expansión de los negocios. En ese contexto, los dos años se convierten en el intervalo necesario para rehabilitar las empresas a costo y riesgo de los trabajadores.

La reforma circunscribe su acción a las empresas quebradas. El programa autogestionario se detiene ante el altar del derecho de propiedad y no avanza un paso más.

"No nos hemos quedado con ninguna empresa que no haya tenido ningún conflicto gremial, que no haya sido abandonada o que haya pagado los salarios de los trabajadores y los aportes patrona-

les. No decimos que no lo vamos a hacer nunca, no prometemos nada. Pero hasta ahora fue una lucha por la dignidad de los trabajadores y por seguir siendo parte activa de la producción en el país. La disputa no es con las fábricas que están trabajando, sino con las fábricas que hoy están desocupadas, las que abandonan los patronos o las fábricas que ya están quebradas y en las que los patronos no pueden hablar más porque ya no son de ellos".⁵ Esta divisoria que se pretende trazar es artificial. Por cada puesto de trabajo que se recupera, se pierden centenares de ellos. Contra lo que se sostiene en ese texto, el conflicto principal es con las empresas que están trabajando. La flexibilidad, la precariedad laboral y la rebaja salarial por un lado, y la desocupación son dos caras de la misma moneda. Son fenómenos que se reclaman y se alimentan recíprocamente. La desocupación es causa y consecuencia de la superexplotación y lo mismo vale en un sentido inverso; ambas son mecanismos esenciales para el funcionamiento del régimen capitalista.

No tiene ningún futuro encarar la lucha como si las cosas se dividieran en compartimientos estancos. Pero, además, es necesario no pasar por alto que, una vez decretada la quiebra ya es tarde, el proceso de vaciamiento está avanzado o prácticamente consumado.

Es necesario avanzar en un programa que ofrezca una salida de conjunto. Planteamos el control obrero sobre las cuentas e inventarios de las empresas y la extensión de dicho control al movimiento de fondos de las mismas, otorgándoles a los trabajadores capacidad de veto sobre el destino de esos fondos. En caso de atraso salarial o síntomas que indiquen un vaciamiento, desapoderar a los dueños y pasar la gestión a manos directas de los trabajadores, como un paso previo y una transición a la expropiación sin pago del capital.

La misma limitación se registra en relación con el "fondo fiduciario", cuyos recursos tendrán como contrapartida un reaseguro a cargo de las fábricas autogestionadas por sus trabajadores, quienes deberán ofrecer las garantías necesarias para asegurar la devolución de la deuda. No estamos frente a un subsidio no reintegrable, sino ante un préstamo que condiciona el desenvolvimiento de la

⁵El cambio silencioso, Esteban Magnani, obra citada, pág. 66.

gestión obrera y cuya entrega está atada a una serie de restricciones. Préstamo —no es ocioso señalarlo— cuyo monto, condiciones de entrega y devolución, y tasa de interés son desconocidas y quedan bajo el manejo discrecional del Poder Ejecutivo. Bajo estas condiciones, en lugar de apuntalar la gestión obrera, el fondo fiduciario puede llegar de transformarse en un arma letal que precipite su hundimiento, para no hablar de la posibilidad que abre, a través del financiamiento, a que el Estado meta mano y pase a tener una injerencia en los destinos de la empresa —un terreno que, hasta el momento, le estaba vedado en un conjunto de empresas. En oposición a los créditos atados, planteamos subsidios no reintegrables y la nacionalización de la banca para colocar sus recursos al servicio de los emprendimientos de la clase obrera.

El programa estrecho y limitado de esos nucleamientos conduce a reconstruir las empresas sobre bases capitalistas. Esa reconstrucción, a la corta más que a la larga, resulta incompatible con la gestión obrera. En el hipotético caso de que las empresas ocupadas, o al menos algunas de ellas, lograran sobrevivir a la crisis actual y se insertaran en un proceso de recuperación económica en términos capitalistas —lo que supondrá previamente la imposición de los planes del FMI—, esas empresas perderían su actual carácter para terminar evolucionando hacia formas de explotación capitalistas tradicionales. Asistiríamos a la degeneración o desaparición de la gestión obrera, ya sea por medio de un proceso de diferenciación interior dentro del colectivo obrero o directamente por su copamiento por algún grupo capitalista, o por una combinación de ambas alternativas.

El kirchnerismo y el duhaldismo pretenden hacer pie en esos agrupamientos para construir su base de operaciones. Una suerte de burocracia adicta que constituya una réplica, en el ámbito de las fábricas ocupadas, del lugar que ocupan la CCC y la CTA en el movimiento piquetero. Así como el horizonte de las organizaciones conducidas por Juan Carlos Alderete y Luis D'Elía es administrar los planes de empleo, porque se han dejado imponer un programa asistencialista, del mismo modo, el horizonte de ese agrupamiento en el interior de las "fábricas recuperadas" es la gestión de mi-

croemprendimientos en el marco del mercado y el sistema de explotación capitalistas. En ese contexto, no puede sorprender el respaldo oficial que han recibido tales nucleamientos, en principio por el gobierno de Ibarra y luego por el de la provincia de Buenos Aires. La tendencia, que ya adelantó Felipe Solá, es reproducir a escala de las fábricas los "consejos consultivos de crisis", como un mecanismo institucional que apunte a condicionar el desarrollo independiente del movimiento e integrar la gestión obrera y sus organizaciones al Estado.

La posición enarbolada por el movimiento de recuperación de empresas, es sostenida, con ligeras variantes, por ARI y el centroizquierda, pero también por la izquierda que no presenta delimitación alguna respecto de las posturas centroizquierdistas. La mimetización de Izquierda Unida en ese sentido es total, hasta el extremo de convertirse en vehículo y portavoz de los proyectos de expropiación fraudulentos aprobados en la Legislatura.

El planteamiento de Luis Caro

En el Encuentro de Fábricas Recuperadas que sesionó en Ghelco, se difundió un folleto del abogado Luis Caro. Esto sucedió a mediados de 2003.

Aunque no fue colocado a discusión, ese material tiene el mérito de exponer con bastante claridad la política del candidato de Aldo Rico.

¿Qué dice Caro? A la pregunta de dónde obtener el capital que permita hacer arrancar el proceso productivo, él responde: "Todos los emprendimientos estaban condicionados por el capital de inicio, 30.000, 50.000 ó 100.000 pesos para empezar. Si se necesita ese dinero ningún proyecto daría inicio... Para tener el uso y goce de los medios de producción no se necesita un peso, sólo la organización, convencimiento para lograr el contrato de alquiler. Con él, los trabajadores pueden ver la situación de otra manera, comienzan a tener la sartén por el mango (sin ser dueños de la sartén) en una primera etapa".

Es así que los enormes y brutales condicionamientos a los que vienen siendo sometidas las gestiones obreras —en primer lugar, la ausencia de capital de trabajo— son ignorados y dejados a un lado. Según Caro, la falta de esos recursos no sería un obstáculo para avanzar en la puesta en marcha de las fábricas; se puede, perfectamente, prescindir de ellos.

Nadie puede, sin embargo, obviar las penurias y ataduras que representa para cualquier empresa privada no contar con capital de trabajo destinado a la compra de materias primas, insumos y servicios básicos para la elaboración de los productos y mantenimiento de la planta. Esa carencia se agiganta y multiplica en una gestión obrera.

¿Cuál es la salida que plantea el folleto? La primera forma de financiamiento provendría de los propios obreros, que deben resignarse “a recibir muy poco dinero para poder capitalizar el proyecto”. Y da como ejemplo: que “100 obreros a 500 pesos por mes y por cuatro meses estarían en condiciones de aportar 200.000 pesos de capital”. A la pregunta ¿de qué van a vivir?, Caro responde sin titubear con otra pregunta: “¿De qué vivieron? ¿durante los largos años de desocupación?”. En otras palabras, Caro, suelto de lengua, plantea vivir “a pan y agua”, como suele expresar en algunas ocasiones en que le toca intervenir.

Otra fuente de financiamiento —según el folleto—, “está dada por clientes que traen la materia prima, insumos y hasta adelantan dinero para que se les cobre la mano de obra (trabajo a façon)”. Y, finalmente, una tercera serían “los proveedores”, quienes “confían en los trabajadores, ya que los conocen porque fueron los mismos que recibieron las mercaderías durante varios años”.

El costo laboral en este proceso “no es costo: es inversión. Porque ellos asumen la responsabilidad de no cobrar un peso los primeros meses. Uno, dos o tres. Entonces el precio que ellos obtienen sin costo laboral y sin costo empresarial es muy bueno. Y si además el cliente trae la materia prima y los insumos, y muchas veces adelanta dinero, entonces el proceso puede comenzar”⁶.

Contra lo que sostiene Caro, el hecho de tener que valerse de esas vías de financiamiento no es una señal de fortaleza de la gestión obrera sino de su extrema debilidad. Privada de recursos propios, los trabajadores ven estrechado sensiblemente su margen de maniobra y no tienen más remedio que establecer ese tipo de relaciones comerciales. Al depender en forma excluyente de un proveedor o cliente, ven socavada su autonomía y corren el riesgo de culminar siendo rehenes de ellos. La gestión obrera corre el serio peligro de degenerarse y terminar *tercerizada* en manos de algún grupo capitalista, que pasaría a tener un peso gravitante en las decisiones de la empresa.

No es cierto que los trabajadores tendrían la “sartén por el mango” por el hecho de contar con un “contrato de alquiler”. Dicha alternativa es exhibida alegremente como una gran salida: “Esto se logra a través de un contrato de alquiler ya sea al juzgado si la empresa quebró... o bien con un acuerdo con el dueño con autorización del juzgado si se encuentra en concurso preventivo”.

Las circunstancias a las que se hace referencia prueban, en realidad, la situación exactamente contraria: la incertidumbre y precariedad de los trabajadores que apenas cuentan con el uso pasajero de la planta y que están sometidos al arbitrio y voluntad del juez y del dueño, quienes retienen la propiedad del inmueble y de las maquinarias, y por lo cual encima deben pagar un canon mensual o alquiler. El capitalista que ha vaciado la planta o sus acreedores tienen asegurado un ingreso fijo mensual en concepto de canon o alquiler. No ocurre lo mismo con los trabajadores, quienes deben estar dispuestos a renunciar a sus propios ingresos. Ni hablar de la espada de Damocles que se plantea al vencimiento del plazo del contrato, que obliga a los trabajadores a tener que comprar los activos (revalorizados gracias al propio esfuerzo obrero) o, en su defecto, renegociar el contrato de alquiler con cláusulas más desventajosas, en caso de que pretendan continuar con sus actividades. No hace falta hilar muy fino para ver quién, en este escenario, tiene la sartén por el mango.

“...El juez debe venderlos (los activos), pero yo creo que debería

⁶Entrevista a Luis Caro en *El cambio silencioso*, obra citada, pág. 58.

haber un new deal, un nuevo contrato, en el que sin desconocer el derecho de los acreedores o de los dueños, se haga este proceso por el que los trabajadores van a tener los recursos para pagar los bienes. En principio no son dueños. Pero sí los que pueden utilizarlos y después pagarlos, al precio que corresponde." En síntesis, Caro propone que hagan los trabajadores lo que ningún capitalista hace, que es pagar "el precio que corresponde". Caro hace realidad el sueño de cualquier acreedor. ¿Hay alguna duda de que este new deal es un rescate del capital en quiebra y de sus acreedores?

La necesidad de ciertos compromisos con el Estado y con la patronal no nos puede llevar a embellecerlos, y menos aún a presentarlos como una panacea. Las penurias que cotidianamente enfrenta la gestión obrera (la ausencia de capital de trabajo, la autoexplotación, la dependencia respecto de clientes y proveedores) ponen al rojo vivo la necesidad de una gran lucha nacional en torno a un programa que conduzca a una salida obrera frente al sabotaje capitalista. Ese programa, como quedó dicho, necesita empezar por la nacionalización de la banca.

La gestión no puede prosperar a la sombra de la economía capitalista, como una suerte de isla autárquica: cada uno podría cosechar en su quinta sin molestar la vida del otro. Tal coexistencia armónica no es posible, como lo vuelve a probar la reciente ofensiva gubernamental contra Brukman, Zanón y Sasetru. La gestión obrera es incompatible con el capital, responsable del vaciamiento y la bancarrota del país. La gestión de las fábricas plantea la gestión del país, es decir la conquista del poder político por la clase obrera para reorganizar integralmente la nación sobre nuevas bases sociales.

Mner: con la patronal "nacional y popular"

Y por si a alguien le quedaba alguna duda de la verdadera cara de la autogestión, es instructivo examinar la alianza gremial que el Mner anudó con grupos empresariales representativos de las Pymes, presentados con el nombre de "Coordinadora de Acción Productiva" (CAP), cuyo objetivo declarado es "defender el rol protagó-

nico de las pequeñas unidades productivas en la Argentina que viene". Lo que está planteado en el país es "cambiar el modelo neoliberal por una propuesta productiva, con filosofía social". Los ejes que hacen girar su política son "un rol activo del Estado en la reactivación económica y fijar la prioridad en el desarrollo del mercado interno, un desarrollo de las economías regionales que vigorice e impulse las exportaciones con valor agregado y alentar el Mercosur como estrategia comercial y de integración".

Estamos en presencia, como se observa, de un programa enteramente patronal, que bien puede ser suscripto por cualquiera de las cámaras que, en la actualidad, agrupan al empresariado que se ha puesto a tono con el momento político y se ha colocado la camiseta "nacional y popular".

Para que no quedaran dudas, la naturaleza de esta nueva coalición fue perfectamente definida por sus promotores: "Somos una burguesía con conciencia nacional (sentenció Urien), hemos decidido poner todos los esfuerzos en articular ese espacio en la formación de la CAP".

Con semejantes objetivos, no debe sorprender que en el programa de la CAP no haya ni sombra de las demandas obreras. El reclamo salarial está ausente, al igual que la defensa de las condiciones de trabajo frente a la flexibilidad laboral. No debe olvidarse que en el ámbito de las Pymes es donde imperan con mayor crudeza la precariedad laboral y el desconocimiento de los convenios. Es lógico que una alianza como la descrita con esa patronal negrera, sólo pueda prosperar sacrificando las reivindicaciones de los trabajadores. "Es casi natural (declaró Robledo, uno de los representantes del Mner) que estemos juntos, porque trabajadores y pequeños empresarios estamos frente a un sistema que creemos que hay que revertir".

"Sí, tenemos un enfrentamiento seguro en lo macroeconómico con los grandes monopolios. Pero no es así con el conjunto de las Pymes. Creo que sufrimos las mismas agresiones de los monopolios internacionales y los monopolios nacionales. Ahí sí creo que tiene

que haber una gran intervención del Estado junto con los trabajadores para ponerle freno a esa agresión de estos sectores contra la industria nacional⁸.

A través de estas definiciones, el Mner termina por desnaturalizar el carácter del movimiento de fábricas ocupadas, que nació y se desarrolló como un movimiento de lucha de los trabajadores. Al proclamar una identidad de intereses con la burguesía nativa, se pretende darle un golpe mortal a aquella tendencia y transformar el movimiento de recuperación de empresas en una suerte de agrupamiento pyme más. En este marco, la empresa recuperada desaparece o concluye degenerándose, al operarse una mayor diferenciación social y desigualdad creciente en su interior, y para terminar siendo la envoltura de un emprendimiento empresarial que concluye tomando en sus manos la gerencia y dirección de la empresa.

Reducir a las fábricas en manos de los trabajadores a la condición de una Pyme constituye, además, un grosero atentado a la memoria colectiva. Se violenta la historia reciente al obviar que la ocupación de fábricas y su recuperación por parte de los trabajadores ha tenido por blanco principal a los llamados "empresarios nacionales".

El 100% de las empresas recuperadas eran Pymes y los obreros tuvieron que enfrentar duramente a sus dueños. La patronal de las Pymes, que el Mner considera aliada, es responsable del vaciamiento y abandono de las empresas, y de la artera utilización de la legislación vigente, hecha a su medida —en primer lugar, la Ley de Quiebras—, para cargar todas las consecuencias de su bancarrota sobre los hombros de los trabajadores. Robledo, en su vocación acuerdista, hace caso omiso a esos hechos y hasta pone un manto indulgente, blanqueando la conducta empresarial. "Hoy nosotros estamos al frente de empresas recuperadas, en algunos casos por procesos de vaciamiento de sus patrones pero en muchos otros por el ahogo de las Pymes". La patronal vaciadora, bajo este curioso criterio del dirigente del Mner, coloca al victimario en el lugar de una víctima del sistema. Los cañones, entonces,

no habría que dirigirlos contra ella sino contra el "modelo" neoliberal.

En vez de enfrentar a la patronal, Robledo hace causa común con ella. La expropiación de toda fábrica que cierre o despida y la entrega de sus bienes a los trabajadores (consigna central que ha presidido la lucha que vienen librando los trabajadores que pugnan por recuperar sus fábricas y que las han puesto a producir, sin esperar el visto bueno de las instituciones del Estado) ha sido literalmente borrada del pliego de reclamos. El auxilio económico para los emprendimientos de la clase obrera, por el que vienen peleando las fábricas en manos de los trabajadores ante la falta de capital de trabajo que enfrentan, es sustituido por un financiamiento a la patronal. Robledo sostiene "la necesidad de medidas rápidas para recuperar la producción, las Pymes no pueden seguir atrapadas en el sistema de calificación de créditos del Banco Central". No alcanza "la implementación de créditos blandos; lo que nosotros impulsamos —sostiene el dirigente del Mner— es la formación de fondos fiduciarios por sector, administrados por el Estado y por los sectores productivos, y un urgente plan de refinanciación de pasivos". La experiencia recorrida por las fábricas ocupadas y, de un modo general, la experiencia más reciente del país son, sin embargo, el mejor desmentido de esta receta: ni la más grande liquación de pasivos que conoció el empresariado nacional (Pymes o no Pymes), ni los generosos subsidios que ha recibido en estos últimos años sirvieron para sacar al país de la bancarrota. Una nueva inyección de dinero en beneficio de la patronal, en medio de la actual crisis de sobreproducción, terminará yendo al dólar o a la especulación financiera y nutrirá, en definitiva, la fuga de capitales al exterior.

La idea de la autogestión no puede presentarse como una panacea, ya que las penurias que enfrentan los obreros, desde la ausencia del capital de trabajo hasta la autoexplotación, ponen en un lugar muy importante y urgente la necesidad de una lucha nacional para crear un programa que verdaderamente represente a los trabajadores de estas fábricas y del país.

⁸Entrevista a Eduardo Murúa. *El cambio silencioso*, obra citada, pág. 67.

Mner: balance del Encuentro de Rosario

La tentativa por parte del gobierno de formar un elenco que le sea adepto no deja de tener sus tropiezos. En ese sentido, resulta ilustrativo el Encuentro del Mner en Rosario, en octubre de 2003. Las autoridades no ahorraron esfuerzos por darle una trascendencia mediática a ese acontecimiento.

Quien se gufe por los asistentes, casi podría decir que se trató de un acto oficial. Estuvo presente el ministro de Trabajo, Tomada, y el jefe de Gobierno porteño, Ibarra. El intendente rosarino, Hermes Binner, y su sucesor, Miguel Lifschitz, fueron anfitriones del "Primer Encuentro de Incubadoras de Empresas Recuperadas". Participaron varias decenas de cooperativas agrupadas en el Mner, representantes de universidades nacionales y organismos de ciencia y técnica.

Pero, más allá del ambiente de algarabía, volvieron a surgir los grandes problemas que afectan a los emprendimientos productivos gestionados por sus trabajadores.

Aunque Tomada anunció el lanzamiento de "un financiamiento para la compra de máquinas y capital de trabajo para las fábricas recuperadas", al mismo tiempo informó que no había fondos propios destinados a sostener a esas plantas, a pesar de que en esa misma semana se habían anunciado subsidios ferroviarios por más de 200 millones de pesos anuales. Tomada propuso, ante tal situación, echar mano a recursos ajenos, específicamente a una línea de financiamiento del BID, lo cual, fuera de cualquier otra consideración sobre ese tipo de organismos, no pasa de ser una expresión de deseos, pues actualmente las instituciones multilaterales de crédito no ponen dinero en el país; por el contrario, lo sacan. En la mejor de las hipótesis, este virtual financiamiento abultaría aún más la deuda externa y estaría atado a múltiples condiciones. Los beneficiarios de tal "ayuda" deberían endeudarse a tasas prohibitivas.

Tomada ratificó así que no había prevista ni una moneda en el presupuesto para las fábricas recuperadas; tampoco líneas crediticias de bancos oficiales. Uno de los representantes del Banco Na-

ción presentes allí habló de las dificultades que causa la "falta de respaldo de capital" que sufrían los trabajadores. Por cierto, esa falta de respaldo de capital no impide salvar a los bancos, tanto a los privados como a los estatales, por medio de los fondos públicos.

Hace un año, también en un encuentro de fábricas recuperadas, Felipe Solá había prometido ayuda para las empresas bajo gestión obrera. Esa "ayuda" terminó con una asignación presupuestaria de siete millones de pesos, un monto ridículo. Kirchner también había anunciado 150 millones de pesos con motivo de la creación del Banexo (abreviatura de Buenos Aires-Nexo), para apuntalar los emprendimientos, pero el anuncio presidencial y el propio Banexo resultaron una cáscara vacía. Lo mismo sucedió con el Foncap o el Fogaba, que no tienen fondos propios y que terminan actuando como intermediarios de inversores privados. Si se pasa en limpio el discurso de Tomada, no se ve nada nuevo bajo el sol, salvo una páfida ingeniería financiera para que ellos hagan negocios magníficos con dineros públicos.

En cuanto a la reforma de la Ley de Quiebras, Tomada fue muy claro: el oficialismo estaba pensando en introducir la figura de la Sociedad Anónima Laboral, para abrir las puertas a la asociación con cualquier capital accionario.

La confesión del ministro fue especialmente útil, al poner de relieve que los salvatajes que se hicieran de empresas en crisis, con intervención de los trabajadores y que mantuvieran la continuidad de su funcionamiento, tendrían por función actuar de bisagras con vista a la reconstrucción de esas empresas sobre las antiguas bases sociales. La introducción de esa nueva figura societaria ayudaría a facilitar la transición, con el objetivo de apuntalar el proceso de reconstrucción capitalista. Gracias a ella, los inversores privados tienen un terreno más despejado para desembarcar en las empresas recuperadas en cuanto éstas, gracias al trabajo de sus obreros, ofrezcan una perspectiva lucrativa.

Semejante confesión produjo escozor y rechazo en las filas del Mner, cuyos dirigentes no advertían que el ministro se había limitado a ser sincero sobre el destino inevitable de la autogestión ba-

jo la economía de mercado. No hay lugar ni posibilidades para una salida intermedia. No hay espacio para una "economía social solidaria", para un tercer sector capaz de mantener una coexistencia armónica y duradera con el capital responsable de la bancarrota nacional. El cooperativismo, como lo ha probado sobradamente la experiencia histórica, está condenado a sucumbir frente a la competencia capitalista y la fuerza superior del capital, que concentra en sus manos los principales recursos materiales y los resortes del Estado.⁹

El gran ausente en un encuentro de esas características ha sido todo lo referido a las expropiaciones y su efectivización inmediata, cuando este problema ya adquiriría un carácter explosivo, pues comenzaban a vencer los plazos previstos en las leyes votadas, mientras Solá e Ibarra no mostraban intención de poner un peso por los bienes sujetos a expropiación. Esto es: cada fábrica bajo gestión obrera se veía ante la posibilidad inmediata de terminar como el frigorífico Yaguapé. Sin embargo, con su hipocresía a prueba de cualquier realidad, el jefe porteño se jactó del respaldo que supuestamente la Ciudad ofrecía a las fábricas recuperadas, aunque éstas se encontraran en estado de completa asfixia financiera.

El Encuentro de Rosario dejó a la vista de todos que el porvenir de estas fábricas es incompatible con un gobierno atado al FMI. El sometimiento a la administración Kirchner implica, irremediablemente, sacrificar a las fábricas ocupadas y a toda la clase obrera.

⁹Si se quiere, se trata de una propuesta retrograda, además de imposible, que devolvería la economía a una organización similar a la de los gremios medievales. La irrupción del capitalismo batió con esos gremios y con esa organización para construir un mundo a su imagen y semejanza, un mundo burgués, lo cual, en su momento, resultó tan progresista que permitió a la humanidad avanzar en 100 años, más que en toda su historia anterior. Ese progreso hace posible que, de la mano de la clase obrera, la especie humana de otro salto gigantesco al transformar el progreso y la cultura en propiedad de todos, en patrimonio colectivo. El trueque, el viejo artesanado, los antiguos gremios y las economías regionales son cosas del pasado, superadas hace 500 años. Volver a ellas constituiría una regresión histórica que nos haría retomar a la barbarie. Por eso es una utopía reaccionaria.

Esa contradicción, al volverse tan evidente, forzó al Mner a tomar distancia del gobierno. El cortocircuito llegó al extremo de que el Mner decidió no participar en el acto organizado por el gobierno a principios de diciembre de 2008, cuando el Presidente anunció el Programa de Asistencia de Fábricas Recuperadas. Todo un dato tratándose de un movimiento cuyos principales dirigentes formaron parte, en las elecciones de 2003, de distintas listas de filiación kirchnerista. Aunque vuelven a rescatar la "buena voluntad" del gobierno, en principio la del propio Kirchner, ya no pueden soslayar la falta de respuesta a los problemas más apremiantes. Pero, quizá, lo más llamativo sea que el Mner, aun recortadamente, recogiera alguno de los planteos del Polo Obrero que figuran en el programa de acción de las sucesivas Asambleas Nacionales de Trabajadores: subsidios no reintegrables; reconocimiento de la jubilación, obra social y derechos sindicales en igualdad de condiciones con cualquier trabajador en relación de dependencia.

La reforma de la Ley de Quiebras ha desaparecido de su lista de reclamos. En su lugar, sin explicación de por medio, figura la exigencia de una "Ley Nacional de Expropiación de unidades productivas". ¿Se resuelven las contradicciones de la Ley de Quiebras? Si nos guiamos por lo trascendido, tomado por supuesto a cuenta de inventario, tenemos:

- 1) El proyecto del Mner propondría "que toda empresa en cesación de pagos sea expropiada". Es decir, amplía el alcance de la expropiación y no las circunscribe a las empresas que han entrado en quiebra.
- 2) Reconoce una indemnización a la patronal vaciadora pero establece que su valuación se haga a moneda de quiebra.
- 3) Se diferencia en el hecho de que otorga prioridad a los trabajadores en la compra y uso de los bienes durante la transición, hasta que la expropiación termine por consumarse. Aun bajo esa variante seguiría tratándose de una expropiación con cargo a los trabajadores, similar a la ley en vigencia.
- 4) No hay, en cambio, ninguna referencia y menos un mandato imperativo sobre los plazos del Poder Ejecutivo para efectivizar las

expropiaciones. No se trata de un detalle menor, pues todas las modificaciones progresivas que se pretenden introducir quedarían en letra muerta, si tenemos presente que el cien por ciento de las expropiaciones aprobadas no pasaron de ser una declaración.

El nuevo planteamiento del Mner no supera, de todos modos, los límites de la autogestión, como lo revelan sus omisiones —a veces, lo omitido resulta más sustancioso que lo dicho—. Por ejemplo, no hay referencia alguna al sistema bancario aunque se sabe que su función es estratégica para resolver el sostenimiento económico de las empresas ocupadas. Sin la nacionalización de la banca y sin directores obreros, representativos de las fábricas bajo gestión obrera en la dirección del sistema bancario, que oriente al crédito y los recursos en beneficio de los explotados, no hay presente y menos aún futuro posible para los emprendimientos de la clase obrera. En resumen, en las propuestas del Mner, la viabilidad de las fábricas bajo gestión obrera aparece divorciada de una perspectiva de conjunto. En otras palabras: esa viabilidad todavía se concibe independientemente de una transformación social general de la sociedad.

“Construyendo poder”, pero... ¿para quien?

Hay un planteo que hoy se encuentra de moda y es recogido entusiastamente por sectores de la izquierda argentina: la llamada “acumulación o construcción de poder”. En nombre de que el poder de la burguesía se extiende a todos los terrenos —constatación absolutamente obvia—, la conclusión que se saca es que en estos terrenos es donde hay que conquistar el poder. Pero el poder de la burguesía no constituye una suma indiferenciada de poderes parciales y descentralizados. El poder se articula en cuanto un todo, en un sistema cuyo punto de convergencia y centralización es el Estado. En nombre de que el poder está en todas partes —tal cual lo pregonan los teóricos posmodernos, empezando por Michel Foucault— se disuelve el papel estratégico y central del Estado. La conquista del poder en un grupo de empresas —en este caso la autogestión— en el ámbito cultural, educacional y en todas las esferas de la actividad social y productiva, termina siendo un sucedáneo de la lucha por el poder político y una cortina de humo, tras una envoltura aparentemente radicalizada, para abandonar toda lucha por el poder. La ilusión gradualista de un agotamiento progresivo de los “poderes capitalistas” es tan infundado como la ilusión de cambiar la naturaleza del ejército “conquistándolo” batallón por batallón¹.

Esa tesis la desenvuelve E. Magnani en su reciente libro²: “Volviendo a la ambición del Polo Obrero —nos señala el autor— parecería que resulta algo desmedido para la actual coyuntura. Más allá de las evidentes injusticias que sufren los trabajadores en el sistema capitalista, lo cierto es que no es seguro que todos ellos puedan verlas o que crean que la solución está en una salida revolucionaria... Ir por todo cuando la mayoría tiene más hambre que conciencia social o de clase puede dejarlo a uno solo, en el desencampado y tan vacío de fuerza como al principio. Por el contrario, ir construyendo poder ‘o contrapoder’ a través de una praxis que de hecho va construyendo conciencia social antes de salir al frente de batalla, puede resul-

¹Criticado en *Control obrero, consejos obreros y autogestión*; Ernest Mandel, pág. 28, Tomo I. Cuadernos Rojos.

²*El cambio silencioso*, E. Magnani.

tar no sólo más razonable, como argumentan algunos dirigentes del Mner, sino también más efectivo a la hora de alcanzar el objetivo. Y en definitiva todo depende del consenso entre los trabajadores acerca de que hay que dar esa lucha, lo que tampoco es tan seguro."

Magnani hace suyas las conclusiones de Naomi Klein, hechas durante su estada en Buenos Aires.

"El problema es que las teorías suelen estar equivocadas. Algunas veces, los intentos intelectuales por imponer el sentido y la estructura son abiertamente dogmáticos y rígidos, forzando la muerte, alienando el lenguaje vibrante, los momentos vívidos. En lugar de una fábrica en la que un grupo de gente decide mantener su trabajo y trabajar con dignidad, ellos alucinan una célula prerrevolucionaria construyendo poder para tomar el Estado."

Ese dogmatismo y rigidez es el que habría llevado a la "izquierda radicalizada" a sobrestimar los alcances de las jornadas del pasado 19 y 20 de diciembre de 2001. Habría que rendirse, según el autor, frente a las evidencias y comprender que ese ciclo está terminado:

"La creciente pacificación social, cuyo golpe final parece haber dado la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, adormece a buena parte de la sociedad tan activa hace unos pocos meses. El nuevo Presidente, al asumir bajo su liderazgo una parte de los reclamos sociales (al menos en sus primeros meses de gobierno), de alguna manera actúa como neutralizador para la movilización popular, que sueña nuevamente con que le solucionen los problemas. La autogestión y la democracia directa empiezan a configurarse como parte del pasado para la mayoría. Por otro lado, más allá de lo legítimo del reclamo, el caso de la represión en Brukman demuestra que el grado de combatividad al que están dispuestos los vecinos tiene límites y que, cuando ven llegar las banderas de los partidos políticos más radicalizados, no les alcanza con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo para vencer el miedo, por más que duela aceptarlo."

"La apuesta de los movimientos que engloban, por así decirlo, a la mayoría de las fábricas —continúa Magnani— es, en forma más o menos explícita, que en dos años los trabajadores estén tan instalados económica, social y políticamente como para ir por todo o al menos conseguir otros dos años, como ya ocurrió con las cooperativas Unión y Fuerza de Avellaneda o Yaguané. Desde una mirada optimista se podría decir que se espera a te-

ner suficiente fuerza antes de dar la batalla final. Por el contrario, a primera vista parecería que la intransigencia más radicalizada, que busca obtener todo desde el principio, no les está dando demasiado crédito y produce un desgaste difícil de superar, como es el que por el momento parece haber en Brukman, que, después de casi dos años, comienza a luchar por la expropiación en peores condiciones que al principio."

El autor, al final de su exposición, aclara: "Esta discusión probablemente pase al arcón de las reliquias discursivas en breve, ya que, a poco de terminado de escribir este libro, una cooperativa formada por militantes del Partido Obrero obtuvo la expropiación de Sasetru, una empresa que estuvo cerrada durante casi 20 años y que esperan poner a funcionar pronto".

A más de un lector atento, probablemente, los términos del debate, tal cual los presenta Magnani, le resulten risueños. Según nuestro autor, el movimiento de fábricas recuperadas estaría dividido en dos bandos: los apresurados y los pacientes. Los primeros quieren obtener todo y desde el principio. En cambio, los segundos, más mesurados, están dispuestos a ir de a poco, gradualmente.

Conclusión: los apresurados, en nombre de obtener todo, se quedan con las manos vacías. En cambio, los sensatos y moderados, al menos arrancan algunas conquistas. Moraleja: más vale algo que nada, pájaro en mano que cien volando. "Paso a paso", "partido por partido", diría 'Mostaza' Merlo.

La construcción que hace Magnani es absolutamente artificial. Ya hemos señalado que el fenómeno de las fábricas recuperadas es inseparable del Argentinazo. Es decir, de una acción general y colectiva que puso en jaque al poder político del Estado. Por más mérito que se le pueda adjudicar a cada fábrica en particular, ninguna habría podido prosperar al margen de esa rebelión nacional.

El pueblo dejó a un lado las luchas parciales y aisladas, y se encaminó hacia un combate común, general. El "paso a paso" cedió su lugar a un estallido masivo; la paciencia a la impaciencia, la moderación a la radicalización; en definitiva, el gradualismo dejó paso a la revolución. Gracias a esa lucha general "por todo", se consiguieron reivindicaciones parciales, por pelear por todo se obtuvo la parte. El Argentinazo, aun con su obra inconclusa, permitió arrancar un conjunto de concesiones. Los dos millones de planes y hasta los miserables 150 pesos fueron otorgados como una reacción defensiva del gobierno ante la etapa abierta el 19 y 20 de diciembre. ¿Se

puede olvidar, acaso, que el pasaje de los 600.000 a los 2.000.000 de planes actuales, dispuestos por Duhalde, es consecuencia directa de las jornadas del Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002? Sucede lo mismo con las expropiaciones, porque la burguesía no tiene más remedio que echar lastre y ceder frente a la presión popular.

Brukman con 50 obreros, Lavalán con unas decenas o Grissinópoli con apenas 16 compañeros, por citar algunos ejemplos, habrían sido neutralizados fácilmente en otro cuadro político.

En resumen, contra la opinión de Magnani, las conquistas arrancadas fueron el resultado del procedimiento inverso al que él sostiene. Lo que ha terminado rindiendo frutos fue esa gran e histórica gesta colectiva. Esto no es una novedad. La historia no nos deja mentir, pues las principales conquistas del movimiento obrero y las reformas democráticas modernas han sido hijas de revoluciones triunfantes o, incluso, de las derrotadas.

El autoconfinamiento de los movimientos a sus reivindicaciones específicas resulta funcional a la política del gobierno. Según ese punto de vista, las asambleas populares, nacidas al calor del 19 y 20, deberían transformarse en asociaciones de buenos vecinos, las fábricas ocupadas dedicarse a sus menesteres domésticos (léase problemas de producción, gestión interna y comercial) y el movimiento piquetero a la administración de los planes sociales (ahora ni siquiera a eso, pues la política oficial apunta a arrebatarle ese control y entregárselo a alguna ONG, lo cual prueba que el objetivo del gobierno, como lo confesó Aníbal Fernández, es hacer "desaparecer el movimiento piquetero"). En resumen, abandonar la lucha para "que se vayan todos" y, de esa forma, lubricar la transición para "que no se vaya nadie". Kirchner es la culminación de ese proceso, fogueado por la burguesía, para reconstruir la autoridad de un Estado minado por la rebelión popular.

Luego de una Plaza de Mayo colmada con 60.000 manifestantes en el segundo aniversario del 19 y 20, queda claro que lo único exagerado ha sido apresurarse a dictarle la sentencia de muerte y enterrar a un movimiento cuya vitalidad está a la vista. Y, lo que es más notorio aún, atribuirle a una gestión que ha pactado con el FMI una capacidad transformadora que no tiene ni se propone tener.

El retroceso operado en las tendencias a la rebelión popular —que Magnani señala— dista mucho de ser un fenómeno espontáneo. Sin tratarse del

único factor, no podemos perder de vista el papel de los actores políticos que han intervenido conscientemente para provocar ese desenlace. El "progresismo", integrado hoy al gobierno, ha trabajado por vaciar los movimientos de lucha de su contenido político general, para cooptarlos e integrarlos al Estado. El ataque contra la excesiva "politización", "infiltración" y "copiamiento" de los movimientos populares por parte de los partidos de izquierda (anatema a que se reitera en cualesquiera de los ámbitos de lucha citados, hecho muletilla por el propio Presidente de la República) es una cortina de humo para hacer pasar la política del Estado patronal y aceitar esa operación política.

La confrontación de posiciones no puede reducirse a la vulgaridad de si se pueden aceptar o no compromisos. En cuanto a la divisoria de aguas que establece Magnani, habría algunos que pretenderían llegar a la estación terminal de un tirón, sin escalas, mientras otros estarían dispuestos a hacer una pausa y bajarse en estaciones intermedias.

Los compromisos no son sólo posibles; además, son inevitables. Las organizaciones que integran la ANT han establecido compromisos con el gobierno. Del mismo modo actúa cualquier dirección combativa en los sindicatos o en las organizaciones de masas donde tienen algún tipo de representación o responsabilidad. Mientras la burguesía esté en el poder será inevitable negociar con ella en un continuo tire y afloje. Sólo un tonto desconoce eso.

El debate —el único que merece el nombre de tal— gira en torno de la estrategia y la perspectiva política que debe guiar al movimiento de lucha de los trabajadores en general y de las fábricas recuperadas en particular; a saber, una política de independencia de clase o de sometimiento a la burguesía. He ahí la disyuntiva de hierro que recurrentemente ha atravesado al movimiento obrero a lo largo de su historia. La estrategia de los agrupamientos que Magnani reivindica como supuestamente "eficaces" no superan los límites de la autogestión; esto es, una reorganización dentro de las fronteras del orden social vigente y por eso han terminado subidos, ya que de estaciones hablamos, al tren de la burguesía y sus partidos, como lo prueba la integración de sus principales dirigentes a las listas de Rico o de Kirchner, en distintos puntos del país. El poder que se construye —la "construcción de poder" o "contrapoder", para reproducir el lenguaje del autor— no es el de los explotados sino el de los explotadores. Bajo este punto de vis-

ta, la "batalla final" que Magnani exhorta a preparar, tiene ya un ganador de antemano. Ese ganador no es, precisamente, la clase obrera. La izquierda "antiglobalizadora" —de la que Naomi Klein forma parte y es fuente inspiradora— nos puede dar fe de lo que decimos, pues ha transformado al gobierno de Lula en el modelo a imitar y a emular en América Latina y en todo el mundo.

El Partido Obrero nunca ha hecho una oposición de principios contra las cooperativas. Más aún, se ha delimitado de quienes denostaron las cooperativas en nombre de la defensa de la propiedad estatal, es decir de otra forma de propiedad burguesa (véase capítulo *Estatizaciones*). De manera que sorprenderse porque el Polo Obrero constituyó una cooperativa en Sasetru y hasta impulsó una expropiación —y exhibir esto como un giro del PO que pondría punto final a la polémica— delata la confusión del autor y no de la organización cuestionada.

El primer proyecto de expropiación que ingresó en la Legislatura porteña fue del Partido Obrero (proyecto de Brukman), cuando todos los bloques consideraban que el asunto estaba fuera de la competencia de ese cuerpo. El primer proyecto de Grissinópolis fue presentado por Jorge Altamira, mientras otros especulaban con una salida judicial, expectativa que luego se probó totalmente infundada.

Magnani atribuye la demora en la sanción de la expropiación de Brukman a la supuesta intransigencia de los trabajadores, pero el proceso ha sido exactamente el inverso. La "historia oficial" que Magnani recoge en su libro ha sido una pantalla para encubrir la negativa y el sabotaje sistemático a expropiar la planta por parte de Ibarra y de los bloques mayoritarios, fuesen oficialistas u opositores, sometidos a las presiones de los capitalistas de carne y hueso. Un segundo proyecto, que no hacía más que reproducir los términos de otras leyes de expropiación ya aprobadas por la Legislatura, fue acompañado por Altamira como una forma de quebrar el cerco tendido contra los trabajadores, pero tampoco fue tratado y quedó, al igual que su antecesor, en la congeladora.

El bloqueo a la expropiación obedecía a la intransigencia patronal, no a la de los obreros. Una lucha tenaz y perseverante en el tiempo fue la que, al igual que en el caso de Sasetru, logró dar vuelta el desalojo, quebró la resistencia patronal y culminó con el reingreso de los trabajadores en la planta (véase capítulo sobre Brukman).

Autogestión y cooperativas

Los reaccionarios han protestado en un coro de lamentos sabáticos porque, según ellos, el cooperativismo se ha contaminado de política. Por cierto, además de reaccionarios ignoran la historia: el cooperativismo argentino fue creación del Partido Socialista, un partido obrero, cuando aún no había terminado el siglo XIX. En verdad, los principales dirigentes del aquel PS, como Juan B. Justo, Alfredo Palacios o Nicolás Repetto, por citar a los más conocidos, adherían a aquella corriente —nos referimos a ella en un capítulo anterior— que orientaba el alemán Eduardo Bernstein; es decir, a la tendencia más conciliadora y reformista de la Internacional Socialista. Ellos esperaban suplantarse a la revolución con sus cooperativas.

Como se ve, se trata de un debate muy antiguo en el movimiento obrero, que quedó saldado, en la teoría, hace mucho tiempo; y, en la práctica, quedó aplastado bajo el derrumbe de El Hogar Obrero, su mayor expresión en la Argentina.

Ahora, la política de los "autogestionarios" no hace más que seguir los pasos del viejo cooperativismo, con sus mismos límites. La coexistencia de una economía social con la economía de mercado ha quedado desmentida por los acontecimientos. Hablamos de la historia del cooperativismo argentino, pero en el mundo tiene orígenes más lejanos aún: cien años antes de Juan B. Justo, tuvo una de sus fuentes en los socialistas utópicos. Ya en épocas muy tempranas fue Charles Owen quien creó las cooperativas de consumo y de producción, que sirvieron para demostrar, en la práctica, que el comercio y el fabricante no son indispensables. Y, por otra parte, los bazares obreros, establecimientos de intercambio de los productos por medio de bonos de trabajo y cuya unidad era la hora de trabajo rendido. Esos establecimientos tenían necesariamente que fracasar. Pero cualquiera sea la consideración que se pueda hacer sobre Owen (Marx le tributa su homenaje), no hay punto de comparación con los actuales partidarios de la autogestión, cuando ha pasado tanta agua bajo el puente y han transcurrido más de 200 años de incesante lucha de la clase obrera nacional e internacional.

No exagerará, incluso, quien diga que el propio Owen tenía ideas más evolucionadas que estos autogestionarios de hoy, pues nunca presentó sus iniciativas como una panacea universal para todos los males sociales. Simplemente, llevó sus ideas a la práctica.

“En lo que respecta a las cooperativas, muy particularmente a las de producción, representan, debido a su esencia interna, un híbrido dentro de la economía capitalista; una producción socializada en pequeño dentro del régimen capitalista de cambio. Pero en la economía capitalista, el cambio domina a la producción, convirtiendo, en vista de la concurrencia, la explotación desmedida, es decir, el sometimiento completo del proceso de producción a los intereses del capital, en condición necesaria de la empresa. Prácticamente, esto se manifiesta en la necesidad de hacer el trabajo lo más intensivo posible, siendo aumentado o disminuido, según la situación del mercado; alquilar la fuerza de trabajo de acuerdo con las exigencias de la demanda mercantil, o despedirla, poniéndola en la calle; en una palabra, emplear cuantos medios se conocen para poner a una empresa en condiciones de poder competir con otras. Por ello, en las cooperativas de producción, se da la necesidad contradictoria de que los trabajadores dueños de la empresa, han de regirse con todo rigor, incluso contra sí mismos, para poder desempeñar el papel de empresarios capitalistas”².

La propia dinámica capitalista conduce compulsivamente a que los obreros comiencen a funcionar como patrones, esto es, que terminen actuando “contra sí mismos”.

El dilema que se plantea —según Rosa Luxemburgo— es claro: “En esta contradicción parece la cooperativa de producción, retrocediendo hacia la empresa capitalista, o disolviéndose, en caso de que los intereses de los obreros fueran más fuertes. Estos son hechos que, aunque Bernstein los llega a confundir cuando ve en la falta de “disciplina”, de acuerdo con la señora Pottr-Webb, la razón de la decadencia de la cooperativa de producción en Inglaterra. Lo que aquí con demasiada ligereza se califica de disciplina, no es

otra cosa que el régimen, por naturaleza absoluto, del capital, que hace que los trabajadores no puedan emplearlos para consigo mismo”².

La única forma de superar la contradicción sería poder sustraerse por algún artificio a las leyes de mercado: “De ello resulta que las cooperativas de producción sólo podrán asegurar su existencia en la economía capitalista si, recurriendo a algún expediente, anulan la contradicción oculta en ésta y que se da entre las formas de producir y cambiar, escapando artificialmente a las leyes de la libre competencia. Esto será posible únicamente si de antemano se asegura un mercado de venta, un seguro círculo de consumidores. Como tal remedio pueden servir las cooperativas de consumo. Y aquí tenemos nuevamente, y no en la diferencia entre cooperativas de producción y de consumo —o como en otro lugar se desprende de la ocurrencia de Oppenheimer—, el problema tratado por Bernstein de por qué las cooperativas de producción independientes fracasan, y sólo las de consumo pueden asegurar su existencia”.

Pero, a renglón seguido, la propia Rosa Luxemburgo se encarga de señalar los límites de esa supuesta escapatoria:

“Pero si las condiciones de vida de las cooperativas de producción en la sociedad actual han de estar, por lo tanto, ligadas a las cooperativas de consumo, resulta entonces, como consecuencia lógica, que las cooperativas de producción han de quedar, en el caso más favorable, condenadas a un mercado local y reducido, y a producir contados artículos de consumo inmediato y, con preferencia, los de primera necesidad. Las industrias textil, carbonera, metalúrgica, petrolera, así como las de construcción de locomotoras, barcos y maquinaria; todas las ramas más importantes de la producción capitalista, quedan excluidas ‘a priori’, tanto de las cooperativas de consumo como de las de producción. Prescindiendo, pues, de su carácter híbrido, pueden las cooperativas de consumo emprender principal-

¹ *Reforma y revolución*. Rosa Luxemburgo, “Sindicatos, cooperativas y democracia política”.

² “Ciertamente que las fábricas pertenecientes a cooperativas representan el primer resquebrajamiento del molde antiguo sin salir de él, soliendo reproducir, en su verdadera organización, todas las faltas del sistema actual” (Karl Marx, *El Capital*, tomo III, primera parte).

mente, como tarea general, y dentro de pequeños círculos de producción y de cambio, la abolición del mercado mundial y la disolución de la economía existente; es decir, que, según su esencia, supondrán un retroceso desde la producción mercantil del alto capitalismo a la producción medieval.

“Pero también en los límites de su posible realización sobre la base de la sociedad actual —agrega—, las cooperativas de producción reducen forzosamente a ser simples servidores de las de consumo, que se presentan, por tanto, en primer plano y como los principales agentes de la reforma socialista proyectada. Toda la reforma socialista por medio de las cooperativas queda reducida, por esta razón, de una lucha contra el capital productivo, esto es, contra el torno de la economía capitalista, a una lucha contra el capital comercial y desde luego, contra el capitalismo de los acaparadores y pequeños comerciantes, es decir, contra pequeñas ramificaciones del tronco capitalista”.

En resumen, el horizonte de las cooperativas pierde toda capacidad transformadora de conjunto y quedaría confinado, en el mejor de los casos, a operar en los intersticios del régimen capitalista.

Un comentario aparte lo merece el análisis realizado por el gobierno porteño, quien por boca del actual subsecretario de Desarrollo Económico, se da el lujo de emular a la dirigente socialista y señala: “...lo que para Luxemburgo constituye el punto más endeble de las cooperativas de producción podría, en nuestra opinión, ser aprovechado por las empresas y por los trabajadores para su mejor desenvolvimiento. La posibilidad con que cuentan las cooperativas de regular la utilización de la fuerza de trabajo constituye, bien utilizada, una fortaleza, un factor de viabilidad económica y, ocasionalmente, un elemento a ser utilizado en el marco de la estrategia de crecimiento y desarrollo competitivo de la cooperativa. Luxemburgo acierta en cuanto a la existencia de las tensiones que menciona, pero no necesariamente conducen a la mutación o a la explosión de la organización. En tanto los mecanismos de información y toma de decisiones sean efectivos y plenamente democráticos, el compromiso de los asociados será mayor que en aquellos casos en que eso no ocu-

rra y habrá, en consecuencia, menores probabilidades de ruptura”.

¿A qué apunta este representante del progresismo, cuando se refiere a “regular la fuerza de trabajo”? ¿Implica, acaso, que los trabajadores de la cooperativa puedan achicar o, en su defecto, prolongar indefinidamente la jornada de trabajo y comprimir cuanto hiciera falta sus retiros (léase salarios)? El propio Sánchez lo aclara sin subterfugios: “...el carácter naturalmente flexible de las cooperativas con sus respectivos esquemas de reintegros a los socios, en comparación con los salarios propios de otras formas societarias, es un elemento que podría constituirse en un factor de viabilidad económica en la medida que el ajuste de dichos reintegros en función del desenvolvimiento de los ingresos de las cooperativas podría permitir el surgimiento de un excedente acumulable que permitiese conformar un capital de trabajo propio. Cabe mencionar que la utilización de esta característica debe ser monitoreada cuidadosamente por los asociados con el fin de evitar la repetición de experiencias negativas que, en el pasado, tuvieron lugar en otras cooperativas”.

Como se puede apreciar, el gobierno de Ibarra no da vueltas y se manifiesta descarnadamente por la autoexplotación de los trabajadores. En lugar de ser un arma para la lucha, la “democracia” pasa a ser un arma... para la resignación. “Autoexplotación sí, pero con democracia”, parece ser la fórmula del progresismo porteño. Esa fórmula permitiría a los trabajadores asumir y sobrellevar de otra forma la cruz que cargan y hasta evitaría una “ruptura”. Un antídoto perfecto, como se ve, para evitar el desarrollo de la lucha de clases.

Viene al caso recordar las consideraciones que hacía la Internacional Comunista al referirse al cooperativismo. En uno de sus documentos destacaba la necesidad de “llevar a cabo una enérgica lucha contra la creencia de que la cooperación podría solamente con sus fuerzas acceder al régimen socialista mediante una lenta incorporación en el capitalismo, sin la toma del poder por el proletariado. También sería falso afirmar que es capaz (usando sus viejos métodos) de obtener un mejoramiento considerable de

³Empresas recuperadas. Ciudad de Buenos Aires, pág. 91.

la situación de la clase obrera. Es preciso combatir no menos enérgicamente el principio de la llamada neutralidad política, que oculta un apoyo abierto o simulado a la política de la burguesía y sus lacayos⁴.

El movimiento cooperativo argentino

El movimiento cooperativo argentino desde hace mucho tiempo está asimilado al régimen social capitalista. Ejemplos como el del quebrado El Hogar Obrero, al cual nos referimos al comienzo, los de Sancor, Coninagro o Credicoop, nos indican que la evolución operada por el cooperativismo ha alcanzado un notable desarrollo y diversificación, incursionando prácticamente en todas las actividades económicas: comercio, industria, servicios, agricultura y en la actividad financiera y bancaria.

La masa de asociados, en todos esos casos, más allá de lo que prescriban los estatutos y los principios cooperativos sobre derechos y facultades de sus integrantes, sólo son figuras decorativas. El hecho de tener una cuota de la cooperativa —que acredita la condición de socio— habilita, en el mejor de los casos, a ser cliente y tener el derecho de operar en el ámbito de la llamada cooperativa, sin violar las formalidades legales vigentes.

Esas cooperativas son fachada de grupos capitalistas que explotan sus ventajas, entre otras las impositivas, como, por ejemplo, la eximición del pago del impuesto a las ganancias. Tales grupos concentran en sus manos la conducción real de la cooperativa, de la cual tienen un manejo discrecional y la convierten en base de operaciones para sus negocios y transacciones. Resulta obvio que, en ese cuadro, ha desaparecido todo vestigio democrático o principio igualitario, propio y característico del antiguo cooperativismo.

Las cooperativas reproducen en su funcionamiento la estructura jerárquica peculiar de las empresas capitalistas, que combinan el despotismo patronal con la disciplina carcelaria que sufren los tra-

bajadores, cuya inmensa mayoría reviste condición asalariada. Así desaparece definitivamente, hasta en la forma, la ficción de que se es un socio en igualdad de condiciones que sus mandantes en el Consejo de Administración.

Y aún no hablamos de las cooperativas que son directamente un fraude a la ley, pantallas de una *tercerización* encubierta, en las cuales la patronal pretende disimular la relación de dependencia y mantiene a sus trabajadores en negro, privándolos de sus beneficios laborales y previsionales, de obra social y del derecho a indemnización en el caso de despido o accidente de trabajo. Una muestra de estas cooperativas la encontramos en el gremio del pescado en Mar del Plata, cuyos trabajadores, en conjunto con el resto de los obreros en actividad, llevan adelante una tenaz lucha por blanquear su trabajo, desafiando a las patronales negreras que tienen un papel gravitante en la actividad. En ese caso específico, el combate de esos trabajadores se respalda en la dirección antiburocrática del Sindicato del Pescado (Soip), donde tienen un papel gravitante los militantes del Polo Obrero.

El movimiento cooperativo tiene íntimos lazos con el Estado y, consecuentemente, ha cultivado "relaciones carnales", a lo largo de su historia, con los sucesivos gobiernos de turno, incluida la dictadura militar. Una medida de ese giro e integración al orden social vigente lo puede palpar quien examine al denominado "sector progresista" del movimiento cooperativo, lo cual da una pauta de lo que es su fracción más conservadora.

Con un acto en Parque Norte, el IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) celebró el 81° Día Internacional de la Cooperación en Julio del 2008. Tres mil personas, según la optimista apreciación de los organizadores, siguieron las intervenciones de Carlos Heller, gerente general del Credicoop, y de Floreal Gorini, presidente del Instituto. Antes, dirigió la palabra la señora Castro, duhaldista, directora nacional del Inaes, área gubernamental a cargo de la acción cooperativa.

Ese acto permitió observar el arco político que sostiene al movimiento cooperativo nucleado en el Instituto y de dónde salen sus

⁴Resolución sobre la cooperación. Los Cuatro primeros Congresos de la Internacional Comunista, págs. 245-246. Pasado y Presente.

fondos. Entre los adherentes de primera fila, en sentido literal, se encontraba Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista, cuya calurosa adhesión fue leída completa. También estaban presentes funcionarios muy apreciados por el IMFC, como el intendente Sabbatella, de Morón, ungido por la Alianza en 1999 de la mano del Frepaso, y el ex secretario de Acción Cooperativa y actual diputado del Partido Socialista, Héctor Polino. Entre las adhesiones se contaron la del intendente de Avellaneda, Laborde, también elegido en 1999 por la Alianza. Laborde y Sabbatella, conviene recordar, ahora adhieren al gobierno de Kirchner.

Cooperativismo y gobierno

Castro, directora del Inaes, expuso claramente que su presencia en el gobierno no era ajena a su pertenencia al movimiento cooperativo que allí se encontraba reunido. Nombrada por Duhalde y ratificada por Kirchner, sostuvo que su función no era incompatible con los propósitos del Instituto o, lo que es simétrico, que el IMFC sostuvo y sostiene con su propia gente a ambos gobiernos.

Naturalmente, poco o nada fue lo que pudo exponer como "conquistas" de su gestión, más allá de un decreto que promueve la "enseñanza" del cooperativismo en la educación pública y otro que permitiría poner a funcionar nuevamente las cajas de crédito.

Y ya que nos referimos a esas cajas de crédito, en un país con un sistema bancario en quiebra y sin crédito, no pasarán de legalizar las mesas de dinero y terminarán actuando como satélites de los bancos existentes, entre ellos, el Credicoop.

Credicoop y Abappra

En su intervención, Carlos Heller se ufano del reconocimiento que él y el Banco Credicoop fueron ganando en los últimos tiempos, y relató con orgullo su participación en la reunión con el director gerente del FMI.

En realidad, su intervención demostró los profundos lazos que se fueron tejiendo en el período reciente entre el banco y el conjunto del

sistema financiero, que llevaron a Heller a la conducción de Abappra junto a los bancos provinciales, entre ellos, el Ciudad y el Provincia. Heller defendió, sucesivamente, el "corralito" de Cavallo en diciembre del 2001 —según él para evitar la *extranjerización* de la banca—, el "corralón" de Remes Lenicov en febrero del 2002, también con el pretexto de evitar la caída de la "banca nacional", luego la devaluación, los redescuentos, las compensaciones a los bancos. Heller ha actuado en todas esas infamias no sólo en representación de los intereses del grupo bancario que encabeza el Credicoop, con su Affp asociada con capitales europeos, sino como portavoz político del grupo bancario que integra con el Banco Ciudad —esa verdadera caja negra de Ibarra y de los contratistas de la Ciudad— y, especialmente, con el Banco Provincia de Buenos Aires, vaciado por los Gualtieri y demás testaferros de la banda duhaldista.

Heller defendió expresamente a esos bancos. Al igual que Lavagna, avaló el pago de la deuda externa, aunque pidió un período de gracia. Respecto de la grave situación social, reiteró la propuesta del Frenapo de un seguro de empleo, como a fines del 2001, pero "prudentemente" no le fijó monto. Esos son los "cooperativistas" de hoy.

Utopías y pragmatismo

La intervención del presidente del Instituto, Floreal Gorini, trató de señalar diferencias respecto de la de Heller.

Gorini comenzó por recordar los orígenes del movimiento cooperativista a comienzos del siglo XIX y a las figuras de Owen, Saint Simon y Fourier para denunciar veladamente a los actuales, a quienes calificó de "pragmáticos". Sin negar la importancia de las cooperativas financieras y de producción, Gorini procuró subrayar sus limitaciones y la necesidad de volver a los "principios utópicos" de los comienzos.

¿Será que el Credicoop ha ido muy lejos en su pragmatismo y se ha convertido en una empresa capitalista más? Pero la crisis capitalista no perdona al utopismo. La propia medicina prepega vinculada con el IMFC (Comi) se presentó en convocatoria de acreedores

a fines de 2001. El cooperativismo no puede superar los límites del capital. O termina en la autoexplotación de los cooperativistas o entra en las condiciones de la explotación capitalista, como lo han comprobado históricamente los trabajadores del propio Banco Credicoop. Cuando Heller reivindicó al Credicoop frente a los fracasos del Banco Mayo o del Patricios, se estaba curando en salud, y no mencionó lo ocurrido con Comi.

Gorini no hizo ninguna manifestación anticapitalista. Por el contrario, como lo reveló la funcionaria del Inaes, el cooperativismo fue furgón de cola primero de Duhalde, ahora de Kirchner, y siempre del burgués "progresista", cuyas medidas positivas "serán apoyadas" mientras "se criticarán las negativas". Esos planteos nada tienen que envidiar al PC de las décadas de 1950, 1960 y 1970, con Frondizi, Illia y Perón.

La presencia de Echegaray en el acto estuvo lejos de ser anecdótica. Su asistencia fue destacada desde la tribuna y la suya fue una de las pocas adhesiones que se leyeron completas.

Por supuesto, no es ése el rostro que diariamente exponen muchos militantes comunistas, pero los lazos del PC con el Credicoop, el Instituto y la burguesía cooperativista son profundos y de largo arraigo.

Floreál Gorini fue el único diputado comunista desde la vuelta al Parlamento en 1983. Conviene recordar que llegó allí en las listas del Frente Grande, allá por 1993, cuando el PC constituyó uno de los partidos del Frente del Sur y luego del FG. Aunque no fue electo, ingresó posteriormente cuando ocupó la vacante dejada por Graciela Fernández Meijide, quien había pasado al Senado.

Transcurrieron sólo diez días entre el acto en cuestión y el debut en la provincia de Buenos Aires de la "izquierda-centro", representada por la alianza del PS con Izquierda Unida (PC + MST). Si alguien tenía dudas sobre la influencia gravitante de la banca cooperativa en las decisiones del PC y, por extensión, en IU, la nueva criatura le da la respuesta.

Heller y los banqueros "cooperativos" impulsan desde hace tiempo el renacimiento del izquierdo-centrismo, una variante política nacida

desde la izquierda y orientada a ampliar sus alianzas políticas hacia el "centro", es decir a actuar más orgánicamente contenida por los cuadros y partidos de probada fidelidad al capital. Esta ha sido una de las funciones históricas del Partido Socialista, tanto cuando estaba unido como cuando actuó dividido en dos ramas: el Democrático y el Popular.

En todos los casos, ese "socialismo" dio ministros, embajadores o intendentes tanto al alfonsinismo como a la Alianza, e incluso a la dictadura militar, que, por otro lado y como ocurrió en tantas ocasiones, no se privó por eso de reprimir a militantes socialistas.

Según Heller, la presencia del PS en el frente de Aníbal Ibarra en la Capital Federal no sólo no es obstáculo; además constituye una gran ventaja para sus propios acuerdos con el Banco Ciudad, caja negra del oficialismo porteño.

No hay dudas de que, luego de conseguir ese acuerdo en la provincia de Buenos Aires, Heller buscará extenderlo a nivel nacional. Para los banqueros cooperativos un frente PS-PC constituye una base de operaciones más confiable como expresión de sus intereses y de los compromisos que vienen anudando con el conjunto de los banqueros; en especial, el bloque que Ibarra, Duhalde y Kirchner han constituido en Abappra, cuya contraseña política es el "antimodelo", el "antineoliberalismo" o, más burdamente, el "antimenemismo".

El izquierdo-centrismo ha dado origen históricamente a las componendas más derechistas a partir de su natural vocación de ampliarse cada vez más hacia el centro, es decir hacia la derecha. Cuando *Página/12*, al comentar la "histórica unidad de la izquierda", dice que esa alianza ha superado "85 años de desencuentros", olvida ni más ni menos que a la Unión Democrática de 1945 y el posterior contubernio socialista-comunista que avaló el golpe de 1955.

Fue también un frente de izquierda-centro, el Frente del Sur, en 1993, la semilla del Frente Grande y del posterior Frepaso en 1995, ya con presencia socialista aunque los comunistas habían sido apartados poco antes. No obstante, una parte de la dirección del PC de ese entonces decidió permanecer en el Frepaso, luego Alianza, entre ellos, Sabbatella, Laborde, Sigal y Mosquera, quienes hoy son un

buen puente entre el cooperativismo, Solá y Kirchner.

Como "izquierda que mira hacia el centro", el acuerdo político entre el PS y la IU no supera las vaguedades centroizquierdistas. Su máxima aspiración es "cambiar la situación" y "colocar como prioridad política nacional el salario y el empleo digno para el trabajador". Ni una palabra de un salario mínimo igual a la canasta familiar ni de aumento general de salarios ya. Lo que proponen es eliminar el IVA y así "el salario crecerá alrededor de un 20%"⁶.

El horizonte político de los banqueros cooperativos es progresar a la sombra del actual régimen social y político. Su preocupación inmediata es que el gobierno satisfaga sus aspiraciones en cuanto banqueros. Por eso comparten con toda la banca, la nacional y la extranjera, el reclamo por la "compensación" por la llamada "pesificación asimétrica", que significa miles de millones de dólares a ser pagados con el hambre y el padecimiento del pueblo. Eso fue lo que Heller exigió en nombre de Abappra durante su reunión con Lavagna el 8 de julio de 2003, y también, seguramente, una de las exigencias de Bush en su encuentro con Kirchner, el 23 de julio del mismo año.

⁶Según el marxismo, no puede haber "salario digno" en tanto todo salario implica explotación. El único salario que puede y debe exigir la clase obrera es aquel que le permita producir y reproducir su propia fuerza de trabajo; esto es, un salario equivalente al costo de la canasta familiar. Empero, aun así, una parte de la jornada de trabajo quedará impaga y el capitalista se la apropiará. El proletariado es la primera clase social de la historia que no se propone tomar el poder para permanecer en él eternamente. Por el contrario, su objetivo final es el comunismo, la eliminación de todas las clases. Esto es: el proletariado pugna por su propia desaparición en cuanto clase social explotada.

Autogestión y mercado

Casi no había cuadra en Buenos Aires sin su correspondiente patio de trueques. En sus exhibidores podía encontrarse casi de todo y en algunos barrios, como San Telmo, fueron una atracción turística más. Sus propugnadores más entusiastas se animaban a decir que esos locales eran una suerte de "zona liberada", donde el dinero había dejado de existir, reemplazado por vales equivalentes al trabajo de quienes allí exponían sus cosas. Y hasta sostenían que ese tipo de economía constituía una variante moderna —o posmoderna— del socialismo.

Parecía una regresión histórica hacia los tiempos del medioevo tardío, cuando el mercantilismo empezaba su expansión y las ferias de trueque reunían a comerciantes, sobre todo en Francia, llegados de parajes remotos.

En verdad, tales ferias no eran una novedad latinoamericana. En la Bolivia profunda, lejana de los caminos, para tornar un ejemplo, donde concurren campesinos a quienes les resulta imposible concurrir a los mercados citadinos. En ese caso, el trueque, la ausencia del dinero, no habla del avance hacia el socialismo, sino del atraso semifeudal que sumerge a una porción enorme y desconocida de nuestra Latinoamérica capitalista. Ahora, para ver esas ferias no hacía falta viajar a la América india más soterrada, ni acudir a los libros de Henri Pirenne, para saber cómo eran las reuniones mercantiles de la Champaña en el nacimiento de los burgos, allá por los siglos XII y XIII. Ahora estaban en el centro de Buenos Aires.

Y en el centro de Buenos Aires, o en su periferia, esos centros eran mostrados también como modelos de "autogestión" y se los exhibía como una alternativa en la esfera del consumo.

Claro está que hoy, cuando hacemos referencia a aquellos sitios de trueque, nos parece hablar de un fenómeno arqueológico, cuyo sitio se asocia más con un museo que con un caso de actualidad. Pero recordemos que, apenas dos años atrás, el trueque hacía furor y se

extendía inusitadamente en el año 2002. En su momento fue objeto de diversos calificativos, se exaltaron sus supuestos atributos, se habló del trabajo del nuevo milenio, del trabajo solidario, digno, de una nueva fuente de generación de empleo. Los elogios tronaron desde las filas de EDI (Economistas de Izquierda), algunos de cuyos miembros se apresuraron a presentarlo en sociedad como un verdadero "modelo de autoabastecimiento" y de "autoorganización popular".

El fracaso tan ruidoso de aquella experiencia debería eximirnos de mayores comentarios, pero... "muerto el rey, viva el rey". En estos días, el trueque pretende ser reintroducido... bajo la forma de "microemprendimientos". El gobierno de Kirchner bate el parche sobre esa nueva estrella que brilla en su firmamento.

Una variación de esa melodía, pero con una envoltura de apariencia radicalizada, lo constituye "el mercado piquetero". El principio, sin embargo, siempre es el mismo: construir un circuito de distribución y consumo capaz de sustraerse de las leyes del mercado, de funcionar fuera de las leyes capitalistas. En otras palabras, una suerte de circulación de productos "paralela", que estaría en condiciones de desafiar al mercado y a la competencia, y de operar y desenvolverse de manera independiente.

La ilusión es la siguiente: la esfera del consumo podría superar los límites originados en la esfera de producción, inherentes a determinado modo de producir la riqueza. En el capítulo anterior, vimos el lugar que se le pretendía asignar a las cooperativas de consumo, que ofrecerían una vía de salida a las cooperativas de producción. Desmenuzamos, también, los límites insalvables de esos intentos. Un circuito comercial basado en los microemprendimientos tropieza con las mismas restricciones.

Hechas esas consideraciones, resulta instructivo detenerse en la experiencia del trueque.

Los clubes de trueque llegaron a tener un gran desarrollo luego de la crisis de diciembre de 2001. Miles de nodos —una suerte de ferias o micromercados donde tenían lugar las transacciones— pasaron a integrar la Red Global del Trueque y centenas de miles de per-

sonas concurrían diariamente a intercambiar sus productos. Esa masa fue creciendo al ritmo vertiginoso de la miseria social. En los nodos (que generalmente funcionaban en sociedades de fomento, clubes, grandes galpones o fábricas cerradas y cedidas por el municipio) uno podía encontrar desde remedios, ropa y alimentos de primera necesidad, hasta anteojos, garrafas o un auto; o pagar impuestos, como sucedía, por ejemplo, en Quilmes.

El crecimiento del trueque fue una manifestación, otra más, de la aguda descomposición económica provocada por la crisis capitalista. Sobre esto, *La Nación*, a diferencia de sus apologistas, no se hacía ninguna ilusión "autogestionaria", pues reconocía que se trata de un retroceso a épocas pre-mercantiles. Eso no le impidió, claro está, celebrar la función política que jugó el trueque: que los desocupados se arreglen como puedan "en lugar de clamar por la ayuda del Estado o de nutrir caravanas de desocupados que cortan rutas"¹.

Contra la especie muy difundida de que estábamos ante una forma "espontánea" de autoorganización, los clubes fueron alentados desde arriba, desde distintos círculos gubernamentales, en particular desde el aparato justicialista bonaerense. Los clubes del trueque cumplieron una doble función: por un lado, evitar la masiva organización de los desocupados y, por el otro, mantener alimentada la red de punteros.

Los punteros de cada barrio intimidaban, aún hoy lo hacen, a los vecinos para que no asistieran a las asambleas de las organizaciones piqueteras y les proponían su incorporación al trueque, que era, dicen, "una salida inmediata". ¿Lo era? Frente a una desocupación que no conoce límites, el trueque significa cambiar las últimas posesiones por un plato de comida pasajero, sin ganar nada para el mañana. *Clarín*² daba un ejemplo gráfico: una reciente desocupada que vende la indemnización en remeras que le dieron sus ex patrones a cambio de... zapallitos. ¿Y cuando se le terminan las remeras?

El gobierno municipal de Berazategui impulsó "en la mayoría de

¹ *La Nación*, 5 de marzo de 2002.

² *Clarín*, 3 de marzo de 2002.

las sociedades de fomento, las casas del trueque con el objetivo de impedir la organización de los desocupados y la lucha por sus reivindicaciones”³.

Que en medio del desabastecimiento provocado por las grandes patronales y la anarquía económica del capitalismo, uno pudiese adquirir de todo en la red global, revelaba el respaldo político, económico y organizativo que tiene el mercado negro en la Argentina por parte de un Estado en completa descomposición y desintegración.

Apenas pocos meses después de haber alcanzado su esplendor, la llamada “red del trueque” se derrumbó: cerró más del 40% de los “nodos” (clubes) donde se realizaban los intercambios y la cantidad de socios cayó de un millón a 500.000. La causa de esa estampida fue la hiperinflación que llevó el precio de la botella de aceite de 6 a 1.500 “créditos” (un aumento del 25.000%) o el jabón de tocador de 2 a 1.000 “créditos” (un aumento del 50.000%).

La desvalorización de los “créditos” se debió a la emisión y la falsificación indiscriminada de esa moneda, que alcanzó “en la mayoría de los nodos al 90% del circulante”⁴. La magnitud de la falsificación, tanto en los montos como en la extensión de los nodos falsificadores, ponen al descubierto una organización mafiosa de grandes dimensiones.

Guillermo Kane, dirigente del Polo Obrero de La Matanza denunció “los abusos con los créditos, cuya emisión no conoce ningún tipo de regulación y que, contra los supuestos reglamentos del trueque, son cambiados por dinero por los punteros-coordinadores”⁵. Miguel Vittone, dirigente de la Coordinadora de Desocupados de Berazategui y del Polo Obrero, fue más lejos al denunciar una “guerra de mafias” en la emisión de los “créditos” para monopolizar el negocio del trueque⁶.

El crédito (papel de cambio) variaba según el nodo; es decir, según el grupo que lo imprimía y distribuye, y también variaba su va-

lor. En algunos nodos no se aceptaban créditos de otros y la guerra mafiosa llegó a los medios de comunicación, primero los medios locales, con una profusa propaganda paga, y luego a los medios nacionales, con la declaración de guerra entre quienes querían blanquear para sí la legalidad y el respaldo del Estado provincial para “sus” créditos acumulados. Y otro sector quería aumentar su acumulación con créditos de reciente aparición.

El diario *Río Negro* dejaba constancia del mismo fenómeno: “Si algo faltaba para completar el complejo panorama del trueque en Cipolletti, era la emisión de un nuevo crédito. Ayer el descontrol fue total. Desde el lunes se vendieron a precio promocional 70 créditos a 3 pesos, un valor muy inferior al que se consiguen los créditos norpatagónicos y los nacionales”⁷.

La existencia de “dos monedas” causó un caos. Los locales les decían a quienes venían de otras localidades con bonos nacionales: “Si no les gusta que se vayan”. Así, como señores medievales, ponían una barrera arancelaria a los “extranjeros” y marcaban “su” mercado propio.

Alguien denunció que “unas rosquitas que con este mismo bono me las cobraban a 5 créditos en la plaza del barrio, ahora me las cobran a 15”, poniendo en evidencia una maniobra de inflación y carestía.

Los emisores del nuevo bono alegaban que “los otros se llevaban la plata de la venta y listo... nosotros vamos a adquirir mercaderías para ofrecerlas al costo...”, en una franca política de “dumping”.

El derrumbe puso fin a un mito, difundido por los punteros y respaldado por los “economistas de izquierda”. La llamada Red Global del Trueque no era más que un circuito mercantil, sustentado en una moneda-basura (el “crédito”); como era una economía monetaria, obligadamente debía reproducir todas las características y las lacras de la economía mercantil: la inflación (desvalorización de la moneda), el arbitraje entre créditos, pesos y los distintos bonos, y hasta la aparición de verdaderos “banqueros” y prestamistas en créditos. Esa circulación, naturalmente, producía “una ganancia mer-

³Idem anterior, destacado nuestro.

⁴*Clarín*, 17 de octubre de 2002.

⁵*Prensa Obrera*, 11 de abril de 2002.

⁶*Prensa Obrera*, 14 de marzo de 2002.

⁷*Río Negro*, 15 de marzo de 2002.

cantil que es monopolizada por los organizadores de las redes”⁸.

Esa hiperinflación era una gigantesca confiscación de los trabajadores que participaban en el trueque. Esa confiscación se manifestó de dos maneras:

La primera estuvo dada por los precios exorbitantes de los artículos de primera necesidad, de origen industrial, que ingresaban en el circuito del trueque de la mano de mayoristas y grandes comerciantes. “La pretensión de que el pueblo puede encontrar una salida a la crisis empeñando sus bienes o vendiendo alguna comida casera es ridícula. Porque ni los trabajadores expulsados de las fábricas ni los participantes de las redes de trueque tienen acceso a las grandes fábricas ni a las hectáreas de los terratenientes. Sólo tienen para ofrecer en el trueque lo que compran en los mercados, que remarcan sus precios al ritmo de la inflación y el desabastecimiento. *Esto, claro, da lugar a acciones especulativas comprando al por mayor productos que escasean en el trueque y colocándolos a precios abusivos*”⁹.

La segunda era la sobreexplotación del trabajo. “Es brutal el nivel de explotación de la fuerza de trabajo que se ofrece en los nodos, desde profesionales (dentistas, médicos, maestros mayor de obras), hasta obreros (de jardinería, plomeros, mecánicos, etc.) cuya *entrada* promedia los 200 créditos mensuales, cuando un kilo de harina vale 3 créditos, un atado de cigarrillos truchos 5 créditos, y una garrapa hasta 30 créditos”¹⁰.

La prensa comercial, aunque con varios meses de demora, recogió el dato: Roberto Banegas, herrero de obra, cuenta que “me pidieron una escalera y se tarda entre 7 y 8 días en hacerla, con ayuda. Por eso pedí 1.100 créditos. El comprador me dijo que intercambiaba vino y jabón en polvo (...) pero el pack de vino se cobra a 450 créditos y el kilo de jabón en polvo suelto a 115 créditos”¹¹. Lo confirma Marta Boskovic, profesora universitaria: “la hora y media (de clase) la estaba cobrando 15 créditos (...) pero la botella de aceite de 1,5 li-

tros cuesta 2.500 créditos”¹². Haciendo los cálculos, resulta que la jornada de trabajo del herrero equivale a 1/3 de pack de vino o a 1.300 gramos de jabón en polvo; la hora de clase de la profesora universitaria equivale a ¡6 centímetros cúbicos de aceite! En ambos casos, la fuerza de trabajo se cotiza ¡a menos de 10 centavos la hora! Un verdadero récord de superexplotación, más allá de lo que hayan soñado las patronales más negreras del planeta en todas las épocas.

Red de trueque Pyme

La novedad fue difundida por el *Cronista Comercial*¹³, quien advirtió que el fenómeno podía extenderse rápidamente entre miles de pequeñas y medianas empresas: el pago de salarios con “créditos” de trueque.

La novedad, ideada por empresarios de San Nicolás, fue bautizada “red de trueque Pyme” y pretendió funcionar de la siguiente manera: la red otorgaba a alguna empresa un préstamo en “moneda social” (sic), es decir en “créditos” de trueque, y aquella los utilizaba para comprar insumos y pagar salarios. La vendedora de los insumos, a su vez, utilizaría los “créditos” para pagar los salarios de sus propios trabajadores. La empresa que recibía el préstamo lo devolvía con su producción, que la “red trueque Pyme” volcaba entonces a los “nodos” de los clubes de trueque.

Sus inventores decían que “servirá para salvar empresas con problemas financieros”, ya que estos préstamos “no contemplan intereses ni gastos”¹⁴, algo que por supuesto era falso: los intereses están, por así decirlo, contenidos en los precios, ya que “los valores pactados los ponen las partes”¹⁵. Como la red ejercía un monopolio comprador sobre las Pymes “con problemas financieros”, podía establecer los precios de compra a voluntad... los que luego eran trasladados a los consumidores.

⁸Prensa Obrera, 11 de abril de 2002.

⁹Idem.

¹⁰Prensa Obrera, 11 de marzo de 2002.

¹¹Ambito Financiero, 6 de setiembre de 2002.

¹²Idem.

¹³El Cronista Comercial, 21 de marzo de 2002.

¹⁴Idem.

¹⁵Idem.

Ese sencillo mecanismo —de expropiación a la vez de los consumidores y de las Pymes financieramente ahogadas— desmentía todos los versos que circulaban acerca del trueque, como si fuera una nueva “auto-organización” de los consumidores. Es que, para que la red Pyme pudiera otorgar créditos en “moneda social”, previamente se tenía que haber producido un proceso de acumulación de esa “moneda” en manos de los “banqueros del trueque”. Es decir que la circulación en el circuito del trueque, como no podía ser de otra manera, producía una ganancia mercantil monopolizada por los organizadores de las “redes”.

Para los trabajadores, el cobro de los salarios en “créditos” era la confiscación suprema, ya que se trataba de “dinero” sin ningún respaldo y que sólo podía ser gastado en los “nodos”... abastecidos por los “banqueros”. ¿Con qué pagarían esos trabajadores el colectivo o la luz?

Si el trueque significa, desde el punto de vista de la circulación económica, un retroceso a períodos pre-capitalistas, el pago de los salarios en “créditos” hacía retroceder a los trabajadores a las épocas de La Forestal, cuando los sueldos eran pagados con vales que había que gastar en las pulperías de los propios patrones.

¿Mercado piquetero?

No habían terminado de asimilar el fracaso del trueque (mercado negro) cuando comenzó a batirse el parche sobre las supuestas bondades de la “economía piquetera”, saludando a millones de hambrientos que sobreviven cocinando a leña. Se hace de la economía paralela (primitiva) un fetiche, lo cual viene como anillo al dedo para no reconocer la crisis terminal del régimen social que parió semejante catástrofe.

Las limitaciones del trueque, según esta óptica, estarían originadas en la falta de productos básicos. La solución residiría, pues, en asegurar ese suministro. Para ello, qué mejor que el abastecimiento proveniente de las “iniciativas y el trabajo de los propios afectados”. Esa integración permitiría cerrar la brecha entre producción y

consumo, y sentar las bases de una economía —utilizando la palabrita de moda— “sustentable”. Así entramos en el reino de los microemprendimientos (que deberían ser ejecutados por las organizaciones piqueteras a la sombra del sistema, sin perturbar la digestión de los capitalistas ni interferir en sus negocios). No por casualidad, esa línea es alentada por el Banco Mundial, para el cual los microemprendimientos son un mal menor por referencia a la acción directa contra el capital, las ocupaciones de fábricas y la gestión obrera. Esto sin hablar de las oportunidades que abre —créditos, subsidios— ONG mediante, para cooptar, integrar y someter políticamente al Estado a las organizaciones populares que impulsan la lucha de los trabajadores.

Microemprendimientos: ¿hacia el futuro o al pasado?

La proliferación de microemprendimientos es un indicador del retroceso, no del progreso. Es un retorno al pasado, a la Edad Media; significa volver a una economía precapitalista en un momento histórico, donde el desarrollo de la informática, la robótica y la automatización de la industria han creado las premisas materiales para la producción en gran escala, para satisfacer las necesidades humanas de todo el orbe y liberar al hombre del trabajo manual, permitiendo reducir la jornada de trabajo a una mínima expresión.

Hasta un niño reconoce que el escenario de millones de hambrientos confinados al trabajo individual (elaboración casera) y a la competencia, no es un pasaporte a una mejora social sino al embrutecimiento familiar y a una mayor explotación de la familia, por carecer de espacios, buena luz, herramientas y máquinas que sí poseen las fábricas.

No deja de ser muy instructivo que Kirchner se manifieste dispuesto a apoyar nuevos microemprendimientos, pero niegue esa ayuda a las cooperativas o gestiones obreras como Brukman, Zanón, Supermercados Tigre; y está dispuesto a hacerlo por medio de fondos fiduciarios que hipotecarán esos emprendimientos, cuyo manejo quedará reservado al puntero. En otras palabras: la plata se va a

esfumarse antes de lo que cante un gallo. Luego de machacar tanto sobre la "transparencia del gasto social", estamos a las puertas de una nueva corruptela.

Así como la falta de explotación de la fuerza del trabajo en el trueque es pura fantasía, del mismo modo en los microemprendimientos y también en los comedores existe una sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Estas iniciativas deben ser concebidas como centros de organización política y de lucha contra el Estado, reclamando la provisión necesaria de alimentos, el salario igual a la canasta familiar para quienes trabajan en comedores y los beneficios sociales conquistados en décadas de lucha de la clase obrera: estabilidad, obra social, salario familiar, vacaciones, jubilación, entre tantas otras.

Todos esos ensayos "autogestionarios" contrastan por el vértice con las acciones de las organizaciones obreras y populares contra los monopolios, como la imposición de la contratación de desocupados en las petroleras por las organizaciones piqueteras del Norte de Salta, o la expropiación de medicamentos que un laboratorio se negaba a entregar a un hospital público por parte de la Asamblea Popular de Paternal, para no hablar de las centenares de empresas vaciadas, ocupadas y puestas a funcionar por sus trabajadores.

Los elementos para resolver las necesidades de nuestro pueblo se encuentran en la expropiación bajo control obrero de los grandes pulpos. No hay salidas en los supuestos "circuitos paralelos de distribución", mientras las grandes corporaciones capitalistas tengan los grandes medios de producción en sus manos.

La salida, como lo señalaron miles de trabajadores y desocupados en la Asamblea Nacional Piquetera y en la Asamblea Popular Nacional, pasa por la expropiación de los grandes pulpos y las privatizadas, y la puesta en marcha bajo el control de los trabajadores de toda empresa que cierre o despida.

Los grandes cordones industriales y agrícola-ganaderos del país podrán producir entonces para satisfacer las verdaderas necesidades del pueblo, liberados de las restricciones que les impone el lucro capitalista.

El tercer sector

La creación y fomento de una "economía social y solidaria" tiene la impronta y el sello del imperialismo. Ya dijimos cómo esta línea es estimulada por el Banco Mundial. Intelectuales de primer nivel del *establishment* norteamericano han incursionado en el tema y procurado darle sustento ideológico a esa supuesta "nueva economía", bautizada con el nombre de "tercer sector". Es importante advertir que el mundo de los microemprendimientos y la autogestión, usualmente asociado con la izquierda y el progresismo, tiene su matriz y fuente de inspiración en las usinas ideológicas de las metrópolis imperialistas. Uno de los exponentes más conocidos de esta orientación es Jeremy Rifkin, un economista reconocido en los Estados Unidos. Entre Rifkin y Clinton hubo una gran afinidad, hasta tal punto que se identifica al economista, que integró el cuerpo de asesores del presidente, como el inspirador de la configuración de la política pública de la administración demócrata.

Precedido por esa trayectoria, su obra *El fin del trabajo* es, holgadamente, la que mayor impacto ha provocado en la opinión pública norteamericana y mundial.

El declinante papel de los sectores público y privado en la creación y continuidad del empleo, podría ser reemplazado, según Rifkin, por una tercera fuerza: "A pesar de que en la era moderna se ha prestado más atención a los sectores público y privado, existe un tercer sector en la vida americana que ha resultado de significativa importancia en la construcción de la nación y que ahora ofrece una posibilidad distinta para reformar el contrato social en el siglo XXI. Este tercer sector, conocido como sector de voluntarios, hasta el momento fue colocado en los márgenes de la vida pública, apartado por el creciente dominio del mercado y de las esferas de gobierno, pero ahora, que las otras dos bases económicas dejan de tener tanta importancia, al menos en cuanto al número de horas que se les dedica, la posibilidad de resucitar y transformar el tercer sector y convertirlo en vehículo para la creación de una interesante era posmercado debería ser explorada".

“El tercer sector —destaca Rifkin— ya se ha abierto paso en la sociedad. Las actividades de la comunidad abarcan una amplia gama de los servicios sociales a la asistencia sanitaria, la educación e investigación, las artes, la religión y la abogacía. Mientras el sector empresarial representa hasta el 80% de la actividad económica en los Estados Unidos y el sector público contabiliza un 14% adicional del producto interno bruto... el tercer sector contribuye en la actualidad, con algo más del 6% de la economía y es responsable del 9% del empleo total nacional”.

La amplitud de ese tercer sector puede medirse, añade Rifkin, en la existencia de “1,4 millón de organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones cuyo objetivo prioritario es dar servicio o defender una causa”. El crecimiento de dichas organizaciones, en los últimos 25 años “ha sido realmente extraordinario”.

Aunque el autor no lo tenga en cuenta, la extensión del tercer sector es una consecuencia directa de la descomposición capitalista. El Estado procura desembarazarse de los servicios y funciones sociales. La tendencia es a recortar gastos en salud, educación pública, seguridad social y seguro al parado. Esto, que es bien conocido en nuestro país, es una tendencia de alcance mundial.

La política de ajuste apunta a descargar en las masas la bancarrota e hipotecamiento del Estado provocados por el masivo apoyo y salvataje que se le ha otorgado a la clase capitalista y permitir, todavía en una escala mayor, que el presupuesto se concentre exclusivamente en dichas operaciones. Por otro lado, el repliegue del Estado permite crear nuevas oportunidades para la iniciativa privada, para la incursión del capital en nuevas esferas y su transformación en una actividad lucrativa.

Rifkin llama a institucionalizar esa tendencia con su aliento a que “las organizaciones comunitarias y las asociaciones sin ánimo de lucro” asuman “mayores responsabilidades para la atención de las necesidades tradicionalmente atendidas por el gobierno” y “formar millones de personas que podrían trabajar directamente en sus vecindarios para ayudar a los demás”.

En primer lugar —señala Rifkin— “deberán establecerse las ade-

cuadas iniciativas para animar a aquéllos que disponen de trabajo en la economía de mercado, pero que trabajan un número restringido de horas, para dedicar una parte de su tiempo a actividades del tercer sector. En segundo lugar, deberá ser promulgada la legislación adecuada para proporcionar a millones de americanos desempleados permanentes un trabajo útil en servicios comunitarios del tercer sector, con la finalidad de ayudar a la reconstrucción de sus propios vecindarios e infraestructura locales”. Para el primer tipo de voluntarios, el autor propone lo que denomina un “salario fantasma”, que consistiría en establecer deducción impositiva a cambio de las “horas donadas”. Para el segundo, avanzar en “la posibilidad de establecer salarios sociales”.

Como puede verse, Rifkin propone el establecimiento en los Estados Unidos de una suerte de planes Trabajar, muy parecidos a los que Menem, Duhalde y ahora Kirchner han puesto en práctica en nuestro país con sueldos de 150 pesos, con contratos precarios, sin cobertura médica ni social ni por accidentes de trabajo.

Los planes del gobierno federal o de los Estados, anunciados o puestos en práctica en esa dirección despertaron, naturalmente, el rechazo de las organizaciones sindicales norteamericanas, particularmente de las que nuclean a los empleados públicos. La Afsome (American Federation of State, County and Municipal Employees) denunció que la tentativa del presidente Clinton de crear entre 1,2 a 2 millones de ese tipo de planes provocaría el desplazamiento de cientos de miles de trabajadores.

Existe una larga tradición de lucha del movimiento obrero norteamericano contra situaciones similares. En el estado de Carolina del Norte, los sindicatos de profesores se opusieron a las actividades de formación de tutores voluntarios, preocupados por la posibilidad cierta de que se redujera el número de profesores pagos. La ciudad de Nueva York recuerda la historia de los voluntarios que intentaban limpiar una estación de subterráneo sucia. El Transport Workers Union ordenó el cese inmediato de esa acción: el TWU dijo que si los miembros del sindicato no hacían aquella tarea, no la haría nadie más.

Pero la propuesta de Rifkin va más lejos, pues presenta este mecanismo como "alternativa a los pagos y beneficios de la asistencia pública, para los desempleados permanentes dispuestos a ser reeducados y empleados en el tercer sector". Esa propuesta empalma con la tendencia existente en los países industrializados a limitar o suprimir directamente el seguro al parado. Con el cínico argumento de elevar la "autoestima" y la "moral" del trabajador desocupado dependiente de la "caridad" y la "beneficencia", las reformas apuntan a introducir una "contraprestación".

Mientras en la Argentina los planes Trabajar son la pantalla para no conceder el seguro, en el caso de los países industrializados, donde éste ya existe, son un pretexto para liquidarlo.

La revisión del sistema de bienestar social, que ya se viene ensayando en diversos Estados "fijaría un plazo de dos años a los beneficios derivados de la asistencia social, después de los cuales el afectado se vería obligado a encontrar empleo o realizar algún tipo de trabajo comunitario" e incluiría, en el caso de encontrar empleo "un plan para fomentar el trabajo mediante la asignación de complementos cuando el trabajo realizado tenga una retribución menor que la asignación por la asistencia pública".

El seguro al parado y el pago a cambio de una contraprestación son dos términos diametralmente antagónicos. Mientras el primero coloca un freno a la competencia entre los obreros y a la depreciación de los salarios, el segundo exacerba esa competencia e implica una rebaja salarial al extender la disponibilidad, por parte de las patronales, de mano obra barata y prácticamente gratuita, si tenemos presente que el trabajador contratado pasaría a ser financiado por el Estado. Ni hablar de sus consecuencias en términos de empleo al promover la sustitución de mano de obra ocupada por trabajadores más baratos y precarios.

¿Qué propone Rifkin para financiar esa transición hacia el tercer sector?

Por un lado, conseguir "fondos adicionales recortando los innecesarios programas de defensa". Pero, si no fuera por los gastos de defensa, la economía norteamericana no habría podido mantener su

desempeño, comprometiendo seriamente todos los índices de recuperación y, naturalmente, de empleo. Son esas razones económicas, no militares, la que explican la resistencia a la baja del presupuesto militar. Rifkin se ve obligado a reconocer que los gastos apenas han retrocedido un 10%, comparados con los de la guerra fría.

La forma más equitativa y supuestamente más óptima de obtener los fondos necesarios podría provenir de la aplicación del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Es decir, todo el supuesto salvataje y reconversión recaería sobre las víctimas de la crisis, quienes deberían sostener con sus bolsillos la aplicación de ese nuevo impuesto al consumo.

A modo de contrapartida, Rifkin no sólo desecha tasas mayores sobre las rentas (es decir, sobre los beneficios capitalistas), sino que es partidario de ampliarles a éstos sus deducciones fiscales en función de las donaciones que realicen para fomentar los "emprendimientos sociales".

El "tercer sector" no es una salida y la salida que se construya alrededor de él constituye una quimera. En vez de poner fin al desempleo, conduce a la inseguridad y a una mayor precariedad de la mano de obra activa. Y no podía ser de otra forma. El "tercer sector" no encarna un orden económico superior como, por ejemplo, la industria —que llegó de la mano del capitalismo— respecto de la agricultura. La proliferación del "tercer sector" no es una expresión del progreso sino de las trabas para que éste se abra paso. No es un fenómeno vital sino un subproducto del parasitismo capitalista.

Luego del predominio alcanzado por la producción en gran escala, el imponente aumento de la productividad del trabajo, la concentración de los recursos, el carácter social de la producción, luego de todo eso, es una impostura presentar como un nuevo capítulo en la historia de la humanidad el reino de los microemprendimientos, las iniciativas locales y vecinales, caracterizadas por su baja productividad y su orfandad de recursos.

El mayor desatino consiste en exhibir al tercer sector como el comienzo de una "nueva era" de armonía, lazos de solidaridad, cooperación y camaradería. Peor aún, cuando Rifkin nos dice que ese nue-

vo mundo coexistirá pacíficamente con el anterior.

En una economía nacional y mundial dominada por el capital, es imposible sustraerse a sus leyes. El llamado tercer sector es un rehén de la corporación capitalista y debe girar alrededor de ésta (*tercerización*, subcontrataciones) o no tiene otro remedio que desaparecer. El "tercer sector" no promete el reino de la abundancia sino el de la miseria, depositario de los despojos y migajas del sector privado, y víctima y prisionero de la explotación que éste ejerza. En estas condiciones, lo único que puede florecer es la frustración, la postración económica y social, la falta de perspectivas y de futuro para las nuevas generaciones.

Organizaciones no gubernamentales

Rifkin le adjudica, además, otro alcance al "tercer sector" al considerarlo *"una nueva voz de la democracia"* que emerge.

El nuevo interés en el tercer sector —indica— corre paralelo *"a la expansión, a nivel mundial, de los movimientos democráticos"*. En particular, Rifkin destaca su influencia en las antiguas naciones gobernadas por el estalinismo: "Las ONG han jugado un papel decisivo en la caída de la antigua Unión Soviética y de sus antiguos satélites en la Europa comunista y, en la actualidad, figuran como elementos fundamentales en la reconstrucción de esa región. En 1988, más de 40.000 organizaciones no gubernamentales ilegales estaban en funcionamiento en la Unión Soviética. Muchas de las organizaciones de voluntarios en Rusia y en la Europa del Este fueron alimentadas por las autoridades de la Iglesia que, además, les garantizaba un refugio para sus actividades".

Según el autor "estos incipientes grupos democráticos demostraron ser mucho más efectivos para derrocar los regímenes autoritarios de Europa del Este y de la Unión Soviética que los grupos tradicionales de resistencia basados en la confrontación de ideologías políticas apoyadas por campañas militares".

El historiador, especializado en la Unión Soviética, Frederick Starr, destaca que "la extraordinaria efervescencia de ONG de todo

tipo fue... el aspecto más distintivo de las revoluciones de 1989".

Las ONG tendrán un papel determinante en el proceso actual de restauración capitalista. "Con el sector privado pujando por hacer su aparición y las reformas del sector público en etapas claramente iniciales, el tercer sector juega un papel único en las políticas de la región en vistas al éxito de los esfuerzos de reforma en los antiguos países".

No es menos significativo el papel de las ONG en los países llamados "periféricos". El tercer sector ha experimentado su mayor crecimiento en Asia, donde existen más de 20.000 organizaciones de voluntarios.

"América Latina, al igual que Asia, ha sido testigo de una explosión de organizaciones de voluntarios en los últimos 25 años. Gran parte del ímpetu del tercer sector ha sido consecuencia del apoyo prestado por la Iglesia Católica... Tan sólo en Brasil, se han creado más de 100.000 comunidades de base, con más de tres millones de miembros".

La extensión del fenómeno tiene su base en la creciente incapacidad de los regímenes políticos de las distintas naciones del globo para hacer frente a los estragos y a las tendencias a la disolución que provoca y alimenta la gigantesca crisis económica mundial. "El meteórico crecimiento es atribuible, en parte, a la creciente necesidad de llenar el vacío político dejado por la retirada, tanto del sector privado como del sector público, de los diferentes asuntos relativos a las comunidades locales".

En ese mismo sentido, Miklos Marschall, antiguo alcalde de Budapest y primer director ejecutivo de la nueva organización internacional Civicus, que reúne las ONG, destaca que "el vacío de poder es llenado a través de la creación de pequeñas organizaciones no gubernamentales y por grupos de comunidad en docenas de países".

Es útil observar la creciente atención que se le otorga a esas organizaciones desde las metrópolis imperialistas —sin omitir al Vaticano—, cuyos representantes, tanto del mundo político como empresario, procuran aumentar sus vínculos e influencia sobre ellas. Basta tener presente la experiencia del Este para advertir las grandes

ventajas que eso otorga a los Estados y grupos económicos que lo promueven.

Un vínculo directo con las ONG permite al imperialismo pasar por encima de los gobiernos, ejercer un contrapeso y una mayor presión sobre éste y, en esa medida, poner más condiciones aún a su desempeño. Estamos, por tanto, en presencia de una incalculable arma de infiltración y colonización en todos los terrenos.

Una de las vías más importantes para el progreso en esa dirección está dada por los fondos y créditos que entregan corporaciones y gobiernos a las ONG del "tercer mundo", con el propósito de crear sobre ellas una tutela y un padrinazgo ineludibles.

Esto se refleja "en el sutil cambio en el modo que las ayudas internacionales y los fondos de desarrollo son canalizados. Aunque una parte de estas ayudas todavía fluye de gobierno a gobierno, un creciente volumen de fondos públicos son dirigidos directamente desde los gobiernos de los países del hemisferio norte directamente hacia las ONG en los países menos favorecidos".

En nuestro país es fácil darse cuenta a dónde apunta la campaña contra la corrupción en la distribución de los planes sociales. En nombre de la transparencia, se pretende entregar el manejo de los planes sociales a un conjunto de ONG, empezando por Cáritas y siguiendo por otras instituciones que reciben generosos subsidios del exterior. No por casualidad esa exigencia tiene a la cabeza al Banco Mundial, lo cual se inscribe en la cruzada —como ha señalado el ministro del Interior, Aníbal Fernández— por hacer desaparecer al movimiento piquetero. Sin perjuicio de ello, se busca, secundariamente, restarle poder al aparato político del Estado nacional y a sus partidos, y colocar a todos ellos bajo la tutela directa del imperialismo.

Estadización burguesa y burocrática

En determinado momento, el gobierno burgués del MNR boliviano estatizó la minería, las líneas aéreas y las grandes empresas de servicios de su país, con lo cual dejó en manos del Estado la parte sustancial de la economía. Lo propio ocurrió alguna vez en el Egipto de Nasser y hasta en la Libia de Khadafi. En este punto, conviene recordar un principio teórico básico: el Estado es el "capitalista colectivo ideal", y en ciertas circunstancias debe tomar en sus manos las riendas de la economía para salvar al régimen capitalista de su hundimiento completo.

Sin embargo, a menudo se escucha hacer un fetiche de la "estadización", convertida por algunos en sinónimo de socialismo. Por lo general, son los mismos que hacen el fetiche de la autogestión. Ese culto, ese fetiche, pone de relieve una gran confusión respecto del carácter del Estado, que, otra vez, queda exhibido en forma invertida, idealizada, como si fuera el representante de "todo el pueblo" y no de las clases dominantes.

Que los medios de producción estén en manos del Estado burgués no significa que estén controlados por el pueblo. Por el contrario, están sometidos a la arbitrariedad de sus explotadores por medio de la maquinaria estatal.

A diferencia de los apologistas de la estadización, esto no se le escapaba a los fundadores del marxismo: "Las fuerzas productivas no pierden su condición de capital al convertirse... en propiedad del Estado... El Estado moderno no es más que una organización creada por la sociedad burguesa, para defender las condiciones exteriores generales del modo capitalista de producción, contra los atentados tanto de los obreros como de los capitalistas aislados. El Estado moderno (cualquiera sea su forma) es una máquina esencialmente capitalista. Es el Estado de los capitalistas. El capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuman en propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo obreros asalariados proletarios. La relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza..."¹

¹Del *Socialismo utópico al socialismo científico*, Federico Engels, pág. 453. Marx y Engels, Obras Escogidas.

Una empresa estatal constituye una forma de propiedad burguesa. El Estado reproduce las relaciones sociales de explotación y hasta lo hace en forma más exacerbada, por su condición de representante del conjunto de la clase patronal. El aparato del Estado es, en muchos casos, la avanzada contra las conquistas de los trabajadores. "La relación capitalista —añade Engels en el mismo texto— lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza...". De la misma manera que asistimos al vaciamiento de las empresas privadas, enfrentamos el vaciamiento de escuelas, hospitales, centros culturales y asistenciales. El presupuesto estatal es una fuente de enriquecimiento para el capital privado.

Esto no significa colocar en la misma bolsa a todas las estatizaciones. Las estatizaciones burguesas en los países atrasados son fenómenos relativamente progresistas. Revisten un carácter progresivo porque son medidas que recortan y ponen un freno a la dominación imperialista y, en esa medida, constituyen parcialmente una lucha contra el imperialismo. ¿Y por qué sólo parcial y relativamente? Porque es burguesa, porque no elimina la explotación, porque la burguesía va a terminar capitulando ante el imperialismo, porque el imperialismo va a encontrar la forma de poner a su servicio esas nacionalizaciones.

Es necesario denunciar las limitaciones de las nacionalizaciones burguesas y defenderlas, al mismo tiempo, de los ataques del capital imperialista. Así como establecimos una relación entre las estatizaciones burguesas y la dominación imperialista en términos concretos, debemos establecer una relación entre esas mismas estatizaciones y la gestión obrera. Cuando nos desplazamos a ese ámbito, los términos se invierten. Así como una nacionalización burguesa es una medida relativamente progresista frente al imperialismo, es también una medida absolutamente reaccionaria frente a la gestión obrera. Porque cuando las fábricas se ocupan y se colocan bajo gestión obrera, se abre la perspectiva de poder del proletariado. Y la intervención del Estado en una fábrica bajo gestión obrera significa la intervención del Estado para reconstituir la dominación del capital por medios estatales. Es necesario defender la expropiación sin pago de las empresas ocupadas por los trabajadores. Expropiación que debe decretar el Estado y los trabajadores han de oponerse a la transformación de esa empresa ocupada en

una empresa estatal más del aparato del Estado capitalista y, en cambio, defender la gestión obrera independiente de la fábrica ocupada.

Una empresa estatizada no representa, por definición, un escalón superior de organización independiente de la clase obrera frente al capital respecto de una cooperativa o cualquiera otra asociación solidaria que adopten los trabajadores. La estatización puede llegar a ser un fenómeno regresivo respecto de estas experiencias y hasta tener una finalidad reaccionaria, si es el medio para disciplinar a los trabajadores y destruir su organización independiente.

Los atributos y cualidades de un emprendimiento obrero no pueden medirse por su forma jurídica, sino por su contenido social y por la perspectiva política que defiende.

El enfrentamiento entre cooperativas (en el marco burgués) y empresas estatales (burguesas) constituye un falso debate. La III y la IV internacionales reivindicaron, como instrumentos de lucha contra el capital, tanto a las cooperativas, como a la administración obrera de la industria nacionalizada, siempre y cuando se desarrollaran como formas de la organización y la acción independiente de la clase obrera.

Lejos de ser desechado, el movimiento cooperativo fue valorado por constituir un importante terreno de lucha, de confrontación y organización de los trabajadores. Dos congresos de la III Internacional abordaron el tema y publicaron sendas tesis sobre Cooperativas y Cooperación (aprobadas en el 3° y 4° congresos, respectivamente).

"Durante los últimos años que precedieron a la guerra mundial, y aún más durante esta guerra, la cooperación adquirió en casi todos los países un fuerte impulso y atrajo a sus filas amplias masas de obreros y campesinos".

Esa constatación permitía a la Internacional disputar el terreno y la dirección a las organizaciones colaboracionistas con el régimen, que tenían influencia en el movimiento cooperativo; en primer lugar, la socialdemocracia.

"Todas las circunstancias obligan a los comunistas a dedicarse seriamente a apartar a los social-patriotas del campo cooperativo para transformarlo de un instrumento al servicio de los lacayos de la burguesía, en un instrumento del proletariado revolucionario".

A partir de tales consideraciones, “se invita insistentemente a todos los partidos comunistas, a todos los grupos y organizaciones a abordar su actividad en la cooperación”. Igualmente solicita a los órganos de la prensa que asignen en sus columnas un lugar adecuado a las cuestiones cooperativas.

Completando esta tesis, el 4° Congreso de la Internacional destacaba: “La necesidad urgente de que todos los partidos comunistas pongan en práctica la resolución que impulse a todos los miembros del partido a ser miembros de las cooperativas y a defender en ellas la línea de conducta comunista. En cada organización cooperativa, los cooperadores comunistas deben formar una célula, ya sea legal o clandestina. Todas las células deben ser agrupadas en federaciones departamentales y nacionales bajo la dirección de la Sección Cooperativa del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista”.

Estas células tienen por objetivo “establecer la vinculación con la masa de los obreros cooperadores, criticar en su medio no sólo los principios sino sobre todo la acción de la antigua cooperación y organizar a todas las masas descontentas con vistas a crear en la cooperación un frente único de lucha contra el capital y el Estado capitalista”.

Esta iniciativa apuntaba sobre todo a evitar el aislamiento del movimiento obrero comunista.

“Pero los cooperadores comunistas no deben tratar de aislar a los cooperadores revolucionarios o que pertenecen a la oposición, pues esta forma de proceder provocaría no sólo el desgaste de sus fuerzas, sino también el debilitamiento del contacto de los cooperadores revolucionarios con las amplias masas obreras”.

Como se ve, no existe tal oposición de principio a las cooperativas. Los mal llamadas “principistas”, además de expresar un prejuicio infundado, terminan haciendo un mito, pero... de la propiedad estatal.

“Pedimos expropiación sin cargo, y a partir de ahí, que la fábrica esté al servicio de la comunidad. Nosotros queremos que no seamos 270 como somos hoy, sino ser 600 trabajadores acá, porque es una planta que está hecha para 600 trabajadores, está hecha para producir millones de metros cuadrados, se tiene que hacer cargo la provincia, o sea el Estado se tiene que hacer cargo, tenemos que ser 600 tra-

bajadores y las ganancias de esta fábrica tienen que ser volcadas a la comunidad, hospitales, escuelas, viviendas”².

“Nosotros no queremos que se nos done nada, que no se confunda, que sea el Estado el dueño de la fábrica, controlada por los trabajadores al servicio de la comunidad (...). Zanón se vio beneficiada durante 20 años de la provincia. Le robó toda la tierra a los mapuches... bueno, queremos que eso se devuelva... a los pueblos mapuches, que se les devuelva lo que se les robó... Zanón se llevó millones de dólares, por eso hoy queremos que se devuelva a la comunidad lo que se le robó” (entrevista ex Zanón, cerámica y porcelanato)³.

Constituye un embellecimiento colosal del Estado capitalista señalar que éste garantizaría una distribución del excedente que se produzca, en función de las necesidades sociales, en oposición, según esta óptica, a la cooperativa que privilegiaría el uso de ese excedente en favor solamente de sus asociados. No hay que ser muy avezado en la materia para darse cuenta de que estamos frente a un esquema construido artificialmente, divorciado de la realidad. Se hace esta afirmación, cuando el Estado es el que viene usando ese excedente para pagar la deuda externa, entregar subsidios a los bancos, a los exportadores y a las privatizadas, y cuando no existe ese excedente lo crea a través de rebajas salariales y recortes en la salud y educación. Es decir, el uso del excedente —por medio de una acción compulsiva y despótica— en el sentido inverso al que lo indican los apologistas de la propiedad estatal.

Una cooperativa dirigida por una dirección clasista, en cambio, podría cumplir un rol infinitamente más progresivo con ese excedente, incluso constituir un fondo de ayuda destinado a otras fábricas. Ese fondo cumpliría no sólo una función económica —sosteniendo y dando apoyo a los emprendimientos obreros que lo necesiten—, sino también política, permitiendo construir una suerte de fondo de huelga o de lucha dirigido a impulsar el movimiento de ocupaciones y de movilizaciones.

²Entrevista ex Zanón, cerámica y porcelanato. *Fábricas y empresas recuperadas*. Centro Cultural de la Cooperación, Capítulo 4, pág. 94.

³Idem anterior.

ción planteados. Esta política, digamos al pasar, era alentada por la III y la IV Internacional.

Otro mito es el supuesto de que la incorporación de una fábrica a la órbita estatal le permitiría a ésta sustraerse de la competencia. No ocurriría lo mismo, según tal criterio, con las cooperativas, que alentarían una competencia ruinosa.

*“Que la ganancia de la empresa se utilice para todos, pero controlada por ellos, nosotros no decimos cooperativa, porque sería entrar en el sistema nuevamente, si nos ponemos en cooperativa; no te digo que vamos a aplastar a las cerámicas de Neuquén, pero les vamos a dar una competencia muy dura (...) no nos interesa, para nosotros lo que realmente sirve es que la ganancia neta, pura, vaya para quien realmente es, que hay un montón de gente desocupada; un montón de nenes que no pueden ir a la escuela; la salud, que hoy en día es una porquería; entonces buscamos una causa y un fin justo”*⁴

Nadie puede sustraerse a las leyes del mercado, cuyo fundamento último es la ley del valor. Una gestión obrera —sea bajo forma estatal o bajo una cooperativa— está sometida a ciertas reglas impuestas por la competencia y obligada a coexistir con ellas. Eso es inevitable. Lo importante es la orientación estratégica, la cual no debe ser sacrificada por esos compromisos comerciales (repetimos) inevitables. Si lo que se trata es de juzgar esa orientación estratégica, no hay ninguna razón para privilegiar al Estado respecto de una cooperativa.

Una empresa estatal puede conducirse como una unidad económica capitalista más y, como tal, aplicar los criterios patronales propios de cualquier empresa privada, tanto en la organización de la producción (flexibilidad laboral, regimentación) como en la comercialización del producto. Lo que va a determinar la dirección del emprendimiento obrero, cualquiera sea su naturaleza jurídica, es la dirección, el programa, la perspectiva política que promueve y en la que está inscrita.

No olvidemos que la “estatización” es un recurso de la burguesía para rescatar al capital. No se trata, sin embargo, sólo de una medida

económica: es también una intervención política del Estado capitalista. Apunta a someter a los trabajadores y a reducirlos a la condición de mano de obra obediente, como una condición necesaria para reconstituir la empresa sobre la base económica capitalista tradicional (cualquiera sea su variante), ya sea reprivatizándola o manteniéndola en la órbita del Estado. La “estatización” de Aerolíneas, los yacimientos del Turbio, los ferrocarriles, las comunicaciones o cualesquiera de las empresas quebradas conduciría a su racionalización, a descargar sus deudas en el pueblo mediante impuestazos, a poner “en valor” a las empresas para reprivatizarlas y así pasar de un ciclo a otro con eje en la estafa patronal a sus trabajadores, al Estado y a toda la población.

Un ejemplo muy ilustrativo lo ofrece el caso de Lapa.

Transcurrieron apenas días para que la promesa de Kirchner a los trabajadores de Lapa (“no los voy a entregar”) pasara definitivamente a la historia.

En medio del colapso capitalista de la actividad aerocomercial (que condujo a la quiebra de Lapa y de Dinar, con 1.600 trabajadores en la calle), le tocó estallar a Southern Winds, una empresa que cuenta a Eurnekian entre sus socios.

La empresa tenía un rojo de 30 millones de dólares, “unos dos millones de dólares mensuales, motorizados especialmente por los vuelos internacionales, que serían fuertemente deficitarios”⁵. Como alternativa, los capitalistas de SW emplazaron al gobierno a su rescate —vía préstamos blandos o subsidios para zafar su déficit— o dejaban en la calle a sus 800 empleados.

La salida de Kirchner ha sido poner en funcionamiento una “asociación” entre la todavía inexistente Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (Lafsa) —la empresa estatal que debía tomar a los trabajadores despedidos de la ex Lapa y de Dinar— y la quebrada SW.

Concretamente, el mecanismo de esta asociación “sería que el gobierno seguiría adelante con la formación de la empresa aérea estatal, que incorporaría al personal de la ex Lapa y luego lo pasaría en comisión a SW que, a su vez, sumaría cuatro aviones”⁶. Lafsa no nació para

⁴ Entrevista ex Zanón, cerámica y porcelanato. Fábricas y empresas recuperadas. Centro Cultural de la Cooperación, Capítulo 4, pág. 93.

⁵ Infobae, 15/8/2003.

⁶ Idem, 20/8/2003.

revitalizar el papel del Estado en un área estratégica, como desbordó ríos de tinta la centroizquierda vernácula, sino para rescatar a vulgares "Macris del aire", quienes, además, recibirán del gobierno *"diez millones de dólares en compensación por las pérdidas que le ocasiona a la compañía la baja de categoría a la Argentina en materia de seguridad aérea, lo que obliga a SW a volar a EEUU con tripulación y permisos contratados a la empresa islandesa Air Atlantia"*⁷.

Por partida doble, SW será rescatada y subsidiada.

¿Y los trabajadores de la ex Lapa?

Para los trabajadores que Kirchner no iba a entregar, la asociación Lafsa-SW permitiría que fueran retomados —con salarios iguales a subsidios— *"aproximadamente 400 empleados, mientras que el resto quedaría a la espera de que la flota sea ampliada hasta un total estimado de diez aviones"*⁸. Es decir, más de 400 compañeros de la ex Lapa han sido definitivamente condenados al desempleo y el resto a una brutal explotación.

El negociado de salvataje de SW viene discutiéndose de largo. En una reunión realizada en el Senado nacional, de la que participaron los capitolos de todas las empresas aerocomerciales, se abordó el tema de las *"salidas a la crisis aerocomercial"*⁹. Uno de los principales animadores de esa reunión y lobbista a favor de la patronal de SW fue el diputado y dirigente sindical, candidato de Izquierda Unida, Ariel Basteiro, quien *"alertó sobre las consecuencias de una eventual caída de SW"*¹⁰.

Basteiro, secundado por toda la burocracia del sector, propone el rescate de las empresas aéreas a manos del Estado, a costa de los trabajadores aeronáuticos. Mientras los trabajadores de la ex Lapa continúan en banda, él aún sostiene *"que la empresa estatal seguirá su curso y que, dentro de 180 días, tal como lo establece el decreto de creación, sería licitada para que pase a manos privadas"* (idem).

Entre tanto, la promesa de Kirchner de que *"no los voy a entregar"* culminó exactamente en lo contrario: el compromiso se redujo al pago de un subsidio, máximo de 350 pesos, hasta que se ponga en marcha

⁷ Idem

⁸ Idem

⁹ Idem

¹⁰ Idem

la prometida empresa estatal (Lafe).

Esta propuesta significa que para la mayoría de los ex trabajadores de Lapa, sus ingresos se reducen al 10 por ciento de lo que fue su salario. Lo que seguirán cobrando *"durante los meses en que Lafe opere, hasta su privatización total o parcial, lo que de acuerdo a un decreto debería ocurrir en un plazo máximo de seis meses"*¹¹. En cuanto a los trabajadores de Dinar, en la misma situación, no está claro si serán considerados por la "salida" presidencial. En total, se trata de 1.300 empleados sin trabajo, desde hace más de tres meses.

Basteiro impulsa también un reclamo de toda la clique patronal del rubro aéreo: la Ley de Emergencia Aerocomercial, que impone rebajas impositivas y subsidios para el rescate general de los capitalistas del sector.

El gobierno posterga la creación de la aerolínea estatal por la situación de catástrofe de la actividad aerocomercial. Todas las empresas están en situación de quiebra y todas reclaman el salvataje estatal.

No sólo están en juego los puestos de los compañeros de Lapa y de Dinar, sino los de 12.000 trabajadores. El balance de Aerolíneas Argentinas de 2002 es un burdo dibujo contable. Aerolíneas presenta una ganancia de aproximadamente 12 millones de dólares, porque evapora del balance *"708 millones de pesos, logrados como quita en el concurso de acreedores"*¹², equivalente a 230 millones de dólares en pérdidas. De considerarlas, Aerolíneas tiene quebrantos similares, en el mejor de los casos, al 50 por ciento de su facturación.

En ese contexto, el anuncio de que 2003 sería también exitoso para AA, con un superávit de 9 millones de dólares, "antes de impuestos", resultó completamente insustancial: la compañía debe al momento actual 71 millones de pesos en impuestos. La suma de las pérdidas desde 2001 es de 600 millones de dólares.

No por capricho, el representante transitorio del Estado en la reunión de accionistas que aprobó el balance de AA 2003, *"votó en contra de la aprobación del balance y de la gestión de la dirección de la empresa"*¹³.

¹¹ Clarín, 9/8/2003

¹² Infobae

¹³ Infobae, 6/8/2003

quienes, al momento de dar esa noticia, les debía dos meses de sueldo y el último aguinaldo. Los pilotos de Aerovip anunciaron un paro, en tanto que la patronal señaló que si se hacía la huelga no podría absorber las pérdidas y se declararía en quiebra.

En ese cuadro de derrumbe, una nueva compañía aérea sólo sería posible nacionalizando toda la industria.

Aerolíneas Argentinas, con 27 aviones, es la principal empresa del mercado y ha logrado eliminar a sus competidoras (tiene el 80 por ciento del mercado local). O el Estado sale a salvar a AA, o deja al país sin línea de bandera y con 8.000 trabajadores en la calle.

La "estatización" está a contramano de la etapa política nacida a partir de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. El Argentinazo, cuyas consecuencias siguen condicionando el escenario político del país, puso en tela de juicio al Estado burgués y a sus instituciones, expresado popularmente en la consigna "que se vayan todos".

Cualesquiera fueran las limitaciones que se le pudieran señalar a esa consigna popular —probablemente la más importante sea su carácter genérico o formal—, sería un contrasentido plantear que esas mismas instituciones agotadas y sus funcionarios pasen a administrar las empresas recuperadas y las concentren en sus manos. Es decir, que se vayan todos pero se "queden" con las fábricas. Nadie puede pensar seriamente que los funcionarios de turno reorganizarán la producción. Cuando tengan las manos libres la devolverán al capital privado, y aun bajo el capital estatal funcionarán abieirtamente en forma capitalista y en función de la reconstrucción del capitalismo.

En ese marco, el apoyo que le ha dado el Partido Obrero a distintas medidas de expropiación parcial, transitoria, estatal han sido apoyos relativos, formas de sostener una lucha que se inscribía en una política superior, una política de expropiación bajo gestión obrera y de unificación de las fábricas bajo gestión obrera contra el poder estatal.

La gestión obrera y la estatización, lejos de ir de la mano, representan perspectivas diferenciadas y opuestas. La Internacional Sindical Roja advierte lo peligroso de entregar la gestión obrera al Estado, llámese estatización o nacionalización.

Primero: en contraste con toda la demagogia estatizante que hoy

está de moda, aquella Internacional ponía de relieve que el traslado de los medios de producción al Estado no significaba "que se hubieran convertido en propiedad de toda la población". Por el contrario, "el control y la gestión de la producción" por el Estado burgués hacía que esos medios pasaran de "un determinado grupo de representantes de la clase dominante al control de la clase entera".

Segundo: se desenmascara a las comisiones paritarias, órganos de "cogestión", integrados por representantes de los obreros, de los empresarios y el Estado, donde se pretende hacer pasar la ficción de que éstos encarnan el interés general de la población. Esos comités paritarios son órganos de colaboración de clases y, en cuanto tales, una trampa para los trabajadores, que terminan de rehenes de la clase capitalista y pierden su independencia de clase.

Tercero: el control obrero "no es conciliable con la nacionalización burguesa ni con el pasaje de la producción al Estado burgués. Toda tentativa de tal conciliación desemboca inevitablemente en el hecho de que la burguesía, que todavía conserva en la práctica la efectiva autonomía en la gestión de la producción, descarga toda la responsabilidad de la situación sobre la clase obrera".

Del mismo modo, aún con sus grandes limitaciones, ese antagonismo entre el estatismo y la gestión obrera fue advertido por el socialismo de principios del siglo XX. A Enrique del Valle Iberlucea le corresponde el mérito de haber elaborado la propuesta de un Consejo Económico del Trabajo, al cual le dio forma de ley y cuyo propósito, según sus propias palabras, sería crear "una fuerza positiva de la clase productora puesta frente al Estado capitalista, frente al poder político de la burguesía". En todas las empresas industriales que emplearan más de diez obreros se instituirían comités obreros encargados del control de la producción. Del Valle Iberlucea se encargó de advertir de que "la forma como se entiende generalmente la estatización de las industrias es una cosa distinta de la socialización", y subrayó que esta última consiste en poner "en manos de órganos representativos de la sociedad y en elementos productores la administración de las industrias y de los servicios públicos".

Este antagonismo no pasa tampoco inadvertido, por supuesto, pa-

ra la burguesía. Juan Alemann, en un artículo que no tiene desperdicio, hizo un paralelismo entre la situación que se desenvuelve en la Argentina y la Revolución Rusa. Alemann recuerda acertadamente que *"algo semejante sucedió a escala nacional en la Unión Soviética después de la revolución de 1917"*, cuando la industria fue ocupada por sus obreros y las fábricas puestas en marcha y gestionadas directamente por ellos, y por los comités que éstos elegían. Pero dice: *"que, finalmente, Stalin se cansó de los problemas que se planteaban con las empresas gestionadas por su propio personal, y las estatizó, eliminando, incluso a menudo físicamente, a quienes las conducían"*. Desnuda así el carácter contrarrevolucionario de la estatización frente a la gestión obrera colectiva. Un auténtico régimen proletario comporta un principio de disolución del Estado, y esto se manifiesta en la gestión obrera opuesta a la estatización burguesa o burocrática. Viene al caso traer el ejemplo de la Comuna de París. Por tratarse del primer gobierno obrero de la historia, su experiencia fue decisiva para definir los lineamientos y rasgos centrales del poder obrero. Una de las resoluciones principales de la Comuna fue dejar en manos de sus obreros a las fábricas abandonadas. En un decreto de la Comuna del 16 de abril de 1871 se proclama:

"La comuna de París, considerando que gran número de fábricas han sido abandonadas por sus directores, quienes han huido para sustraerse de sus deberes de ciudadanos sin siquiera preocuparse de los intereses de los obreros; considerando que a consecuencia de esta cobardía huida numerosos trabajos importantes para la vida comunal han sido interrumpidos y que está en juego la existencia de los obreros, decreta:

Se convoca a las cámaras sindicales para designar una comisión investigadora que tendrá por tarea:

- 1. establecer una estadística de las fábricas abandonadas, así como un inventario exacto del estado en que se encuentran y del estado de las herramientas de trabajo que tengan;*
- 2. hacer un informe exponiendo las condiciones prácticas para la puesta en actividad inmediata de estas fábricas, no por los desertores que las han abandonado, sino por la asociación cooperativa de los emplea-*

dos en esta fábrica;

- 3. elaborar un plan para la formación de estas sociedades cooperativas obreras.*

Aquí tenemos retratada cabalmente la política de la clase obrera. Estamos en presencia de un Estado de nuevo tipo, pues no apunta la maquinaria burocrática, sino que delega funciones antes reservadas al Estado en manos de la propia población, de los propios trabajadores. La Comuna alienta la gestión obrera, que es la contracara de la estatización.

La experiencia recorrida se propone impulsar la expropiación de las fábricas y defiende la gestión obrera independiente en cuanto fase de transición hacia el desarrollo de un doble poder.

Este planteo no es el resultado de una delimitación general de carácter ideológico con la estatización burguesa y burocrática, sino que esa delimitación surge en forma concreta a partir del propio material que nos proporciona la lucha de clases, que ha puesto en cuestión el conjunto del régimen político y social capitalista.

La lucha por la expropiación de las empresas vaciadas y quebradas sólo puede ser entendida como un escalón en la lucha por el poder. La gestión obrera independiente, en que la clase obrera sustituye a la patronal en el manejo de los medios de producción, constituye un desafío al orden social vigente. El control que ejercen los trabajadores de la fábricas coloca en tela de juicio el control del país, qué clase social debe dirigir los destinos de la nación. De lo que se trata, entonces, es de impulsar la expropiación y la gestión obrera como órganos de doble poder, que serán el laboratorio en el cual la clase obrera irá haciendo su experiencia de poder.

Estas conclusiones recogen y se asientan en la experiencia de décadas de lucha de la clase obrera mundial, cuyas premisas fundamentales están sintetizadas en el Programa de Transición de la IV Internacional. Primero, las expropiaciones deben hacerse sin pago. Segundo, deben arrancarse por medio de la lucha. Tercero, como una lucha social orientada a una lucha por el poder. Porque al margen de la lucha por el poder, las fábricas, así se encuentren estatizadas e incluso bajo gestión obrera, en el marco del Estado burgués se transformarán en

deben arrancarse por medio de la lucha. Tercero, como una lucha social orientada a una lucha por el poder. Porque al margen de la lucha por el poder, las fábricas, así se encuentren estatizadas e incluso bajo gestión obrera, en el marco del Estado burgués se transformarán en empresas capitalistas, se desnaturalizarán sus objetivos y terminarán explotando a los obreros y despidiéndolos como cualquier empresa capitalista.

Un ejemplo muy elocuente y al mismo tiempo aleccionador de este proceso, lo encontramos en la Guerra Civil española. En 1936, fracasó una intentona golpista derrotada por los obreros en armas. Los trabajadores, por la huida de las patronales cómplices de los derechistas, debieron tomar la dirección de las fábricas en sus propias manos.

Señala Víctor Alba, en *El obrero colectivizado*, que el hombre común tuvo la impresión de que no sólo era el amo de las fábricas abandonadas, sino también de las instituciones municipales o privadas paralizadas y ociosas.

*"En Cataluña se creó una industria de guerra de la nada, el proletariado parió el milagro (...) fábricas y talleres funcionaban aumentando diariamente la producción, la iniciativa obrera desbordaba de creatividad"*¹⁴.

*"En Asturias (la gestión obrera) construyó camiones y blindados, incluso fabricó combustible a partir del carbón para suplir la falta de gasolina"*¹⁵.

En Cataluña, la empresa de tranvías pasó a ser gestionada por sus 7.000 trabajadores. De inmediato, la gestión obrera mostró su superioridad frente a la patronal. Hizo circular más unidades, bajó las tarifas, realizó mejoras técnicas, aumentó los salarios, achicó las diferencias de los sueldos entre las distintas categorías, aumentó la cantidad de servicios y de pasajeros. A pesar de emprender nuevas inversiones y pagar mayores salarios, la empresa obrera multiplicó sus ingresos y disminuyó pérdidas. Esa situación sólo pudo generarse al suprimir los altos sueldos de los ejecutivos y el pago de los beneficios a los accionistas.

Este fue el cuadro general para las empresas colectivizadas. *"Aun-*

*que faltaron permanentemente materias primas hubo grandes adelantos y casi el 38% de las empresas gestionadas por obreros, se perfeccionaron"*¹⁶.

*"Se mejoraron las condiciones laborales, la jornada laboral se acortó, vía salario familiar se equipararon los salarios, se hicieron productos de mayor calidad. Los precios bajaron en la fabricación de textiles, de municiones de metal, en los servicios de agua, gas, electricidad, teléfonos, el pan, la pesca, el transporte municipal y ferroviario. En pocos meses de gestión obrera, aumentó el nivel de vida entre un 50% y un 100% en muchas zonas de España"*¹⁷.

El talón de Aquiles de esta extraordinaria experiencia obrera fueron:

- 1) La falta de una acción planificada en todo el país. Las colectivizadas trabajaron aisladas unas de otras. Aunque, contradictoriamente, la Federación de Campesinos de Levante reunía a 900 organismos colectivizados y la de Aragón a 500, la articulación de una federación de fábricas de todo el país no estuvo en la agenda de las organizaciones.
- 2) La banca continuó siendo privada y el Tesoro fue usado por el gobierno republicano para estrangular financieramente a las empresas gestionadas por sus trabajadores.
- 3) Los ministros de Producción (anarquistas) subordinaron las empresas colectivizadas al Estado burgués (gobierno republicano). Al caer los ministros anarquistas, fueron reemplazados por republicanos y estalinistas, quienes terminaron definitivamente con las experiencias de gestión obrera.

El principal límite de la revolución en España no fue económico sino político. La transformación no podía coronarse sin el poder político en manos obreras.

A su turno, cuando pudo sentirse más fuerte el Estado burgués, con su Poder Ejecutivo republicano apoyado por el estalinismo, fue haciendo caer bajo su dirección a las empresas colectivizadas. *"La consigna de nacionalización le serviría al Estado burgués para arrebatárselas a los trabajadores. Esas empresas, en muchas ocasiones, re-*

¹⁴ Felipe Díaz Sandino, Diario Personal.

¹⁵ Eric Monpó, Espontaneísmo en la revolución española.

¹⁶ Gastón Levan, Colectividades Libertarias en España.

¹⁷ Peggy Kronegger, Más allá de la teoría: España 1936/1939

tornaron a manos de sus antiguos propietarios"¹⁸.

"Si para imponer la voluntad del Gobierno era necesario reconstruir las fuerzas del orden público y disolver los comités revolucionarios que habían asumido funciones pertenecientes anteriormente al Estado, también era necesario, a juicio tanto de los comunistas como de los socialistas y republicanos, romper el poder de los comités revolucionarios en las fábricas, colocando las empresas colectivas, particularmente en las industrias básicas, bajo el control del Gobierno. La nacionalización, los comunistas lo sabían, permitiría a la autoridad central no sólo organizar la capacidad industrial del campo antifranquista, de acuerdo con las necesidades de la guerra, y controlar la producción y distribución del material bélico, asignado a menudo por los sindicatos a sus propias milicias, sino también debilitar al ala izquierda de la revolución en una de las principales fuentes de poder. Naturalmente no reconocieron abiertamente el motivo político a que obedecía su deseo de nacionalización y defendieron dicha política sólo en los campos militar y económico"¹⁹.

En la campaña que sostenían, estaban ayudados por el hecho de que la colectivización padecía defectos palpables. *"En primer lugar, las empresas colectivizadas no se preocupaban de los problemas del aprovisionamiento y distribución de la mano de obra especializada, materias primas y maquinarias de acuerdo con un plan único y racional de producción para las necesidades militares."*

Los sectores revolucionarios más lúcidos no desconocían esas falencias, procuraron darles una salida y, para ello, idearon *"...también sus propios planes para la coordinación de la producción industrial. A fin de remediar los defectos de la colectivización, así como de allanar las discrepancias en los niveles de vida de los trabajadores en empresas florecientes y empobrecidas, los anarco-sindicalistas, aunque opuestos radicalmente a la nacionalización, abogaban por la centralización-socialización como ellos la llaman- bajo el control de los sindicatos, de ramas enteras de la producción. Este era el concepto anarco-sindicalista de la socialización, sin intervención estatal, que iba a eliminar los*

derroches debidos a la competencia y la duplicación, hacer posible la planificación industrial global para las necesidades civiles y militares, y detener el crecimiento de tendencias egoístas entre los trabajadores de las empresas colectivizadas más prósperas, utilizando sus beneficios para elevar el nivel de vida de los trabajadores de las fábricas menos favorecidas".

La CNT se tropezó con el sabotaje de la coalición de fuerzas que se había encaramado en el gobierno.

"Estas socializaciones parciales no eran consideradas como fines en sí, sino más bien como períodos de transición en la integración de las ramas atomizadas de la producción dentro de una economía socialista (es decir, libertaria) bajo el control de los sindicatos."

*"Esta obra de socialización, sin embargo, no podía avanzar con la rapidez que los planificadores liberatorios deseaban, no sólo porque se encontraron con la oposición de muchas fábricas en posición privilegiada, controlada por los obreros de la UGT, así como por los de la CNT, que no querían sacrificar ninguna de sus ganancias para ayudar a las empresas colectivizadas que tentan menos éxito, sino también porque la dirección de la UGT, socialista, que como el Partido Comunista, abogaba por el control de las industrias básicas por el gobierno, estaba en oposición a la confiscación de la propiedad de la pequeña burguesía, de la que dependía el planeamiento socialista completo, de acuerdo con las ideas de los dirigentes de la CNT"*²⁰.

De este caos, sacaron los estalinistas ventajas para adelantar su campaña en favor de la nacionalización de la industria y contra la colectivización y socialización.

En Yugoslavia, a su turno, la gestión obrera en las fábricas tuvo un gran desarrollo.

El movimiento de la AGT (Autogestión de trabajadores) en Yugoslavia surgió de la derrota del fascismo, la ruptura del presidente Tito con Stalin y la Unión Soviética y la revolución socialista. La AGT atravesó varias fases. *"En el primer período, 1950-1964, operaba en el nivel de la fábrica y el Partido Comunista controlaba la política nacional; desde 1965-1972 bajo la 'reforma del mercado', las fábricas de*

¹⁸ Jordi Escuer, Revolución y contrarrevolución en España, tema de debate

¹⁹ El gran engaño, Capítulo 16, Nacionalización versus socialismo, Jean Bolloten.

²⁰ El gran engaño

AGT comenzaron a ser afectadas por las presiones capitalistas, surgiendo mayores inequidades sociales entre las fábricas y los sectores económicos, como así también el desempleo; en el período que abarca 1973-1990, la invasión del chauvinismo étnico, presiones del FMI y la degeneración del Partido Comunista de Yugoslavia, condujeron a una eventual extinción de la AGT.²¹

La suerte de la gestión obrera independiente como se ve, estuvo directamente asociada a los avatares de la revolución. Su auge y florecimiento fueron consecuencia directa de la iniciativa y creatividad desplegada por las masas en la fase ascendente de la revolución. La creciente intervención del Estado está en sintonía con las reformas de mercado. La estatización cumple un papel reaccionario, dirigido a pavimentar el proceso de restauración capitalista, que va a desembocar en la reciente guerra y la injerencia directa del imperialismo.

En Chile, bajo el gobierno de Allende (1970-73), más de 125 fábricas estaban bajo el sistema de AGT. Cerca de la mitad estaba controlada, en su mayoría, por funcionarios públicos, mientras que el otro cincuenta por ciento por comisiones de trabajadores en las fábricas. Estudios demostraron "que las fábricas bajo AGT eran mucho más productivas, eficientes y con menos ausentismo que las fábricas estatales bajo gerenciamiento centralizado". El movimiento de AGT creó "cordones industriales que coordinaban la producción y la auto-defensa contra los ataques capitalistas. (...) La AGT defendía a las fábricas del cierre, protegía el empleo de los trabajadores y mejoraban vastamente las condiciones sociales de trabajo. Más importante, es que propulsaba la conciencia política de los trabajadores". La gestión obrera independiente fue vista con recelo por el gobierno de la Unidad Popular, pues se erguía como una fuerza desafiante a la política de conciliación de clases que presidía Salvador Allende, pero no tuvo más remedio que convivir con él. Pinochet, una vez consumado el golpe de Estado, se encargó de restablecer la autoridad del Estado sobre las fábricas en manos de los trabajadores.²²

En Perú, en 1967, tuvo lugar un golpe nacionalista liderado por el

²¹ Produciendo realidad, Editorial Topía, pág. 54-55.

²² Idem, pág. 55-56.

general Velasco Alvarado. El nuevo régimen "expropió un gran número de minas, fábricas y plantaciones, y estableció dos tipos de innovaciones: cooperativas industriales y comunidades industriales". Las cooperativas industriales estaban basadas en la participación gerencial de los trabajadores y condujeron a un significativo crecimiento de los beneficios productivos y socio-económicos, pero luego la dirección política marginó o cooptó a los representantes de los trabajadores. Las comunidades industriales, por su lado, "eran una forma de coparticipación entre oficiales militares y trabajadores pero, de hecho, los oficiales militares mantuvieron tanto el control centralizado de la propiedad capitalista previa como los salarios diferenciales".

El antagonismo entre las aspiraciones de los trabajadores y la política del gobierno se fueron haciendo sentir, cada vez con mayor crudeza. "Cuando los trabajadores se dieron cuenta de que las comunidades cooperativas e industriales organizadas desde arriba no operarían en favor de sus intereses, se organizaron para democratizarlas y asegurar un control y equidad mayores, recurriendo frecuentemente a huelgas contra sus propias empresas." El férreo control en manos del Estado de las fábricas y plantaciones fue la antesala para su ulterior reprivatización, operada bajo el gobierno nacionalista. Por supuesto, la legislación laboral progresiva bajo Velasco fue revocada. La lección de Perú es que "la estatización o nacionalización desde arriba reproduce la estructura jerárquica del capitalismo y margina el rol de los trabajadores en el sector público. Los beneficios sociales que obtienen los trabajadores son luego reducidos por los burócratas a cargo, quienes operan con criterio capitalista. La corrupción y mala dirección de los burócratas y la falta de control de los trabajadores llevan a la desnacionalización y privatización"²³.

Popularizar estas experiencias alumbró y ayudó al activismo del siglo XXI a no tropezar con la misma zancadilla patronal.

Este planteamiento ha puesto al desnudo el carácter burgués, estatizante de toda la izquierda argentina. Cuando la izquierda argentina llamaba en el pasado a luchar contra el imperialismo, por la expropiación de las empresas de servicios públicos, por la nacionalización de

²³ Produciendo realidad, Editorial Topía, pág. 57-58.

esto y de lo otro, no superaba las fronteras del nacionalismo burgués. Lo que caracteriza y distingue al socialismo, no es una sumatoria de nacionalizaciones, sino la clase social que detenta el poder político. El punto de partida para el socialismo es el poder obrero. La tendencia a presentar las nacionalizaciones como sinónimo de socialismo reconoce vieja data. Eso, por supuesto, no sirve de consuelo, pero delata que ni siquiera en ese punto es original la izquierda argentina. *"...Recientemente, desde que Bismark emprendió el camino de la nacionalización, ha surgido una especie de falso socialismo, que degenera alguna que otra vez en un tipo especial de socialismo, sumiso y servil, que en todo acto de nacionalización, hasta en los dictados por Bismark, ve una medida socialista. Si la nacionalización de la industria de tabaco fuese socialismo, habría que incluir entre los fundadores del socialismo a Napoleón y a Metternich..."*²⁴.

Una versión de esta política tributaria del nacionalismo lo constituye el embellecimiento de la estatización pero en su variante judicial. Nos estamos refiriendo a la administración obrera judicial, en virtud de la cual los trabajadores pasarían a hacerse cargo, en el marco del juicio de quiebra, de la administración de la empresa.

El PTS enarbola esa postura y la ha impulsado en Zanón, donde *"se planteó una estrategia legal de defensa que permita mantener la situación de hecho. Se presentó la propuesta de una Comisión Obrera Transitoria, una institución temporaria que no sea un obstáculo en el camino de la estatización sin pago bajo administración obrera, que no signifique un desvío que genere institutos legales que la Justicia puede aceptar, pero que sean antagónicos con una perspectiva de clase"*²⁵.

Es necesario decir, en primer lugar, que no existe una cosa como "estrategia legal". Es usual en el ambiente de los profesionales leguleyos otorgarle semejante *status* a la acción legal, pero esa pretensión no se ajusta a la realidad. Lo que existe siempre es una estrategia política y los recursos legales son una rueda auxiliar al servicio de esa estrategia. El argumento de la "estrategia legal" ha sido el arma tradicionalmente usada para hacer pasar una estrategia extraña a los tra-

bajadores; pretende siempre subordinar la acción independiente dentro de los límites de leyes, normativas y disposiciones representativas del orden social vigente. La "estrategia legal" del PTS es una versión recalentada de esa perfidia leguleya.

Pero, más allá de esta consideración, el PTS no considera que se trate de un desvío o una maniobra, al que una dirección combativa puede echar mano o está forzada a aceptar bajo determinadas circunstancias. Esto es absolutamente lícito, pero el PTS, por el contrario, le da un *status* distinto, un alcance estratégico.

El "concurso de acreedores" es una institución patronal, cuya función es salvaguardar los intereses del capital. Los dispositivos que pone en marcha la convocatoria apuntan a salvar al capital, sea bajo la forma de un acuerdo o de la declaración de quiebra.

La "comisión de administración obrera transitoria" —como denomina el PTS a su iniciativa— significa convertir al colectivo de trabajadores en funcionarios del concurso, lo cual los ata a las decisiones del juez y los convierte en rehenes de los acreedores.

Se señala que la "administración obrera judicial" no haría otra cosa que "legalizar" lo que se viene haciendo hasta ahora: *"Una administración obrera que, desconociendo la deuda patronal, lleve adelante la producción y garantice los salarios"*.

Esto es falso. La administración obrera del concurso representa exactamente lo opuesto a un desconocimiento de la deuda patronal, pues su punto de partida es el reconocimiento de ésta y un compromiso de pago para devolver lo adeudado. En la presentación realizada en el juicio de Zanón, por el sindicato ceramista de Neuquén, no se dice una sola palabra de desconocer las deudas. ¿Se asumen, pues, los compromisos frente a los acreedores establecidos en el concurso? La respuesta se encuentra en la misma presentación judicial: *"los trabajadores tendrán la obligación de conservar la unidad productiva, pago de sueldos, impuestos y cargas, y gastos por los insumos necesarios para el proceso productivo, quedando el remanente a disposición del juez"* (el destacado es nuestro). Ese "remanente" es, ni más ni menos, que la masa de utilidades que producen los obreros y que irían al bolsillo de los acreedores, según los términos de la misma presentación

²⁴ Engels, obra citada, pág. 452.

²⁵ Verdad Obrera N° 106 7/08/02.

distraídos sobre el contenido de su propia presentación judicial, que los obliga a lo contrario. No podría ser de otra forma porque, por definición, la función del concurso es garantizar el cobro de los acreedores. En salvaguarda de esos intereses, la ley dispone una serie de cláusulas que impiden disponer libremente de los bienes de la empresa en convocatoria.

La administración obrera en el marco del concurso constituye una gestión compartida entre, por un lado, la patronal, representada por el dueño, el síndico, el juez y los acreedores; y, por otro, la parte obrera. Estamos en presencia de un régimen compulsivo de colaboración de clases, arbitrada por un juez con poder decisorio. Este colaboracionismo de clases se ha extendido con el desarrollo del colapso económico capitalista y de ningún modo se ha atenuado. Así lo prueba la participación en los "comités de crisis" en los municipios, en las multisectoriales con las patronales, en los directorios de las empresas y hasta en el propio gobierno, lo cual es invariablemente exhibido como un trampolín para impulsar los reclamos de los trabajadores, ocultando deliberadamente las ataduras, compromisos y condicionamientos que el ingreso a un órgano patronal representa para la acción independiente de los trabajadores. Por supuesto, en todos estos casos, nunca falta la promesa ritual de que los condicionamientos que se interpongan en el camino serán "rechazados" y de que "se seguirá luchando".

Contra lo que sostiene el PTS, la "administración obrera judicial" no es inocua o inofensiva. En lugar de separar la posición y el destino de los trabajadores del de los acreedores, el PTS los une y los ata, al insertar institucionalmente a los obreros como administradores de la quiebra.

Lejos de conducir "a la estatización sin pago bajo administración obrera", destruye la administración obrera independiente, real, que los obreros conquistaron con la lucha. Y prepara el terreno para que el capital retome el control de la fábrica.

Financiamiento

Como se ha visto en todos los capítulos precedentes, la necesidad de recursos, de insumos, de capital de trabajo, es cuestión acuciante y vital para que las fábricas en manos obreras puedan prosperar.

No es un secreto que el financiamiento de cualquier empresa procede de tres fuentes posibles.

- 1) Los recursos propios, el autofinanciamiento, cuando las empresas se valen de su propio capital para encarar su actividad. Ése es un lujo que se pueden dar pocas compañías, pero hasta las más sanas necesitan apelar a recursos ajenos. El financiamiento es una necesidad casi compulsiva bajo el capitalismo para ampliar el ritmo y la escala de la acumulación. La burguesía utiliza, por medio del sistema bancario, los recursos ociosos en manos de los particulares para su propio beneficio: transforma esos ahorros en capital.
- 2) El crédito, que básicamente se toma por medio del sistema bancario, constituye el recurso más tradicional de financiamiento de las empresas sólidas, económicamente solventes y financieramente sanas. Por cierto, mucho más necesitan de él las que sufren ahogos y dificultades económicas, o problemas de iliquidez.
- 3) El respaldo del Estado, ya sea en forma directa, por medio de partidas presupuestarias, o por líneas de financiamiento dispuestas por la banca estatal.

El acceso a las tres fuentes, y éste es el dato relevante, está por completo vedado a las empresas recuperadas.

No hace falta abundar sobre la primera de ellas, las razones son obvias. Pero lo mismo ocurre con las restantes. Algo se ha dicho al respecto, pero examinemos con más profundidad el asunto. Empecemos con el financiamiento bancario. Antes de entrar en la operatoria que se está implementando o que se pretende implementar, resulta útil señalar que el punto de partida radica en la exclusión de los canales tradicionales de crédito, los bancos, incluidos los estatales.

"...las empresas recuperadas, al igual que las pymes, adolecen,

entre otras cosas, de dificultades de acceso al financiamiento —en particular, la falta de capital de trabajo.

Las empresas que dieron lugar a las recuperadas son firmas quebradas cuya calificación crediticia, según el sistema establecido por el Banco Central de la República Argentina, es '5'. Aunque el sistema bancario podría prestarles dinero, las provisiones de capital que los bancos deben realizar en estos casos son tan elevadas que hacen muy costoso para las entidades bancarias —en términos de costo de oportunidad— darles créditos."

Así las cosas, excluidas del sistema bancario, se han puesto en marcha mecanismos alternativos de financiamiento.

BANEXO

La creación de Banexo (Buenos Aires Nexo) fue anunciada con bombos y platillos en un acto que se hizo a principios de junio de 2003. Allí, además de Solá y el ministro provincial de Producción, Magnanini, estuvo Néstor Kirchner. Era, ni más ni menos, que la primera incursión oficial del presidente en el Gran Buenos Aires, luego de su asunción. La nueva entidad fue presentada en sociedad como la herramienta que faltaba para respaldar a las pequeñas y medianas empresas, entre las que se incluía a las recuperadas por sus trabajadores. El Banexo centralizaría "los préstamos por 150 millones de pesos que antes estaban dispersos". Hasta el momento "ocho organismos de la provincia de Buenos Aires solían otorgar fondos para las pymes". A partir de ahora "se concentrarían en un ente con 40 agencias de desarrollo municipales y regionales". Se procuraría así, según el ministro, acabar con el uso político del financiamiento por parte del Estado.

Pero no todo lo que brilla es oro. La empresa que esté interesada "deberá dirigirse a la Dirección de Producción de su municipio, a los centros, las agencias y los corredores productivos, las cámaras empresarias o directamente a Banexo". Las 40 agencias a las que se hace referencia congregan a "intendentes, concejales, empresarios, sindicalistas y representantes sociales". Como se ve, los orga-

nismos encargados de evaluar la solicitud de ayuda económica tienen una fuerte injerencia patronal y punteril. El visto bueno para un crédito deberá pasar por el filtro de las "fuerzas vivas" de la zona, en principio por las cámaras empresariales de la comuna y luego por instituciones y representaciones políticas que tienen íntimos vínculos con los principales grupos económicos locales. Contra lo que se dice sobre la supuesta "politización" de la gestión obrera, la operatoria estará más sometida que nunca al control político... del gran capital. Ni duda puede haber sobre quiénes serán los principales beneficiarios de semejante régimen.

Pero lo más grave es que el Banexo ni siquiera tiene fondos propios. Como su nombre lo indica, es un puente, un "nexo", entre los inversores privados y los necesitados. La actividad de Banexo estaría dirigida a "la captación de inversores privados, en especial los ubicados en la misma región de los beneficiarios". Pero la operatoria apunta más lejos, pues se estarían "entablando contactos en Estados Unidos y Europa con interesados en obtener una rentabilidad mucho mayor a las que se consiguen en aquellas latitudes".

Así, bajo la pantalla de una ayuda a las pymes, se apunta a poner en marcha un negocio financiero.

Consecuentemente con esa orientación, "el método de trabajo es por medio de fideicomisos". Se trata de un producto financiero, hecho a la medida de los inversores. "Tiene menor costo financiero para las empresas que un crédito bancario. Y los inversores obtienen una rentabilidad mayor y garantía de cobro".

Se trata de una figura legal impuesta por la ley 24.441 de 1995; en términos financieros, es una herramienta que permite a empresas de todo tipo y tamaño acceder al mercado de capitales o a fondos privados sin necesidad de pasar por los bancos. Los inversores, por su parte, tienen alta seguridad de cobro y rendimientos superiores a los de un plazo fijo de duración similar.

De manera sintética, "el fideicomiso significa la transmisión de la propiedad de un bien determinado a un administrador. Lo signi-

¹Clarín, 28 de diciembre de 2003.

ficativo para el inversor (fideicomisario) es que los bienes que integran el fideicomiso están separados del patrimonio del administrador (fiduciario) y de quien entrega los bienes (fiduciante)².

Así, aunque algunas empresas tengan problemas, o incluso quiebren, los bienes del fideicomiso quedan fuera de cualquier inhibición, lo cual garantiza el cobro de la inversión.

"No compite estrictamente con los créditos bancarios, en todo caso es complementario. Pero hay empresas a quienes, por distintos motivos, los bancos no podrían o querrían prestarle y por eso realizan fideicomisos", explicó Pablo Muñoz, de Deloitte & Touch, una consultora muy activa en este mercado. Claro que para este especialista, el dato más significativo es que "el fideicomiso posibilita la securitización de activos". Ese dato se puede comprobar con números: el grueso de los fideicomisos de oferta pública (es decir, los autorizados por la Comisión Nacional de Valores, que pueden negociarse libremente en la Bolsa) corresponde a la *securitización* de créditos personales.

Para la empresa son más caros que tomar un crédito, ya que se tienen gastos fijos (pagos al fiduciario, calificadoras de riesgo, auditorías y contratos, por caso) que, para colocaciones de entre 5 y 6 millones de pesos, equivalen al 2% de la emisión. En compensación, el costo financiero es menor al de un préstamo bancario.

El fideicomiso también es "una herramienta apta para las pymes que, por uno u otro motivo, no tienen acceso a los bancos". Y dentro de ese mercado suenan fuerte las colocaciones de Garantizar SGR (Sociedad de Garantía Recíproca), una empresa con padrinazgo oficial cuya función es la de asegurar a los inversores el cobro de los fondos que entregan a las pymes. "La ventaja de fideicomisos como los nuestros es que las empresas pueden conseguir dinero del mercado de capitales a menor costo, y los inversores tienen mejores rendimientos", explicó César Tortorella, titular de Garantizar.

²Idem.

³No viene al caso recordar aquí los detalles, pero conviene tener en cuenta que Deloitte & Touch estuvo muy vinculada con el caso IBM-Banco Nación.

En este caso, las emisiones por lo general son menores a los fideicomisos *securitizados* y un poco más caras. El costo para el emisor ronda el 4,5% del monto emitido. "Es el precio de la doble garantía para los inversores, algo que muchas pymes necesitan para comenzar a crecer".

La tasa de interés es menor que la ofrecida por los bancos, pero no deja de ser alta. Las operaciones realizadas, por ejemplo, por Pesquera Puerto Rosales, en Ingeniero White, oscilan alrededor del 12 por ciento, una tasa usuraria. Téngase en cuenta que el punto de partida de la operación es la entrega de activos de la empresa, en concepto de garantía. En todos los casos, el crédito gestionado por Banexo ha tenido por contrapartida una injerencia mayor del Estado en la empresa asistida por esos créditos. "La asistencia financiera fue acompañada de requisitos de incorporación de gerenciamiento profesional y tomar capacitación específica en cuestiones relativas a la gestión empresarial" (productores de calzado en la ciudad de 25 de Mayo). "El comité de selección se constituyó sobre la base de un fuerte y abarcativo arco de las entidades más representativas de la región de San Pedro, integrando sindicatos, empresarios, municipio y los organismos técnicos de control" (San Pedro, productores frutícolas). Se debe subrayar que todavía no se habló del listado de beneficiarios, que en caso alguno incluye a las empresas bajo gestión obrera.

La creación del Banexo confirma la definitiva desaparición de la escena del Banco Provincia. Magnanini "subrayó la necesidad de buscar nuevas líneas de financiamiento alternativo ante el cierre del acceso al circuito bancario". El Banco Provincia "por largo tiempo no podrá prestar ni evaluar proyectos", mientras mes a mes debe desembolsar 50 millones de pesos en recursos de amparo. El ministro falta a la verdad cuando le echa la culpa a los ahorristas, cuando es sabido que el Provincia entró en virtual cesación de pagos debido a los préstamos que otorgó a empresarios amigos del gobierno, en primer lugar a la patria contratista.

Esa constituyó la base de sustentación de la administración duhaldistas en materia de inversiones en títulos de la deuda que en-

traron en *default*, cuya cotización el Banco Provincia ayudó a sostener junto con el resto de la banca estatal. El Provincia ha construido un poderoso conglomerado, en alianza con importantes grupos empresarios locales e internacionales, y concentra en sus manos AFJP, ART, empresas de seguros y de medicina privada. Los recursos que se le niegan a las empresas recuperadas, son orientados a nutrir esa acumulación obscena de negocios capitalistas. Los ahorristas que hacen los amparos han sido, al igual que todo el pueblo, víctimas de es política.

FOGABA

También en la provincia de Buenos Aires se ha constituido el llamado Fogaba. Se trata de una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria, cuya función apuntaría a dar una salida a las necesidades de financiamiento de las empresas recuperadas por los trabajadores. Pero, otra vez, lo que brilla no siempre es oro.

En primer lugar, Fogaba actúa como un fondo de garantía. "Las garantías que emitan podrán afianzar hasta el 75% del crédito solicitado por las empresas beneficiarias". En otras palabras, el fondo no otorga ni suministra un peso a las empresas necesitadas, que deberán morir, si quieren acceder a un crédito, en el sistema bancario. No es un secreto para nadie el monto de las tasas usurarias que cobran los bancos, superiores al 3 y al 4% mensual. Aun las líneas que denominan "promocionales", lanzadas recientemente por algunos bancos, no bajan del 18% anual. El fondo de garantía así concebido termina siendo un negocio para los bancos, que se aseguran de antemano la devolución del crédito puesto que el propio Estado es garante de la operación. No casualmente ya más de una decena de bancos privados se han adherido a ese sistema, entre ellos el HSBC, Galicia, Piano, Sudameris, Comafi, Metropolitano de Finanzas, Finansur y el Credicoop, de Carlos Heller.

Además, el otorgamiento de garantías será "a título oneroso" (deberán pagar una comisión). A la par de ello, "Fogaba está obligado a solicitar garantías en la misma cantidad de los avales que

otorga. Esto se fundamenta en la necesidad de preservar el capital que respalda". No se trata, pues, de un regalo; por el contrario, el reaseguro estará dado por los bienes de la propia empresa "beneficiaria", cuyo patrimonio queda hipotecado.

Pero el asunto no termina ahí. Paralelamente, una de las principales operatorias —tal como se destaca en el texto comentado— consiste en el "fideicomiso de garantías". Esa figura legal apunta a "brindar un marco de seguridad jurídica para los contratos entre particulares, a la vez que se potencia con el respaldo económico financiero estatal". Inversores privados que en la actualidad prestan a tasas usurarias tendrán la posibilidad de ampliar sus fronteras, acotando, incluso, sus riesgos, al verse respaldados por el Estado, y con la ventaja adicional que significa el hecho de que ese tipo de instrumentos jurídicos "aislan los contenidos patrimoniales comprendidos en los contratos de posibles convocatorias y quiebras". En otras palabras: los inversores tienen la tranquilidad de que los bienes que aseguran la operación no pueden ser afectados a otro destino, y exclusivamente asignados a respaldarla hasta su conclusión.

En el menú de ofertas, se incluye también lo que se denomina "garantía para instrumento de oferta pública". Mediante convenios firmados con la Bolsa de Comercio y el Mercado Regional de Capitales, la garantía Fogaba permite a los beneficiarios acceder a un financiamiento inédito para ellos: las obligaciones negociables.

Bajo el pretexto de ayudar a las Pymes y empresas recuperadas, se abre un fabuloso mercado de especulación financiera. Lejos de un acceso directo y barato al crédito, asistimos al proceso inverso, donde las empresas quedan a merced de los fondos especulativos y del gran capital, quienes tienen servida la mesa para terminar de engullirse a los supuestos beneficiarios de la operatoria.

En realidad, el Fogaba está hecho a la medida del gran capital. No es la primera vez que los que más baten el parche en el apoyo a las Pymes son los mismos grandes grupos económicos capitalistas, quienes apuntan, de esa forma, a beneficiar a las empresas que actúan como proveedoras y clientes de estos grupos y que son subsi-

diarias y satélites directas o indirectas de ellos. Bajo la pantalla de Pymes, asistimos a una tercerización encubierta, de la que se vale el gran capital para evadir impuestos, rebajar los salarios, desconocer los convenios y precarizar las condiciones de trabajo.

El Fogaba, en ese sentido, no es la excepción. Otorga garantías comerciales para operaciones con grandes empresas. "Mediante esta operatoria, Fogaba garantiza la compra de maquinarias e insumos, la contratación de servicios, etc., de las Pymes ante sus grandes proveedores y clientes. Las grandes empresas que deseen tener garantizados a sus clientes Pymes deben adherirse y suscribir acciones "clase F" de Fogaba. En este contexto, no debería llamar la atención que entre los primeros accionistas del Fogaba figuren empresas líderes en su ramo, como Acindar, Siemens, Comesi, Alpargatas, Bayer, Camuzzi Gas Pampeana, entre otras. A esta lista habría que agregar la participación institucional de la Unión Industrial, la Confederación Económica de la provincia y la Carbap.

Este organismo abiertamente patronal (por cualquier lado que se lo mire) será el encargado de determinar quiénes serán los beneficiarios de estas operatorias. Así como las condiciones de éstas. "Analizar la viabilidad de la empresa tomadora y el proyecto en cuestión" y, por supuesto, monitorear a la empresa en vistas a asegurar la devolución del préstamo. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el Fogaba, lejos de ser una salida para las empresas bajo gestión obrera, constituye una trampa mortal para estrangularlas, para convertirlas en rehenes del gran capital y acelerar su copamiento.

FONCAP

Este organismo a diferencia de los anteriormente descriptos es dependiente del gobierno nacional. "Foncap S.A. es una sociedad anónima cuya finalidad es la administración de fondos fiduciarios". El directorio del Foncap "está compuesto por representantes del sector privado con el 51% del paquete accionario y representantes del Estado con el 49% restante".

Al igual que sus pares provinciales, su operatoria consiste en actuar de puente entre los inversores y los interesados en tomar un crédito. Es decir, carece de fondos propios y su función será alentar la formación de "instituciones de financiamiento de microempresas" (IMF). El Foncap ayudaría a las IMF "a atraer capital nacional e internacional que permita perseverar en el desarrollo del sector" y a asesorarlas en cuanto a "instrumentos y metodologías probadas de financiamiento para microempresas". Los IMF están sometidos a un monitoreo muy riguroso, cumpliendo las metas de colocación e indicadores de funcionamiento "acordes con entidades de crédito de segundo piso internacionales".

Pero, más allá de todas estas consideraciones, las condiciones son directamente prohibitivas y con más razón, para las fábricas bajo gestión obrera. Los requisitos son: tener una antigüedad no menor de 2 años, un patrimonio no inferior a 100.000 pesos, ofrecimiento de garantías reales. Por otra parte, el crédito tiene cláusulas para nada accesibles: el plazo se reduce a un máximo de 12 a 18 meses "con un período de gracia acorde al proyecto" y un interés alto, al ascender a un "15% anual en pesos, variable trimestralmente".

PRESUPUESTO

Este menú de productos financieros tiene como contrapartida la falta de partidas específicas en los presupuestos estatales —o su presencia simbólica, como vamos a ver en este capítulo. Por lo pronto, en el presupuesto nacional —tanto en el previsto para el 2004 como en los anteriores— brilla por su ausencia cualquier apoyo a las fábricas autogestionadas por sus trabajadores. Este hecho nos da una señal muy clara de la orientación de clase del gobierno de Kirchner. Al igual que sus antecesores, los recursos han sido reservados para pagar la deuda externa y hacer frente a las compensaciones a los banqueros y subsidios a diferentes grupos capitalistas, empezando por las empresas usufructuarias de las privatizaciones.

El acuerdo que el gobierno ha pactado con el FMI significa un récord en materia de pagos de intereses y servicios de la deuda y esto se efectivizará a expensas de las remuneraciones de empleados y jubilados que permanecen virtualmente congelados, al igual que los planes de empleo de 2 millones de desocupados mientras descienden en términos constantes un 30 por ciento los gastos destinados a salud y educación. Más allá de las poses y los gestos, las fábricas bajo gestión obrera están corriendo la misma suerte que el resto de necesidades básicas apremiantes de la población.

En la provincia de Buenos Aires, el presupuesto de 2003 después de mucho deliberar, incluyó una partida para las fábricas de 7 millones de pesos. Se trata de una suma insignificante en relación a los requerimientos de las fábricas recuperadas, que mayoritariamente están concentradas en esa jurisdicción y en particular en el conurbano. Pero lo más agravante es que ni siquiera esa suma fue asignada. La partida fue subejecutada y eso mismo ocurrió con otras partidas sociales. El gobierno Solá procuró solucionar sus problemas de caja y sus dificultades en la recaudación metiendo la mano en los fondos que estaban destinados para los trabajadores.

En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no hay una operatoria especial para las empresas administradas por sus trabajadores. El subsidio entregado en el año 2001 a la fábrica Impa por 400.000 pesos fue la excepción que confirma la regla. En el curso del 2003, a pesar de la campaña publicitaria desplegada por Ibarra, presentándose como una suerte de mecenas de las fábricas recuperadas, el panorama no varió. A cuentagotas, y casi con forceps, se entregó un subsidio de 30.000 pesos a Ghelco, Chilavert y nuevamente a Impa, en el marco de un programa de "modernización productiva" que dispone la Secretaría de Desarrollo Económico. Además de estas erogaciones, el auxilio tan difundido del Gobierno de la Ciudad se redujo a programas de autoempleo consistente en la entrega de 200 pesos a los compañeros de las fábricas ocupadas, que no es más que una versión porteña de los planes asistenciales Jefas y Jefes de Hogar que viene otorgando el gobierno nacional. Aun ese beneficio fue dado en forma selectiva.

Pero quizá lo que nos da la mejor medida sobre el presupuesto para las fábricas "recuperadas" —o mejor dicho la falta de presupuesto— es el hecho de que no hay previsto partidas —ni en provincia de Buenos Aires ni en Capital— ¡para pagar las indemnizaciones! Si tenemos presente que la mayoría de las leyes vencen en el 2004, las fábricas bajo gestión obrera ya tienen establecida una condena de antemano. A lo sumo, como ha ocurrido con Gip Metal o Yaguané, no es de descartar que se apele a una prórroga pero eso no desmiente sino que confirma que la política gubernamental es simplemente tirar la pelota para adelante. Dicho esto, ¿puede haber alguna duda, sobre cuál es el rumbo en que están embarcados Kirchner y sus aliados? En este contexto, pasa a ser una broma de mal gusto el balance que traza el gobierno porteño de su intervención.

Frente a las restricciones financieras planteadas, "se destaca la activa intervención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asistió financieramente esas necesidades en los casos de Impa, Vieytes y Chilavert otorgando subsidios orientados a la mejora de los procesos productivos y la actualización tecnológica. Este tipo de política local implementada resulta acertada no sólo como apoyo al desarrollo de estas experiencias sino también por la modalidad utilizada. En este sentido, el otorgamiento de los fondos estuvo acompañado por una asistencia técnica en torno al diseño de un plan de acción para la aplicación de las inversiones y las etapas involucradas. Los proyectos no sólo fueron evaluados sino también asistidos a los fines de mejorar sus capacidades de aplicación". Ya hemos señalado que aun en este plano, lo distintivo ha sido la escasez y no la abundancia de la ayuda económica.

El argumento gubernamental de que "no hay recursos" para pagar las expropiaciones no se sostiene. Bastaría comparar lo que representa el monto comprometido en concepto de indemnizaciones por las leyes aprobadas con cualquiera de los subsidios acordados para otros destinos (léase ferrocarriles, autotransporte de pasajeros o cargas, exportadores, bancos) para darse cuenta de que se trata de proporciones irrisorias. Hay que tener presente que las maquinarias (ver capítulos sobre las expropiaciones), de un modo ge-

neral, son muy antiguas, hasta, en muchos casos, con una tecnología obsoleta, cuyo valor comercial es muy bajo. Las sumas comprometidas con la expropiación se pagan solas con el ahorro que significaría para el estado dejar de pagar los planes Jefas y Jefes de Hogar a los sectores involucrados que pasaría a ser sustituido por trabajo genuino. Un cálculo hecho, por ejemplo, por los trabajadores de Transporte del Oeste, indica que, en caso de quedar en la calle, el estado debería desembolsar, en concepto de fondo de desempleo, la friolera de 3 millones de pesos. Los trabajadores de TDO plantean que esos fondos —en lugar de ser despilfarrados— sean destinados a la reorganización de la línea bajo dirección de los trabajadores, defendiendo la fuente de trabajo de los casi 1.000 choferes que hoy integran la línea.

Pero, además, lo que pone el Estado sería compensado con creces con el impacto económico directo e indirecto que generaría la puesta en marcha de una nueva fuente de producción, lo que redundaría en una mayor recaudación impositiva y previsional para la nación, la provincia y la comuna (IVA, ingresos brutos, tasas municipales y aportes y contribuciones previsionales). Está calculado que por cada puesto que se crea, indirectamente se crean 2 puestos de trabajo más ya que cualquier fábrica que se ponga en funcionamiento, reactiva el transporte, los servicios, el comercio y la industria proveedora. Lejos de ser un costo termina representando un beneficio para las finanzas estatales.

El gobierno porteño ha reconocido esta realidad: "Desde el punto de vista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y asumiendo un criterio estrictamente fiscal, la totalidad de las erogaciones realizadas como resultado de las declaraciones de utilidad pública de las ocupaciones temporarias y expropiaciones —una vez deducidos los ingresos por recaudación tributaria— son inferiores al costo de atender la situación de los trabajadores y las personas a su cargo mediante asistencia alimenticia y subsidios por desempleo."

Aunque no hace mención explícita de la recaudación impositiva, la Ciudad admite que "el mantenimiento de las fuentes de trabajo genera otros beneficios al conjunto de la economía de la Ciudad. El

sostenimiento de algunas capacidades de procesos, implícitas en algunas actividades desarrolladas por las empresas recuperadas por los trabajadores, revisten para el tejido productivo de la Ciudad un carácter estratégico, entre las que pueden mencionarse: la capacidad de procesar aluminio (fundición, laminación, extrusión e impresión) de que dispone Impa y la participación de mercado alcanzado por Ghelco —que llegó a superar el 70%— en el segmento de insumos para panaderías, confiterías y heladería."

Programa de asistencia financiera para empresas recuperadas

¿Sufrió algún cambio este panorama con los últimos anuncios presidenciales en la materia?

El escenario fue cuidadosamente preparado, como si se estuviera en vísperas de grandes novedades. Prácticamente se ejerció un chantaje sobre las empresas recuperadas, que tuvieron que hacer acto de presencia en forma obligada en el acto oficial organizado en la Casa Rosada si pretendían ser beneficiarias del Programa de Asistencia Financiera que se disponía a anunciar el Presidente.

Pese a toda la parafernalia, el anuncio de Kirchner no dejó de ser una decepción. Los 80 millones que venían reclamando distintos nucleamientos que se disputan la representación del movimiento de empresas recuperadas, el Gobierno los redujo a 6 millones. En lugar de subsidios no reintegrables como se venía solicitando, se trataría de una línea de créditos instrumentada por el Banco Nación y coordinado con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano.

No es un secreto para nadie el calvario por el que hay que pasar para acceder a un crédito en el Nación, a lo cual se agregaría el visto bueno que deberán otorgar los dos ministerios nombrados. De modo que todo está por verse. Este programa crea las condiciones ideales para la injerencia económica y la manipulación política del Estado en las empresas recuperadas.

El crédito no es un regalo, hay que devolverlo. Aunque no han trascendido los plazos, sí se conoció que la tasa de interés ascende-

rá al 7 por ciento, bastante por encima de la inflación pronosticada, y que el tope de los préstamos será de 200.000 pesos.

El anuncio contrasta con los 18 millones mensuales (200 millones anuales) otorgados a las concesionarias privadas de los ferrocarriles, pero... en subsidios; con los 750 millones otorgados a los exportadores, y con la compensación de varios miles de millones entregados a los bancos también bajo la forma de subsidios.

¿Cabe alguna duda de cuál es la orientación social del gobierno K?

Injerencia estatal

Anadie se le escapa que está en marcha un operativo para neutralizar al movimiento piquetero, o sea para quebrar el movimiento de lucha más pujante de la clase obrera de la última década. El gobierno está usando una variedad de recursos: el garrote y la zanahoria; el soborno, las prebendas y la cooptación política.

Después de haberse cansado de repetir que no se iba a criminalizar la protesta social, K. ha esgrimido el "Código Penal" e insinuado que formaría una brigada antipiquetera. Con relación a las empresas vaciadas que han pasado a ser gestionadas por sus trabajadores, la pretensión es meter una cuña en Brukman, en Sasetru, en Zanón (es decir, en las expresiones más avanzadas de control y gestión obreros), para transformarlas en Pymes, sobre las antiguas bases capitalistas. Luis Caro está a la cabeza de esta política; este abogado riquista tiene un largo prontuario de hombre de confianza de la burguesía.

La necesidad de neutralizar a los piqueteros (dividir, cooptar y reprimir) ha pasado a ocupar la primera plana de los medios de comunicación. "El gobierno apuesta a dividirlos", editorializa *La Nación*. Ezequiel Gallo destaca que "el gobierno apuesta de manera permanente a fraccionar a las organizaciones piqueteras", y agrega que "para lograrlo se apoya en el control de los proyectos productivos y laborales, recursos que los piqueteros necesitan para sostener su capacidad de movilización".

Al día siguiente, Morales Solá traza la radiografía que hace el oficialismo del movimiento piquetero: "Un informe en poder del Gobierno señala que hay tres grandes grupos de piqueteros. Uno está en manos de la ministro Alicia Kirchner y aceptó reacomodarse en cooperativas de trabajo. Un segundo grupo pertenece a los líderes históricos, Alderete y D'Elía y podría sumarse al primero, porque se queda sin razones para mortificar. El tercero es una mezcla de mar-

¹La Nación, 25 de octubre de 2003.

ginales sin remedio con grupos de la izquierda antidiluviana". Esta misma discriminación fue enfatizada en el noticiero nocturno de Canal 2, por Alfredo Leuco, un vocero oficioso del gobierno. Señala que el ascenso de Kirchner está clarificando el panorama, y decanta a los sectores que pueden ser asimilables de los que serían "irrecuperables".

Esta política se hace extensiva a las fábricas ocupadas. Se pretende meter una cuña en Brukman, en Sasetru, en Zanón, dividir las, aislar a los sectores más consecuentes y cooptar a los otros sobre la base de promesas y prebendas. Los hechos están a la vista: la expropiación trucha de Brukman que ni siquiera cubre el valor de la maquinaria y habilita al ingreso de los carneros a la planta; el nombramiento de interventores, desplazando al directorio en Zanón y el reciente fallo de la Corte Suprema habilitando el ingreso de la mismos a la planta; así como la provocación montada con injerencia del Inaes y punteros del PJ en Sasetru revelan el alcance del operativo en curso. Por supuesto, esta coacción está unida al sabotaje económico a estos emprendimientos, que no reciben ningún tipo de auxilio estatal. En otras palabras, el ahogo económico es funcional a la escalada política.

En este cuadro, figuras como la de Luis Caro juegan un papel servicial.

Riquista

Caro es un ejemplo mayúsculo de perfidia política. Por un lado, se jacta de la "prescindencia política" del movimiento que él preside pero, por el otro, actúa al servicio del riquismo (fue candidato de Rico en Avellaneda) y del clero "social".

En una entrevista sin desperdicios, que reproduce Magnani en su libro *El cambio silencioso*, las definiciones de Caro son altamente esclarecedoras:

"... El candidato a presidente es Adolfo Rodríguez Saá y el candidato a gobernador es Aldo Rico. Los dos son muy buenos administradores más allá de las cuestiones personales que pueda tener cada

uno. Siempre hice cosas por Avellaneda. Soy presidente de una institución de prevención de la drogadicción. También fui delegado de la pastoral social del obispado de Avellaneda-Lanús, por lo cual siempre trabajé en los temas conflictivos. Para mí es algo normal que sea candidato"².

A Caro le tiene sin cuidado que Rico sea un reconocido represor y que en su distrito haya llevado adelante una política sistemática de persecución y matonaje sobre los trabajadores bajo su órbita y de vaciamiento del hospital público para fomentar desembozadamente su privatización. Tampoco es un obstáculo que el militar retirado le haya dado un apoyo clave a Duhalde, dándole en la Legislatura bonaerense los votos necesarios para su reelección. Después de todo, por qué eso iba a ser un freno si el propio Caro es astilla del mismo palo durante su carrera como funcionario en el seno de la administración duhaldista. Pero Caro ni siquiera se inmuta ante el hecho de que Rico es enemigo de las fábricas recuperadas: "Si él está en contra de las fábricas recuperadas es problema de él, no es problema mío. Yo soy candidato por el partido que representa a Rodríguez Saá y Rico, pero cada uno tiene sus pensamientos. Yo no creo que es así porque cuando yo tomé contacto con él, porque hay varias fábricas que tienen problemas en el municipio de San Miguel, de donde él es intendente... lo que pasa es que hay veces que las situaciones se manejan con muchos prejuicios. Hay muchas situaciones en la historia en que las situaciones van cambiando. Y si hay alguna contradicción con Aldo Rico será problema de él. Yo coincido en que hay que preservar la propiedad privada. Yo creo que hay que defenderla. Creo que hace a la naturaleza humana el tener cosas. Lo que ocurre es que en la Argentina, esa propiedad privada, sin desconocerla, debe quedar reglada por privilegiar el trabajo. Creo que en eso estamos de acuerdo, porque Rico es peronista, yo también lo soy. Yo soy de la doctrina justicialista. Perón lo decía: hay que poner al capital al servicio de la economía y no la economía al servicio del capital. Hay muchas coincidencias con Rico". A confesión de parte, relevo de pruebas, como di-

²El cambio silencioso, Mognani.

ce el dicho popular. Las declaraciones de Caro nos pintan al hombre y nos eximen de más comentarios. Más allá del oportunismo extremo, Caro nos confiesa por adelantado la incompatibilidad existente entre las aspiraciones de las fábricas ocupadas y los representantes del capital.

Su participación en las listas riquistas es la culminación de una trayectoria en el municipio de Avellaneda como funcionario del gobierno peronista de Cacho Alvarez. Entre 1991 a 1999 desfiló por diversos cargos oficiales (director de Acción Social, jefe de Compras y Suministros, subsecretario de Producción y Empleo, y delegado municipal de Villa Domínico). En otras palabras, el hombre que se jacta de abrir las fábricas, acompañó la gestión duhaldo-menemista, responsable de la hiperdesocupación y del mayor vaciamiento industrial. Caro es un hombre de la Iglesia, designado delegado de la Pastoral Social del Obispado de Avellaneda-Lanús en los años 2000, 2001 y 2002.

Caro ha convertido al movimiento de fábricas en una suerte de coto cerrado. Todas las cooperativas están atadas por la lealtad y devoción al líder, quien está habilitado para hacer y deshacer a su antojo. En Panificación Cinco llevó a cabo un golpe de mano para desplazar a los "desobedientes y descarriados" y consagrar a sus acólitos. Caro procura poner en pie su propia burocracia con el propósito de gerenciar el espacio de empresas recuperadas, que puede reportar grandes dividendos políticos y económicos si se reconvierten en términos empresarios. Aunque Caro jamás explicitó sus diferencias con Murúa, lo que está en la base de la división del Movimiento de Empresas Recuperadas (más allá de los alineamientos con diferentes variantes políticas patronales) es la disputa por el manejo de esta red de empresas y los recursos y perspectivas comerciales que encierran.

Contra Brukman

En este contexto, no debe llamar la atención la conducta de Caro respecto a Brukman y Sasetru, y en términos generales en rela-

ción con las empresas donde prima un principio de independencia de clase frente a los gobiernos de turno.

Es un hecho conocido que Caro no ha tenido nada que ver con la larga y perseverante lucha librada por los compañeros de Brukman. El gran ausente en este conflicto se dio maña, luego de que se precipitó la quiebra de la empresa, para aparecer como el portavoz de los obreros de Brukman y el artífice de una salida. Un fraude, porque si algo queda claro en el prolongado conflicto de Brukman, es que la posibilidad que ahora se abre para recuperar el control de la fábrica es la consecuencia de meses de movilización, de acampe frente a la puerta, de las jornadas de lucha organizadas por la ANT en defensa de las fábricas y del conjunto de empresas recuperadas, y de la campaña de denuncia contra el desalojo, que llegó más allá de las fronteras nacionales. Caro y su movimiento estuvieron totalmente al margen de este proceso, pero pergeñaron en la Legislatura (con Ibarra y con Macri) una ley que sacrifica gran parte de las aspiraciones de los obreros, al circunscribirla a una ocupación transitoria del inmueble como de las maquinarias, una expropiación de las maquinarias con un tope sensiblemente por debajo de su valor y habilitar el reingreso de los carneros (ver capítulos sobre las expropiaciones y sobre Brukman), y presentarla como un hecho consumado; o sea, una extorsión. La aparición en escena de Caro apunta a hacer pasar esta maniobra. Su desembarco en Brukman fue facilitado por quienes se definen como aliados "nacionales y populares" del gobierno, es decir la CCC, compañera habitual del riquismo. En este cuadro, los obreros retornaron a la fábrica bajo una situación extremadamente precaria. No son dueños de nada, y los trabajadores deberán hacerse cargo de pagar la diferencia existente entre el tope establecido y el valor comercial de la maquinaria. La titularidad del inmueble es patrimonio de la quiebra, quien recuperará el control del establecimiento luego de transcurridos los dos años. Esa situación ya está siendo utilizada como un poderoso condicionamiento. La política de extorsión en marcha va de la mano de la exigencia de apartarse de la "molesta" presencia de las organizaciones combativas.

El ataque a Sasetru

Otro blanco de este operativo lo constituye Sasetru, hacia cuya ocupación Caro mostró abierta hostilidad, al igual que contra la lucha librada en general por la recuperación de la fábrica. Atacó la ocupación de Sasetru porque era "política". Viniendo de un riquista, esta "acusación" es una cretinada. La única diferencia con Lavalán, Grissinópolis o cualquier otra empresa recuperada es que Sasetru estuvo abandonada por los capitalistas durante 19 años. La ocuparon ex trabajadores de la empresa y desocupados. ¿Estos últimos tendrían menos derecho a trabajar que los otros? El Polo Obrero puso el cuerpo en defensa de Lavalán, al igual que con Chilavert, Clínica Junín, Halac, Brukman y tantas otras empresas en lucha. No ocurrió lo mismo con Caro y Cía. Su presencia para "robar cámara" no estuvo acompañada por el movimiento que él dice representar. Su esposa, Liliana, concejal justicialista de Avellaneda, se retiró de la sesión junto a su bloque para no votar la expropiación de Sasetru mientras 786 policías reprimían a los trabajadores. En la nutrida lista de firmas en apoyo a la expropiación de Sasetru y el reingreso de los trabajadores a la planta, no figuró la de Caro ni tampoco la de su querida esposa.

Sasetru viene sufriendo el sabotaje oficial y es víctima de un ahogo económico. Las diversas reparticiones públicas, tanto de Nación como de provincia, vienen dando largas al asunto, bicicleteando todo tipo de compromiso, pese a que se les ha hecho entrega y hasta en demasía de la documentación que solicitaban. También aquí está presente el chantaje. La entrega de fondos podría destrabarse (como han deslizado más de una vez algunos funcionarios) si hubiera un cambio de conducta hacia el gobierno. Cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta, entonces, hacia dónde apunta al latiguillo de la "politización" e "injerencia partidaria" en Sasetru. Este anatema que Caro repite hasta el hartazgo coincide con la propia campaña nacida en las usinas gubernamentales. El mensaje es claro: apartar de la conducción de Sasetru al Polo Obrero. Este operativo fue puesto en marcha a través de una suerte de golpe de Estado en virtud

del cual un sector minoritario de la fábrica, que manejaba los resortes legales de la cooperativa y que se prestó a esta maniobra gubernamental, pretendió adueñarse de la Cooperativa y echar a los miembros del Polo Obrero que integran la dirección legal de la misma. El Inaes (organismo gubernamental que controla las cooperativas) estuvo presente en este proceso en carácter de veedor (ver Capítulo sobre Sasetru).

El papel del Inaes

El Inaes no es un organismo neutral.

El Inaes se ha tratado de meter en el proceso de recuperación de empresas ocupadas. No precisamente en la lucha, donde el Inaes ha brillado por su ausencia, sino a la hora de coparlas. Hasta el punto que ha conformado a mediados del año pasado una sección especial: la UEREC (Unidad Ejecutora de Recuperación de Empresas en Crisis).

La función de la nueva unidad —tal como detalla uno de los documentos oficiales del Inaes— es el "acompañamiento de las cooperativas, desde lo administrativo, técnico y legal", pero advirtiendo que "en varias oportunidades no se han respetado los lineamientos básicos y se ha utilizado en beneficio de pocos el esfuerzo de muchos, generando un pseudo-movimiento (sic) que se ha desarrollado como inorgánico (sic), permeable a proyectos políticos partidarios (sic) y dependientes de soluciones mágicas (sic) que no se fundan en una cultura real de trabajo (sic)". El texto abunda en esta línea: la nueva unidad debe orientarse a "buscar soluciones jurídicas viables, no generar falsas expectativas, proteger verdaderamente los intereses de los trabajadores y proponer y/o exigir a los gobernantes medidas de apoyo desde la seriedad y la responsabilidad, desde la cultura de la educación y del trabajo, y no desde el caos callejero y el hostigamiento que no son ámbitos adecuados para la constitución de una cooperativa de trabajo".

El mecanismo seguido por el Inaes —continúa— "implica una evaluación de cada emprendimiento, y se desarrolla por fuera de una

moda que evidencia un fenómeno mediático y político, y no un sensato proyecto cooperativo que implique un crecimiento para la economía social en su conjunto: asumiendo un afán de disciplina que implica el seguimiento de cada proyecto en cuestiones técnicas, acompañadas de la adopción de antipáticas actitudes antidemagógicas, significa aportar desde este organismo la posibilidad de dar una respuesta de coherencia y de certidumbre frente a posturas coyunturales y demagógicas”.

Más adelante, agrega: “Existe conciencia clara que el movimiento cooperativo no representa a ningún partido político, sino que por el contrario está vedado a las cooperativas la politización de los emprendimientos”. El Inaes falta a la verdad, porque el cooperativismo nació por impulso del movimiento obrero socialista.

La lectura de estos párrafos aleja cualquier duda acerca de la autoría de la campaña contra “la politización de Sasetru”. Las “soluciones mágicas” que cuestiona el documento, serían los reclamos de subsidios y auxilio económico al Estado por los que se vienen movilizándose Sasetru y otras empresas vaciadas y ocupadas por sus obreros. El documento rinde culto a una “cultura de trabajo”, que es el eufemismo para la autoexplotación y la autoprivación de los propios trabajadores de las fábricas recuperadas y bajo gestión obrera. Caro y Cía andan publicitando que los trabajadores deben sacar a flote a la empresa “a pan y agua”.

El documento oficial del Inaes no deja lugar a dudas sobre el sentido y la dirección social de este proceso. “¿Tienen quienes constituyen una cooperativa de trabajo —se interroga el Inaes— la voluntad de transformarse en empresarios y en propietarios de la empresa que intentan recuperar?” El Inaes aboga por este “cambio de mentalidad”, de modo tal de “dejar la pasiva postura (sic) de trabajador asalariado”. Está claro que el Inaes alienta la sustitución de los trabajadores que arrancaron las expropiaciones de empresas, por los patrones —los viejos o nuevos. Es la consigna para vaciar el contenido transformador de las fábricas ocupadas bajo control y gestión obrera, y reciclarlas a Pymes. Estamos ante una política de copamiento de estas empresas por parte de grupos e inversores capitalistas.

Consecuentemente con esta orientación, el Inaes está tratando de tener cada vez una mayor tutela sobre las fábricas recuperadas. La nueva reglamentación dispuesta recientemente por este organismo establece una impresionante regimentación sobre las gestiones obreras. Nos estamos refiriendo a la resolución 2037/03 del 8 de septiembre de 2003, es decir, ya en plena gestión kirchnerista. En este caso, el gobierno actual no puede aducir que se trata de una herencia del pasado. Esto corresponde a su propia cosecha y la cuestión no es menor pues ninguno de sus antecesores se atrevió a ir tan lejos en la materia.

El Inaes se reserva para sí el derecho de participar en la constitución de las cooperativas (los que deberán comunicar a ese organismo la realización de su asamblea constitutiva con 15 días de anticipación) y de examinar los proyectos productivos y hasta de vetarlos y no otorgar la personería, si considera que los proyectos no son viables. Al mismo tiempo, la nueva disposición establece una injerencia permanente de ese organismo en la vida de la fábrica, condicionando las decisiones soberanas de las asociaciones que formen los trabajadores.

El anexo a la resolución hace una puntillosa enumeración de las pautas y disposiciones que están obligados a seguir las flamantes cooperativas:

“1°. Con carácter previo a la iniciación del trámite, los futuros asociados fundadores de una cooperativa o una mutual deberán asistir a un curso de información y capacitación sobre el tipo de entidad que desean constituir”.

“2°. Las asambleas constitutivas de cooperativas y mutuales deberán ser comunicadas al Inaes o al órgano local competente según la jurisdicción del domicilio legal que se prevea establecer, con quince (15) días de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Esa comunicación deberá ser remitida por él o los iniciadores, informando el lugar de realización de la asamblea y fijando un domicilio especial en la respectiva jurisdicción para el intercambio de información.

“3°. El Inaes podrá, cuando lo considere conveniente, designar a un funcionario para que asista a la asamblea constitutiva a los fines

de contribuir a proporcionar la mayor información y asesoramiento al grupo convocado, y efectuar, si así fuere requerido, las certificaciones de firmas que fueren necesarias.

“4°. Las planillas de asistencia al curso mencionado en el inciso 1°, con los nombres y firmas de los asistentes, serán incorporadas al expediente de solicitud de autorización para funcionar e inscripción de la entidad respectiva.

“5°. La Secretaría de Desarrollo y Promoción tendrá a su cargo la ejecución de las medidas dispuestas en los incisos precedentes, a cuyo efecto podrá requerir la colaboración de funcionarios que se desempeñen en otras áreas o unidades del Organismo, y efectuará una evaluación sobre la viabilidad de la personería jurídica solicitada.

“6°. En las solicitudes de otorgamiento de personería jurídica de cooperativas o mutuales que fijaren su domicilio en jurisdicciones provinciales, se requerirá también a los órganos locales competentes de las provincias un informe sobre su viabilidad y eventual participación en el asesoramiento o capacitación de los asociados fundadores”.

Leyes de expropiación y ley de quiebras

Este trabajo no puede soslayar un análisis de las leyes de expropiación que fueron aprobadas en las legislaturas en estos tres últimos años.

Las leyes de expropiación en Capital: Ghelco, Chilavert, Grissinópolis, Clínica Medrano

La Legislatura porteña hizo su debut en la materia aprobando la expropiación de Ghelco y Chilavert. Importa destacar que previamente al ingreso de estos dos proyectos, Jorge Altamira ya había presentado el primer proyecto de expropiación, aprobado en una Asamblea de fábrica. Nos refererimos al proyecto de expropiación de Brukman, cuyo contenido era diametralmente opuesto a los de Ghelco y Chilavert. Esto es lo que explica que, a pesar de estar primero en el orden de entradas, se haya alterado ese orden y privilegiado el tratamiento de los dos proyectos nombrados mientras se procedía a cajar el proyecto de Brukman.

Las leyes de Ghelco y Chilavert tuvieron en su momento una gran repercusión mediática. *Página/12* le dedicó la tapa y puso un título sugestivo: “La clase obrera va camino al paraíso”

Los proyectos de expropiación aprobados, al declarar los activos de “utilidad pública” evitan el remate de los bienes de estas fábricas, que se practicaría como resultado de la quiebra, y frenan el riesgo de un desalojo, que pendía como una amenaza sobre las espaldas de los trabajadores. Pero más allá de ese hecho, ¿ofrecen las leyes en cuestión una salida a las necesidades que se le plantea a la nascente gestión obrera? ¿En qué situación se encontraban las fábricas luego de la sanción de las leyes?

Los trabajadores no son dueños de los activos de las plantas. Los inmuebles están sujetos a su “ocupación transitoria”, es decir, siguen en manos de sus antiguos propietarios o acreedores, bajo el arbitrio del juez y del síndico, quienes administran el juicio de quiebra. En el caso

de Grissinópolis, la limitación es mayor puesto que la "ocupación transitoria" se extiende también a las maquinarias. El Gobierno de la Ciudad está obligado a pagar un alquiler a los dueños y acreedores. Vencido el plazo de dos años de "ocupación transitoria", los dueños pasan a disponer nuevamente del bien y pueden destinarlo al uso que se les antoje. Estamos en presencia de una sentencia a plazo fijo. Los trabajadores son colocados entre la espada y la pared, y están forzados, si quieren continuar con sus actividades, a comprar el inmueble —o a renegociar el contrato de alquiler— en las condiciones de mercado (en el caso de Grissinópolis se agregan las máquinas). Bajo estas condiciones, los trabajadores pierden por partida doble: pierden, por un lado, al no cobrar sus indemnizaciones y salarios adeudados, y pierden nuevamente al abonarle a la patronal o sus acreedores el valor del bien, asumiendo el pago de sus propios bolsillos, ya sea capitalizando los créditos laborales provenientes del juicio de quiebra o cediendo los fondos que hayan logrado acumular en la nueva etapa bajo la gestión obrera. En definitiva, el esfuerzo obrero va a parar a rescatar al capital en quiebra.

Las leyes de expropiación aprobadas plantean, pasados los dos años, otorgarle "prioridad" a la cooperativa para la compra del inmueble; pero esto no es más que una expresión de deseos, pues para efectivizar dicha prioridad haría falta una ley especial que, encima, requiere un intrincado proceso parlamentario y una votación favorable de dos tercios de los miembros de la Legislatura.

Aun en el caso de Ghelco y Chilavert, los trabajadores tampoco son dueños de las maquinarias. Estas y otros activos (marcas, insumos, etc.), con excepción de los inmuebles, pasan a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad, quien, a su turno, los cede en comodato a los trabajadores. Asistimos a una suerte de "estatización" muy curiosa y peculiar, pues el Estado no asume esa condición cuando se trata de asegurar los salarios y condiciones laborales. Los activos son "estatales", pero no los obreros que trabajan en ellos. La excepción es Clínica Medrano, la cual viene de obtener un triunfo, pues el inmueble y los bienes muebles que formaban parte de ella, "serán destinados al funcionamiento de un efector de salud integrado operativamente a la red prestacional de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res" (artículo 3) y su personal incorporado dentro de la planta permanente de la Ciudad. "Incorpórase a la planta de personal dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los miembros de la Cooperativa de Salud Medrano, quienes prestan tareas en el establecimiento de salud expropiado..." (artículo 5) y se agrega "en virtud de lo establecido en el artículo 5, los miembros de la Cooperativa tendrán un puntaje preferente para los concursos que se realicen en el futuro..." (artículo 6). Si bien los efectos de esta ley son acotados, pues se circunscribe a 25 trabajadores, no deja de tener su importancia, pues sienta un precedente valioso para incorporar en la agenda de las expropiaciones la necesidad de contemplar las remuneraciones de los trabajadores involucrados. Por otro lado, aunque el tema no ha sido suficientemente mencionado, la integración de la clínica al sistema sanitario de la Ciudad traerá aparejado la desaparición de la gestión obrera independiente de la misma, cuyo manejo pasará a manos del burócrata de turno designado por el Ejecutivo porteño.

De todos modos, Clínica Medrano es la excepción que confirma la regla. Las últimas expropiaciones (Brukman, Conforti) siguen el modelo de Ghelco, Chilavert y Grissinópolis.

Importa destacar que, en este aspecto, las leyes porteñas están por detrás de las de sus pares de la provincia de Buenos Aires, porque al menos éstas plantean la "donación" a los trabajadores de los bienes expropiados (incluido el inmueble). Al no ser dueños de sus medios de producción, las cooperativas porteñas de las plantas "expropiadas" no alcanzan ni siquiera la estatura de una "cooperativa de producción". Estamos frente a una cooperativa de "trabajo" pero inclusive, en este plano, corre con cierta desventaja con respecto a muchas cooperativas truchas (que encubren una relación de dependencia o constituyen una tercerización encubierta, pues al menos, estas últimas cuentan con un patrón que asegura el suministro de los insumos o adelanta los fondos necesarios para producir). Los trabajadores de las fábricas expropiadas se encuentran, por el contrario, abandonados a su propia suerte: no son propietarios de nada, no tienen asegurado un salario a fin de mes, aunque sea mínimo, y encima de todo, carecen de capital de trabajo.

Bajo estas condiciones, a nadie se le puede escapar que estas leyes lo único que hacen es "patear la pelota para adelante", cuestión que fue expresamente admitida por distintos diputados al momento de respaldar ambos proyectos.

La ausencia de capital de trabajo fue señalada insistentemente en todos los Encuentros (de "empresas recuperadas"), como uno de los principales responsables de las penurias que venían atravesando las cooperativas. Esa ausencia de fondos abre el peligro para los trabajadores, de terminar como rehenes de algún grupo capitalista, quien adelanta los fondos y bajo esa circunstancia, en su calidad de principal proveedor y cliente, pasa a ejercer una influencia gravitante en las decisiones de la empresa. La otra variante es que la gestión obrera termine fundiéndose, como ha pasado con tantas experiencias cooperativas en el pasado.

El hecho de suprimir la distribución de dividendos y erradicar los sueldos siderales de directores, gerentes y personal jerárquico, todos ellos atributos de la gestión obrera, es un indicador de la superioridad de los métodos de la organización de la clase obrera frente al derroche patronal. Pero esto solo no alcanza para revertir el ahogo y las penurias con que tropiezan las cooperativas. Tampoco puede resolver el problema de la autoexplotación a la que muchas veces recurren desesperadamente los trabajadores, sacrificando sus propios salarios y su salud, para intentar reunir los fondos necesarios que hagan posible la continuidad de la producción. La lucha actual plantea arrancar el auxilio estatal, capaz de sostener la gestión obrera y enfrentar la fuerza superior del capital.

Sasetru y las expropiaciones provinciales

La sanción del proyecto de expropiación de Sasetru por parte de la Legislatura bonaerense fue el resultado de una firme y perseverante movilización que comenzó el mismo día del desalojo policial (ver capítulo "La expropiación de Sasetru").

Los trabajadores organizados en la Cooperativa presentaron un proyecto que planteaba la efectivización de la expropiación por parte

del Poder Ejecutivo en un plazo de 30 días; la entrega gratuita de los bienes expropiados a la gestión obrera; un auxilio económico del Estado en carácter de subsidio no reintegrable para poner a funcionar la fábrica; que "Sasetru Gestión Obrera" fuera proveedor privilegiado del Estado y que se destinaran los alimentos producidos por la planta a la asistencia masiva de los barrios y sectores más carenciados de la provincia. El proyecto que pergeñaron los legisladores suprime todos estos puntos.

La ley declara de "utilidad pública y sujetos a expropiación" los tres lotes donde está asentada la fábrica de pastas secas y la totalidad de las instalaciones y maquinarias que están en su interior. También declara la "urgencia" del trámite expropiatorio, con lo cual facilita las acciones dirigidas a tomar posesión del bien. Pero la expropiación, como viene ocurriendo con las varias decenas de leyes aprobadas en la última etapa, es a "título oneroso", es decir, la Cooperativa (ni siquiera el Estado) debe hacerse cargo de pagar la indemnización que se fije a los dueños.

La sanción es, de todos modos, un triunfo, a pesar de los reparos, porque fuerza la reapertura de la planta y el ingreso de los trabajadores, al invertir la fórmula y usar el poder de coerción, que normalmente se aplica contra los trabajadores, para reincorporar compulsivamente a todos los compañeros que fueron desalojados. Al gobernador Solá no se le escapó este significado, cuando salió con los tapones de punta, al principio, amenazando vetar la ley, aun en la versión reformulada por los senadores.

Este hecho no nos puede hacer perder de vista que lo que la ley dispone sigue en contradicción con las necesidades de los trabajadores. La Cooperativa tendrá que pagarle a Molisur —la empresa satélite de Molinos que mantuvo inactiva la planta durante 20 años—, una compensación económica por los bienes expropiados.

La reconstrucción de una empresa como Sasetru es mucho más complicada que la de cualquiera de las otras empresas recuperadas, cuyas instalaciones estaban operativas al momento de sancionarse las expropiaciones respectivas, y cuyos trabajadores, por otra parte, estaban familiarizados con las diferentes tareas y procesos de producción que venían desempeñando. Encima del esfuerzo gigantesco que ten-

drán por delante los trabajadores de Sasetru, parte de ese esfuerzo irá dirigido a los bolsillos de los vaciadores.

La Cooperativa quedaría sometida a la espada de Damócles del "incumplimiento del cargo (léase el pago de la indemnización) (lo cual) ocasionará la revocatoria del dominio a favor del Estado provincial, sin derecho a devolución de las sumas que se hubieran efectivizado, ni reconocimiento de compensaciones y/o indemnizaciones de ninguna naturaleza" (artículo 3 de la ley aprobada). Esta limitación significa, de todos modos, que la cooperativización se transformaría en una estatización. O sea que seguiríamos en el contexto de una conquista obrera.

Aunque la provincia sigue aprobando proyectos de expropiación, éstos son cada vez más recortados en sus alcances. El modelo en que se inspiró el proyecto de Sasetru está parcialmente por detrás, inclusive, de los que viene aprobando la Legislatura porteña, que contemplan alguna forma de comodato (uso gratuito), para no hablar de la distancia que lo separa de los primeros proyectos provinciales que planteaban la entrega gratuita de los bienes expropiados a los trabajadores, bajo la forma de donación. El modelo de "expropiación" actual, en cambio, vincula el acto de expropiación a la cesión y venta de los bienes expropiados a la cooperativa. Estamos en presencia de dos operaciones simultáneas que terminan haciendo recaer enteramente el peso económico del traspaso sobre los hombros de los trabajadores.

Las indemnizaciones previstas en las leyes provinciales (tanto las actuales como las anteriores, en este punto, no hay cambios) constituyen un colosal resarcimiento económico a la patronal vaciadora.

El artículo 10 de la Ley Provincial determina que: "La indemnización sólo comprenderá el valor del objeto del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir el bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante". Por otro lado la indemnización "debe pagar el 'justo precio' (el valor fiscal) al expropiado, determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Como vamos a ver, en muchos casos el valor fiscal es muy superior al valor del remate (este ronda el 30% del anterior), por lo que la expropiación puede

terminar siendo un buen negocio para el expropiado y un punto a analizar por parte de los trabajadores que la solicitan".

Un ejemplo que viene al caso pues se repite en todas las empresas es el de Forja (ley de la provincia de Buenos Aires, 13.076): "El valor fiscal de la fábrica es de 2 millones de pesos, mientras que el precio de remate es de 419.000 pesos. El Estado tiene dos años para pagar el valor fiscal a los acreedores. En caso de que el dueño no esté desapoderado, éste junto con el síndico pueden manejar los fondos, algo bastante peligroso teniendo en cuenta que el dueño llevó a la quiebra a esa empresa...". La conclusión salta a la vista: "En los casos en que hay una expropiación definitiva, la indemnización que se paga al dueño o a la quiebra puede resultar en un excelente negocio".

Pero lo más grave es que las leyes, aun en los términos recortados que denunciamos, no se están efectivizando "...el Estado no paga realmente las indemnizaciones y ni siquiera se puede establecer el valor fiscal del bien".

Las expropiaciones, tal como lo denuncia el representante de la cooperativa Forja, "se están haciendo hoy sin presupuesto, entonces la Fiscalía recibe el expediente para que tase la fábrica. Le pide un informe al Ministerio de Economía sobre las partidas disponibles para el pago de tal expropiación. El ministerio dice: 'No hay presupuesto'. La Fiscalía dice 'No se puede tasar'. Esto es así porque el valor fiscal no es permanente. Este desbarajuste burocrático hace que sea muy difícil hacerse de la escritura. En Forja hemos logrado una ley que dice hasta la forma de pago y el tiempo, cosa que no estaba en otras leyes.

Bruckman

El jueves 30 de octubre de 2003, la Legislatura porteña aprobó la expropiación parcial de la fábrica Bruckman y su entrega a la cooperativa integrada por los trabajadores. La ley fue aprobada luego de un largo año y medio de dilaciones para que la patronal pudiera retomar la fá-

¹ El cambio silencioso, Mognani, ed. Prometea pág 99.

² Idem

³ Idem

brica. Tras ese objetivo estuvieron también el violento desalojo de abril del 2003 y la permanente postergación judicial de la quiebra. La lucha obrera, aun desde afuera de la fábrica, quebró estos intentos de salvataje patronal y forzó a la Legislatura a tratar la expropiación; ésta no se produjo —como lo presentaron los diputados patronales— por haber alcanzado “los consensos necesarios”. En realidad, el “consenso” para aprobar la ley tuvo otros propósitos: establece una “ocupación temporaria” del inmueble de la calle Jujuy y una expropiación que sólo cubre el 40% del valor de las máquinas. Terminado el plazo de dos años, la cooperativa de trabajadores deberá afrontar la compra del inmueble y de las máquinas. Además, el PJ y Fuerza Porteña condicionaron su voto a la aprobación de un artículo que obliga a los trabajadores a incorporar a la cooperativa “a aquellos ex empleados de Brukman que así lo soliciten”. De este modo, se habilita una modificación de la composición de la cooperativa con elementos afines a la ex patronal y a punteros oficiales que están en la tarea de copar la dirección de las “fábricas recuperadas”. La introducción de esta cláusula fue el resultado de una negociación sigilosa, a partir de la activa participación del abogado Luis Caro, y del presidente del bloque del PJ, Santiago de Estrada. Apenas veinticuatro horas antes del día previsto para tratar el proyecto, los trabajadores fueron citados a una reunión oficiosa, con la participación de De Estrada y Caro, pero también de la diputada Moresi, presidenta de la Comisión de Presupuesto y representante directa de Ibarra dentro de la Legislatura; allí fueron conminados a aceptar ese proyecto de ley “consensuado”. En su intervención —cuyos aspectos fundamentales reproducimos a en el anexo de esta obra—, Altmira denunció esta maniobra y reclamó la derogación de esta cláusula. La fuerza de esta denuncia y el apoyo evidente de los trabajadores presentes en la sesión, estuvo a punto de colocar en crisis el “consenso” trucho, al punto que los legisladores macristas propusieron una “modificación” que resultó ser puramente cosmética. Pero la denuncia de esta extorsión y del propósito de confiscar la gestión obrera calaron hondamente en los trabajadores presentes. Lo revela la consigna que encabezó el festejo posterior a la sanción de la ley: “Brukman es de los obreros y no de los carneros”.

Las leyes de expropiación, ¡más truchas todavía!

La seguidilla de leyes de expropiación —aun en sus términos actuales— ha despertado la oposición de importantes sectores de la burguesía. *La Nación* y por supuesto, el infaltable *Ambito Financiero*, vienen realizando una campaña sistemática para que se ponga fin a lo que denominan un sacrilegio a la “propiedad privada”. Con independencia de las limitaciones de estas leyes, de lo cual estos voceros son más conscientes que nadie, lo que impulsa esta campaña es el principio y el antecedente que queda sentado respecto a una cuestión tan estratégica como son los derechos de propiedad (no se escandalizan, por supuesto, con la expropiación que sufren todos los días millones de argentinos con respecto a sus salarios, sus ahorros, su vivienda o su jubilación —es decir, con la “propiedad privada” pero... de los explotados—).

Esta campaña, como era de esperar, cuenta con el acompañamiento de juristas y constitucionalistas, que han aparecido en escena para darle un respaldo legal al cuestionamiento. La figura de “utilidad pública” que se utiliza a la hora de expropiar, por ejemplo, terrenos afectados a la traza de una autopista pues representarían un “interés general”, no sería válida para expropiar una fábrica pues los beneficios de esa medida quedarían reducidos a un... “grupo de trabajadores” o, en el mejor de los casos, “también a los que los rodean”.

El análisis de estos juristas es revelador, si cabía alguna duda, sobre la naturaleza de clase del sistema jurídico, el cual, dicho sea de paso, tiene como característica principal beneficiar a un grupo reducido de personas (la clase capitalista), en detrimento y a expensas del interés general. Cuando por excepción, estas mismas leyes son utilizadas por los trabajadores, para arrancar alguna conquista, se pone el grito en el cielo porque... se estaría favoreciendo el “interés particular” y no el “interés general”. Es decir, la ecuación se invierte cuando se trata del interés y las necesidades de los explotados.

La campaña por poner un límite a las expropiaciones que se venían aprobando en las legislaturas surtió su efecto. Las anteriores autoridades de la Legislatura porteña elaboraron, a mediados del 2002, un proyecto de convenio con el Colegio Público de Abogados a fin de llevar

adelante un proceso de "mediación" entre dos o más partes, cuando en un proyecto legislativo se encuentre cuestionado "el derecho de propiedad". Esta iniciativa es producto de un proyecto de la diputada de derecha, Marta Oyhanarte. "Esta nueva iniciativa servirá de alternativa para aquellos casos en los que esté pedida la expropiación de los inmuebles o bienes muebles, aunque sea como un paso previo". Si bien el proyecto no se aprobó, nos da una pista de la dirección que van tomando los acontecimientos.

La mediación, tortuosa y prolongada, le viene como anillo al dedo a los legisladores patronales para sacarse la presión de los trabajadores, mantener en la congeladora los proyectos y patear para adelante cualquier definición. Importa destacar que, en el intervalo que dura la mediación, el proceso judicial de quiebra o el concurso preventivo al que estuviera sometido la empresa no se interrumpe, con lo cual sigue en pie la posibilidad de que se liquide la sociedad comercial y se proceda al remate de sus bienes. En otras palabras, la mediación "frena" las demandas de los trabajadores pero no las de la patronal ni los acreedores.

Por lo pronto, Ibarra dio una señal muy clara al vetar la modificación de la ley de expropiación, aprobada por la Legislatura, relativa al pago de las indemnizaciones en moneda de quiebra. ¿Qué significa este veto? Que hay que pagarle a los vaciadores más allá de lo que dicta el mercado. En este caso, Ibarra optó por violentar las leyes del mercado por la sencilla razón de que a los empresarios y a los capitalistas, no les convienen las leyes de mercado en una quiebra. Este acto de trasgresión al mercado no es una señal precisamente progresista sino de hasta donde llegan las ataduras del gobierno porteño con el capital.

En la misma sintonía, la Legislatura bonaerense ha introducido modificaciones a las leyes de expropiación totalmente a contramano de las necesidades de los trabajadores (un ejemplo de ello es la ley de expropiación de Sasetru, comentada más arriba). En lugar de la "donación" de los bienes expropiados, tal como lo expresaron las primeras leyes de expropiación, las nuevas leyes plantean su entrega "a título oneroso" y por "venta directa". Es decir que los trabajadores deben adquirir los activos, o sea rescatar a la patronal. En las primeras leyes de expropiación esto

ocurría igual, pero luego de dos años de sancionada la ley y en la medida en que el Estado no consumara la expropiación. El nuevo texto institucionaliza este proceso fraudulento, que coloca una valla infranqueable para la recuperación de las fábricas en manos de los trabajadores.

Reforma de la Ley de Quiebras

Este giro que se está registrando en materia legal, tiene en la reforma de la Ley de Quiebras uno de sus epicentros. El gobierno estaría estudiando una modificación de la normativa legal vigente. Esa iniciativa fue anunciada por el ministro Tomada en los últimos encuentros realizados por los dos movimientos de empresas recuperadas en Rosario y en La Plata, organizados por Luis Caro y por Eduardo Murúa, respectivamente. A través de ese anuncio se daría satisfacción a uno de los reclamos fundamentales que vienen realizando ambos nucleamientos.

¿Pero constituye esa reforma una salida para las fábricas vaciadas y ocupadas por sus trabajadores?

El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, ha elaborado un proyecto que ha elevado al Congreso y al Poder Ejecutivo. La existencia de un proyecto nos permite analizar con otra amplitud sus características y lineamientos.

A los trabajadores se les facilitarían los medios legales para que se hagan cargo de la continuidad de la empresa. Pero bajo esa nueva figura, los trabajadores siguen atados a la quiebra, bajo el arbitrio del juez y a merced de los acreedores.

"Transformar en una posibilidad ordinaria la continuidad empresarial en casos de quiebra, siempre que los trabajadores así lo soliciten al juez interviniente, presentando para ello el correspondiente plan de inversión y continuidad. En la legislación actual, la continuidad sólo está contemplada como un régimen excepcional". Se trata, como bien lo destaca el comentario de una versión aggiornada, de las actuales "quiebras con continuidad."

Es decir, una variación de la legislación ya vigente, pero con un alcance más generalizado.

⁴Noticias Urbanas, 6 de diciembre de 2002.

⁵Página/12, 4 de noviembre de 2003.

Los trabajadores administran el activo pero sin liberarse de las deudas. La patronal vaciadora (como ocurrió con Yaguané, cuyo dueño era el conocido empresario menemista Samid) se desembaraza de la carga de la deuda y se la traslada a sus propios trabajadores, que pasan a cargar al muerto sobre sus hombros.

El "plan de inversión y continuidad" al que se hace referencia, se dirige a pagarle a los acreedores (léase bancos, financieras, proveedores comerciales). Como ocurre con cualquier juicio de quiebra, cuya función fundamental es velar por el pago de las deudas. La diferencia es que, en ese caso, la propia cooperativa de trabajadores es quien pasa a oficiar de administrador judicial. "El proyecto propone establecer un plazo mínimo de continuidad —un año contable o un ciclo productivo— quedando la administración en manos de la cooperativa bajo control del juez interviniente"⁶.

Pasado ese plazo, comienza el proceso de adjudicación. La reforma le otorgaría prioridad a los trabajadores para quedarse con la empresa. Pero no se trata de ningún regalo, pues se le otorgaría esa "prioridad" (lo cual no es un detalle menor) siempre que "igualen la tasación" del patrimonio de la empresa, que como se sabe, se calcula con los parámetros del mercado.

Las cooperativas quedarían legitimadas a participar del *cramdown*. Esta es una figura introducida en la última modificación de la Ley de Quiebras, que posibilita que los acreedores se queden con la empresa antes que el juez decreta la quiebra. En otras palabras, los trabajadores quedarían enredados en este mecanismo patronal, que es un campo ideal para toda clase de maniobras espurias y especulativas, pasando a revestir la condición de un *cramdist* más y en competencia con los restantes inversores interesados. Esto en caso de que los trabajadores tomen la decisión de hacerse cargo de ella.

Pero además, aun dejando de lado todas estas consideraciones, si aun así los trabajadores optaran por ese camino, deberán en primer lugar, capitalizar la deuda laboral. Es decir, comprar los bienes con las sumas que los antiguos dueños les adeuden en concepto de salarios atrasados e indemnizaciones. La reforma reconocería los créditos laborales al 100 por ciento cuando en la actualidad sólo se les reconoce la

⁶Idem.

mitad. Pero aun con ese beneficio y todo, eso no desmiente el hecho de que los trabajadores deben resignar una retribución amasada luego de años de sacrificios. Y lo que es más grave todavía, deberán seguir aportando económicamente una vez que pongan nuevamente en marcha la producción, aun a expensas, si hiciera falta, de su propio salario.

En resumen, en lugar de rematarse los bienes a moneda de quiebra, los terminan comprando los propios trabajadores pero a valores de mercado. Esto representa un colosal rescate del capital en quiebra, el que termina recibiendo un resarcimiento económico sideral e impensado. El esfuerzo obrero termina yendo a parar al bolsillo de la patronal vaciadora y de sus acreedores.

Luego de lo expuesto, no tiene un gramo de exageración afirmar que esta reforma está por detrás, inclusive de las propias leyes de expropiación truchas. Al menos, en estas últimas, aunque sea en forma declarativa, se les transfieren los bienes de las empresas pero no las deudas contraídas por sus antiguos dueños con sus acreedores.

Si se examina con detenimiento todo este dispositivo legal, no es aventurado decir que una de las consecuencias de la reforma de la Ley de Quiebras será... aumentar el número de quiebras, por supuesto, fraudulentas. Las patronales en crisis y no tan en crisis se verán tentadas a proceder al vaciamiento de las empresas —o apresurar esa decisión—, es decir, a dejar de pagar ante la mínima dificultad o tropiezo económico, a sus proveedores y en particular a su propio personal. Sabiendo, que puede desembarazarse del muerto y enchufárselas a sus trabajadores, quienes deberán asumir sobre sus hombros la reconstrucción de la empresa.

Ni hablemos de la manipulación política que introduce. Con el argumento de que lo que importa es lograr el traspaso de la fuente de producción a manos de los trabajadores, la reforma apunta a desactivar la resistencia obrera al vaciamiento empresarial y, por sobre todo, la lucha y la movilización para impedirlo. Luis Caro ha sido un adelantado de esta orientación, toda vez que frente a una empresa concursada terminaba haciendo lobby para precipitar la quiebra de la misma, cuando esa decisión judicial implica —y eso no se le escapa a nadie y menos aún a Caro— la coronación del vaciamiento. No es ocioso des-

tacar que a través de esta política péfida, se sacrifica toda lucha por el cobro de los salarios caídos y las indemnizaciones, disfrazado bajo el pretexto de que los créditos laborales impagos por la patronal, de todos modos, servirán para compensarlos a cuenta de la compra de la empresa.

La reforma a la Ley de Quiebras iría acompañada por la creación de "sociedades anónimas laborales." En el proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo, las cooperativas obreras pasarían a reconvertirse en esta nueva modalidad societaria. Esta nueva figura legal, facilita el traspaso de la titularidad del capital de una mano a la otra, y en esa medida, abre las puertas para el desembarco de capitales privados en las empresas recuperadas. Con la excusa de la falta de capital de trabajo —un problema apremiante para gran parte de las empresas bajo gestión obrera— se institucionaliza el ingreso de grupos capitalistas, quienes podrían meter su cuña suscribiendo acciones y terminando por adueñarse de la empresa, desplazando a los obreros y concentrando el paquete accionario, como ocurre habitualmente con las tradicionales sociedades anónimas. La nueva "asociación entre el capital y el trabajo" que se proclama desde los círculos gubernamentales no es más que una pantalla para una profunda colonización patronal de las fábricas bajo gestión obrera.

Este paquete apunta a encauzar y transformar al movimiento de fábricas recuperadas en una bisagra en el proceso de reconstrucción del proceso de quiebra empresaria, que irradia sobre el conjunto de la economía, sobre sus antiguas bases capitalistas. La reforma serviría para darle un canal "judicial" a los conflictos que se vayan planteando y descomprimir la presión que hoy se concentra en el poder político y sobre las legislaturas. Con esta nueva metodología "institucionalizada", se pondría fin a las expropiaciones, dando satisfacción a los reclamos de importantes sectores de la burguesía que vienen cuestionando este procedimiento. Las demandas de los trabajadores que enfrentan los vaciamientos y que son protagonistas de la ocupación de sus respectivas empresas, serán derivadas a la Justicia, donde quedarán sometidos y atrapados en la telaraña legal característica de esa institución.

La expropiación de Sasetru

El callejón empedrado nace en avenida Mitre y se prolonga hacia Villa Tranquila. Son diez cuadras pobladas por nadie, rodeadas por viejos fantasmas de piedra que alguna vez fueron fábricas.

Ahora, todo es herrumbre, vaciedad, murallones que parecen a punto de desplomarse sobre el que pasa.

Ahí, en esa callejuela, lagrimea el hombre de rostro curtido por todos los vientos.

—Mire lo que es esto, esta soledad ¿Sabe lo que era aquí hace 20 ó 30 años? A las cinco de la mañana, esto ya era un mundo de gente que iba y venía, hombres y mujeres, todos con el bolsito del trabajo. Ahora no dejaron nada, compañero, nada de nada...

¿Quiénes no dejaron nada? Los dueños o ex dueños de esos galpones umbrosos donde antes la Argentina producía. Ellos, los vaciadores, los que arrojaron quién sabe dónde a la gente que iba y venía con sus bolsitos. Algunos habrán ido a parar a la villa de ahí cerquita, donde la comisaría 1ª de Avellaneda hizo sus arreglos con los malandras y el vecindario tiene que aguantarse, de tanto en tanto, las pateaduras de puertas del grupo Halcón de la Bonarense, siempre con cámaras cerca, para mostrar que hacen "procedimientos".

—¿Qué procedimientos? —dice un vecino—. Acá, cuando hay allanamientos, los de la "pesada" ya saben, por lo menos desde el día anterior, porque vienen los patrulleros a avisarles. Y a nosotros, a los cartoneros, a los que laburamos como podemos, nos patean la puerta del rancho, nos rompen todo, señor...

Pero no iba a ser así siempre. Mucha historia de pelea tiene el pueblo trabajador argentino, especialmente en esa zona del sur del Gran Buenos Aires. No es gente que vaya a tolerar demasiado tiempo que le siembren hinojos en la espalda.

Y un día de esos, de casi 40° de sensación térmica, pasó lo que, más temprano que tarde, tenía inevitablemente que pasar.

Jueves 30 de enero de 2003

Fue, tal vez, una de las mayores operaciones de inteligencia de masas en décadas, preparada durante meses por ex trabajadores de Sasetru y vecinos de la zona.

En Sarandí, en el cruce de camino General Belgrano y Madariaga, sobre el límite entre Avellaneda y Lanús, la docena de hectáreas donde hace dos décadas funcionaba Sasetru, uno de los monopolios alimentarios más grandes de América Latina, sólo muestra ahora pastizales, ratas y, donde antes estuvo la fábrica, un edificio ruinoso con las viejas máquinas herrumbradas aún allí. Veinte años antes, dos mil obreros trabajaban en el lugar y casi veinte mil más encontraban sustento en la cadena de transportes, distribución y comercialización de ese pulpo. De aquel sitio salían aceites, harinas, cereales, pastas, conservas y toda una línea de productos que, como el trabajo de los compañeros, se esfumó con el vaciamiento y el cierre de la empresa. La mayoría de los trabajadores ni siquiera cobró su indemnización y diversos grupos mafiosos, como los Trozzo y hasta el *Opus Dei*, encontraron en el desastre una succulenta fuente de negocios y negociados. Alrededor de lo que había sido Sasetru, decenas de plantas industriales quedaron vacías, muertas como toda esa zona.

Y así quedó hasta las 10 de la mañana del 30 de enero de 2003, cuando cuatrocientos vecinos y ex trabajadores de Sasetru entraron en el predio al grito de "¡Piqueteros, carajo!". La guardia de seguridad no ofreció resistencia. Así, en columna, marcharon los compañeros desde el antiguo portón de ingreso hasta la planta abandonada, unos 150 metros.

Casi enseguida se hizo la primera asamblea. En ella hablaron, entre otros, Miguel Vittone, del Polo Obrero zona sur, y Néstor Pitrola, quien se había ido con ese propósito de una reunión con la entonces ministra Camaño. De inmediato se organizaron comisiones de prensa y difusión, de limpieza, de comida, de seguridad, de carteles y pintadas. Por la tarde, el "¡Piqueteros, carajo!" se multiplicó a la enésima, cuando llegó una columna de doscientos compañeros del Polo de Berazategui.

No tardaron mucho los funcionarios del Ministerio de Seguridad

de la provincia, junto con un grupo de comisarios, en aparecer por allí. Los señores pretendían hacer una inspección y labrar un acta, pero el intento les fue impedido por los compañeros, mientras se entregaba a la prensa copias de la nota, que ya se había hecho llegar al Municipio, para exigirle que procediera a incautar las maquinarias de modo que los ocupantes las pusieran a producir.

A esa altura, los problemas más elementales estaban resueltos: provisión de agua y electricidad, acondicionamiento precario del lugar para sostener la ocupación y comida preparada por vecinos de Villa Corina. Al anochecer, con simples herramientas de mano, los compañeros ya habían empezado a transformar el pastizal habitado por ratas en un sitio limpio, en un lugar de trabajo. Los pobladores de Villa Sapito, asentada frente a la planta, contribuían con pan, gaseosas y alimentos refrigerados, mientras más vecinos llegaban para informarse y empezaba el empadronamiento de ex trabajadores de la fábrica, vecinos de los barrios aledaños.

Al mismo tiempo, se distribuían en el vecindario cinco mil ejemplares de la primera declaración de los ocupantes. Los comerciantes pegaban el volante en las vidrieras, los vecinos contaban cómo era el barrio cuando Sasetru funcionaba y todos manifestaban su respaldo activo a la toma.

Entretanto, *Prensa Obrera* se vendía como pan caliente.

Así, en el periódico N° 789, Carlos Frigoli escribía: "La recuperación de la planta abre una perspectiva de alcances revolucionarios para el movimiento obrero y piquetero de la zona sur y de todo el país, porque lleva a la práctica una salida al desempleo y a las necesidades del conjunto de la población trabajadora, en un país donde hay 1.500 establecimientos fabriles cerrados para recuperar. Orienta más que mil discursos la acción que las masas deben emprender para recuperar el trabajo. Adicionalmente, salda definitivamente todos los debates y supuestas antinomias entre el movimiento obrero ocupado y desocupado... mostrando al movimiento piquetero como el único factor de recomposición social y política de la clase obrera argentina...".

¹Prensa Obrera N° 789, 7 de febrero de 2003.

La reapertura de las plantas que permanecen inactivas hace varios años ha pasado a ser patrimonio común del movimiento piquetero. El Bloque Piquetero, el Mijd y Barrios de Pie han encabezado este reclamo, planteando frente a las autoridades que se reabran diferentes fábricas y el auxilio del Estado a todas las empresas bajo gestión obrera, lo que concurrentemente con un plan de obras públicas permitiría absorber la mano de obra desocupada. Se incorporaba al pliego de reclamos, el listado de establecimientos de cada zona que permanecen inactivos y que podrían volver a entrar en actividad. Este reclamo constituía una vía de salida para centenares de miles de desocupados y termina por fusionar a trabajadores ocupados y desocupados en un único movimiento común de lucha por la defensa y recuperación de puestos genuinos de trabajo.

El movimiento piquetero no ha esperado el visto bueno oficial para llevar a la práctica este programa. La ocupación de Sasetru es indudablemente pionera en la materia. Hasta ahora, la recuperación de empresas estuvo limitada a empresas que venían funcionando o que habían dejado de hacerlo hace muy poco tiempo, y fueron los trabajadores que revestían como parte del plantel de la fábrica quienes tomaron la iniciativa de volver a hacerla producir. El impulso, en cambio, aquí nace desde "afuera". Ya no es obra de los directamente afectados, quienes, ante la amenaza de quedar en la calle, toman la determinación de tomar la fábrica y ponerla nuevamente a funcionar. Estamos en presencia de un salto extraordinario. La clase obrera no se circunscribe a defender los puestos de trabajo existentes, sino que toma la ofensiva por nuevos puestos de trabajo. No espera a que el Estado o algún sector de la clase capitalista los conceda, sino que toma en sus manos la tarea. En esto reside el enorme significado revolucionario de Sasetru, en la medida en que expresa la tendencia y disposición que anida en la clase obrera a reconstruir el país, bajo su liderazgo y sobre nuevas bases sociales.

La ocupación de Sasetru, por lo tanto, se inscribe en este proceso de maduración de la clase obrera, que tiene como exponentes al movimiento piquetero en general y al Polo Obrero en particular.

La ocupación de la planta no fue "un golpe de mano" o una acción

conspirativa, sino que expresa la voluntad de miles de explotados que habitan en la zona, quienes en múltiples asambleas, reuniones y corrillos venían reclamando una acción de esa naturaleza. No existe ningún misterio. No hay que bucear en otra parte para explicar por qué Sasetru se ha constituido en una causa inmensamente popular en Avellaneda y, en especial, en las barridas cercanas a la planta.

Doce hectáreas y diez mil metros cuadrados cubiertos en condiciones materiales, de higiene y habitabilidad peor que pésimas: transformar ese nido de ratas en un lugar de trabajo, en una atmósfera solidaria, de compañerismo, contrario al sistema fabril carcelario del capitalismo, fue la primera enorme victoria de los ocupantes de Sasetru. Las máquinas, después de tantos años, estaban todavía en condiciones de producir, después de algunas tareas menores de reacondicionamiento, salvo una caldera que debía ser reemplazada.

Por otra parte, no menos de la mitad de los compañeros, llegaban a la fábrica desde puntos ubicados a 15 kilómetros o más, de modo que se debió echar mano a la solidaridad de choferes, picaboletos y guardas, además de colectas internas y externas, y la combinación de tren y bicicleta. La organización, el ingenio y la voluntad superaron mil escollos para recuperar la fuente de trabajo.

Las guardias nocturnas, cubiertas básicamente por compañeros del Polo y del Partido Obrero, fueron una escuela de convivencia aun en el peor de los escenarios: el del agotamiento físico, el del sueño corto.

La solidaridad obrera estuvo presente en todos los momentos, desde las donaciones (200 litros de pintura, alimentos), hasta el asesoramiento técnico para la reparación de maquinarias, algunas obsoletas tras los avances técnicos de los últimos veinte años. Un cuadro de honor especial merecen los compañeros que donaron herramientas. Donaron, no prestaron, porque ellos sabían que en cualquier momento podía llegar el desalojo y, con él, la rapiña depredadora de los invasores.

El 11 de febrero, entre la lluvia y el barro, más de 500 compañeros de la zona sur del Gran Buenos Aires hicieron del playón de la fábrica un escenario conmovedor de solidaridad con los ocupantes.

Allí estuvieron compañeros de Lavalán, Supermercados San Cayetano, la CTD Aníbal Verón, la Interbarrial de Avellaneda y del Polo Obrero. En nombre de la dirección del Partido Obrero, Jorge Altamira subrayó que "con esta ocupación, no solamente estamos luchando por unos puestos de trabajo. Queremos demostrar que los trabajadores pueden hacer funcionar aquello que los capitalistas depredaron y vaciaron. Demostrar, en definitiva, que los trabajadores podemos gobernar".

Simultáneamente, una nota de la compañera Vanesa Jaramillo, obrera de Zanón y candidata a concejala neuquina por el Partido Obrero, informaba que la fábrica Cerámica del Valle, en Neuquén, cerrada por los patrones, había sido tomada por los trabajadores con el respaldo del sindicato ceramista local.

El 16 de marzo de 2003 llegó a la fábrica una inspección municipal con un ingeniero al frente, quien se mostró sorprendido por la alta solvencia de los compañeros de la Comisión Técnica. Mientras tanto, la responsabilidad del trabajo se distribuía en cinco comisiones para dejar a punto las instalaciones y poner en marcha el proceso de producción. Esas comisiones tuvieron siempre funcionamiento armónico, de debate apasionado, de compañerismo, de solidaridad, de lucha común por trabajo genuino.

Así se pudo establecer que, en no más de 60 días, la fábrica estaría en condiciones de producir varias toneladas diarias de pastas secas, que podrían proveer a comedores escolares y comunitarios, y a hospitales de la zona.

Transcurrieron cincuenta y cinco días de trabajo intenso. El edificio, otrora derruido, había empezaba a convertirse en un lugar de trabajo habitable. Lo que antes era vacuidad y herrumbre ahora estaba poblado, lleno de vida, de trabajo.

Entonces, mientras por un lado, el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobaba la expropiación; por otro, se hacía sentir la mano del pulpo Pérez Companc y del juez Eduardo Tubio, a cargo de la causa penal que este grupo económico hubo iniciado, para que a ese lugar volvieran la muerte y las ratas. Pero vamos por partes.

El proyecto de expropiación aprobado por el Concejo Deliberante

tenía profundas limitaciones. La expropiación quedaba circunscripta a bienes muebles y a maquinarias, y aun en ese caso resultaba ambigua porque la Municipalidad no se comprometía a financiar la operación siquiera en parte. Ese aspecto clave de la cuestión se dejaba en manos del Estado provincial y de la Nación —que no querían saber nada de Sasetru—, y de los fondos que pudieran aportar los propios trabajadores, quienes, al final del proceso, deberían reponer todo el dinero que el Estado hubiera adelantado a los ex propietarios... en concepto de indemnización por haber vaciado, despedido y cerrado. Esto es: los obreros echados sin indemnización, ahora tendrían que indemnizar ellos mismos a sus echadores. En otras palabras: como en el caso de todas las expropiaciones aprobadas, el esfuerzo obrero iría a parar al bolsillo de la patronal vaciadora. Una falacia completa, puesto que, aun en el contexto de la legislación burguesa, Sasetru tenía una deuda multimillonaria por impuestos municipales impagos, acumulados durante tantos años.

Ahora bien: aun esa ordenanza recortada, patronal, estuvo a punto de no salir, como indicaban las continuas dilaciones que se producían en su tratamiento y las exigencias técnicas, renovadas una y otra vez, que la Intendencia formulaba antes de decidirse a acompañar el proyecto. En otras palabras: la sanción de esa ordenanza, con todas sus limitaciones, fue producto de la movilización. El Concejo Deliberante se vio obligado a ceder ante la presión obrera.

En este punto, digamos al pasar que el Partido Justicialista se negó a votar la expropiación y se retiró del recinto. Entre los concejales que se fueron, estaba la esposa del riquista Luis Caro, del Movimiento de Fábricas Recuperadas. El justicialismo había tomado parte en la redacción del proyecto, pero, como queda dicho, a último momento decidió desertar, de modo que la ordenanza fue aprobada con apenas 13 votos sobre los 24 concejales que componen el cuerpo.

Los compañeros exigieron y forzaron la sanción de esa ley, aun como ella era, para tener al menos una herramienta legal más para defender la ocupación en ese plano, cuando ya se sabía que el desalojo policial era inminente.

Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Companc, es propieta-

ría de Molisur, una empresa satélite que en su momento compró la quiebra de Sasetru con el único propósito de impedir que se apropiara de ella algún grupo competidor; esto es, sin la menor intención de reabrirlo. Y ahí la dejó, abandonada, durante años. Sin embargo, en cuanto los trabajadores ocuparon la planta, se apuró a pagar sus impuestos atrasados y a promover una causa penal por "usurpación"; sobre todo, cuando supieron que los concejales se disponían a debatir la expropiación. Todo eso lo hacían únicamente para cerrarle el paso a los trabajadores, sin la menor intención de poner la planta a producir.

Dicho de otro modo: la salida capitalista no alteraba un ápice la cuestión de fondo. Con semejantes "dueños", el predio habría seguido abandonado y ocioso o, cuando mucho, habría servido para algún negocio inmobiliario tras vender la maquinaria como chatarra, a precio de remate. En síntesis, la salida patronal significaba, en cualquier caso, perpetuar la situación preexistente a la víspera de la ocupación obrera.

La movilización popular logró que los fiscales que intervinieron en la causa penal, asumieran el compromiso de no tomar decisión alguna hasta que el Concejo Deliberante tratara el asunto en su sesión del jueves 27 de marzo. Por supuesto, incumplieron y se apresuraron a elevar su dictamen al juez —favorable a la patronal, claro está— en cuanto recibieron la información de que el Concejo trataría la expropiación.

Mientras tanto, la asamblea general de los compañeros que ocupaban Sasetru resolvía redoblar la movilización. La campaña incluyó una amplísima agitación en todas las barriadas de Avellaneda, la denuncia de las presiones patronales y la defensa de la ocupación. La toma de Sasetru, como señalaron varios compañeros, "ha conquistado el corazón de los humildes, se ha transformado en una causa inmensamente popular. Si quieren desalojar Sasetru, van a tener que pasar por encima de todo un pueblo".²

Entretanto, al tiempo que se preparaba una multitudinaria marcha al Concejo Deliberante en la última semana de marzo de 2003,

continuaba a todo ritmo el reacondicionamiento de la planta. Completados los trabajos preliminares, la asamblea votó un plan que preveía una segunda etapa de tareas, ya más ambiciosas, en todas las áreas. En materia de electricidad, el plan incluía el armado y colocación del tablero general de una de las líneas de producción, de bombas de agua, mantenimiento y puesta en funciones de compresores, limpieza de tableros y motores.

En cuanto a la parte mecánica, se comenzó con el armado de bombas de agua y cañerías de alimentación general de la planta, y el mantenimiento y prueba de las bombas de harina. También se comenzó con la limpieza de la parte superior del establecimiento y de los sótanos, los depósitos de laboratorio y el cuarto de compresores, en tanto continuaban las tareas de despeje de la entrada de vehículos, el arreglo de las cloacas y la limpieza exterior del predio.

En esos días, se tuvo una reunión con el ministro de Trabajo de la provincia, Mariano West, y sus secretarios, a quienes se exigió respaldo económico al proyecto, sobre todo para la compra de una caldera, cuyas especificaciones técnicas les fueron presentadas. También se reclamó que la Cooperativa Sasetru Gestión Obrera fuera considerada proveedora privilegiada de la provincia. Paralelamente, se reclamaba al Municipio la provisión de maquinarias de mayor porte para acelerar la limpieza y el acondicionamiento del enorme parque que rodea la fábrica.

Como se ve, la batalla por Sasetru se libraba simultáneamente en todos los terrenos.

En la madrugada del martes 25, la planta fue rodeada por ochocientos infantes de la Bonaerense, con perros, carros de asalto, caballería y helicópteros. El juez Tubio había ordenado una operación de guerra para que Sasetru no volviera a trabajar.

Pero el tiro les salió por la culata.

Un despliegue como el dispuesto por Tubio tiene, desde el punto operacional, un solo objetivo: que todo se haga en unos pocos minutos. Esa era para ellos una necesidad política de primer orden, porque no podían soportar que la televisión mostrara una batalla cam-

² Prensa Obrera N° 793, 20/3/2003.

pal entre las fuerzas represivas del gobierno y un grupo de trabajadores y vecinos que sólo pretendían poner en marcha una fábrica cerrada desde hacía veinte años. Por eso, además, actuaron en las sombras, cuando sabían que los 800 policías sólo deberían hacer frente a la guardia nocturna.

Sin embargo, la operación se transformó en una pesadilla para ellos.

La guardia nocturna ofreció una primera resistencia eficaz, los trabajadores subieron a los altos del edificio y se atrincheraron allí, mientras empezaban a llegar por centenares columnas combatientes del Polo y del Partido Obrero. La batalla campal que quisieron evitar duró más de doce horas. Al mediodía, la lucha ya había ganado la primera plana de todos los medios. Los accesos a la planta habían sido sellados, pero finalmente la policía, después de horas, logró quebrarlos e irrumpió con una violencia inusitada. Empero, cada piso era una trinchera y el aguante ahí adentro fue formidable. Por último, los compañeros se parapetaron en los techos de la fábrica, mientras afuera, en el predio ahora parquizado, tableteaban los balazos de goma y las granadas de gas, respondidas con una lluvia de piedras.

A todo esto, automóviles con parlantes, conseguidos como se pudo, recorrían los barrios aledaños a la fábrica para convocar al vecindario, mientras empezaban a llegar cientos de representantes de fábricas ocupadas —Ghelco, Lavalán, Grissinópoli, Brukman, entre muchas otras—, de asambleas populares, del movimiento estudiantil y, por supuesto, de las organizaciones piqueteras, con el Polo Obrero en primer lugar. La resistencia duró todo el día y fue clave para los compañeros que seguían peleando en el interior de la planta.

Por último, después de más de doce horas, la represión logró doblegar la resistencia en la terraza, pero ya todo se había transformado en un formidable escándalo político. Quizá por eso, los compañeros pudieron impedir que la policía los identificara uno por uno, como los represores pretendían en un primer momento, se sacaron las herramientas y objetos aportados por la Cooperativa de modo de

evitar el saqueo policial y, lo más importante, la salida fue en bloque y simultánea de todos los compañeros.

En ese momento, llegó la noticia de que el Concejo Deliberante estaba a punto de tratar la ordenanza de expropiación. Ante tal novedad, y pese a la oposición de la policía, los compañeros decidieron permanecer apostados frente a la planta a la espera de la votación. La permanencia en esas condiciones duró seis horas y fue decisiva para forzar la resolución del Concejo. Después de tantas dilaciones, esa presión hizo que el Concejo se decidiera cuarenta y ocho horas antes de lo previsto y en tiempo récord. De inmediato, la presidenta del cuerpo, María Gabriel Iglesias, junto con el secretario de Gobierno de la Municipalidad y un grupo de concejales, se hicieron presentes en la fábrica para comunicar la resolución al juez y solicitarle que dejara sin efecto el desalojo. Por supuesto, a Tubio le importaba muy poco el Concejo —a él le importaba Pérez Compagnon, obviamente— y confirmó, y persistió con el desalojo haciendo caso omiso de la comunicación de los concejales.

Esto sucedía pasadas ya las seis de la tarde, el momento más dramático de la jornada. Frente a las narices de la policía, los compañeros hicieron una asamblea y decidieron no retirarse. Delante de millones de personas que miraban por televisión, la represión recommenzó. Los compañeros, sentados delante de la fábrica, gritaban "Sasetru es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode"; mientras los policías —esa chusma sin oficio, como los llamaba Alfredo Palacios— arremetían violentamente contra ellos para desalojarlos del lugar. También se reanudaba la represión afuera de la fábrica con gases y balas de goma, convenientemente repelida por los compañeros. En ese momento fue detenido y golpeado Pablo Heller, representante de la Cooperativa.

La brutalidad represiva logró desalojarnos, pero de modo alguno dispersarnos. Casi dos mil compañeros marcharon esa noche por las calles de Avellaneda, en un ambiente casi festivo, al grito de "a Sasetru volveremos". La manifestación terminó con una concentración frente a la Comisaría 6ª para exigir la libertad de Heller.

Habían sido cincuenta y cinco días de ocupación, quedaba claro

que la lucha apenas empezaba y que íbamos a fondo.

Un hombre común, un ciudadano de la calle, declaró: "Todos los días se cierra una empresa y más gente queda en la calle, y cuando los trabajadores intentan reabrir fuentes de trabajo, se lo impiden. Este sistema no va más". Así, Sasetru se incorporaba a la experiencia popular, pasaba a formar parte del bagaje de lucha de todo el pueblo argentino, como Brukman, como Zanón. Por eso estaba en boca de todos.

En *Prensa Obrera* N° 795, el autor de este trabajo escribió: "La batalla por la reconquista de Sasetru se está librando en todos los planos. Se han conformado grupos de vigilancia que patrullan la zona, día y noche, rotando en sus funciones. Su objetivo es impedir que los dueños sustraigan las maquinarias. El gobierno ha lanzado una campaña intimidatoria en las barriadas. La policía se mantiene apostada en las casas de vecinos que han participado de la ocupación de la planta y los siguen en sus actividades.

Esa actitud amenazadora no nos ha paralizado. Su resultado es el inverso, porque ha despertado la indignación del barrio. El reclamo contra el cese de esta persecución se ha elevado a la Comisaría y se va a exigir la intervención directa de los intendentes de Lanús y Avellaneda.

Al mismo tiempo, están en marcha varias presentaciones judiciales para exigir el reingreso de los trabajadores a la planta y ejercer el derecho a la guarda (custodia) de las maquinarias y demás activos muebles, expropiados por una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, la cual expresamente señala a la Cooperativa como la beneficiaria de los muebles expropiados.

Está completándose el plan de reapertura con la especificación de todas las tareas y etapas que permitirían reabrir la fábrica en un plazo de sesenta días.

Y lo más importante. Comienza la campaña de movilización con una marcha a La Plata, el miércoles 2 de abril, que contará con el respaldo del Bloque Piquetero Nacional, para reclamar a la Legislatura bonaerense la pronta sanción de una ley de expropiación tanto

de las maquinarias como del inmueble. Se está gestionando una entrevista con (Felipe) Solá.

"A Sasetru volvemos o... volvemos"

El jueves 10 de abril, el Senado provincial debía tratar la expropiación de Sasetru. Por supuesto, para ese día, el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras habían preparado una fuerte manifestación en La Plata, para presionar sobre los legisladores. A último momento, secretamente, el Senado decidió sesionar un día antes, el miércoles 9 y, con todo sigilo, postergar el tratamiento de la cuestión Sasetru.

Pero ¡qué sorpresa! A primera hora de la tarde las columnas del Polo empezaron a llegar a La Plata y eran las 12 de la noche, cuando se ubicaron frente a la Legislatura los últimos contingentes piqueteros. Cuando vieron la manifestación, los senadores resolvieron apurar más aún la sesión: trataron el orden del día en tiempo récord y, por supuesto, postergaron el debate sobre Sasetru. Empero, la intención de sesionar subrepticamente, ya era un fracaso completo.

Ese mismo día, Solá se había reunido con miembros del Bloque Piquetero Nacional, a quienes había pedido tiempo para evaluar la cuestión, lo cual explicaba la actitud del Senado. Pero al gobierno ya le resultaba imposible desconocer el asunto. El Polo Obrero, una vez más, demostraba su enorme capacidad de movilización. En pocas horas, en horario inhóspito, se había improvisado una gran manifestación. Esa concentración, que se estiró hasta la madrugada, constituyó una poderosa señal para los funcionarios: el Senado ya no podría volver a sesionar con normalidad, mientras no tratara y aprobara la expropiación de Sasetru.

Simultáneamente, se mantenía la vigilancia con patrullas diarias que circulaban día y noche por el perímetro de la planta. Esa misma semana, la Comisión Técnica completó el plan integral de reapertura, mientras, sobre la base de la resolución del Concejo Deliberante, se reclamaba legalmente el derecho de los trabajadores a custodiar las maquinarias y a reingresar a la fábrica. Al mismo tiempo, se exigía al

³ *Prensa Obrera* N° 795, 3 de abril de 2003.

entonces ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Cafiero, el cese inmediato de las persecuciones e intimidaciones a los vecinos que habían colaborado con la recuperación de Sasetru.

Otro paso decisivo se dio el 23 de mayo, cuando más de dos mil compañeros se reunieron en Plaza Alsina, en Avellaneda. Ahí estaba el Polo Obrero junto con otras organizaciones piqueteras, ex trabajadores de Sasetru, comisiones internas de la zona, estudiantes universitarios, de colegios secundarios y, sobre todo, vecinos del lugar.

El éxito del acto se había asegurado durante las semanas previas, con un plan de acción votado por una asamblea de la fábrica. Se juntaron miles de firmas en el sur del Gran Buenos Aires, comisiones de compañeros visitaron sindicatos, internas, escuelas. Las paredes de Avellaneda se llenaron con pintadas para convocar al acto, y pegatinas masivas de afiches dieron a la actividad un marco popular de movilización. Se organizó una comisión estudiantil de respaldo a Sasetru, coordinada por la Fuba de Avellaneda. En ese acto, abierto por Pablo Heller, Néstor Pitrola convocó a constituir un frente nacional de fábricas para recuperar Sasetru y Brukman, para que se fundieran en la Asamblea Nacional de Trabajadores.

En definitiva, ese acto fue un hito en la campaña por la recuperación de Sasetru y los frutos empezaron a verse casi enseguida. Pocos días después de esa movilización, se terminaron de precisar las líneas básicas del proyecto de expropiación.

Hacíamos frente a presiones durísimas de la patronal y de sus agentes judiciales y políticos, que se jugaban mucho en la parada. Por ejemplo, el juez Tubio rechazó un pedido de la Cámara de Senadores provincial para hacer un inventario dentro de la planta. Tubio dijo que su función había concluido con el desalojo y que ahora cualquier pedido de ingreso debía formularse a los "dueños": es decir a Molisur, satélite, como hemos dicho, de Molinos y de Pérez Compagné; a los que habían promovido el desalojo, ni más ni menos.

Una delegación de Sasetru Gestión Obrera denunció esa situación y exigió que el inventario, como había ocurrido con todas las expropiaciones, se hiciera una vez sancionado el proyecto.

En este punto, conviene recordar que el valor de la maquinaria

era próximo a cero, por su obsolescencia, que la colocaba en categoría de chatarra. Su valor estaba dado sólo por el hecho de que los obreros, con un esfuerzo gigantesco, estaban dispuestos a rehabilitarlas. Cualquier indemnización por la expropiación sería un premio a Pérez Compagné por su papel de destructor de la producción. La firme posición de la Cooperativa permitió remover obstáculos de todo tipo y así se le dio forma final al proyecto de expropiación de inmuebles y maquinarias, y hasta se logró que fuera firmado por varios senadores del bloque justicialista, mayoritario en la Cámara.

Finalmente, la presión obrera y popular, en un cuadro de descomposición política de todo un régimen que batalla por reconstruir la autoridad de un Estado que llegó a quedar en hilachas, pudo más que todas las dilaciones y maniobras de patas cortas. Sobre tablas, unánimemente, el Senado provincial dio media sanción al proyecto expropiatorio.

Esa victoria era resultado de la movilización comenzada en la misma madrugada en que ochocientos policías armados para la guerra rodearon Sasetru. Era producto de la resistencia heroica de los compañeros que aguantaron a pie firme durante toda la jornada, de los diez mil compañeros que rodeamos la Legislatura platense una semana después, de la movilización del 9 de abril, cuando centenares de trabajadores, en un desfile incesante, que duró hasta la madrugada, llegaban desde todas partes para desbaratar la maniobra de Solá y su Legislatura.

Era resultado también del multitudinario acto del 1° de Mayo, cuando marchamos desde Brukman hasta la Plaza de Mayo, de la movilización del 14 de ese mismo mes en respuesta a una convocatoria de la Asamblea Nacional de Trabajadores, con Sasetru, Brukman y Transporte del Oeste a la cabeza; del acto en Avellaneda, de la jornada del 26 de junio por los crímenes de Santillán y Kosteki.

Pero nadie se engañó. La expropiación dispuesta por el Senado poco o nada tenía que ver con el proyecto presentado por los trabajadores, que disponía la entrega gratuita a la gestión obrera de los bienes expropiados, el auxilio estatal no reintegrable para poner a funcionar la fábrica y que Sasetru Gestión Obrera fuera

declarada proveedora privilegiada de la provincia.

La ley aprobada por el Senado suprimió todos esos puntos. El texto legal sólo declara de "utilidad pública y sujetos a expropiación" los tres lotes donde está asentada la fábrica de pastas secas, y la totalidad de las instalaciones y maquinarias que se encuentran dentro de ese sector. Pero la expropiación, como ocurrió con las varias decenas de leyes aprobadas en la última etapa, es "a título oneroso", de modo que la Cooperativa (ni siquiera el Estado) deberá hacerse cargo de la indemnización que se fije a sus "dueños" (ver capítulo "Expropiaciones y Ley de Quiebras").

Aun así, la media sanción era un triunfo, porque forzaba la reapertura de la planta y el reingreso de los trabajadores. Se imponía el principio del poder de coerción, aplicado normalmente contra los trabajadores, para reincorporar de manera compulsiva a todos los compañeros desalojados. Por eso Solá amenazó con vetar la ley, aun en la versión recortada que habían aprobado los senadores.

Se debe tener en cuenta que la reconstrucción de una empresa como Sasetru resulta mucho más complicada que la de otras fábricas recuperadas que se encontraban en operaciones cuando fueron abandonadas por sus patrones, con trabajadores familiarizados con las diferentes tareas y procesos de producción. Esto es: se tiene por delante un esfuerzo gigantesco y parte de ese esfuerzo irá a parar al bolsillo de los vaciadores. Además, Sasetru indica un salto político de alcance estratégico en la comprensión directa de la clase obrera en cuanto a su responsabilidad social y política frente al capitalismo en descomposición. El resultado revolucionario de ese fenómeno queda a ojos vista: apunta a una reorganización integral de la sociedad sobre nuevas bases sociales. Sasetru expresa el grado de maduración política del movimiento piquetero en cuanto punto de reagrupamiento del movimiento obrero en general.

El triunfo de Sasetru debe ser entendido apenas como un peldaño de una lucha estratégica. La reconquista de Sasetru, con el reingreso de sus trabajadores, pone al rojo vivo la necesidad de una lucha común, de conjunto, a escala nacional, por estas demandas:

Expropiación definitiva y sin pago de todas las fábricas que cierran

- o despidan, empezando por las ya recuperadas por la gestión obrera:
- 1) Auxilio económico del Estado mediante subsidios no reintegrables, que permitan obtener a las gestiones obreras capital de trabajo y sueldos de modo alguno inferiores a los de convenio;
- 2) Que todas las fábricas expropiadas y bajo gestión obrera se constituyan en proveedoras privilegiadas del Estado;
- 3) Nacionalización de la banca, que deberá integrar en su directorio a representantes de las fábricas bajo gestión de sus trabajadores, para orientar el crédito y colocar los recursos financieros del país al servicio de los emprendimientos de la clase obrera.

Por otra parte, los trabajadores de Sasetru sabían que con el ingreso del proyecto en Diputados, se multiplicarían las presiones para abortarlo. Se supo en esos días que representantes de Molisur recorrían pasillos oficiales (¿Banelco en mano?), ya en los días previos al debate en el Senado.

Por tanto, empezó a prepararse una movilización aún más vasta, una campaña más amplia y ambiciosa en materia de agitación, y un plan de actos y marchas coordinadas con el Polo Obrero y demás organizaciones piqueteras. Al mismo tiempo, se reforzaron las guardias para impedir cualquier sabotaje contra las instalaciones y evitar que se sustrajeran piezas de las máquinas, que seguían en el establecimiento.

Toda esa lucha merecía triunfar y triunfó.

Sasetru, el Polo Obrero, los vecinos de Avellaneda, movilización mediante, llevaron a la victoria las decisiones de la Asamblea Nacional de Trabajadores, ese centro precioso de reagrupamiento para toda la clase.

A comienzos de agosto, a cuatro meses del desalojo, sin haber dado tregua un solo día, Diputados confirmó la media sanción del Senado y el proyecto de expropiación se transformó en ley.

Así se consolidaba un precedente y un formidable aliciente para todas las fábricas en conflicto, por lo que decíamos antes: no estamos ante una fábrica simplemente quebrada o en concurso de acreedores, con los trabajadores adentro.

Por segunda vez —el antecedente inmediato era Acrow, en Quil-

mes— se expropiaba un establecimiento cuyo titular —en este caso Molisur, subsidiaria de Molinos Río de la Plata— era propietaria ilimitada de la fábrica y no hacía frente a un proceso concursal. Entre otras cosas, la medida servía para derribar los argumentos de la derecha para no expropiar Brukman, con el plantó de que allí “había un dueño” y que la empresa no estaba en quiebra. Servía para Clínica Junín, que venía luchando desde hacía meses para romper el cerco que le había puesto la gobernación de José Manuel de la Sota al proyecto de expropiación. Ni hablar de la neuquina Zanón.

Y el Polo Obrero ratificaba su derecho a estar donde está, porque había tenido el mérito de llevar a la práctica las resoluciones de la ANT, cuyas asambleas habían decidido ocupar las plantas inactivas y ponerlas nuevamente a producir. Sasetru era la avanzada de ese proceso y marcaba un rumbo para todos los explotados.

Había razones para el festejo y el orgullo.

Pero la lucha proseguía e ingresaba en una nueva etapa. Ahora debíamos conseguir que Solá ratificara la ley, que no la vetara. Más importante aún: resultaba preciso, imperioso, que los trabajadores recuperaran la posesión física de la fábrica, que desde marzo estaba custodiada por efectivos policiales y de una empresa privada de seguridad contratada por MoliSur. Semejante “custodia” no sólo no evitó; además, permitió que una banda de Molinos Río de la Plata ingresara en la planta con el propósito de desarmarla en parte. Así sustrajeron reflectores, piezas de máquinas y otros materiales.

Por otra parte, a partir de la sanción de la ley, comenzaba el verdadero juicio expropiatorio, con sus plazos procesales, trámites burocráticos y chicanas patronales por medio.

Además, como quedó dicho, el Estado no regala nada. La Cooperativa, de acuerdo con la ley, deberá comprar el establecimiento. Los trabajadores ni siquiera pueden establecer las condiciones de esa compra, que serán fijadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo provincial. Además, Sasetru comparte todas las penurias que sufren las fábricas recuperadas.

Por eso decíamos: “Debemos convertir el reclamo de apoyo económico a las fábricas vaciadas que han pasado a manos de los traba-

jadores en una gran bandera de lucha y vamos a convocar al conjunto de las empresas bajo gestión obrera a una pelea en común por ese objetivo. Esta lucha en común debe ser el embrión para poner en pie una gran central de fábricas ocupadas y en lucha, como parte de la pelea por una transformación social general que la clase trabajadora está llamada a encabezar”.

“Sasetru, al igual que el resto de las luchas que está encarando la clase obrera, no tiene futuro como compartimiento estanco ni como unidad económica aislada. Esto vale en términos generales y más todavía para Sasetru, que pertenece al rubro alimenticio, altamente concentrado en un puñado de empresas —empezando por Pérez Companc— cuyos principales proveedores —las molineras que proveen la harina para las astas—, están en manos de un grupo reducido de monopolios: Bunge & Born, Cargill, la propia Pérez Companc”.

“El futuro de las empresas recuperadas se va a jugar en la arena más general de la lucha de clases y va a estar condicionada por el desenlace que tenga la actual crisis política nacional. Una central permitiría darle una estatura nacional a la lucha para enfrentar la competencia capitalista, y afianzar la lucha por una salida política de conjunto frente a la bancarrota capitalista”.⁴

Entonces empezaron las trampas en otro nivel.

“Sasetru es de los trabajadores y al que no le gusta...”
28 de agosto de 2003

Habíamos dicho: “Volvemos o volvemos”. Y volvimos...

Eran las 7:50 de la mañana cuando, al igual que el 30 de enero, ingresamos encolumnados en la planta recuperada. Después de un aplauso cerrado en el portón de entrada, volvimos a marchar esos 150 metros hasta el edificio fabril.

“Sasetru es de los trabajadores y al que no le gusta...”

Al llegar, comprobamos los destrozos, el saqueo de piezas, el sa-

⁴ Heller, Pablo: “Se expropió Sasetru: la nueva etapa”, en *Prensa Obrera* N° 813, 14 de agosto de 2003.

botaje gangsteril de la patronal. El robo había sido hecho por personal altamente calificado, que desmontó de manera impecable los cabezales de las líneas. Así nos hacían saber el grado de violencia al cual estaban dispuestos a llegar.

La sustracción de los termómetros que miden la humedad del sector de secadores revelaba que no se habían llevado nada que pudiera servir o adecuarse a las nuevas técnicas de producción. Se trataba de herramientas obsoletas, arrancadas para impedir, o al menos demorar, la gestión obrera. Habían sellado puertas y sectores, y destrozado grandes cajas donde estaban embaladas partes de las maquinarias de las distintas líneas.

El sentimiento de indignación que produjo en los trabajadores semejante vandalismo fue inferior al que mostraron los periodistas que cubrieron el reingreso. Allí, en filmadoras y cámaras fotográficas, quedó registrado el rostro implacable del capitalismo en descomposición. En Sasetru habían sido aniquiladas y despilfarradas miles de horas de trabajo humano, invertido durante casi dos meses por compañeros desocupados que se proponían producir alimentos para la Argentina desnutrida.

Los trabajadores de Sasetru tenían plena conciencia de que la etapa abierta con la recuperación de la planta sería aún más dura y requeriría una movilización todavía mayor que la desarrollada hasta ese momento.

Al igual que el resto de las fábricas recuperadas, tropezamos con la falta de recursos, con el ahogo financiero. Un primer cálculo de la Comisión Técnica indicaba que se necesitaban no menos de doscientos mil pesos para poner en marcha la planta, aunque faltaban evaluar los daños producidos por la acción de los delincuentes patronales que habían depredado el establecimiento. Para peor, la empresa proveedora de las piezas robadas está radicada en el Brasil, de modo que, en cualquier caso, quedaban notablemente retrasados los planes de reapertura, previstos en principio para no más de sesenta días.

Así comenzó la batalla vital de Sasetru Gestión Obrera por el financiamiento. Se sabía que el respaldo a las fábricas recuperadas había sido menos que escaso, cuando no nulo. A Minguillón se le

acababan de otorgar setenta mil pesos después de siete meses de gestiones. A otras empresas, no más de 6, 8 ó 10 mil pesos. El destino de los siete millones de pesos imputados en el presupuesto de las provincias para las fábricas bajo gestión obrera aún es un misterio.

En territorio porteño, el cacareado respaldo económico a las gestiones de los trabajadores estaba peor que retaceado, de manera que ni Solá ni Aníbal Ibarra hacían efectiva por lo menos alguna de las expropiaciones que, en la provincia, tenían en varios casos la fecha de vencimiento encima. El Fogaba mostraba en la práctica su completa inutilidad.

En esos días, escribíamos: "Comienza una batalla por los recursos, por arrancarle al Estado el apoyo económico que necesitamos. Esta batalla la vamos a librar en todos los planos, como lo hicimos en la etapa previa, cuando se precipitó el desalojo. Lanzamos una campaña nacional e internacional por la puesta en funcionamiento de Sasetru. Junto con los pronunciamientos políticos, reclamamos el apoyo económico de organizaciones, sindicatos, personalidades de todo el mundo. Vamos a derrotar el ahogo y el sabotaje capitalista con el apoyo y la movilización de la clase obrera nacional e internacional. En el terreno inmediato, los aportes económicos que reunamos servirán para no interrumpir un solo día los preparativos de la reapertura. En este plano son también de extrema utilidad los adelantos que estén dispuestos a dar solidariamente compañeros u organizaciones, mientras encaramos la lucha estratégica por el financiamiento estatal".⁵

Entretanto, los compañeros de la Cooperativa no desperdiciaban el tiempo. Con herramientas precarias, de mano, comenzaban las tareas de reacondicionamiento de la planta, sobre todo la limpieza del lugar.

Pero, por supuesto, tampoco perdían tiempo los enemigos de los trabajadores, que no iban a cejar en su lucha antiobrero. Esta vez bajo la forma de la provocación y la traición. Pero, otra vez, vayamos por partes.

⁵ Heller, Pablo: "Sasetru contra el Estado capitalista", en *Prensa Obrera* N° 818, 25 de setiembre de 2003.

Fue allá por octubre, cuando el gobierno puso en juego su mecanismo para introducir una cuña dentro de la propia fábrica, para comprar voluntades y dividir. Ese instrumento fue el Inaes, un organismo oficial encargado de controlar a las cooperativas (ver capítulo "Injerencia estatal").

Con ese paraguas protector, los punteros quisieron meter mano en Sasetru. El Inaes ofició de "veedor" de una supuesta "asamblea general extraordinaria" de la Cooperativa, con la presencia de veedores del gobierno y convocada expresamente para dejar afuera a los compañeros del Polo Obrero en particular y a la masa de trabajadores de la fábrica, en general. Esa convocatoria coincidía con la escalada que el gobierno producía en esos días para dividir y cooptar al movimiento piquetero y, por extensión, echar mano a las fábricas bajo gestión obrera más combativas. Una punta de lanza en esa campaña fue el abogado Luis Caro —como dijimos, ex candidato de Aldo Rico en Avellaneda—, quien, con amplio respaldo gubernamental, no se cansó de referirse a la "excesiva politización" de Sasetru. Su latiguillo era promover una "cooperativa sin política", de modo de introducir en Sasetru la política más reaccionaria y antiobrero.

Una masiva asamblea de fábrica rechazó esa maniobra y exigió el retiro de aquella convocatoria ilegítima. La declaración de la asamblea fue también muy clara: "Las cuestiones y diferencias internas las arreglamos entre los propios trabajadores, sin injerencia de la patronal o de su jefe de personal. El Inaes, en su condición de organismo gubernamental que controla las cooperativas, es representante del Estado patronal".

Como se subrayó en la asamblea de fábrica, nos encontrábamos ante un intento de golpe de Estado. Se pretendía que sólo once de los miembros habilitados legalmente para votar, según los trámites de inscripción de la Cooperativa, decidieran en nombre de los ciento cincuenta trabajadores de la fábrica, de aquéllos que habían luchado durante meses para ponerla a funcionar. Un acto de confiscación que la asamblea consideró inaceptable.

La consigna de la asamblea fue: "Fuera el Estado patronal. Fuera el Inaes. Sasetru es de los trabajadores".

Aunque, por supuesto, las cosas no terminarían allí.

En verdad, basta tener en cuenta quiénes estuvieron en aquella asamblea de la dirección legal de la Cooperativa para extraer las debidas deducciones. En primer lugar, por supuesto, el representante del Inaes, secundado por una abogada del organismo. Afuera, en el playón, el secretario del intendente Laborde, quien no se movió del lugar durante todo el desarrollo de la reunión. Y, para completar el cuadro, patotas mercenarias del Partido Justicialista, llegadas desde unidades básicas de la zona, fuerzas de choque de los punteros.

Esa composición ya da una radiografía exacta sobre el carácter de clase y la filiación política de la operación que se quería organizar en Sasetru. No faltaron comparsas de algunos movimientos de desocupados, cuyo único punto de acuerdo es su hostilidad al Polo y al Partido Obrero.

La presencia de esos grupos no pudo impedir que quedara en evidencia el raquitismo de esa fracción minoritaria y provocadora de la Interbarrial de Avellaneda, que no pudo arrastrar ni a su propia tropa para jugar ese triste papel de mascarón de proa de la maniobra oficialista. Las consignas entonadas por todo ese carnaval fúnebre hablan por sí solas: "Cooperativa sin política y sin partidos", como si la expropiación de Sasetru no hubiera sido resultado de la lucha del Bloque Piquetero Nacional, de la ANT, del Polo y del Partido Obrero.

Por otra parte, las consignas antipiqueteras señalaban el objetivo estratégico del Estado patronal y de sus operadores políticos para luchar contra Sasetru, con la pretensión de convertirla —en el mejor de los casos— en una especie de Pyme que se incorpore al engranaje mercantil y se convierta alguna vez, vía "créditos y aportes", en una empresa capitalista. Otra vez estábamos ante una tentativa de expropiar a los luchadores.

Nuestra movilización contra esa escalada tuvo su primer éxito al impedir la destitución de los miembros del Polo Obrero que componen la dirección legal de la Cooperativa, a quienes se quería reemplazar por elementos afines a la política gubernamental.

Los compañeros del Polo pusieron de relieve las irregularidades de la convocatoria, que no cumplía siquiera los procedimientos fija-

dos por el estatuto y por la propia ley de la Cooperativa. Por otra parte, como queda dicho, la asamblea de fábrica ya había votado contra esa irregularidad grosera, que pretendía convertir en árbitro de nuestros problemas al Inacs, es decir, al Estado burgués y al gobierno.

En definitiva: aquélla era una reunión nula de toda nulidad y así fue reconocido expresamente por el propio representante del Inacs, quien, no obstante, alentó a los promotores de esa farsa a seguir adelante con las deliberaciones. Ese acto completamente ilegal y del todo ajeno a las atribuciones de un veedor, delata hacia dónde se orientan los favores gubernamentales.

Lisandro Martínez, secretario de la Cooperativa, escribió: "El 10 de noviembre una fracción de la Interbarrial (seis personas) convocó por carta documento a una repartición del Estado (el Inacs), que controla las cooperativas, a intervenir en una asamblea extraordinaria de [once personas!], para revisar lo actuado durante [setenta días! (28 de agosto al 10 de noviembre de 2003)].

El golpe quiere revisar de un plumazo los usos y costumbres del movimiento obrero: la asamblea general y soberana de fábrica. Cada vez que se convocó a asamblea, esa fracción fue siempre derrotada.

La parcialidad de los funcionarios del Inacs fue manifiesta. A pesar de que la convocatoria estaba viciada de nulidad por no haberse cumplimentado lo establecido por las normativas en vigencia, el funcionario pretendió que siguiera su curso. El Polo Obrero fue advertido que, de lo contrario, Sasetru no recibiría ningún subsidio económico.

Luego de dos horas y media, cuando ya estaba constatada por acta notarial la nulidad de la asamblea, los funcionarios dieron indicaciones de continuar sin nosotros. A estos burócratas estatales se les ha dado instrucciones para reventar cualquier gestión obrera independiente. Violan sus propios códigos cuando éstos no les sirven.

(...)

El grupo de los seis y los funcionarios continuaron conspirando a solas y a espaldas de los trabajadores durante otros 40 minutos, dando una pauta concreta de cuál será la conducta de esta fracción

en caso de tomar la dirección de la fábrica: despedir a la mayoría de los obreros que gestionan la fábrica. En caso de que eso pudiera ocurrir, los obreros se organizarán en sindicato para parar la ofensiva de una cooperativa que se habría convertido en patronal.

¡Fuera la intervención del Estado en Sasetru, viva la gestión obrera independiente!"

Tres días después, sobrevino la provocación en toda la línea. Y les fue mal, muy mal.

El jueves 13 de noviembre, en horas de la noche, Sasetru soportó un nuevo ataque después del desalojo del 25 de marzo. Ahora no fue la policía —simplemente, no podían hacerlo por ese medio ya fracasado— sino punteros y matones.

La asamblea del 10, entre gallos y media noche, ilegal e ilegítimamente, en minoría, había decidido destituir a los miembros de la dirección legal de la Cooperativa enrolados en el Polo Obrero y reemplazarlos por personal orientado desde oficinas del gobierno.

Ese golpe pretendió rematarse con la ocupación física de la fábrica, por la fuerza, a puro matonaje. Asistíamos a una operación política del gobierno, cuya finalidad no era otra que introducir una cuña en las fábricas ocupadas bajo gestión obrera. Lo mismo sucedía en Brukman y en Zanón. Esa escalada formaba parte de una ofensiva más general, orientada a dividir al movimiento piquetero mediante la cooptación de algunas de sus fracciones, para aislar a los sectores más combativos.

En Sasetru, la provocación hizo agua rápidamente. La decidida movilización de los trabajadores de la Cooperativa, respaldada por el Polo Obrero y otras organizaciones populares, unida al aislamiento de los promotores del asalto, hicieron que, apenas un día después, los compañeros lograran retomar el control de establecimiento.

Frente a esta situación, los medios se apuraron a difundir la especie de una "lucha interna" entre piqueteros y *La Nación* se atrevió a titular en tapa: "Tiroteo entre desocupados". Como se recordará, lo mismo habían intentado hacer durante las horas inmediatamente posteriores a los acontecimientos del Puente Pueyrredón: las primeras versiones oficiales decían que nos habíamos matado entre

nosotros.

El rumor resultaba ridículo, ¡qué "guerra interna" ni "lucha entre piqueteros"! Cinco Asambleas Nacionales de Trabajadores, en las que intervinieron más de 30 organizaciones piqueteras, son el mejor testimonio de que nuestras diferencias pueden coexistir y tomar resoluciones comunes en un marco de lucha contra la patronal y el Estado capitalista. Cualquier conflicto interno en la planta se hubiera podido encauzar sin necesidad de quebrar, o siquiera deteriorar, el trabajo en común. Si en Sasetru no se pudo seguir con esa práctica, fue simplemente porque no se trató de un conflicto interno: aquí metieron las patas la patronal, el Estado y sus fuerzas de choque gangsteriles provistas por los punteros barriales.

El golpe contra los trabajadores desconoció la asamblea general y soberana de la fábrica. Cada vez que se convocó a esa asamblea, la fracción progubernamental fue derrotada de manera aplastante.

La pretensión de reemplazar las decisiones de la asamblea de los ciento cincuenta trabajadores de Sasetru por las resoluciones arbitrarias de once personas, que formaban parte de la dirección legal de la Cooperativa, constituía un golpe de muerte para la gestión obrera. De prosperar esa maniobra, la consolidación de una dirección ajena al control de los trabajadores crearía las condiciones ideales para la colonización de la fábrica por parte del Estado y de grupos económicos privados.

No se trataba, pues, de diferencias internas, sino de una provocación en la cual podía verse con toda claridad la mano del gobierno. Por eso fueron infructuosos los esfuerzos del Polo Obrero para firmar un acta que obligara a retirarse de allí a todas las personas extrañas a la fábrica y que sólo permanecieran los trabajadores de Sasetru. Ellos no podían aceptar eso: si se iban los extraños, a los provocadores no les quedaba nadie.

Pero las expectativas de quienes promovieron el nuevo intento de desalojo se fueron disipando con el transcurrir de las horas, cuando se hizo indisimulable la orfandad de los organizadores de la provocación. Los punteros no lograron concitar el menor respaldo por parte del vecindario y ni siquiera de la Interbarrial. Divorciado de cual-

quier apoyo popular, el asalto fue sostenido por elementos extraños a la fábrica e incluso al barrio, a quienes se incorporaron algunos sectores descompuestos del PJ.

Mientras tanto, el gobierno y sus medios de prensa afines procuraban mostrar a los trabajadores enfrentados al Polo Obrero. Esa campaña absurda debió suspenderse sin fecha a las pocas horas. Por último, hasta el Inaes resolvió soltar la mano de los gangsters e hizo entrega a los compañeros de la Cooperativa de un escrito, en el cual se desmentía que ese organismo hubiera tomado alguna resolución sobre diferencias dentro de la planta. Así, la provocación cayó casi sola, víctima de su propio aislamiento.

A todo esto, los usurpadores no ahorraron violencia. Como los punteros se negaban a retirarse de la planta, los trabajadores organizaron un campamento para defender la propiedad colectiva de Sasetru Gestión Obrera. Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, estos maleantes, *tetra-brik* y armas en mano, atacaron a balazos a los obreros acampantes, quienes, por supuesto, repelieron la agresión como es debido. A las 6 de la mañana del sábado 15 de noviembre de 2003, la agresión de estos lumpenes contra la gestión obrera en Sasetru tuvo un final patético.

De todos modos, esta provocación debe ser tomada con mucha seriedad, porque anticipa lo que se viene.

La reapertura de Sasetru reviste un carácter estratégico para el movimiento obrero, porque terminaría de demostrar, a los ojos del pueblo, que el principal obstáculo para sacar adelante la producción es la gestión capitalista de los medios de producción. Sasetru es una empresa que pertenece al ramo alimentario, en particular al relacionado con la elaboración de aceites y de harina. Este detalle no es menor, es un dato emblemático de la situación política, pues revela hasta qué punto la acción de la clase obrera está incursionando en los centros vitales de la economía capitalista. La puesta en marcha de una fábrica que ha permanecido cerrada casi por veinte años, enclavada en uno de los nervios centrales del aparato productivo, sería la mejor demostración de la superioridad de los métodos de organización y perspectivas sociales que encarna la clase obrera. La

experiencia de Sasetru tiene los ribetes y los alcances de una epopeya, pero de este tipo de acciones se ha nutrido la historia al encontrarse en vísperas de alumbrar grandes transformaciones sociales.

Brukman

Lunes 29 de diciembre de 2003.

Hacia casi un año (30 de enero) que los ex trabajadores y vecinos de Sasetru habían recuperado su fábrica, cuando las obreras y obreros de Brukman reconquistaron la suya. Ocho meses llevaban en la calle desde aquel desalojo bestial que restituyó la planta a la patronal vaciadora.

Ocho meses de campamento callejero, de una resistencia ejemplar respaldada en todo momento por sectores amplios del movimiento de masas, particularmente por las organizaciones piqueteras, entre ellas por el Polo Obrero, que no sólo pusieron el cuerpo (¡y cómo!) en la lucha contra la represión; además, por medio de la movilización, exigieron en todo momento la expropiación de la fábrica y su puesta en marcha bajo gestión obrera.

Esa expropiación finalmente se consiguió, fue votada por la Legislatura porteña aun con serios retrocesos respecto de otras expropiaciones precedentes. Por ejemplo, en el caso de Brukman, la ley expropiatoria introduce una cláusula que obliga al ingreso compulsivo de los carneros. Ese artículo —el 8°— otorga al Estado el poder de contratación del personal. Incluso la cooperativa deja de ser tal y queda sometida a la permanente injerencia del gobierno.

Los trabajadores, al reingresar en la planta, encontraron tierra arrasada: las máquinas estaban destruidas, las piezas más importantes y caras de la computadora de diseño habían sido robadas. Las calderas, el sistema eléctrico, las tuberías de aire comprimido, todo estaba roto. Esa era la obra de Jacobo Brukman, de su familia y de los carneros que habían entrado con protección policial, mientras los trabajadores se encontraban desalojados. Igual que en Sasetru, las bandas patronales habían saqueado la fábrica que no supieron ni quisieron mantener en funcionamiento.

Portavoces de la empresa expropiada, acompañados por el coro reptil de los carneros, divulgaron la especie de que así habían encontrado ellos la fábrica tras el desalojo de abril. Si así hubiera sido...

¡qué inutilidad la de esa gentuza, que en ocho meses no fue capaz ni siquiera de restaurar la limpieza! Pero, por supuesto, la falacia no pudo sostenerse ni un día: la síndica judicial admitió que ella había conocido una fábrica en funcionamiento, en plena producción, dirigida por sus obreros, y ahora se encontraba con semejante desastre. Además, rápidamente se comprobaron faltantes de dinero y de mercaderías: por ejemplo, 500 pantalones finos, entre otras. Como se ve, tras el desalojo de los trabajadores, ingresó allí una barra de vándalos, enviados por la patronal y protegidos por la policía, con la única consigna de saquear y destruir, como en Sasetru.

Al momento de cerrar este material, el Gobierno de la Ciudad había prometido un subsidio del todo insuficiente para reparar la maquinaria y recomenzar la producción, detenida por los bárbaros. Los trabajadores, además de promover un proceso penal contra los Brukman y sus esbirros, exigen un subsidio y una indemnización hasta recuperar las máquinas, pagar los servicios que esas bestias dejaron cortar y reponer la materia prima y las mercaderías que se han robado.

Se exigía también que el gobierno se hiciera cargo de los salarios de los compañeros hasta que la producción se reanude, que se ponga en marcha la Escuela de Oficios —aprobada en la ley de expropiación— y la instalación de una guardería abierta al barrio, entre otras demandas.

En definitiva, con todas las limitaciones que habremos de señalar puntualmente, el reingreso de los trabajadores en la planta es otra victoria obrera y piquetera, producto de una larga historia de lucha.

El 18 de diciembre de 2001 se ocupó Brukman.

Esa planta estaba abandonada por sus propietarios desde hacía casi tres meses y durante ese tiempo no se habían pagado salarios, ni servicios, ni a los proveedores. Como dijo alguien, la empresa les había tirado a los trabajadores las llaves de la fábrica por la cabeza.

En poco tiempo, las trabajadoras —el personal está constituido mayoritariamente por mujeres— lograron restaurar los servicios, recomponer en buena parte la cadena de distribución y, en fin, poner

la fábrica a producir siquiera precariamente.

Después, cuando el saqueo formidable al salario que significó la devaluación, dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde, hizo que el rubro textil fuera uno de los que parecían tener posibilidades de “reactivación”, reaparecieron los Brukman y denunciaron a sus obreros por “robo y usurpación”.

Así, el 16 de marzo de 2002, la planta sufrió el primer ataque represivo.

La orden de desalojo fue dispuesta para el sábado 16 a primera hora de la mañana, cuando en la fábrica sólo quedaba una guardia. Policías de civil empujaron y golpearon a las compañeras y a los vecinos que se habían acercado a ofrecer una primera solidaridad. Por supuesto, la maniobra patronal tuvo de su lado la complicidad de los poderes del Estado; éstos, como hacen con los piqueteros, prontamente transforman la lucha popular en “causas penales” y actúan como asaltantes nocturnos con sus jueces y sus policías.

Pero el tiro les salió por la culata.

A una hora del allanamiento, con las trabajadoras aferradas a las verjas, Brukman ya estaba rodeada por vecinos e integrantes de las asambleas populares más próximas (San Cristóbal, San Telmo, Congreso, Parque Lezama). Desde los balcones de enfrente, aplausos y cacerolazos acompañaban la acción obrera. Cuando llegaron los medios, fueron debidamente escrachados los represores de civil que habían golpeado a las compañeras.

Al mediodía, ya eran centenares los que rodeaban Brukman. El juez había ordenado mantener una consigna policial para impedir el reingreso de los trabajadores, pero ya estaba claro que eso no podía conseguirse con un par de vigilantes: haría falta un batallón entero. Primero se fueron los agentes de civil, abrumados por el escrache. Después, cuando se hizo evidente que sobrevendría una batalla campal, la policía toda se retiró del lugar. Cuando obreras y obreros reingresaron en la fábrica, el grito se hizo atronador: “Brukman es de los trabajadores...”

El domingo 17, al anochecer, casi cuatro mil asambleístas que habían intervenido en la Asamblea Nacional de Asambleas Popula-

res, marcharon hasta la fábrica desde Parque Centenario. En otras palabras: reprimir a Brukman exigía hacer frente a todo el pueblo movilizado. Al gobierno, por lo menos en ese momento, no le daba el cuero para tanto.

Poco después, la empresa hizo una propuesta absurda, una provocación.

El asunto fue en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, con la presencia del síndico, el administrador judicial, la burocracia del sindicato (Soiva) y delegados de la fábrica.

En principio, los empresarios se negaban a reconocer la deuda salarial en negro, de modo que los ingresos de los trabajadores se verían reducidos a no más de 80 pesos por quincena. Y aun ese porcentaje de miseria lo irían pagando con fondos procedentes de la venta del stock, de modo que los pagos ni siquiera quedaban asegurados. Se debe subrayar en este punto la conducta del Ministerio de Trabajo y del Poder Judicial, que no se inmutaron ante una propuesta que constituía, lisa y llanamente, la confesión de un delito, de un fraude laboral alevoso que admitía los pagos en negro y, por tanto, la evasión previsional y la estafa contra los fondos públicos.

Por otra parte, la patronal no aseguraba la continuidad laboral de los 115 trabajadores. Más aún: el abogado de la empresa dijo que la rentabilidad de la firma resultaba incompatible con esa cantidad de obreros, de modo que buena parte de ellos irían a parar a la calle.

En verdad, antes que una propuesta se trataba de un ultimátum, puesto que, si los delegados no aceptaban firmar ese "acuerdo", los Brukman relanzarían la causa penal para desalojar la planta por la fuerza. La delegación obrera los mandó a donde correspondía.

Enseguida, una asamblea de fábrica ratificó el rechazo al ultimátum y la continuidad de la ocupación, además de reiterar las demandas de los trabajadores:

- Pago de la deuda salarial y de los salarios caídos durante los últimos meses.
- Estabilidad para todo el personal, asegurándose la totalidad de los

puestos de trabajo.

- Reapertura de la fábrica, respetándose el salario completo de los trabajadores.
- Veedores obreros para controlar la producción y la administración de la planta.

Apenas concluidas la audiencia y la asamblea de fábrica, se incrementó notablemente la presencia policial en los alrededores de la planta. Móviles estacionados en las cercanías y otros que pasaban continuamente frente al portón de Jujuy al 500 formaban parte de la intimidación a los trabajadores.

La movilización piquetera y de las asambleas también se multiplicó, y empezó a tener uno de sus ejes en el llamado "proyecto Altamira", que la bancada del PO había presentado en la Legislatura porteña para expropiar la fábrica y estatizarla bajo gestión obrera.

La burocracia parlamentaria hizo que sólo en julio de 2002 comenzara a debatirse, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, el proyecto de ley presentado meses atrás por Altamira, y esto gracias a la movilización permanente de los compañeros de Brukman, del Bloque Piquetero Nacional y de la Asamblea Nacional de Trabajadores.

Algunos diputados de la Comisión consideraron poco "realista" la estatización con un Estado en quiebra. La bancada del PO respondió que esa situación no había impedido, por ejemplo, que pulpos capitalistas en crisis —y no tan en crisis— recibieran cuantiosos fondos estatales, como ocurrió con los bancos, cuyas deudas se "estatizaron" sin que ninguno de estos legisladores pusiera reparos. Ahora se trataba de invertir la fórmula: en vez de rescatar al capital y confiscar a los trabajadores, había que rescatar a los trabajadores y confiscar a los responsables de la catástrofe.

Antes de definir una posición ante la ley, funcionarios del Gobierno de la Ciudad deslizaban la posibilidad de que, Ley de Quiebras mediante, los trabajadores, en cuanto acreedores de Brukman, asumieran la conducción de la planta; es decir, deberían hacerse cargo de las deudas de la empresa. El Estado, en su calidad de "garante" de la operación, tendría la facultad de vender la fábrica en caso de

que tales deudas no se cancelaran. He ahí una solución del problema para los Brukman, quienes se verían libres de una deuda de más de 10 millones de pesos, y para los acreedores, respaldados por el reaseguro estatal. Una "estatización" del todo opuesta a los intereses de los trabajadores. Además, con el ofrecimiento de créditos blandos, los trabajadores deberían asumir una nueva deuda.

Al proyecto de Altamira también se le contrapuso otro que tomaba por base el presentado por ARI e Izquierda Unida en el caso de Ghelco, fábrica ocupada por sus obreros. Esa iniciativa proponía declarar al predio y a los equipos de la empresa sujetos a expropiación, para luego ser cedidos en comodato (préstamo) a una cooperativa de los trabajadores.

La expropiación, en esos términos, significa que los propietarios de la fábrica —o sus acreedores— serían resarcidos por el Estado con un monto que jamás hubieran recibido mediante concurso o posterior quiebra, en cuyo caso se habría subastado cada bien por separado a precio de remate. Eso no era otra cosa que un salvataje de la patronal quebrada a cargo del Estado, aunque el Estado, como en el caso de Brukman, fuera uno de los acreedores principales de la convocatoria por las enormes deudas impositivas y previsionales de estas firmas.

Por lo demás, tanto en Ghelco como en Brukman, se presentaba un peligro de desfallo consistente en uno de los mecanismos típicos de vaciamiento empresarial: la declaración de convocatoria a partir de deudas contraídas con "empresas"... formadas por los propios vaciadores, de modo que los "acreedores" de la empresa quebrada son sus propios patrones. En el caso de Brukman era evidente que nos encontrábamos ante una maniobra de esas características. Pero, mientras los legisladores se desvelaban por resarcir a la patronal vaciadora, no se preocupaban en absoluto por las necesidades de capital de trabajo de una futura gestión obrera, que habría podido resolverse con un simple subsidio estatal para la adquisición de insumos, pago de salarios y de servicios.

Las propuestas opositoras al proyecto de Altamira pretendían sostenerse en el antecedente de algunas declaraciones de expropia-

ción producidas en la Legislatura bonaerense. Sin embargo, se encontraban muy por detrás de aquéllas, las cuales, por lo menos, permitían a la cooperativa —mediante una donación— acceder a los bienes expropiados. En cambio, la Legislatura porteña sólo pretendía prestarlos y sin contemplar siquiera la cesión gratuita del establecimiento, pues a cambio del comodato los trabajadores deberían pagar al Estado un canon o alquiler por el uso precario de las instalaciones. Así, la "expropiación" terminaría solventada por los propios trabajadores.

El Partido Obrero defendía en la Legislatura cuatro puntos cruciales:

- 1) La expropiación no debe constituir un salvataje para los capitalistas vaciadores. Los recursos estatales no deben dedicarse a financiar negociados, sino a subsidiar la futura gestión obrera.
- 2) La expropiación debe hacerse efectiva a los 30 días de sancionada la ley.
- 3) Los trabajadores no pueden ni deben asumir las deudas de los capitalistas. Los vaciadores deben responder por sus deudas con sus bienes y patrimonio personal.
- 4) El Estado debe hacer de Brukman un proveedor privilegiado para toda su demanda social de materiales textiles (indumentaria e insumos escolares y hospitalarios), de modo de asegurar un destino a la producción de la fábrica bajo gestión obrera.

A todo esto, a mediados de julio de 2002, en una declaración firmada por su delegado Yuri Fernández, los trabajadores de Brukman daban a conocer una declaración que, entre otras cosas, decía: "Frente al abandono total de la patronal, los trabajadores de Brukman llevamos siete meses de lucha en este conflicto y seis meses de producción, durante los cuales pasamos por innumerables obstáculos de toda índole, desde los problemas sociales, económicos y políticos, las luchas internas y, por otro lado, la lucha contra la burocracia sindical y la patronal.

...no aceptamos a la patronal en la fábrica porque ya no la necesitamos... Por tanto, los trabajadores de Brukman seguiremos luchando por la estatización de la fábrica bajo control obrero como

única alternativa viable, demostrada a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y con el apoyo del diputado Jorge Altamira (PO)...

Por otro lado, en cuanto a las actividades se destaca: la participación de Brukman en la marcha del banderazo (20 de junio), convocada por la CTA y la CCC. También el 22 y 23 de junio participamos una vez más en la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, donde los siete meses de lucha de Brukman fueron tomados como ejemplo para toda la clase trabajadora del país. Brukman llevó cuatro propuestas que fueron votadas y aprobadas en la resolución de esa Asamblea:

- 1) Apoyo y solidaridad a la lucha de Brukman. Por la estatización bajo control obrero.
- 2) Apoyo al festival del 20 de julio, pro fondo de huelga para la producción.
- 3) Marcha a la Casa de Gobierno, reclamando la estatización y un subsidio para mantener y diversificar la producción, a nivel nacional con cortes de ruta, puentes y avenidas. Con fecha a designar.
- 4) En defensa de la fuente de trabajo. Ni un desocupado más. Toda fábrica que despida o cierre debe ser ocupada, tomada y puesta a producir por sus trabajadores.

En dicha Asamblea se destacó la presencia de más de 500 delegados dentro de un marco de participación democrática y en comisiones, lo cual fue un paso importante que se dio.

Por último, y como mensaje para todos los trabajadores ocupados y desocupados del país y del mundo: la lucha de Brukman es la lucha de todos los trabajadores, la experiencia de estos siete meses de lucha se refleja en la capacidad de mis compañeros y compañeras que pelean por la fuente de trabajo junto con las asambleas populares, organizaciones sociales y sindicales, trabajadores en lucha y partidos políticos, y que la unidad de los trabajadores marque el camino y dirección hacia un gobierno de trabajadores.

- Por un trabajo digno y genuino.
- Ni un desocupado más.
- Que se vayan todos”.

Sólo el miércoles 25 de setiembre la Comisión de Desarrollo Económico trató por fin los proyectos vinculados con Brukman y Grissinópolis. Por supuesto, cada uno de los casos fue producto de un “tratamiento por separado”. Esto es: volvió a hacerse notable el esfuerzo de la Legislatura por bloquear cualquier frente común de las fábricas ocupadas frente a los poderes del Estado.

Cuando se debatió el proyecto de Altamira respecto de Brukman, tomó la voz cantante el ARI, que presidía esa Comisión. Ellos dijeron que el proyecto del PO “carecía de consenso” y que no conseguiría mayoría legislativa. Así, en nombre del voto de otros, el ARI escamoteó señalar cuál era su propia posición.

Alguien dijo que los trabajadores de Brukman mostraban una “oposición ideológica” a constituirse en cooperativa. Esa es una vieja cantinela que desconoce la historia: las cooperativas en la Argentina son creación del movimiento obrero socialista. Los compañeros presentes en la reunión, razonablemente, contestaron que se oponían al contenido que los proyectos de Ghelco, Chilavert o Grissinópolis le daban a las cooperativas obreras. Las calificaron de “cooperativas vacías”, mientras las patronales eran recompensadas por sus chanchullos. Esos proyectos no garantizaban a los trabajadores ni siquiera los derechos que tenían bajo administración patronal.

“Bajo las condiciones que ustedes nos ofrecen –dijo una trabajadora– no tendríamos salarios ni obra social. Claro que ya estamos viviendo sin salario y sometidos a la feroz competencia de otros capitalistas que fabrican indumentaria. Pero todo eso lo estamos soportando sin necesidad de ninguna ley”.

Enseguida, Altamira señaló: “Si alguien, algún legislador, les reclamó a los compañeros de Brukman el contenido de una propuesta, ellos la acaban de hacer con toda claridad. Exigen la intervención estatal para asegurar una garantía salarial, una obra social y jubilación. En definitiva, todo lo que se ha negado en los proyectos tratados hasta ahora”.

El 3 de octubre, toda la fábrica se movilizó a la Legislatura.

Esa movilización coincidió –y no por casualidad– con una jornada de lucha aprobada por la ANT, que horas antes había empezado

a cortar los accesos a la Capital Federal en reclamo por la libertad de los compañeros jujeños detenidos y que terminó precisamente en la Legislatura para respaldar a las fábricas ocupadas, en especial en defensa de los proyectos de expropiación de Brukman y Grissinópolis.

Allí, los trabajadores de Brukman entregaron a diputados de la Comisión de Desarrollo Económico un petitorio que exigía:

- a) La expropiación sin pago, inmediata y definitiva de inmuebles, maquinaria y marcas de Brukman Confecciones, para que los trabajadores continúen con la producción bajo gestión obrera.
- b) Que el Estado garantice los salarios, como mínimo los de convenio.
- c) Otorgue subsidios no reintegrables por 150 mil pesos, para ampliar y diversificar la producción e incorporar más trabajadores actualmente desocupados, mediante la implementación de una escuela de oficios.
- d) Que el Estado compre la producción en función de las necesidades de hospitales y otras instituciones, así como de la población carente, que requieran indumentaria que pudiera producir.
- e) En estas condiciones los trabajadores de Brukman estaban dispuestos a discutir la forma legal con la cual organizarse, pero donde los trabajadores decidieran en su asamblea soberana quiénes forman parte de la fábrica bajo gestión obrera.

En ese punto, resultaba inevitable un nuevo intento represivo del gobierno. Y la represión sobrevino.

Faltaban diez minutos para las seis de la mañana del domingo 24 de noviembre de 2002, cuando decenas de policías del GEOF (Grupo Especial de Operaciones Federales), con sus rostros cubiertos por pasamontañas, irrumpieron en Brukman acompañados por una flotilla de autos con agentes de civil, tanques hidrantes y carros de asalto. Junto con ellos llegaron los patrones y un grupo de carneros.

Por supuesto, el asalto nocturno obedecía a una orden judicial que acusaba de "usurpación" a los trabajadores que habían sostenido la producción y ordenaba restituirla a los vaciadores.

Sin embargo, la tropelía duró muy poco.

A las ocho de la mañana, más de 100 compañeros habían acudido en defensa de la gestión obrera y presionaban desde las vallas que la policía había colocado en las esquinas. A las once, cuando los manifestantes ya eran más de 500, los facinerosos recibieron orden de replegarse y una multitud de compañeros reingresó en la fábrica. Otra vez atronó el grito de batalla: "Brukman es de los trabajadores..."

A las 18 horas, con más de mil compañeros de asambleas populares, de organizaciones piqueteras, de centros estudiantiles y partidos de izquierda, se hizo una conferencia de prensa y un acto.

En su retirada, la banda de los Brukman y sus compinches destruyeron lo que pudieron: máquinas, instalaciones y una computadora de diseño. Se llevaron también documentos de una oficina que se encontraba precintada, a la espera de una revisión judicial que hubiera verificado las prácticas fraudulentas de la patronal. Así, los Brukman recuperaron la fábrica para huir apenas dos horas después, tras romper como vándalos elementos de producción y robar pruebas de sus delitos.

Esa gentuza volvería, batalla campal mediante, el 21 de abril de 2003.

En verdad, de nuevo, los asaltantes nocturnos habían llegado por la madrugada, esta vez la del jueves 17, comienzo del feriado de Semana Santa, y para que todo tuviera la contundencia necesaria, hasta le quitaron la causa al juez Velásquez y pasaron las actuaciones al juez Jorge Rimondi, del fuero criminal. Este ordenó que el desalojo se hiciera clandestinamente, bajo secreto de sumario, sin derecho a defensa; además, dispuso tareas previas de inteligencia policial, de manera de determinar el momento oportuno para la acción represiva. En su orden, Rimondi dijo textualmente que "no hay supremacía de la vida y la integridad física frente a los intereses económicos". Con esa clase de bestias debían tratar los trabajadores.

El viernes 18 por la tarde, unos cuatro mil compañeros se habían reunido bajo la lluvia y rodeado la fábrica, y otros mil el domingo 20. Así empezó una vigilia obrera, mientras el movimiento piquetero organizaba una gran marcha para el lunes 21. Es de lamentar que,

aquel viernes 18, un grupito de abogados vinculados con el PTS lograron desconcentrar esa magnífica movilización con el argumento de que en la Comisaría 8ª el juez estaba firmando un acta por la cual se comprometía a retirar la policía de la fábrica, a dejarla bajo custodia obrera y a continuar las negociaciones el lunes. Era mentira: esa acta no existió nunca y en cuanto la concentración se levantó, el juez desconoció todo.

El lunes, cerca de las 17, casi diez mil piqueteros llegaron hasta los vallados de la fábrica.

Fue evidente que la policía tenía órdenes anticipadas de reprimir. Había allí un verdadero ejército policial, con hidrantes, carros de asalto, motociclistas y helicópteros. La batalla duró hasta la madrugada. Compañeros del Polo Obrero, en primera línea junto a las vallas, envueltos en nubes de gases, impedían a pie de raso el avance policial. En los alrededores, dos policías de civil fueron obligados a bajar de su auto y un minuto después el móvil estaba en llamas. La brutalidad policial llegó a echar gases en el Hospital Garrahan, donde un grupo de compañeros había encontrado refugio. A esa altura, las fuerzas represivas necesitaban controlar todo el barrio y se entregaban a una cacería de piqueteros, aunque no pudieron ingresar en la Facultad de Psicología, cuyos estudiantes rechazaron una y otra vez las embestidas policiales.

Pasada la medianoche, teníamos una cincuentena de heridos y 130 detenidos. El reagrupamiento de piqueteros, estudiantes y vecinos permitió, a esa hora, concentrar centenares de compañeros frente a la Comisaría 8ª, donde se permaneció hasta que el último preso fue liberado.

Al día siguiente, martes 22, alrededor de 20 mil compañeros volvieron a marchar. El Bloque Piquetero Nacional, con una columna enorme, se concentró en Belgrano y Jujuy para marchar luego hasta Congreso.

El miércoles 23 ya estaba instalado el campamento obrero en Belgrano y Jujuy, y comenzaba una nueva fase de la lucha por Brukman.

Una represión de semejante ferocidad no podía ser sino una decisión política tomada en los niveles más importantes del gobierno.

Por medios salvajes, Duhalde trataba de tornar irreversible la usurpación de la fábrica por parte de quienes la habían vaciado y asaltado. Y, si se arriesgó a un segundo Puente Pueyrredón, era porque allí se jugaba mucho más que el destino de una planta fabril ocupada por un puñado de trabajadores. Allí estaba en juego todo lo que Brukman representaba: la gestión obrera, la posibilidad visible y palpable de que el proletariado reorganizara por sí la vida económica del país, no ya de una simple empresa.

Por eso se ejecutó una operación de Estado que debió violentar hasta los principios de la ley burguesa, como que fue ordenada por la Cámara en lo Criminal y Correccional, y llevada adelante por un juez de ese mismo fuero, cuando el conflicto debía dirimirse en la Justicia laboral. Por eso, todos los candidatos presidenciales de la patronal avalaron el atropello, algunos explícitamente y otros con el silencio. En verdad, la barbarie represiva dejaba al desnudo la naturaleza de aquellas elecciones, que apuntaban a reconstituir la autoridad del Estado y de la clase capitalista en uno de los cimientos de la rebelión popular. Por eso, toda la burguesía respaldó de un modo u otro el ataque de brutos sufrido por los trabajadores.

Clarín, por ejemplo, habló de los "indiscutibles derechos de los Brukman", mientras *La Nación*, en un editorial del 22 de abril, advertía sobre los verdaderos alcances de la contraofensiva patronal: "Lo de ayer es el epílogo de algo que comenzó hace dos años, cuando la Legislatura porteña cedió empresas cerradas a quienes las habían tomado, con el argumento de la crisis... Chilavert, Ghelco, Grisines Savio y Gráfica Valero fueron entregadas a los trabajadores, a pesar de tener dueños o de estar en convocatoria de acreedores". Según el editorialista, todo había sido un "show" con un final anunciado: el retorno de las plantas a manos de sus propietarios, en defensa, claro está, de la "propiedad privada". Ese "show", según el diario de los Mitre, había sido animado "con los discursos encendidos de Vilma Ripoll (IU) y Jorge Altamira (PO), el mismo que presentó un proyecto para expropiar Brukman, que nunca vio la luz".

Del otro lado de la trinchera, también la Asamblea Nacional de Trabajadores tenía las cosas claras y colocaba entre sus objetivos

centrales de lucha el reclamo de expropiación y gestión obrera de Brukman, Sasetru, Zanón y las demás fábricas ocupadas, junto con el de libertad a los piqueteros presos en el norte de Salta.

Defender Brukman, dijo la ANT, significaba ante todo defender los cuatro puntos presentados por los trabajadores en su momento: expropiación de la empresa, garantía salarial, subsidio estatal y declaratoria de proveedor privilegiado de la Ciudad en favor de Brukman. Las banderas de Brukman estarían presentes en la Plaza de Mayo piquetera colmada el 1° de Mayo y volverían a estar en la jornada de lucha dispuesta para defender las fábricas ocupadas. De todo esto se extraía una deducción elemental: la recuperación de Brukman y de Sasetru, y la defensa de Zanón, entre tantas otras, exigía una pelea de conjunto, nacional, coordinada. Ese plan de lucha debía tener, en el caso de Brukman, un primer objetivo: la expulsión de la policía y la devolución de las instalaciones a sus operarios.

A fines de mayo de 2003, un proyecto de ley plagado de limitaciones insalvables —apenas concedía a los obreros la ocupación temporaria del inmueble— consiguió despacho de minoría en la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura y pasó a la Comisión de Presupuesto. Aníbal Ibarra, y con él su centroizquierdista Frente Porteño, se oponían aun a la expropiación parcial de Brukman.

En este punto, conviene recordar que, en principio, ese grupo empresarial estaba formado por tres empresas: Brukman Construcciones, Brukman Hermanos (fábrica de electrodomésticos) y Confecciones Brukman Saic. Las dos primeras ya habían quebrado, con deudas superiores a los tres millones de dólares. Sus acreedores principales eran la Afip-DGI, el Banco Nación y el propio Gobierno de la Ciudad. El grupo no figuraba inscripto en el Anses, de modo que no había depositado los descuentos jubilatorios hechos a sus empleados.

A esa banda delictiva defendía el “progresismo” porteño de Ibarra y compañía.

Mauricio Macri, por su parte, acababa de “compartir un brindis con la familia Brukman”¹ en un country, en Ezeiza, donde había ido

a buscar aportes para su campaña.

Entretanto, después de 50 días del desalojo, la patronal todavía no lograba retomar las instalaciones porque los trabajadores se lo impedían, instalados frente a la planta y rodeados por una enorme solidaridad popular.

No obstante, el lunes 9 de junio, la patronal, con la complicidad del juez y de la policía, consiguió meter en la fábrica a cinco rompehuelgas, a modo de avanzada para que los Brukman pudieran, por fin, recuperar la planta. Pero a la salida descubrieron que había pastos duros, al chocar con un fuerte piquete de compañeros. Hubo de inmediato una batalla campal con la policía, con un trabajador detenido y otros heridos por la represión. Los carneros escaparon en patrulleros.

El miércoles 11, más de veinte mil piqueteros que marchaban desde Liniers hasta la Plaza de Mayo convocados por la ANT, desviaron su camino en Miserere para llegar a Brukman, cuyos trabajadores se incorporaron a la movilización. Luego de esa marcha y de la creciente agitación en Brukman, *Ambito Financiero* dijo que el gobierno estaba “desconcertado” y que preparaba una comisión para hacer de intermediaria “entre obreros rebeldes y funcionarios”. A todo esto, el country de los Brukman en Ezeiza, seguía recibiendo las visitas frecuentes de Macri.

Y la comisión mediadora se constituyó. Ya Adam Smith decía que cuando un organismo del Estado, fuese ejecutivo o judicial, mediaba en un conflicto entre obreros y patronos, favorecería invariablemente a los patronos. Así fue una vez más.

La tal comisión estuvo presidida por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, e integrada por representantes del ministro del Interior, Gustavo Beliz, y del jefe del gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, junto con un “mediador informal”, Miguel Bonasso, quien luego sería diputado en las listas del oficialismo.

“Cuando se quiere mandar algo al muerfe, hay que hacer una comisión”, decía el general Perón. Y allá fueron los pequeños alumnos

¹ *Página/12*, 2 de junio de 2003.

² *Ambito Financiero*, 12 de junio de 2003.

del viejo maestro, a tratar de mandar al muere la lucha de los trabajadores.

Los representantes del gobierno propusieron buscarle al asunto una salida judicial, que habría consistido en precipitar la quiebra de la empresa. Los funcionarios decían que había pruebas de sobra para demostrar el carácter fraudulento del concurso, el cual, en consecuencia, estaría viciado de nulidad. La táctica oficial consistía en reclamar una nueva administración judicial para aquellos meses de transición y, en ese ámbito, pedir el 4 de agosto, fecha de convocatoria de la junta de acreedores, la declaración de quiebra de la empresa.

Esa propuesta era una trampa completa.

En primer lugar planteado, a mediados de junio, el 4 de agosto era una eternidad para los trabajadores que resistían en un campamento callejero, sin salario, literalmente a la intemperie en las inmediaciones de la fábrica. Pero, incluso, aun el 4 de agosto era una fecha incierta, porque bien podía haber nuevas postergaciones. Los trabajadores recordaban que la convocatoria original disponía que la junta de acreedores sesionara en abril y, desde entonces, el juez no había hecho más que postergarla, según el gusto de los Brukman.

Además, tampoco podía tenerse garantía alguna sobre las resoluciones de la junta de acreedores. Resultaba del todo improcedente, absurdo, depositar confianza en una instancia judicial de esas características, un campo tradicional de maniobras y chanchullos entre la patronal y los acreedores. Ningún abogado del fuero comercial desconoce cómo se organizan esas convocatorias, cómo se abultan deudas y hasta se fabrican acreedores si hace falta.

Por otra parte, contra lo que decían los funcionarios, no había necesidad alguna de aguardar la quiebra para proceder a la expropiación. Las leyes de expropiación, tanto la nacional como la de la provincia de Buenos Aires y la específica de la Ciudad, otorgan facultades al Estado para expropiar bienes, muebles o inmuebles (por ejemplo, las maquinarias), cualquiera sea la condición jurídica de su propietario. La empresa sujeta a expropiación puede estar en quie-

bra, en concurso o en perfecta posesión legal de sus bienes, libre de hipotecas o gravámenes sobre ellos. Crissinópolis estaba en concurso cuando la Legislatura porteña la expropió y lo propio sucedía con La Baskonia en el ámbito de la Legislatura bonaerense. En aquellos días, el Senado provincial había dado media sanción al proyecto de expropiación de Sasetru, cuya propietaria, la firma Molisur, no estaba en quiebra y ni siquiera en concurso.

También resultaba por completo inconsistente el argumento gubernamental de que si no se lograba la quiebra, la expropiación podía ser impugnada por "inconstitucional". Aun con la quiebra, nadie puede evitar que recursos de esa naturaleza sean presentados por los acreedores y hasta por la antigua patronal.

Así, la "salida judicial" no era más que una cortina de humo lanzada por el gobierno para liberarse de la presión obrera y popular que se estaba desarrollando alrededor de una lucha estratégica. Al atar la resolución del conflicto a los avatares del concurso, los gobiernos nacional y porteño trataban de sacarse de encima toda responsabilidad, transferirla a un ámbito ajeno a su órbita directa de decisión. Esa "comisión" no tenía otro objetivo que preparar las excusas para que el Gobierno se cruzara de brazos y encogiera los hombros ante cualquier resolución que adoptara el juzgado.

Dicho sin vueltas: todo lo que necesitaban los "mediadores" era no enfrentarse a la banda de los Brukman.

Todas estas observaciones fueron debatidas en una reunión de los trabajadores de Brukman con una delegación del Partido Obrero. Los compañeros se comprometieron a tomar contacto con la dirección del Polo Obrero para buscar un acuerdo con todas las organizaciones integrantes de la Asamblea Nacional de Trabajadores y decidir un plan de lucha conjunto.

Entonces, el sectarismo y el oportunismo intentaron quebrar desde adentro la lucha de Brukman.

A fines de junio se organizó un llamado "Encuentro de Brukman", cuyo único propósito fue oponerse a la Asamblea Nacional de Trabajadores, cuando, desde el primer momento, la ANT había sido un bastión en defensa de los obreros de Brukman. No obstante, abandonar

ese respaldo, darle la espalda, no era grave desde el punto de vista del aislamiento que podía producir respecto de la lucha en sí misma, puesto que la ANT no iba a abandonar jamás a Brukman bajo circunstancia alguna. La gravedad del asunto estaba dada por el hecho de aislar a Brukman del principal centro de reagrupamiento obrero del país. Para poner las cosas en su justo punto: después de las guerras, la desocupación masiva es la herramienta más trágica del capitalismo, en su época de decadencia, para destruir fuerza de trabajo y fuerzas productivas; en fin, para detener el progreso de la humanidad. He ahí la importancia histórica del movimiento piquetero, porque apunta a la gran usina generadora de esa destrucción al organizar a los desocupados en cuanto parte del movimiento obrero y al unir su combate con el de los trabajadores ocupados. El sectarismo y el oportunismo procuraban dejar a Brukman fuera de esa reconstitución histórica de la clase obrera argentina.

Pero, por cierto, no es fácil remar contra semejante corriente y el "encuentro", anunciado con la mayor pompa, terminó en un bochorno al cual no valdría la pena referirse si no sirviera de reflexión, si no resultara útil para avanzar por medio del ensayo y del error, de la crítica y la autocrítica.

El "desencuentro de Brukman", pergeñado por el MST y algunos grupos menores como Convergencia Socialista, la fracción de la FTC vinculada con el MAS y el PTS, no llegó siquiera a comenzar. El MST reclamó para sí 800 delegados, y los otros sólo querían reconocerle 350, de modo que el Teresa Vive se retiró en medio de escenas de boqueo con militantes del PTS y la FTC. Frente a semejante vergüenza, también se fue Convergencia Socialista.

"Lamentablemente... debimos retirarnos del encuentro, deslindando nuestra responsabilidad por la forma en que un sector político de los convocantes, liderado por el PTS, transformó el mismo en un acto populista de aprobación de su propia gestión política en las fábricas ocupadas, utilizando para ello las necesidades y demandas de sus trabajadores, muy particularmente de los de Brukman y Zanón".³

Se trató de un "bochornoso enfrentamiento polémico por las cre-

denciales", en el cual el PTS actuó de manera "mentirosa, burocrática y, finalmente, perjudicial para los trabajadores de Brukman... utilizando sus perentorias necesidades para sostener el corralito partidario, alentando demagógicamente una resistencia aislada del resto de la clase obrera".⁴

El MST sostiene que la reunión se frustró porque "el PTS, que había tenido una escasa presencia en el acto de apertura... montó una provocación para dilatar el comienzo del trabajo en comisiones y que no se realizaran los debates... Intentó acreditar como delegados a un encuentro de trabajadores a decenas de estudiantes que, en el mejor de los casos, se representaban a sí mismos... El FTC, que a diferencia del PTS había sido parte activa de la preparación del encuentro y con quienes se había acordado el criterio de acreditación de los delegados... después de varias horas de debate decidió ceder a las presiones del PTS y al criterio antidemocrático y estudiantil de este pequeño grupo, que sólo buscaba charquear el encuentro. Frente a esto, los compañeros de la corriente sindical del MST y los del Teresa Vive, aunque eran una mayoría abrumadora y podían haber impuesto sus posiciones, decidieron retirarse".⁵

Según el PTS, "lamentablemente la delegación de 350 compañeros del MST se retiró del encuentro... La excusa fue que no se les permitió acreditar 800 delegados cuando ni siquiera estaban presentes la mitad de ellos".⁶

En definitiva, todos coincidieron: eso fue un bochorno.

Poco después, los operarios de Brukman se hacían presentes en la VI Asamblea Nacional de Trabajadores, en calidad de convocantes: la clase obrera en lucha, una vez más, mostraba su capacidad para aprender de sus propias experiencias. Allí llevaron un documento que decía:

"Los trabajadores de Brukman en esta Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados estamos aquí presentes como convocantes.

⁴ Idem anterior.

⁵ *Alternativa Socialista*, N° 354.

⁶ *La Verdad Obrera*, 27 de junio de 2003.

³ *Convergencia Socialista*, 29 de junio de 2003.

Como ustedes ya saben, estamos hace un año y ocho meses en lucha, con tres meses desalojados de la fábrica y arrancados de nuestros puestos de trabajo por la Justicia y los funcionarios anteriores, y los funcionarios de Kirchner.

Estamos hoy aquí porque es necesario construir la unidad entre todos los que luchan; les queremos dejar dicho que no somos ingenuos y que sabemos que nos están castigando duramente por hacer el cuestionamiento de la propiedad privada, y al gobierno, por hacer generar trabajo genuino y haber creado puestos de trabajo, y sabemos que con esto estábamos combatiendo la desocupación, todavía existente en más de cuatro millones de personas.

Por eso debemos exigirle más que nunca puestos de trabajo genuino y así poder engrandecer nuestra Patria. Aumento de salarios ya, aumento de subsidios para los hombres y mujeres desocupados y la inmediata devolución de la fábrica a nosotros, los trabajadores de Brukman, empresa a la cual la patronal abandonó, usando a los trabajadores para su propio enriquecimiento, explotándonos al punto de dejar morir a uno de nuestros compañeros.

Por esto proponemos un plan de lucha para recuperar la fábrica, por eso invitamos a que nos apoyen.

- 1) 24 horas de acampe en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el día 5 de agosto.
- 2) Cortes de ruta en los principales accesos del país, o acciones que ustedes determinen, en todo el país, hasta que se apruebe el proyecto de expropiación de nuestra fábrica.
- 3) Apoyo efectivo e incondicional a la lucha de las obreras de Brukman por la recuperación de la fábrica, para lo cual es necesario impulsar un intensivo plan de lucha.
- 4) Marchar para exigir un paro general a la burocracia sindical, como la CGT y todo tipo de burocracia, para reclamar apoyo por todos los puntos anteriores.

Desde ya, contamos con su apoyo incondicional y como nosotros nos ponemos a su disposición para todas las acciones que podamos hacer en común con todos ustedes. Desde ya muchas gracias”.

Trabajadoras de Brukman

A todo esto, los trabajadores de Brukman ya podían explicar, por propia experiencia, la teoría marxista del Estado. Ya la vida les había enseñado, por ejemplo, que la división de poderes no es otra cosa que un mecanismo de protección de los intereses de la clase capitalista.

Figurones del gobierno iban a diario a la carpa del aguante para presionar a los trabajadores con el propósito de que no tomaran medida de lucha alguna, que estaban a punto de proceder a la expropiación. Pero, claro está, seguían diciendo que era condición para eso que previamente se declarara la quiebra de la empresa. Los trabajadores ya sabían que ése era un requisito falso: no hacía falta ninguna declaración judicial de quiebra, sino una decisión política que sólo se tomaría si ellos redoblaban la pelea.

Además, los funcionarios añadían mentiras de todo tipo. Por ejemplo, les decían a las obreras que habían pedido la declaración de quiebra por las deudas de los Brukman con la Afip. Eso también era falso. Había una petición formulada por el Banco Nación, pero por una deuda mucho menor. En cambio, la Afip no se había presentado.

Por otro lado, la jueza Ballerini, a cargo del concurso preventivo de los Brukman, llegó muy lejos en su tarea de proteger a la banda vaciadora. El Estado, por intermedio del Banco Nación, dijo no estar de acuerdo con la propuesta irrisoria de los Brukman y solicitó la quiebra, porque la concursada no cumplió los requisitos legales para la procedencia de su propuesta. La jueza concedió a los Brukman una extensión del plazo por veinte días hábiles, para que presentaran otra propuesta, aun cuando reconocía el incumplimiento de las exigencias de la ley por parte de aquéllos. Pero aprobó la extensión del plazo, haciendo caso omiso de la solicitud del Banco Nación. Esas chicanas derrumbaban los argumentos del gobierno sobre la cuestión de la quiebra y volvían a demostrar que aún haría falta mucha pelea para lograr algo en favor de los trabajadores.

Por eso, el miércoles 20 de agosto de 2003, los trabajadores hicieron un escrache a Ballerini en los juzgados comerciales de Marcelo

T. de Alvear 1840. La señora, en principio, se negó a recibir a los trabajadores, pero éstos le hicieron saber que no se irían de allí sin hablar con ella, todo entre bombos, cacerolas y guardias de infantería. Por último, se le pudo presentar a una jueza demasiado asustada por lo que dijeran los medios, una oposición a la nueva prórroga. Además, una de las trabajadoras le preguntó en la cara por qué todas sus resoluciones habían favorecido a la banda de los Brukman. La señora no contestó, sólo leyó su propia resolución del 14 de agosto, donde decía que la prórroga concedida había sido la última.

Los trabajadores daban pelea en todos los terrenos y, por medio de profesionales de Apel y del Ceprodh, presentaron una denuncia contra Brukman y su continuadora, Cebex S.A., por la comisión de diversos delitos tributarios y contra la seguridad social, según el artículo 18 de la Ley de Régimen Penal Tributario.

En ese escrito se ofrecían detalles minuciosos sobre las maniobras de ese grupo empresarial y delictivo, entre las cuales se incluía la obtención de un préstamo hipotecario por 1,5 millón de dólares en favor de una firma propia radicada en el Uruguay, con la razón social Meadows Pines S.A. Esa empresa fantasmal tenía idéntico domicilio legal que una de las accionistas de Cebex: la Rooney Corp. S.A. Tales coincidencias develaban, una vez más, que personas jurídicas en apariencia distintas pertenecían en realidad a un mismo grupo económico dedicado a estafar al fisco, a sus acreedores y, sobre todo, a sus propios obreros.

Con tales elementos, el viernes 5 de setiembre, los trabajadores organizaron, frente a la fábrica tomada por fuerzas policiales, un juicio popular a Jacobo Brukman y a sus compinches.

Dos días antes, el miércoles 3, los obreros de Brukman habían asistido a la multitudinaria marcha de la Asamblea Nacional de Trabajadores al Ministerio de Trabajo, donde se exigió el inmediato retiro de la policía de la planta y su devolución a los trabajadores. Las obreras de Brukman llevaron allí, además, su propio petitorio.

A todo esto, llegó octubre de 2003 y, en la Legislatura, a pesar de que el proyecto de expropiación parcial de Brukman tenía despacho de la Comisión de Desarrollo Económico, su tratamiento en el recin-

to estaba empantanado y llevaba dos meses dormido en los cajones de la Comisión de Presupuesto. Estábamos ante la manifiesta decisión política de dilatar cualquier resolución, ya que Presupuesto sólo debía determinar si la gestión obrera era viable y qué recursos se necesitaban para llevar adelante la expropiación.

Sucedía sencillamente que el gobierno de Ibarra no quería expropiar la fábrica, y repetía una y otra vez la cantinela de que aún no se había dictado la quiebra. Mientras tanto, como quedó dicho, la jueza a cargo del caso ya había prorrogado tres veces el llamado "período de exclusividad" de la patronal para presentar ofertas a sus acreedores.

Esas prórrogas judiciales se correspondían con las maniobras de los Brukman para recuperar la fábrica. En efecto: de los cuatro millones y medio de dólares adeudados por la empresa, el cuarenta por ciento consistía en un autopréstamo con una firma fantasma domiciliada en el exterior, propiedad de los Brukman; es decir, una maniobra burda de vaciamiento. Otro 25 por ciento debía imputarse a deudas fiscales, pero la Afip ni siquiera había certificado sus acreencias en la causa que, por separado, se seguía contra los Brukman por evasión impositiva. Resultaba evidente que la empresa se empeñaba en llegar a un acuerdo con ella misma y con el Estado. A la espera de semejante "salida", la jueza prorrogaba una y otra vez el concurso, y el gobierno de Ibarra miraba hacia otro lado.

El cuento de "esperar la quiebra" era el caballito de batalla de los emisarios de Kirchner y de Ibarra, pero todos sabían —los trabajadores los primeros— que la patronal avanzaba para homologar un concurso amañado por ella misma. Por su lado, la Justicia penal seguía adelante con una causa vergonzosa por "usurpación" contra los obreros que llevaban adelante la gestión obrera, después de que la patronal huyera de la planta.

Los Brukman, por supuesto, no querían la fábrica para ponerla a producir. Su intención no era otra que organizar un gran negocio inmobiliario con el enorme edificio de la calle Jujuy. Por eso el gobierno de Ibarra llegó a ofrecer el montaje de un "tallercito" puertas afuera del inmueble en cuestión. Esto es: estaba dispuesto a gastar

dinero en una suerte de microemprendimiento, en un espejito de colores para que los obreros dejaran de luchar y los vaciadores pudieran volver a poner los pies en la planta.

Pero los trabajadores preparaban para el 17 de octubre —fecha de vencimiento de la última prórroga concedida por la jueza— una gran movilización para insistir con la exigencia de expropiación y por el desprocesamiento de los compañeros.

Entretanto, la necesidad gubernamental de neutralizar a los piqueteros (dividir, cooptar y reprimir) ocupaba la primera plana de los diarios.

Esa política se hacía extensiva a las fábricas recuperadas. Se pretendía introducir una cuña en Brukman, en Sasetru, en Zanón, dividir las, aislar a las franjas más consecuentes y cooptar a las otras sobre la base de promesas y prebendas. En ese cuadro se explicaba la repentina aparición en Brukman del servicial Luis Caro. No podía no aparecer. (Ver capítulo sobre Injerencia estatal.)

Caro, como todos saben, no había tenido nada que ver con la larga y perseverante lucha de los compañeros de Brukman.

Si algo estaba claro para todos —en principio para los trabajadores— era que la posibilidad que ahora se presentaba de recuperar el control de la fábrica obedecía a la movilización y únicamente a la movilización, al campamento frente a las puertas de la planta, a los “maquinazos”, a las jornadas de lucha de la Asamblea Nacional de Trabajadores y a la campaña de denuncias contra el desalojo, que había encontrado amplia solidaridad nacional e internacional.

Caro, del todo ajeno a ese proceso, se dedicaba en cambio a urdir en la Legislatura, con Ibarra y con Macri, una ley que sacrificaba una enorme parte de las aspiraciones obreras al circunscribirse a una ocupación transitoria del inmueble y de las maquinarias, y a presentar todo como un hecho consumado; esto es, una extorsión.

Por último, el jueves 30 de octubre de 2003, la Legislatura, bajo presión de una concentración masiva de trabajadores, aprobó la expropiación parcial de Brukman y su entrega a una cooperativa constituida por sus trabajadores. La ley se aprobaba después de un año y medio de dilaciones y trampas para que la banda de los Brukman

pudiera recuperar la fábrica que había abandonado en 2001.

La ley “consensuada” establece la cesión temporaria del edificio de la calle Jujuy y una expropiación que apenas cubre el cuarenta por ciento del valor de la maquinaria. Terminado el plazo de dos años, la cooperativa deberá comprar el inmueble y las máquinas, último recurso para que el esfuerzo de los obreros se vuelva contra ellos mismos y en favor de los vaciadores. (Ver capítulo sobre Leyes de expropiación y Ley de Quiebras.)

Además, los diputados del PJ y de Fuerza Porteña (Ibarra), chantajearon a la propia Legislatura al dar su voto sólo con la condición de obligar a los trabajadores a incorporar a la cooperativa “a aquellos ex empleados de Brukman que así lo soliciten”; es decir, a los carneros. Por esa vía se prepara un “golpe de estado” contra la propia cooperativa, de modo de alterar en cualquier momento su composición con elementos afines a la ex patronal y a punteros oficiales ocupados en tomar por asalto la dirección de las fábricas recuperadas, como Caro y compañía. Esa cláusula fue producto de una negociación sigilosa, en la cual cumplieron un papel muy activo el propio Caro y el presidente del bloque del PJ, el ex funcionario de la dictadura Santiago de Estrada.

En su intervención⁷, Jorge Altamira denunció esa maniobra y exigió la derogación de esa cláusula por considerarla nula de toda nulidad, incluso desde el punto de vista del derecho, en cuanto establece el principio sorprendente de obligar a una cooperativa a incorporar miembros independientemente de la voluntad de quienes la integran. La fuerza de esa denuncia y el respaldo ruidoso que concitó en los trabajadores presentes, estuvo a punto de poner en crisis el “consenso” fraudulento. Por eso, los legisladores de Macri propusieron una modificación cosmética que no altera el fondo del asunto. Pero, una vez más, los trabajadores manifestaron su propósito de no dejarse extorsionar, cuando se fueron del recinto gritando la consigna del momento: “Brukman es de los obreros y no de los carneros”.

De inmediato, como para ratificar otra vez de qué lado está, Aníbal Ibarra sancionó un decreto reglamentario de la ley de expropiación.

⁷ Véase anexo.

ción de Brukman, referido sólo al artículo 8° que habilita el ingreso de quienes sabotearon la ocupación de la fábrica.

Por ese decreto se crea el Registro de Trabajadores de la Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre, con "todos los trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia (en Brukman)". La autoridad de aplicación de ese registro es la Dirección General de Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad, de modo que la cooperativa de Brukman queda transformada en una dependencia del gobierno. Después de haber rechazado tantas veces la estatización por "trasnochada", "anacrónica" e "inviable", ahora asistimos a una maniobra brutal de intervención del Estado en la cooperativa obrera.

Ese mismo decreto demoraba la entrega de la fábrica a los trabajadores, y una cosa y la otra marchaban de la mano: las dilaciones apuntaban a facilitar el ingreso de los carneros y a convertir a Brukman en una Pyme. Luis Caro conocía desde el vamos los planes de Ibarra cuando promovió ese artículo 8°.

Al cierre de este trabajo, los trabajadores comenzaban una nueva etapa de su combate, ahora contra el decreto de Ibarra y, por la completa soberanía de la asamblea de fábrica para tomar cualquier decisión referida a la cooperativa.

Contra todas las maniobras, Brukman es de los trabajadores...

Zanón

“Yo no voy a permitir que una huevada de plástico me impida darle de comer a mi familia”.

Transcurría el 2 de marzo de 2002. Poco antes, el 30 de octubre del año anterior, por primera vez en la historia del derecho laboral argentino, la jueza Elizabeth Rivero de Taiana había declarado el *lock-out* ofensivo en contra de la empresa Zanón y ordenado que el cuarenta por ciento del *stock* en planta se vendiera en un plazo de setenta horas para pagar los salarios de setiembre de 2001. El 28 de noviembre, los 380 trabajadores que quedaban en la fábrica fueron despedidos. La empresa explicó que esa decisión se debía al rechazo, por parte de los obreros, del plan de "reactivación" presentado por la patronal.

Dos días más tarde, los trabajadores marcharon hacia la Casa de Gobierno neuquina para pedir la intervención del gobernador Jorge Sobisch. La respuesta fueron palazos, gases y balas de goma. A todo esto, la lucha obrera ya había concitado una amplia solidaridad por parte de la población, en especial del fuerte movimiento piquetero de la provincia: "Una fábrica bajo control obrero al servicio de la comunidad" era la consigna de los luchadores.

El 1° de diciembre de 2001, los propios trabajadores empezaron a vender los cerámicos y, casi de inmediato, colocaron 88 mil metros cuadrados. Entretanto, los operarios acudían al método piquetero del corte de ruta y el campamento, que ya en abril de 2001, durante una huelga de treinta y cuatro días por falta de pago de salarios, les había dado la victoria tras clausurar el puente de ingreso en la ciudad.

Cuando vendieron esos cerámicos, ya llevaban meses en las carpas, pero el 2 de marzo se terminó el *stock*. ¿Qué hacer? ¿Seguir en la carpa y pelear por un plan miserable de 150 lecopos o entrar en la planta y reanudar la producción por su cuenta? Una asamblea votó por la segunda alternativa y decidió, además, un salario uniforme de 800 pesos para todos, cualquiera fuese el cargo que tuviera.

Entraron. Comenzaron a reparar máquinas y a preparar las líneas de producción. Estaban cortados la electricidad y el gas, con los caños

cerrados por precintos de plástico. Alguien recordó que cortar esos precintos constituía delito. Entonces fue cuando un compañero gritó: "Yo no voy a permitir que una huevada de plástico me impida dar de comer a mi familia".¹

Los precintos volaron y la fábrica empezó a funcionar, mientras la Argentina ardía después del 19 y 20 de diciembre de 2001.

La historia de Cerámica Zanón S.A. había empezado en 1979, alimentada con la sangre abundante que proveía la dictadura militar. Fue, en ese momento, la fábrica de cerámicas más grande del País, con servicios subsidiados y créditos estatales, además de exenciones impositivas de todo tipo. También, Luigi Zanón y su hijo Luis tomaron créditos privados millonarios y los rojos comenzaron a acumularse desde el principio. En 1993, Carlos Menem brindó con los Zanón y con Sobisch para festejar "nuevas inversiones" de la empresa. El gobernador prometió, entre copa y copa, un aporte de cinco millones de dólares.

Cinco años más tarde, Zanón exportaba por diez millones de dólares

¹ Si viéramos la cuestión desde un punto de vista filosófico, encontraríamos aquí un magnífico ejemplo de derecho aplicado, en especial respecto de la pugna entre legalidad y legitimidad. Recordamos, por ejemplo, el debate en la Asamblea Nacional francesa, luego de agosto de 1793, sobre la forma que debería darse al "juicio" a Luis XVI. Robespierre, cuando esa discusión se hubo empantanado, asistió a la Asamblea y dijo: "Esta Asamblea se equivoca al hablar de juicio. Si se tratara de un juicio, habría la posibilidad, como en todo juicio, de que el acusado fuera declarado inocente. Pero si Luis es inocente, la Revolución es culpable. Ciudadanos: esto no es un juicio, esto es un ajusticiamiento revolucionario". En otras palabras: si la legalidad del precinto impide el trabajo y, por tanto, todo progreso, queda fuera de duda la ilegitimidad de esa legalidad. Y cuando la legalidad es ilegítima, queda a la vista la necesidad de cambiar esa ley que niega a las familias obreras el más elemental de los derechos democráticos: el derecho a comer. Pero, como la ley sólo es expresión jurídica de la voluntad de los intereses dominantes, su modificación no puede ser sino producto de la derrota de esos intereses. En tales casos, decide la fuerza. El derecho no es más que la convalidación legal de lo impuesto antes por la fuerza. A quienes hoy levantan altares en honor de la democracia parlamentaria, convendría recordarles que disfrutaban de ella gracias a la guillotina de Robespierre. En definitiva, todo derecho, toda superestructura jurídica, se sustenta en una revolución anterior que necesariamente ha debido ejercer violencia contra el estado de cosas precedente.

y ocupaba 500 trabajadores. La productividad no hacía más que crecer: a fines de 1998, la empresa despidió 100 obreros, mientras la producción aumentaba. Todo eso se hacía, por supuesto, con la complicidad manifiesta de una comisión interna y un sindicato obsecuentemente patronales.

Todo empezó a cambiar cuando terminaba 1999. Por entonces, disimulada tras un campeonato de fútbol, se organizó una lista opositora, antiburocrática: la Lista Marrón, que pronto ganó las elecciones internas con una consigna simple y contundente: "Nosotros no vamos a cargar a los compañeros". Uno de los burócratas desplazados en esas elecciones, Jorge Montes, sería después uno de los organizadores de las bandas de lumpenes y policías que atacaron la fábrica y provocaron batallas campales para devolverle la empresa a los antiguos patrones. El 12 de diciembre de 2000, la Lista Marrón también le ganó a la burocracia la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén.

A partir de entonces, la lucha adquirió otra dimensión y otra calidad.

El 6 de diciembre de 2001, días antes de la mayor explosión social que haya vivido la Argentina, desde los tiempos del Cordobazo, *Prensa Obrera* N° 732, en un artículo de Christian Rath, decía: "Neuquén concentra la crisis política general"².

Acababa de producirse allí una movilización de siete mil estatales, docentes, trabajadores desocupados y operarios de Zanón, que repudiaron la represión y las provocaciones del oficialismo, mientras sostenían dos consignas centrales: No a los lecopos, provincialización de Zanón.

Desde hacía semanas, la provincia estaba semiparalizada, con su actividad industrial y comercial en estado de quiebra, la Legislatura empantanada en su propia crisis y el gobierno, que había prometido diez mil puestos de trabajo, trasponía los límites del ridículo: por ejemplo, proponía "exportar" desocupados a España, mientras confesaba su imposibilidad de pagar sueldos y salarios si no le permitían imponer cuasimonedas fraudulentas, como los lecopos o los patacones.

Paralelamente, bandas armadas por el gobierno asaltaban el local de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten), dirigido por la izquierda, mientras se enviaban telegramas de despido a los

² *Prensa Obrera* N° 732, 6 de diciembre de 2001.

380 trabajadores de Zanón y se amenazaba a los obreros de Cerámica del Valle, que habían recuperado la planta tras la deserción patronal, con enviarles la Gendarmería para desalojarlos. El diario *Río Negro* tituló: "El cierre de Zanón desencadenó una revuelta callejera".

Al otro día, una asamblea general de Zanón hacía una convocatoria urgente para que se reuniera la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados con el propósito de "terminar con la dispersión de las luchas". Además, firmaban esa convocatoria el sindicato ceramista, la Aten de Centenario y de Plottier, el MTD de Neuquén, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), delegados cordobeses de Luz y Fuerza adheridos al Polo Obrero y el Ce.Pro.D.H, junto con el Partido Obrero, el PTS y el MST, entre otros. A esa altura, la patronal pretendía reabrir la fábrica con sólo 120 operarios.

El 2 de marzo de 2002, como quedó dicho, volaron los precintos y la fábrica volvió a producir por exclusiva cuenta de sus trabajadores.

De inmediato, los ocupantes se dividieron en tres grandes grupos: ventas, producción y seguridad. Se organizó el trabajo en jornadas de ocho horas, en tres turnos de setenta u ochenta personas cada uno, durante los cuales se aseguró todo el proceso de confección de los cerámicos y el porcelanato. Otros treinta obreros se constituyeron en una comisión de seguridad, cuya tarea no era la producción en sí misma sino controlar el funcionamiento de la maquinaria y el de la planta en general, incluidas las recorridas nocturnas por el predio. Se eligió una comisión interna compuesta por siete compañeros, representantes de todos los sectores de la fábrica: hornos, esmaltado, pulido, ventas, seguridad y demás. Pero siempre las decisiones se tomaron en Asamblea General, máxima autoridad de los trabajadores en lucha. Ese punto debe ser especialmente subrayado, puesto que, permanentemente, los enemigos de la ocupación procuraron desplazar la Asamblea General a segundo plano, si no eliminarla. Y con razón, puesto que, sustituida la Asamblea, queda suprimido el control obrero.

Entre marzo y abril de 2002, las presiones de Sobisch y los Zanón para conseguir el desalojo compulsivo de la fábrica fueron enormes. Para eso tenían un instrumento de peso en el concurso de acreedores convo-

cado por la patronal en Buenos Aires. Lejos de estatizar la planta bajo control obrero, como exigían sus operarios, el gobierno provincial integraba con dos de sus organismos el comité de acreedores y se constituía en dirección de hecho de los quinientos acreedores, que procuraban que- darse con los restos de Zanón.

Hicieron de todo, y acudieron incluso a la amenaza terrorista. Por ejemplo, uno de los ex directores de la empresa, un tal Frangella, advirtió que un posible corte de gas podía producir una explosión en la planta o en sus alrededores. Ahora bien: ese corte sólo podía producirse fuera del predio y por obra de los interesados en derrotar a los trabajadores. Ese criminal en potencia amenazaba reproducir la tragedia de la textil Kotton, en Chicago, donde 129 obreras fueron incineradas dentro de la fábrica, junto con las instalaciones, el 8 de marzo de 1908.

Prensa Obrera N° 748 advertía: "Con los capitalistas no hay que descartar nada, por eso es importante rodear de solidaridad la lucha de los trabajadores de Zanón, colaborar con sus guardias y exigir que el gobierno se haga cargo de comprar los productos para destinarlos a obras públicas. La lucha se ha transformado en una causa popular.

La causa de los obreros de Zanón y las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados son incompatibles con la presencia de los gobiernos fondomonetaristas. Es necesaria una Asamblea Popular Regional que plantee una lucha unificada hasta que se vayan todos, que se vayan Sobisch y todos los gobernantes que defienden los intereses patronales".

Y no había que descartar nada...

En una nueva y desmedida provocación, un juez, a pedido de la patronal, ordenó una inspección de las instalaciones de gas, para lo cual envió a la fábrica tres camionetas atiborradas de policías y dos camiones de bomberos.

De inmediato, los trabajadores reforzaron su organización para impedir el acceso de la policía. Por ejemplo, se multiplicó la presencia de compañeros en los puestos de seguridad fijos y en los vigilados las 24 horas, como la planta de gas y la subestación eléctrica. Los portones de entrada se cerraron con palets de cerámicos y se instaló una guardia en los

³ *Río Negro*, 1º de diciembre de 2001.

⁴ *Prensa Obrera* N° 748, 4 de abril de 2002.

techos. El resto de los trabajadores recorría el perímetro de la planta, metro por metro.

Todos los puestos de guardia estaban en comunicación permanente con el portón de entrada. Los equipos de seguridad se encargaron de llamar a los trabajadores de franco y, sobre todo, a las organizaciones solidarias. Así fue que, muy pronto, centenares de personas habían recorrido los ocho kilómetros de distancia que hay entre Zanón y la ciudad, de modo que la fábrica quedó rodeada por agrupaciones universitarias, organizaciones de derechos humanos, la junta interna del hospital Castro Rendón y partidos de izquierda como el PO, el MST y el PTS.

Si la patronal y el juez quisieron tantear fuerzas, pudieron comprobar que el pasto estaba muy duro para ellos. La inmediata reacción de los trabajadores y la solidaridad popular obligó a la policía a mandarse a mudar, mientras una delegación de compañeros marchaba a cortar el puente Centenario-Cinco Saltos, en respaldo a la lucha de los docentes de Río Negro.

Las provocaciones continuaron...

El 11 de mayo a la madrugada, una banda de sujetos bien vestidos que llegaron en una 4X4 asaltó la casa del compañero encargado de finanzas, quien en ese momento guardaba parte de la recaudación. El grupo de tareas secuestró a éste y a otro trabajador que llegó después, los obligó a subir a la camioneta y los abandonaron en el Mercado Concentrador, detrás de Zanón. Antes les dijeron: "Lo que están haciendo en la fábrica son puras cagadas y lo van a pagar, zurdos hijos de puta".

Entretanto, Luis Zanón no se privaba de hablar por los medios. En entrevistas que concedió a los diarios *Río Negro* y *La Mañana del Sur* se le preguntó, por ejemplo:

—¿No pudieron ser más flexibles frente a los reclamos de preservación de la fuente de trabajo?

—En 1999 se empezó a notar retracción en el mercado —fue la respuesta—. Para levantar la productividad con costos internacionales razonables teníamos que continuar con menos gente.

Preguntado sobre qué harían los Zanón en caso de recuperar la fábrica, contestó:

—En principio, podría funcionar con no más de 100 personas.

Mientras el señor ofrecía tales respuestas, la fábrica daba sustento directo a 270 familias obreras, e indirecto a muchas más por el proceso de comercialización y distribución, al tiempo que se pagaban en tiempo y forma insumos y proveedores. Paralelamente, se lanzaba una nueva línea de productos: los cerámicos Mapuche, en el noveno mes de gestión obrera.

Entretanto, se desenvolvían otro tipo de problemas.

El PTS, se sabe, es un partido pequeño y básicamente estudiantil. Sin embargo, el problema no radica en el tamaño ni en la base social de una organización, sino en su programa y en la política que desarrolla. Pues bien, el PTS no empleó la influencia que logró en Zanón para fortalecer la lucha de sus trabajadores junto con la del movimiento obrero de todo el país, sino para tratar de aislar esa lucha. Una actitud suicida, por decir lo menos.

Así, el compañero Godoy, de la comisión interna de la fábrica, se las compuso, con argumentos que no eran ciertos, para dejar a Zanón afuera de la Asamblea Nacional de Trabajadores convocada por el Bloque Piquetero Nacional y el Mijd. Godoy sostuvo, por ejemplo, que Zanón no había sido invitada, cuando el compañero Jorge Mora, miembro de la mesa nacional del Bloque Piquetero y del Polo Obrero, se había encargado de invitar especialmente a los trabajadores de Zanón. Pero, más grave aún, Godoy calificó de "antidemocrática" una Asamblea, que ya entonces se había convertido en un Parlamento obrero, en un punto de referencia nacional para trabajadores ocupados y desocupados del país. Usó, además, términos injuriosos, impropios de un luchador obrero: "No vamos a ser floreros de Néstor Pitrola", dijo, con lo cual insultó de manera sorprendente a los centenares de delegados que debatieron en comisiones durante dos días enteros. Es decir, a los centenares de compañeros del Bloque Piquetero que no pertenecen al Polo Obrero y a los militantes del Mijd. También, por supuesto, a los compañeros del Polo, que debaten su línea política en congresos nacionales y regionales, eligen democráticamente a sus dirigentes y no son "floreros" de nadie.

Esa fue, precisamente, la Asamblea Nacional de Trabajadores que votó el plan de lucha, durante el cual fueron asesinados los compañeros Kosteki y Santillán, y generó la crisis política que obligó a Duhalde a ir-

se con el rabo entre las patas. Esa fue la Asamblea que votó un documento que, entre otras cosas, decía: "Apoyo a Brukman, Zanón, Clínica Junín, Lanera Albañal y demás fábricas bajo control obrero... Creación de una red nacional de consumo y producción de las fábricas bajo control obrero y las organizaciones de desocupados, para imponer una economía bajo control obrero..."

Impulsamos la ocupación de toda fábrica que cierre o despida, para luchar por su continuidad mediante la expropiación sin pago a cargo del Estado y bajo control y gestión de sus trabajadores... De acuerdo con diseños soberanamente resueltos por los trabajadores, el Estado debe dar prioridad absoluta al aprovisionamiento de las empresas bajo control obrero... Llamamos a realizar una reunión nacional de fábricas ocupadas, en lucha o autogestionadas por sus trabajadores, para impulsar este programa y lanzar una campaña de ocupaciones obreras de toda fábrica que despida o cierre..."

Por eso, *Prensa Obrera* escribía: "Compañero Godoy: como usted dice, no hay que ser ciego, hay que ver que otros también luchan. Pretender desconocer lo que ha significado, desde el punto de vista político, la Asamblea convocada por el Bloque Piquetero y su plan de lucha (duramente reprimido por el gobierno patronal) seguirá aislando de la lucha nacional a los obreros de Zanón".

También en julio de 2002, el PTS propuso una "administración obrera transitoria" para las fábricas ocupadas, un régimen de transición, según ellos mismos decían, "en el camino de la estatización". Es decir: un escalón intermedio durante el cual la fábrica no estaría estatizada y ni siquiera expropiada, de modo que, aun bajo "administración obrera", continuaría en manos de sus antiguos dueños. Es decir, para el PTS, la propuesta no consistía en un maniobra sino que le asignaba un valor estratégico. Pero si se trataba de una maniobra —y en ese punto nos corrigiera el PTS— no correspondería embellecerla como si lo hizo el PTS, para quien la "administración obrera judicial" era un suerte de peldaño hacia el socialismo.

¿En qué hubiera consistido esa "administración obrera"? En que el juez otorgara a los trabajadores la administración de la empresa en el

marco de la causa judicial por convocatoria de acreedores.

Pero, precisamente, en la Ley de Quiebras está presente la figura del "coadministrador" —un funcionario más del concurso— que actúa por mandato del juez y coordina con el síndico y con el comité de acreedores la supervisión de la sociedad, y su función es "el cumplimiento del acuerdo preventivo y de la liquidación de la quiebra".

Resulta claro, en ese contexto, que la "coadministración", aun asumida por el colectivo de los trabajadores, sería funcional a la quiebra o a un acuerdo con los acreedores. Cuando el PTS propuso semejante cosa, los trabajadores de Zanón ejercían esa administración en forma por completo independiente; en cambio, si se convertían en "administradores judiciales", quedaban bajo tutela del juez y a merced de los avatares de la convocatoria y de las demandas de los acreedores, a cuyo patrimonio irían las ganancias generadas. Así, esa propuesta permitía al capital y al propio Estado, vía causa judicial, meter una cuña y reconquistar una injerencia en el funcionamiento de la fábrica, que hasta entonces no tenían ni habían logrado imponer, ni siquiera mediante la represión.

El tema tiene extrema actualidad, pues en la fábrica se ha vuelto a reflotar esta consigna en torno a lo cual se ha pretendido montar una campaña de movilización. En vez de integrarse al concurso judicial, aun bajo el disfraz de la "administración obrera", lo que hay que hacer es apartarse de ese concurso como de la peste, separar el destino de los trabajadores del destino de los acreedores. Eso supone, en primer lugar, exigir la expropiación de la planta sin resarcimiento alguno y luchar para que esos fondos sean entregados a la gestión obrera.

Por ese camino, de tanto batir el parche sobre la estatización bajo control de los trabajadores, el PTS terminaba convirtiendo la consigna en una salida judicial; por tanto, al indudable servicio del capital.

En el marco de esa política, el PTS procuró, por medio del sindicato ceramista neuquino, organizar una tendencia "propia", bajo su exclusivo control, con el propósito de hacer frente, de manera rupturista, al frente de organizaciones piqueteras gestado en torno de la Asamblea Nacional, de la ANT, compuesta por el Bloque Piquetero, decenas de sindicatos clasistas y casi cuarenta asambleas populares. Frente a esa uni-

⁵ *Prensa Obrera* N° 762, 11 de julio de 2002.

dad obrera en la lucha, el PTS buscó crear su propio "sello" divisionista y se valió para ese fin del sindicato ceramista y de los trabajadores de Zanón. He ahí el comportamiento de una secta.

Así fue que, el 18 de julio de 2002, en la reunión de la Mesa Coordinadora Regional de Neuquén, el PTS rechazó la convocatoria al Encuentro de fábricas ocupadas –ya intentaría organizar el suyo propio, terminado en un desastre patético– y el plan de lucha decidido por la ANT. Así consiguió romper la Mesa Coordinadora, respaldado sólo por un sector del MTD y por un grupúsculo de provocadores que se hace llamar POR. Mejor dicho: por una parte de ese grupúsculo, porque se han peleado entre ellos.

Entretanto, continuaban las agresiones estatales y patronales contra los trabajadores de Zanón.

El miércoles 7 de agosto de 2002 volvió a aterrizar en Neuquén un pedido de desalojo de Zanón. El juez Germán Páez Castañeda, de la Capital Federal, ordenó que los síndicos designados tomaran posesión de la planta y procedieran a practicar el inventario de sus bienes. Esa misma noche, a partir de las 23, empezaron a llegar compañeros a la fábrica y, a las 2 de la madrugada del jueves 8, unos cuatrocientos trabajadores de distintos puntos de la ciudad acompañaban a los ceramistas.

Otra vez se reforzaron las guardias con la participación de trabajadores de distintos gremios y de compañeros desocupados, al tiempo que se designaba a dos miembros de cada organización presente para entrevistarse a primera hora de la mañana con autoridades gubernamentales y con el juez provincial Bassi, en quien había recaído la causa después del excusamiento de la jueza Susana Busqueta.

El juez, durante el curso de la entrevista, dijo que se veía obligado a dar curso a la resolución de Páez Castañeda en el curso de cinco días, pero, añadió, las alternativas eran varias y que en principio no se proponía dar orden de desalojo.

El debate con la subsecretaria de Trabajo de la provincia –una señora de apellido Comelli– fue mucho más áspero. Comelli derivó a la Justicia la resolución del conflicto y adujo que la responsabilidad de la provincia en el caso era mínima, puesto que, sobre una deuda total de setenta millones de dólares que tenía la empresa, el Estado provincial era

acreedor de sólo cinco millones. Esto es: ante un conflicto social y político de magnitud nacional, la señora contestaba con cuentas de almacenera. Pero, además, Comelli sostuvo que el principal obstáculo para la resolución del problema era la actitud del secretario general del sindicato ceramista, quien, según ella, "se negaba a toda negociación". Casualmente, esa misma noche, la burocracia desplazada del gremio volanteó la ciudad con unos panfletos en los cuales acusaba al compañero Godoy de ser responsable de toda la situación. Gracioso, la funcionaria y los viejos burócratas: el gobierno y la patronal delictiva no tenían en el asunto responsabilidad alguna; en cambio, todas las culpas caían sobre el dirigente de los trabajadores, que habían puesto a funcionar la fábrica quebrada por sus dueños.

La delegación rechazó con énfasis esa posición provocadora de la subsecretaria. Específicamente, el Polo Obrero le dijo que un gobierno que había desconocido la propiedad de millones de ahorristas y arrasado el salario y las condiciones de vida de millones de trabajadores, no tenía derecho –ni siquiera derecho burgués– a defender la propiedad de los bancos acreedores de Zanón. El PO añadió que la responsabilidad de la provincia no se reducía al cinco por ciento de las acreencias sino al 100 por ciento de la estabilidad laboral de los trabajadores neuquinos y que consideraba una lisa y llana provocación el ataque contra los dirigentes que llevaban adelante los planteos del conjunto de los trabajadores ceramistas y de la comunidad entera, que respaldaba el mantenimiento en funciones de la fábrica. También se le reiteró la vieja posición del Polo: expropiación de la fábrica bajo control de sus trabajadores.

Pero, de un modo u otro, el nuevo intento de doblegar a Zanón mostró otra vez la necesidad de que sus obreros tomaran parte de los encuentros de fábricas ocupadas y de las Asambleas Nacionales de Trabajadores.

Así, a comienzos de agosto, a las puertas de Zanón se hizo un acto con más de seiscientos trabajadores para repudiar el nuevo intento judicial de desalojar la fábrica. El contingente del Polo Obrero llegó en una manifestación que reunió a casi ciento cincuenta compañeros.

Setenta y dos horas antes, a la una de la madrugada, en medio de una niebla espesa, un contingente parecido se había congregado frente

a Zanón ante el rumor de que Gendarmería se aprestaba a proceder al desalojo.

Las tropas llegaron, pero adentro todo cambió. Los compañeros se dividieron en dos turnos de 12 horas, pero sólo el setenta por ciento de ellos hicieron caminar la producción, mientras los demás se ocupaban de garantizar la toma. Las agrupaciones combativas de Neuquén rodearon la planta para defender la lucha por los puestos de trabajo; mientras en Buenos Aires, las asambleas populares hacían lo propio con Brukman, Grissinópolis o Chilavert. Así se impidió el nuevo intento de agresión.

Luego, en el acto al cual se hizo referencia, Néstor Pitrola subrayó la derrota política sufrida por el gobierno al tratar de impedir el campamento piquetero en Plaza de Mayo e hizo hincapié en que esa victoria obrera contribuía a la derrota de todos los intentos represivos contra las fábricas ocupadas. Pitrola destacó que, entre todas las luchas obreras del momento, las de mayor alcance revolucionario eran las ocupaciones de fábricas, porque ellas ponen en el orden del día el control obrero de la producción y mostraban un norte para todos los trabajadores del país.

Pitrola indicó que, ante la amenaza de desalojo y el acto organizado en defensa de Zanón, el Bloque Piquetero y los demás convocantes de la Asamblea Nacional de Trabajadores habían decidido postergar un Encuentro de fábricas ocupadas previsto para el 10 de agosto y hacerlo el día 24 en Grissinópolis, para constituir un movimiento nacional único de empresas ocupadas bajo control obrero, todo ello de la mano de sindicatos clasistas, organizaciones piqueteras y asambleas populares.

En contraste con todo esto, apenas horas antes de ese acto de unidad obrera, se había hecho un encuentro de características muy peculiares. Ahí estuvieron algunas empresas en lucha como Clínica Junín, Brukman, Chilavert, Grissinópolis, una cooperativa zonal, los mineros de Río Turbio y la propia Zanón. Allí, el PTS propuso otro encuentro, distinto al de la ANT, para el 7 de setiembre, y un "encuentro preparatorio" ... el 24 de agosto, de modo de dividir el movimiento unitario. En una actitud propia de la peor burocracia, se impidió hablar a quienes no estuvieron de acuerdo con esa postura, cual fue el caso, por ejemplo, del representante del Turbio, de los trabajadores de Grissinópolis, de distintas repre-

sentaciones de Aten, de la Lista Naranja de la Uocra y del Bloque Piquetero. Los compañeros del Bloque fueron invitados después a saludar, pero Godoy les quitó el micrófono antes de que pudieran decir palabra.

He ahí el contraste con la Asamblea Piquetera que había sesionado el 22 y el 23 de junio, donde más de mil delegados debatieron hasta agotar posiciones y todo se votó a mano alzada, punto por punto. Aquí, en cambio, se votó a libro cerrado, sin mano alzada, todas las resoluciones al mismo tiempo. Pero el peor contraste, como ya hemos explicado, se daría después, en el llamado "encuentro de Brukman", donde los convocantes terminaron a trompadas entre ellos, antes de empezar las sesiones.

Y, mientras tanto, las provocaciones contra Zanón proseguían y se hacían peores cada vez.

El 1º de octubre de 2002 se cumplió un año desde la ocupación de la planta y el aniversario coincidió con un nuevo intento de desalojo.

Ya a mediados de setiembre, debido al permanente sabotaje que sufrían, los compañeros habían empezado a fabricar cajas para embalar sus productos, tarea que les permitió incorporar diez trabajadores más. Entretanto, los abogados de los Zanón promovían acciones legales contra los operarios y contra el sindicato por "uso ilegal de marca".

Por otra vía, fracasaba un tercer intento de desalojo ordenado por el juez Páez Castañeda gracias a la solidaridad activa de la población. Ese respaldo hacia la lucha de la planta ocupada tenía una importancia vital, puesto que, además de Páez Castañeda, también el juez Raúl Bassi insistía con el desalojo.

Mientras tanto, los burócratas de la ex conducción organizaban un agrupamiento disfrazado con el nombre de "Ceramistas Independientes", acompañados, claro está, por la CGT local. En un volante que repartieron en el puente carretero, decían: "Queremos volver a trabajar en las condiciones anteriores, pero no bajo control obrero". Más claro, agua. También en una entrevista con *La Mañana del Sur*⁶, hicieron provocaciones muy precisas, que anunciaban lo que se venía. Por su parte, el diario *Río Negro* se incorporaba decididamente a la ofensiva antiobrera y calificaba de "insólito" el hecho "de que la Justicia no actúe en defen-

⁶La Mañana del Sur, 17 de agosto de 2002.

sa de la propiedad privada”.

Y el 1° de octubre se vinieron.

Las primeras en llegar fueron las patotas de la vieja burocracia, que instalaron carpas frente a la fábrica protegidas por una fuerte presencia policial. Mientras tanto, la prensa difundía falsedades con el propósito evidente de confundir a la población: “batalla campal entre ceramistas” o “guerra entre pobres”, eran algunas de las muletillas que repiqueaban de continuo en los medios patronales.

El gobierno publicó un comunicado en el cual se sostenía que Sobisch había decidido permanecer “como una instancia superadora cuando, si en algún momento debiera intervenir, sea para ayudar a solucionar el conflicto”. Pero esa “instancia superadora” era la que había mandado a la policía, mientras, el mismo día, la eléctrica Epen cortaba la energía durante una hora e intimaba al sindicato y a la fábrica a pagar una deuda de quinientos mil pesos. Como se ve, la ofensiva se descargaba desde varios frentes.

La firmeza de los trabajadores fue la primera defensa con la que se encontraron los matones. Enseguida, el Polo Obrero y las demás organizaciones piqueteras instalaron guardias externas de 24 horas. El jueves 3, una reunión dentro de la planta entre trabajadores, organizaciones solidarias, la CTA y ATE anunció un paro general para el lunes 7 y una movilización a la fábrica.

Así se hizo desistir a los provocadores, quienes debieron levantar el campamento instalado frente a Zanón. Pero, por supuesto, las intenciones de desalojar a los compañeros seguían vigentes. Ahora, el juez pretendía que los síndicos hicieran su inventario, aunque sin desalojo previo. Al mismo tiempo, la Epen amenazaba con cortar el suministro si el lunes 7 no se pagaba la deuda. Por eso, el Polo Obrero criticó a la CTA, por haber suspendido el paro cuando la patota levantó campamento, aunque claramente esa patota sólo cumplía un papel de simple auxiliar de la política patronal. Además, los jueces pretendían que los síndicos, además de hacer el dichoso inventario, tomaran posesión de la fábrica y permanecieran en ella, cual era su verdadero objetivo. Ya a mediados de noviembre, una delegación de la burocracia expulsada del sindicato via-

jó a Buenos Aires, en cumplimiento de órdenes de la patronal, para exigirle al juez del concurso el inmediato desalojo de la fábrica. Esa patota actuaba en complicidad con la Federación Ceramista, adherida a la CGT de Hugo Moyano.

Momentáneamente, la situación se inclinó en favor de los trabajadores el 22 de noviembre, con una masiva marcha de los operarios de Zanón, el Polo Obrero, el MTD, el Teresa Vive y Barrios de Pie. La movilización exigió la estatización de la fábrica, lo cual fue calificado de “quimera” por el diario *Río Negro*. El Polo Obrero decía: “Todo y todos en defensa de Zanón ocupada, paro activo provincial inmediato de advertencia contra las amenazas de desalojo y por todos los reclamos planteados, expropiación bajo control obrero ya”.

Un año después, la Justicia operaba un cambio de táctica.

El 17 de octubre de 2003 se conoció un extenso fallo del juez que entiende en la causa Zanón. Ese fallo amplía el alcance de la intervención judicial al grado de intervención plena, con desplazamiento de las autoridades constituidas, y encomienda la administración de las sociedades Cerámica Zanón Sacym, Barda Negra S.A. y Canteras Zafiro S.A. a los doctores Juan Carlos Carvajal y Susana Leonor Prisant.

Se trataba, claro está, de una maniobra vulgar del juez Páez Castañeda, quien, en pleno conocimiento de las actitudes delictivas de los Zanón (despidos, vaciamiento, *lock-out* ofensivo y otras lindezas), en reiteradas ocasiones se hizo cómplice de esas actitudes y ordenó el uso de la fuerza pública para desalojar la planta. Ahora, con este fallo, nos mostraba los mil caminos que tiene la Justicia para defender la propiedad privada patronal.

La resolución del juez apunta directamente contra la estabilidad de más de trescientos compañeros, sostenidos en la fábrica por la gestión obrera y sólo por ella, puesto que instruye a la intervención a buscar soluciones “que comprometan el mayor número de trabajadores”. Ni qué decir de los salarios, en cuanto aconseja actuaciones “compatibles” con los intereses del concurso y con la situación “del mercado”.

A confesión de partes, relevo de pruebas: el fallo confiesa que la intención de los gestores no es otra que defender los intereses de los acreedores y, por esa vía, poner fin a la gestión obrera. En otras palabras: ese

⁷*Río Negro*, 14 de agosto de 2002.

fallo forma parte de la amplia ofensiva gubernamental contra las fábricas ocupadas y las organizaciones piqueteras.

Por supuesto, el reaccionario diario *Río Negro* saludó alborozado la decisión de Páez Castañeda y dijo de ella que constituía un fuerte espaldarazo a los trabajadores al remover a los directivos de la empresa y designar en su lugar a dos interventores para conducir la planta. El diario incluye una entrevista a miembros de la comisión interna de Zanón, quienes explican allí la propuesta que ellos mismos presentaron al juez para constituir una cooperativa transitoria que permita "legalizar" la gestión obrera (la "administración obrera judicial" que comentamos).

Más allá de los avatares de la lucha desplegada por los compañeros de Zanón, hay algo incuestionable y es que la gestión obrera de Zanón se ha afianzado, en términos políticos pero también económicos. Nadie puede dudar del enorme capital político que tiene en su haber Zanón expresado en un enorme respaldo popular. A su turno, Zanón ha multiplicado su producción casi por diez, ha incorporado varias decenas de trabajadores a su planta, que fueron reclutados en las filas de las organizaciones de desocupados. Ha probado, en la práctica, la superioridad de los métodos de organización de la clase obrera en oposición al fracaso capitalista.

La gestión obrera de Zanón firmó el 15 de noviembre de 2002, un convenio con la Universidad de las Madres que, según los delegados, permitió superar los escollos con que se tropezaba en materia de comercialización. Como consecuencia, la Universidad de las Madres ha conformado y se ha hecho cargo de una asociación civil que viene oficiando de intermediario entre la gestión obrera y el mercado, comprando los insumos que Zanón necesita y vendiendo los productos terminados que ésta fabrica. Sería necesario reunir más elementos de juicio sobre dicha asociación (cómo funciona, su dirección, su relación con los trabajadores de la planta, los mecanismos de control, etc.) para poder emitir una opinión sobre esta iniciativa.

Visto el panorama de conjunto, lo que sí está claro que la posición conquistada por los trabajadores de Zanón ha creado un terreno favorable para retomar la movilización, para imponer la expropiación de la planta bajo gestión obrera.

La gestión obrera en las empresas de transporte

El transporte de pasajeros se encuentra en una crisis final. Diferentes líneas están al borde del colapso: adeudan salarios por varios meses; no reponen los insumos; disminuyen las frecuencias —en especial, las nocturnas—; cancelan servicios por falta de combustible; a las unidades que salen a la calle no se le hace el mantenimiento elemental —para no hablar del deterioro que experimenta el parque automotor. La patronal pretende resolver la crisis descargándola sobre los choferes y el público usuario. El gobierno otorgó a las empresas un subsidio de 750 pesos por unidad. Este subsidio se financia con un aumento de la tasa al gasoil de 5 a 8 centavos por litro, o sea 22 millones de pesos mensuales y 260 millones al año. Los empresarios siguen, de todos modos, reclamando el aumento del boleto. El subsidio no ha detenido la caída, ni el default de las empresas. En el 2003 se produjo el cese de una importante empresa de la zona oeste del conurbano, la Mariano Moreno; la Río de la Plata cerró sus puertas, dejando en la calle a varios centenares de compañeros y el 2004 arrancó con el cierre de la Lujanera.

El colapso ha dado lugar al copamiento del transporte por parte de grandes grupos empresarios. Las "absorciones" de líneas se hacen a expensas de los trabajadores.

En el caso de la Mariano Moreno, la patronal abandona la línea, luego de vaciarla, los trabajadores tomaron en sus manos la tarea de prestar el servicio con las pocas unidades que había en condiciones. En poco tiempo, la gestión de los trabajadores incrementó paulatinamente la cantidad de unidades.

La empresa La Perlita, al ver cómo se le escapaba el negocio, utilizó a la UTA como fuerza de choque para impedir la continuidad del servicio. Es así, cómo La Perlita se quedó con los pisos de la Mariano Moreno absorbiendo a la mitad del personal en condiciones muy precarias, con pérdida de salarios. Ese "ahorro" no ha redundado, sin embargo, en una mejora del servicio y la mitad del personal quedó en la calle. La política de las nuevas administraciones es aumentar los márgenes de ren-

tabilidad sin invertir un peso o haciendo inversiones insignificantes. El servicio de la Río de la Plata o El Halcón se deterioró —y culminó con el cierre en el caso de la primera—, inclusive, desde el momento en que ambas empresas pasaron a manos de Colcan, concesionaria de Mercedes-Benz, uno de los pulpos que viene copando monopólicamente el mercado. Un ejemplo muy ilustrativo y reciente de este proceso es el de Expreso Paraná (Línea 228).

La patronal de esa empresa de transporte vuelve a cometer un nuevo vaciamiento dejando a cientos de trabajadores en la calle. Cuando decimos "vuelve", nos referimos a que también llevaron a la quiebra a la empresa Río de la Plata, con las consecuencias por todos conocidas.

La empresa Expreso Paraná (228), a la cual le decretan la quiebra con una deuda aproximada de 11 millones de pesos, es un símbolo de la política capitalista en la materia. Pero no sólo fue la patronal (Prieto) la responsable de la pérdida de los puestos de trabajo —sólo en Campana y Zárate más de 120 choferes—. También colaboró la Comisión Nacional de Transporte (CNRT), ya que la paralización total de los recorridos se produce por la quita de los pisos ordenada por este organismo. Se le entrega la línea en bandeja, a una UTE (Unión Transitoria de Empresas), con la "colaboración" de la UTA, quien ofrece a los choferes el paso a la misma. Los que aceptan el cambio de empresa pierden la antigüedad y reciben, como chantaje, y en mismo día, ciento cincuenta pesos en efectivo con el propósito de impedir cualquier tipo de resistencia de los trabajadores (sobre 140 choferes, 120 terminan "aceptando" la propuesta del sindicato y la UTE).

El Estado apañó esta situación ya que le otorgó a la patronal el subsidio de mil pesos por coche (100 en total), lo que le permitió embolsar casi 1 millón por mes: les pagaron por el total de unidades, cuando en realidad la mayoría no funcionaba. Sin embargo, ni un solo peso fue utilizado por la patronal para arreglar las unidades o pagar salarios atrasados; al contrario, "Prieto", previo al cierre de la línea, sacó las unidades más nuevas de la cabecera y vendió seis coches de larga distancia de tres ejes —cuyo valor se estima en 50.000 pesos cada uno—, de lo cual ni un solo peso fue a los trabajadores.

La flamante UTE, denominada Utenor, reúne a cinco patronales de

la zona norte, entre las cuales ¡cuatro están con convocatoria de acreedores! Y de yapa, entre los directivos de Utenor se encuentra un ex directivo de Expreso Paraná. A lo largo del conflicto, surgió una resistencia contra la política a la burocracia y a la nueva patronal; ésta fue llevada adelante por un grupo de trabajadores que rechazando la propuesta de la UTE, sacaron a trabajar a seis unidades logrando mantener los puestos de trabajo e incluir catorce puestos más, es decir un total de 24 trabajadores recuperan su fuente de empleo; esta experiencia se corta cuando el juez a cargo de la causa les incauta las unidades, que vuelven al corralón a la espera de su remate. Las tentativas posteriores de impedir el desmantelamiento definitivo de la línea fueron igualmente infructuosas. Pasado un período, la UTE se disolvió y Expreso Paraná terminó siendo desguazada y el botín (sus recorridos) repartido entre los diferentes grupos empresarios que conformaban esa alianza societaria.

Expreso Paraná no es un rayo en cielo sereno. Otras empresas de la zona norte del conurbano están al borde del abismo: como la 291, de Escobar, o ya se fundieron como la 503.

La burocracia de la UTA, al igual que la patronal, reclama subsidios, pero cuando de todos modos viene el cierre, se limita a una protesta aislada y resignada, a la espera de que venga un comprador que se haga cargo de la línea. La "solución" que proponen Palacios y Cía. puede llegar a constituir una "salida" para los dueños, que se desembarazan de sus deudas, pero no para los trabajadores, que pagan el costo de esta reorganización (tendal de despidos y superexplotación).

En todas las empresas cerradas o con cierre inminente, se impone una reorganización que dé prioridad a los intereses y aspiraciones de los trabajadores. ¿Por qué no dar vuelta la fórmula y que paguen la crisis quienes la provocaron? Las patronales vaciadoras deberían ser apartadas del manejo de las empresas y su lugar tendría que ser ocupado por los trabajadores. Los bienes que actualmente utiliza la empresa —vehículos, edificios e insumos— deberían ser expropiados y pasar a formar parte del patrimonio y el servicio de una futura gestión obrera en un plazo perentorio de treinta días y sus pisos —la concesión de los recorridos— traspasados a los trabajadores. Los fondos públicos que en la actualidad van destinados al salvataje de la patronal en crisis, y no tan en

crisis, es decir a financiar el vaciamiento, deberían ir a sostener el emprendimiento obrero. En lugar de rescatar al capital, se plantea resarcir a los trabajadores.

No es un secreto para nadie la desconfianza que despierta entre los trabajadores cualquier iniciativa de estatización. El Estado es el responsable de la catástrofe y de la desorganización económica actuales. La "estatización" le daría al poder político la fuerza para dislocar o destruir el control o gestión obrera y proceder a una reprivatización.

En lugar de una empresa administrada por el burócrata de turno, es necesario impulsar una empresa autónoma con una dirección responsable ante la asamblea de los trabajadores de la línea, elegible y revocable en cualquier momento.

El planteamiento a favor de la expropiación no excluye otras instancias de reclamo. Una cuestión fundamental es el reclamo al Poder Ejecutivo de que intervenga y garantice la continuidad del servicio, arbitrando los medios para que éste siga siendo prestado por los propios trabajadores de la empresa. El gobierno normalmente procede en sentido contrario, cediéndole provisoriamente el piso (concesión) a otra empresa privada de transporte, mientras los trabajadores de la empresa en desgracia se quedan en la calle. Esta llamada cesión "transitoria" no es más que el punto de arranque de una salida patronal definitiva, que culmina con la desaparición y desguace de la línea, y el despido masivo de los trabajadores. La legislación de la provincia de Buenos Aires plantea, sin embargo, otra alternativa, que deliberadamente es obviada en la medida en que es un obstáculo para una reorganización capitalista. "Cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias fuera de su control (...) en estos casos o en los de notoria incapacidad o contumacia de la empresa, paralización por cualquier causa o abandono del servicio, la Dirección (de Transporte) podrá disponer la prestación por gestión directa, mediante la incautación de los bienes de la empresa responsable, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario¹. No es inevitable ni siquiera la "única" alternativa "legal" la paralización ni el desguace de las empresas. El gobierno debería valerse de las facultades que le

otorga la ley y garantizar transitoriamente la continuidad del servicio por gestión directa, apelando a los trabajadores de las empresas en crisis, mientras se avanza en una solución definitiva. Este planteamiento es clave, máxime si se precipita un desenlace, como resultado de la quiebra de una empresa.

Este programa constituye un punto de partida para una salida obrera a la crisis actual. Esta salida incluye una reorganización general del transporte, integrando armónicamente en un plan único todos los medios de transporte (automotor, ferrocarriles, etc.) que permita una reasignación y ampliación (plan de inversiones) de los recursos, la reprogramación de los recorridos y su aprovechamiento en función de las necesidades de la población explotada. Este plan único plantea terminar con las privatizaciones y proceder a la expropiación de los pulpos de transporte.

Cualquier reorganización del transporte, por otra parte, es impensable sin afectar los intereses de los pulpos petroleros. Una parte de la ganancia ha pasado a manos de las petroleras a través del aumento sideral experimentado en los precios del gasoil. El Estado, a través del subsidio a las empresas, ha salido a financiar esta renta extraordinaria. Estamos en presencia de una hipoteca insostenible que coloca a la orden del día la expropiación sin pago de los distintos grupos capitalistas de la energía y su estatización bajo gestión mayoritaria de los trabajadores.

Transporte del Oeste

Quien mejor sintetiza la lucha por la gestión obrera del transporte son los trabajadores de Transporte del Oeste (TDO). La lucha que viene librando esta línea de colectivos y que se remonta a casi una década, se ha ganado un lugar indiscutible en la rica historia del movimiento obrero argentino. Los mil compañeros que conforman esta empresa de la zona oeste del conurbano (y que la ubica como principal línea de esa zona del Gran Buenos Aires) han escrito uno de los capítulos más vibrantes y alccionadores en lo que se refiere al control y la gestión obrera. Deliberadamente o no, en la literatura "especializada" en el tema, TDO ha sido ignorado, pese a que nos estamos refiriendo a la empresa que está

¹ La ley orgánica del transporte de la provincia de Buenos Aires.

peleando por la expropiación y la gestión obrera que reúne mayor cantidad de trabajadores. No hay empresa "recuperada" que tenga tales dimensiones. Ni hablar de que estamos ante una experiencia pionera en el ámbito del transporte.

La gesta que están protagonizando los trabajadores de TDO no es un acto improvisado. Es la culminación de un largo proceso —en el cual se fue forjando una dirección combativa y clasista— que arranca a comienzos de la década del '90.

Antecedentes

Transporte del Oeste era considerada hasta el año 1992 una de las empresas de transporte de pasajeros más importantes del país.

Comprendía 1.500 trabajadores, un parque móvil de 350 unidades y una recaudación anual de 32,5 millones de pesos aproximadamente. Contando la misma con recorridos comunales, provinciales y nacionales, teniendo en cuenta que el constante incremento poblacional da la posibilidad de la habilitación de nuevos recorridos en algunos distritos.

En esa época de "esplendor" de la empresa, reinaba una gran desorganización sindical: la mayor parte de los choferes trabajaban en negro (por kilómetro). La empresa sólo contaba con dos delegados —de la burocracia— porque los que estaban por convenio eran unos pocos.

En el año 1989 se desata una gran huelga del transporte —una de las primeras en el gobierno de Menem— desde las bases, las coordinadoras con piquetes cortaron todos los accesos a capital. Palacio —apretado por los trabajadores— larga el paro por tiempo indeterminado cuando el transporte estaba paralizado.

La ausencia de una dirección, hizo que la burocracia levantara sin conseguir nada después de una semana de paro.

El paro, no obstante esa falta de resultado reivindicativo, fue el bautismo de fuego para muchos trabajadores jóvenes de la línea. A partir de ese conflicto, nace el activismo en TDO, quien se da a conocer en sociedad impulsando la discusión por una recomposición de los salarios.

Se realizaron asambleas a las que bajó la burocracia. Por este entonces, la patronal había blanqueado a la totalidad de los trabajadores, sur-

ge el reclamo de elegir delegados. Al ver en riesgo su predominio, la UTA arma reuniones "secretas" de donde sale una lista y convoca a elecciones en el año '92, sin dar la oportunidad de que haya oposición (si bien la lista es integrada por algunos compañeros honestos, el manejo lo tenía la burocracia).

Deterioro de la empresa

Por ese entonces, asume la presidencia de la empresa Norberto Russo, quien permaneció en ese cargo hasta que se declaró la quiebra, diez años después. La asunción de ese personaje, amigo político de Menem, coincide con la concentración del poder en la firma en manos de un puñado de accionistas y un desplazamiento de los componentes (pequeños socios choferes que eran titulares de una parte de un colectivo).

La entrada en escena de la nueva gestión coincide también con el comienzo del deterioro de la empresa.

Se alarga la línea 153, que une Primera Junta con la localidad de Libertad, en el partido de Merlo, hasta Barrio Nuevo. No se agregan coches, por lo tanto, disminuye la frecuencia horaria del servicio. Una empresa de la zona, afectada por esta maniobra, incluye entonces un ramal hasta la localidad de Morón, que compite con la línea 153 provocando una caída importante en la cantidad de pasajeros, que no cubre los que se obtuvieron por la extensión del ramal.

Se agrega un nuevo recorrido, línea 136 Parque San Martín. Para cubrirlo se utilizan unidades que prestaban servicio en otras líneas de la empresa, pero no se logra una suba importante de la recaudación en general y lo único que genera este recorrido es perjudicar a una empresa de la zona.

De esta manera, todo indicaba reforzar las líneas existentes, sobre todo el recorrido troncal, línea 136 Marcos Paz, para aprovechar que la gente se volcaba al uso masivo del colectivo por diversos inconvenientes de servicio y seguridad que se presentaban en el ferrocarril General Sarmiento. En cambio se disminuye nuevamente la frecuencia horaria y al no poder cumplir con las demandas de servicios requeridas, favorece el ingreso en los pisos explotados por TDO de otras empresas de colectivos

y el uso por parte de los pasajeros de medios de transporte alternativos, comúnmente denominados "truchos".

Se crea la línea 747, que transita por Barrio Obligado, Bella Vista, Polvorines y Barrio El Perejil, de dudosa rentabilidad al poco tiempo es abandonada la explotación de este piso.

Se incursiona en la costa bonaerense, donde la empresa adquiere un piso para cubrir los servicios que unen las localidades de San Clemente con Mar de Ajó, junto con esto efectúa la compra de bienes inmuebles, un terreno para los colectivos y departamentos para el personal. Si bien los pisos no pertenecen más a esta empresa, los departamentos se siguen manteniendo.

Cuando los ferrocarriles son concesionados, Transporte del Oeste pasa a ser parte accionaria de TBA (Ferrocarril Sarmiento).

Se dejan de lado los procedimientos establecidos hasta el momento para la renovación de las unidades y se encara la compra a crédito de 90 unidades, pagando una cuota mensual que habría posibilitado la compra de tres colectivos por mes, pagando de contado sin generar una deuda millonaria. En poco tiempo más, ya no se pagan regularmente las obligaciones contraídas.

Si bien la empresa posee un inmueble propio en Ciudadela, donde funcionan los talleres, se alquila un lugar en la localidad de Ferrari, donde se realizan costosas modificaciones para adaptarlo a las necesidades requeridas por una empresa de transporte, que permitan el funcionamiento de un taller de chapa y pintura, y un control para la línea 136 Parque San Martín. De esta manera, el taller queda dividido en dos, realizándose la mecánica en un lugar y el resto de las reparaciones en otro, y a pesar del dinero invertido, finalmente este lugar no se utiliza más.

Con el argumento de que la Municipalidad de Morón los presionaba para abandonar la sede de la empresa ubicada en Rivadavia 17415, de esta localidad, se compra un predio en Merlo, Cervantes 2051, que casi inmediatamente es prendado a nombre de "Colcam", la concesionaria donde se efectuó la compra de las últimas unidades, por una suma millonaria.

En este marco, comienzan los atrasos de sueldos con el argumento patronal de la desocupación provocada por la política de Menem-Cava-

llo (merma de pasajeros).

El activismo empieza a cobrar mayor estatura y obliga a los delegados ante las asambleas de la línea, a reclamar un plan de lucha contra la ofensiva patronal. La postura de los delegados de que se tratara de un "reclamo individual" es ampliamente derrotada.

La burocracia, al ver que el repudio a los trabajadores se generaliza, comienza -junto con la patronal- una persecución contra el activismo.

En estas condiciones, va gestándose y articulándose la organización del activismo, quien construye una lista antiburocrática, que comienza a actuar con muchos recaudos frente al clima represivo que se vivía en la línea.

En agosto de 1994, la lista antiburocrática "Unidad" gana por amplio margen. Una de sus primeras iniciativas es el reclamo a la UTA de una asamblea general para encarar un plan de lucha por el salario y contra la ofensiva de las patronales del transporte, quienes venían llevando adelante una ofensiva contra las conquistas obreras amparados por la política menemista, así como también por la efectivización de las autoridades.

La UTA, al ver que no puede domesticar al cuerpo de delegados por medio de sus elementos en la línea, pide a la comisión de "ética" de UTA el desafuero de los delegados por irregularidad con una colecta hecha por un compañero fallecido. La reacción obrera a esta burda maniobra hace recular al representante de la UTA, quien en la asamblea debe reconocer que no hay elementos valederos y por lo tanto da por finalizada su función, y se retira dejando solos a un grupo minoritario, que debe retirarse con la cabeza gacha ante el repudio de toda la asamblea.

Este deterioro de TDO es paralelo al proceso de concentración del transporte a través de resoluciones hechas a medida de los grandes grupos, quienes van absorbiendo las líneas que quiebran.

Vale la pena recordar que la nueva Ley de Quiebras es una herramienta patronal para concursarse y flexibilizar de hecho a los trabajadores, con la complacencia de la UTA. El caso testigo es la línea 148, El Halcón, se rebajan los salarios y la reacción de los trabajadores no se hace esperar, una gran huelga hace desistir de esta medida a la patronal (al frente de esta empresa estaban los síndicos que hoy administran

TDO).

Esta situación confirmó lo que venía señalando el Cuerpo de Delegados de TDO, que a partir del convenio Fiat Smata la reforma laboral sería aplicada a todo el movimiento obrero y en este caso también a TDO. Con lo ocurrido en El Halcón, los trabajadores de TDO comprobaron la certeza del pronóstico hecho por los delegados (se pusieron copias de los recibos de la 148 en las carteleras).

La gran huelga de 1996

En julio de 1996 —a pesar de que la recaudación rondaba los 130 mil pesos diarios— la patronal pretende fraccionar el pago de los sueldos y aguinaldos de mediados de 1996. El cuarto día hábil de julio, por la noche, se realiza la Asamblea de los trabajadores que rechaza por unanimidad la propuesta patronal y vota el paro.

A las 0 horas, ni bien terminada la Asamblea, se habían levantado las ollas populares en las principales cabeceras.

La maniobra de la UTA de quebrar el conflicto fracasa ante la firmeza y combatividad obrera, cuya consigna era: "No nos consta la crisis, plata o mierda". No le quedó más remedio a la UTA que "acompañar" el conflicto.

Nada se resolvía ni acordaba sin el acuerdo de la Asamblea, todas las tratativas con la Subsecretaría de Trabajo de Morón se hacían con los trabajadores movilizados.

Es tal la magnitud del conflicto —ocupa los principales títulos— que hace intervenir al gobierno provincial de Duhalde.

Los intentos del gobierno de quebrar la lucha por medio de la conciliación obligatoria fracasan.

En una oportunidad, por medio de la UTA, convoca al Cuerpo de Delegados a una audiencia en forma "urgente". Previendo una maniobra, los delegados convocan a los trabajadores a la Subsecretaría.

En esa reunión, se encontraban Palacios y Fernández, también el ministro de Gobierno y el secretario de Transporte provincial.

Finalmente, tras arduas negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo de Morón, se vuelve el conflicto a favor de los trabajadores, que perci-

ben el pago de sus haberes en una sola vez, como lo marca la ley.

Una vez hecho el acuerdo —en uno de sus puntos plantea que hasta que no cobre el último trabajador no se retoman los servicios—, se marcha hasta la empresa donde un funcionario y el Cuerpo de Delegados deben verificar que esté toda la plata.

Se da una situación muy tensa al comprobar que el dinero no está y hay un despliegue impresionante de la Infantería. Los ánimos comienzan a caldearse, por lo que los delegados plantean: "que si en 15 minutos no aparece el dinero volvemos a las ollas populares"; una vez vencido el plazo se vuelve a la lucha.

En un medio de comunicación, en vivo, Carlos Pacheco, dirigente de la línea, hace público que en lugar de encontrar el camión de caudales se encuentra con los camiones de la Infantería y hace responsable al Gobierno provincial de lo que pudiera pasar.

El inconveniente se subsana a las dos horas, cuando finalmente se hizo entrega de los fondos.

Del concurso preventivo al quiebra

Para finales del año 1996, la empresa convoca a concurso de acreedores, llegándose a un acuerdo en la que la patronal se compromete a pagar el 100% de la deuda contraída con los acreedores, un hecho de características inéditas, ya que lo normal en la mayoría de los concursos es que se asuman los pagos con quitas no inferiores al 40, 50 o el 60% de la deuda verificada.

La irregularidad en los aportes previsionales, jubilación y obra social, comienzan a generar una deuda importante, junto con la falta de pago de impuestos, tanto de bienes inmuebles como del material rodante, lo que convierte al Estado en un nuevo acreedor, de dimensiones cada vez más importantes, de TDO.

Esta situación se ve agravada con el paso del tiempo, hasta llegar a la nulidad total en cuanto a aportes previsionales, hecho totalmente irregular, ya que los mismos siempre figuraron descontados por recibo de sueldo pero nunca llegaron a su lugar de destino, las arcas del Estado, y de ahí, a las cuentas de los trabajadores.

En el mismo sentido, la retención de aportes destinada a la mutual de los trabajadores, al no derivarse a la misma, hace que no tengan la prestación correspondiente.

En los años venideros, se comienza a notar la falta de mantenimiento de las unidades y la falta de repuestos, sobre todo en las últimas unidades adquiridas, que comienzan a quedarse a lo largo de los recorridos de manera cada vez más notoria. La patronal intenta la tercerización de toda el área técnica, debiendo desistir ante la resistencia de los trabajadores.

La situación se agrava día a día, de manera implacable, forzando a los pasajeros a sufrir demoras de 40 ó 50 minutos en la parada esperando un colectivo, o cambiar dos o más veces de unidad en el transcurso de los recorridos. Las unidades confortables y seguras, la calidad del servicio y el respeto por el pasajero ya no son más que un lejano recuerdo.

Mientras que las deudas con los empleados, los acreedores particulares y el Estado se seguían incrementando, en el balance aprobado del año 1998 figura un retiro a cuenta de futuras utilidades de 20.000.000 millones de pesos, por parte de la masa societaria, hecho que está totalmente fuera de la ley. Con un parque automotor semi-destruido y el stock de repuestos prácticamente en cero, se hace cargo de la administración la concesionaria "Colcam", que ingresa dudosa y misteriosamente como un socio mayoritario en TDO. Durante este período se toman nuevos empleados, a pesar de que el parque automotor se veía notoriamente disminuido, incrementando aun más la relación negativa entre vehículos y empleados.

Cuando este período de gerenciamiento concluye, las consecuencias son devastadoras, ya que se había incrementado la deuda, se intensificaron los inconvenientes para percibir los salarios y se habían entregado una cantidad importante de cheques sin fondo, parte de los cuales permanecen todavía hoy en manos de los acreedores. Nuevamente la cabeza de la empresa se encuentra Norberto Russo.

Vaciamiento empresarial y control obrero

Para comienzos del nuevo milenio la situación empeora paulatinamente, lo que genera un incremento en la falta de credibilidad y descontento de los empleados, que se hace sentir en el directorio, quien hábilmente nombra como nuevo administrador a una persona ajena a la empresa, Adolfo Brañas, el cual plantea la reestructuración sobre la base del despido masivo del personal, basándose en la cantidad de unidades funcionando. Este planteo fue refutado por el cuerpo gremial, quien sostuvo que la salida era la reactivación de los talleres y la recuperación de unidades deterioradas. La pulseada culmina con un compromiso por el cual la patronal se compromete a mantener la estabilidad de todo el personal, mientras que los trabajadores, luego de deliberar en asamblea, aceptan cobrar el sueldo y aguinaldo de julio del 2001 en cuatro veces, y los sueldos sucesivos hasta septiembre en forma fraccionada.

El incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos a los que se habían llegado, derivó en un conflicto con cuatro días de paro en octubre del 2001. Tan fugazmente como había llegado, el administrador desapareció y vuelve a hacer su entrada en escena Norberto Russo.

Nuevamente en la Subsecretaría de Trabajo de Morón, en audiencia con la parte empresarial, la UTA y el Cuerpo de Delegados, se concluye con la medida de fuerza tras la firma de un acta, donde se establece la formación de una comisión de control de los ingresos y egresos, integrada por los trabajadores con poder de veto. Los trabajadores de TDO imponen una conquista histórica, que pasa a ser una referencia obligada para los choferes y para el conjunto del movimiento obrero. Los trabajadores pasan a supervisar el movimiento financiero de la empresa, a constatar, sin intermediarios a dónde van los fondos, y más importante aún, asegurar, con su intervención y su poder de veto, que esos recursos no se deriven a otros destinos ajenos a las necesidades operativas de la empresa y priorizar, de ese modo, el pago de los salarios, de los insumos y los servicios básicos para que la línea pueda seguir funcionando. A través del "control obrero", los choferes terminan por detectar las dimensiones del vaciamiento empresarial, pero, mucho más importante que ello, corroboraron por sus propios ojos y por medio de su propia expe-

riencia, que si alguien está en condiciones de dirigir la empresa, esos son los trabajadores. El control obrero demostró ser una escuela, donde los trabajadores hicieron un aprendizaje acelerado sobre la inoperancia patronal y donde terminaron por tomar definitivamente confianza en su propias fuerzas, en su superioridad como clase. El control obrero puso de manifiesto que era posible prescindir de la patronal, más aún que ésta era un obstáculo insalvable y que el destino de la línea debía pasar a manos de los trabajadores. En el control obrero, está la semilla de la gestión obrera, por lo cual los trabajadores de TDO están pugando.

El control de los trabajadores se hace sentir de entrada al detectar y desbaratar la facturación trucha de 5.000 litros de más de gasoil por día, a raíz de lo cual el responsable del sector es desplazado de la empresa.

Desde julio del año 1999 hasta enero del año 2002 se factura la rectificación de 240 motores, teniendo en cuenta que la empresa tiene en ese momento 150 unidades y con la particularidad de que al ochenta por ciento de los motores se les cambia el cigüeñal. Se dejan de enviar motores a la rectificadora "Parisi", ya que se realizaban sin garantías y los mismos no duraban más de tres o cuatro meses. Se termina con la sobrefacturación de los repuestos que se venía dando hasta ese momento y se separa del cargo a la persona involucrada en dicha situación.

Tanto el Cuerpo de Delegados, como la Comisión Revisora y el resto de los trabajadores hacen denodados esfuerzos para mantener a la empresa en funcionamiento, pero la inoperancia patronal se convierte en el principal obstáculo para dar una salida eficaz a la situación.

La deuda salarial asciende aproximadamente a los 3.500 pesos en promedio por cada uno de los trabajadores, más la deuda previsional, que en algunos casos no se habían registrado aportes desde hacía seis años.

La deuda concursal es de 50 millones de pesos aproximadamente, y la deuda postconcurzal se puede estimar en una cifra similar.

De las casi 350 unidades que se llegó a poseer, quedan apenas 120 circulando, en un estado deplorable. De los colectivos que no están en funcionamiento, un número importante ya es irrecuperable.

La recaudación diaria asciende apenas a los 56 mil pesos, estimándose que, por responsabilidad del directorio y su ineficiencia en la admi-

nistración de la empresa, se pierden 20 mil pesos por día, aproximadamente.

Comienza la lucha por la expropiación

Los trabajadores de TDO son conscientes de que el control obrero es imprescindible frente a los atrasos y deudas salariales, pero resulta insuficiente frente al vaciamiento y la crisis final en que se encuentra la empresa. La situación reclama avanzar a un escalón superior. La deliberación de los choferes de TDO sobre este punto va a traducirse en una resolución crucial, de carácter estratégico, que pasa a marcar el rumbo de la movilización de la línea desde ese momento en adelante. Los trabajadores de TDO toman la histórica resolución de luchar por la expropiación y la gestión obrera de la línea. Pocas semanas después, se aprueba en asamblea, un proyecto de expropiación que recoge los aportes de todos los trabajadores. El proyecto plantea la expropiación de los activos y unidades de la empresa, y su entrega gratuita a los trabajadores. Entre sus cláusulas, se destaca el otorgamiento de un subsidio no reintegrable de tres millones de pesos para recuperar unidades y mejorar la calidad del servicio.

Alrededor de este planteamiento, comenzó una campaña de movilización. "La campaña por la expropiación y gestión obrera de TDO comienza a transformarse en un factor de organización y lucha para choferes cuyas empresas ya quebraron o se encuentran en esa vía. El conocimiento que se va expandiendo, hace que se acarquen a la línea para interiorizarse del proyecto y pasar a considerar si sería aplicable en sus propias líneas. Ayudó mucho, en este sentido, el Plenario de Empresas en Lucha de la Zona Oeste, realizado el 16 de noviembre de 2002, que resolvió todo un plan de lucha que abarca a TDO y las demás empresas".

Mientras ponían en marcha esta campaña estratégica, los trabajadores no descuidaron el ámbito más inmediato de confrontación con la patronal.

A fines del 2002 se logró imponer un aumento en la cuota diaria que se venía cobrando a cuenta de los salarios. De la recaudación diaria,

hasta el momento, se venía apartando una suma para el pago de salarios equivalente al cuatro por ciento de la remuneración mensual que percibía cada trabajador. A través de este mecanismo, se venía asegurando que al cabo de treinta días los compañeros completasen el cobro de una parte considerable de su remuneración y se evitaba que la patronal terminase desviando los recursos para otros fines. Este sistema fue arrancado por los trabajadores como resultado del conflicto que sostuvieron el año anterior y que desembocó en el control de las cuentas y del movimiento de fondos por parte de una comisión electa por los propios compañeros.

Aun así, con el correr de los meses, se fueron registrando atrasos parciales que, acumulados, implicaban una deuda equivalente a tres sueldos.

Esta situación fue haciendo subir la temperatura entre los trabajadores. De nada valieron las lágrimas de cocodrilo que derramó la patronal sobre la "crisis" que atraviesa la empresa. La constatación hecha por la Comisión de Control de los choferes sobre el aumento de la recaudación, así como el descubrimiento de la existencia de erogaciones cuyo destino no era claro, fue el detonante para que se generalizara el reclamo de un aumento de la cuota. En medio de este clima, la patronal no tuvo más remedio que aceptar que la cuota diaria pasara del 4 al 4,5 por ciento.

Para enfrentar este creciente deterioro, los compañeros de TDO elaboraron un pliego de reclamos, que planteaba:

- Pago de los sueldos y viáticos atrasados.
- Ampliación del control de lo que ingresa y egresa por el subsidio estatal que el gobierno nacional viene otorgando mensualmente a las empresas de transporte (hasta ahora, el manejo de ese subsidio es un coto cerrado de la patronal). Aplicación de por lo menos el cincuenta por ciento del mismo para sueldos, especialmente para garantizar el adicional de 100 pesos.
- Poder de veto de la Comisión de Control, imponiendo la obligatoriedad de que los cheques que se extienden por los pagos a proveedores contenga también la firma de un representante de los trabajadores.

Este pliego de reclamos, unido a la exigencia de la expropiación y la

gestión obrera, fue el eje tras el cual se vertebró la imponente movilización de los compañeros durante los siguientes meses.

La lista de reclamos contemplaba también una definición al Poder Ejecutivo para que, en caso de cierre o quiebra de la empresa, el gobierno se haga transitoriamente cargo de la línea, a través del mecanismo de "gestión directa", previsto en la legislación vigente garantizando la continuidad del servicio y preservando la totalidad de los puestos de trabajo. Los trabajadores de TDO reclamaron esta salida transitoria, mientras se avanza en una solución definitiva a través de la expropiación de la empresa.

En pleno verano de 2003, haciéndole frente al sol agobiante y las altas temperaturas, tuvieron lugar tres memorables micrazos.

Lo que no se pudo lograr en semanas de gestiones interminables, se logró apenas en pocas horas. La marcha de los trabajadores de TDO a La Plata acabó arrancando las audiencias con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte que venían siendo bicicleteadas por las autoridades.

La marcha fue una gran jornada de movilización de la clase obrera. Se expresó en la práctica la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, porque más de un millar de compañeros desocupados, nucleados alrededor del Polo Obrero, acompañaron a los choferes de la empresa.

La jornada comenzó a primera hora, cuando ya se podía vislumbrar que iba a ser un éxito. Unos 400 compañeros de las barriadas de Marcos Paz, Moreno, Merlo, Morón, Ituzaingó y Hurlingham arrancaban en caravana desde la terminal de TDO. Los micros, encolumnados, llevaban carteles que decían: "Transporte del Oeste de los trabajadores". La caravana provocó una gran conmoción en la Capital, donde casi por una hora quedó paralizada la circulación en las principales arterias. El "micrazo", como lo denominaron los trabajadores de la empresa, no pasó desapercibido, como lo testimonian las decenas de medios que registraron en vivo la noticia.

En La Plata, frente a la gobernación, centenares de compañeros de esta ciudad, Berazategui y Varela estaban desde hacía varias horas concentrados, haciendo el aguante y esperando la llegada de las columnas. En medio de esta presión, la Jefatura de Gobierno que pretendía deri-

var inicialmente las gestiones a otras dependencias, no tuvo más remedio que recibir a una delegación del Cuerpo de Delegados. En esa reunión salió el compromiso de una intervención directa de la Jefatura de Gobierno para facilitar una resolución política del conflicto. Con ese compromiso en la mano y la confirmación de audiencias con los diferentes ministerios, se improvisó un acto, donde hicieron uso de la palabra Carlos Pérez, por Metrovías; Néstor Pitrola, por el Polo Obrero y delegados de TDO. La presencia en La Plata culminó con una marcha a pie por las calles céntricas de la ciudad hasta llegar al Ministerio de Trabajo.

El digno broche final del Micrazo fue en Capital, en las puertas de la Línea 60. En un emotivo acto, los trabajadores de TDO se solidarizaron con el compañero Cañete, que llevaba 27 días encadenado en reclamo de su reincorporación. Como lo señaló Pitrola, "se pretende a través del despido de Cañete que la 60 se convierta en un TDO". Carlos Pacheco, en representación de TDO, denunció que la "gran ausente", tanto en la lucha de Cañete como en la de su empresa, era la UTA, y reclamó la "inmediata convocatoria a una asamblea de delegados abierta del gremio" para articular un plan de lucha para enfrentar los despidos y la expropiación de toda empresa que cierre, quiebre o muestre señales que indiquen su vaciamiento.

No había pasado aún una semana y los trabajadores de TDO marcharon nuevamente a La Plata. Una nutrida columna de choferes se concentró frente al Ministerio de Trabajo provincial. En la audiencia, convocada en forma urgente por dicho organismo, participaron, además de los delegados de la línea y los funcionarios, representantes de la patronal. Estuvo ausente, en cambio —y sin aviso—, la UTA.

La audiencia culminó en un rotundo triunfo de los trabajadores. En el acta firmada, la patronal tuvo que aceptar también la extensión del control obrero a los subsidios que ella viene recibiendo del Estado y que ascienden a más de doscientos mil pesos mensuales. "El cuerpo de delegados conjuntamente con la comisión de control —reza el acta homologada por el Ministerio— tendrán el acceso al contralor de los fondos que componen dicho subsidio, efectivizando dicho control en el modo y forma que al efecto dispongan". El texto agrega que "las partes deben acor-

dar el destino del subsidio con antelación a la distribución del mismo, priorizando los salarios de los trabajadores y la reparación de unidades".

Otro punto importante está referido al recorte de los retiros que vienen haciendo directores y encargados. La merma de la recaudación, que normalmente ocurre en los meses de verano —pero que en el caso de TDO se agrava por el deterioro que experimenta la línea—, ha provocado una caída del monto que diariamente se llevan los trabajadores a cuenta de su salario, con lo cual existe la seria amenaza de que no se llegue a completar el total de la remuneración mensual que cada uno de los choferes debería percibir. Este principio de que la crisis deben pagarla quienes la produjeron y no los trabajadores, quedó plasmado en el acta firmada, en la cual se fija "la revisión de horas extras de encargados y de la masa societaria, priorizando el trabajo en relación de dependencia conforme al convenio 463/75". Una asamblea general de los trabajadores acaba de votar un conjunto de propuestas para asegurar el cumplimiento de este criterio: 1) que los directores no cobren hasta que se salde la deuda con los trabajadores; 2) el no pago de las horas extras a los socios (encargados); 3) que los socios sean desafectados de sus funciones (están cobrando en negro).

Como remate de la marcha, se mantuvo una entrevista con la Secretaría de Transporte, que se comprometió a dar una respuesta a la brevedad sobre la aplicación del artículo 31 de la ley de Transporte de la provincia, en virtud de la cual el Estado está facultado para asumir la conducción de la línea y garantizar la continuidad del servicio, valiéndose del personal de la empresa. En la audiencia mantenida con el subsecretario de Transporte de la provincia, la delegación de trabajadores de TDO expuso pormenorizadamente la situación terminal de la empresa y señaló que están reunidas holgadamente las causales para activar este mecanismo previsto en la legislación vigente.

Como dice el dicho popular: 'No hay dos sin tres'. Se puso de manifiesto el temple de los compañeros de TDO. Ante el incumplimiento por parte de la patronal de lo pactado en la anterior audiencia en el Ministerio de Trabajo, los compañeros marcharon a La Plata, luego de arrancar una nueva audiencia en dicho organismo. En esta nueva ocasión, li-

teralmente arrinconaron a la empresa, lo que se expresó en el acta donde se fijan pormenorizadamente los pasos para hacer efectivo el control obrero del subsidio que el Estado entrega mensualmente a la línea. En el acta se plantea la apertura de una cuenta corriente bancaria que estará a nombre de representantes de la empresa y de los trabajadores. La representación obrera está facultada, al mismo tiempo, para fiscalizar los montos girados mensualmente y los términos del convenio por esos dos últimos conceptos, para lo cual la patronal se compromete explícitamente a aportar la documentación e información en el plazo de una semana. También se fijó que, en caso de que descendiera la recaudación y no se pudieran abonar los porcentajes diarios a cuenta del salario mensual que vienen retirando los choferes, los directores de la firma dejarán de percibir sus remuneraciones.

Un párrafo especial lo merece la UTA, quien estuvo ausente en todas las movilizaciones protagonizadas por los choferes de TDO y hasta en las audiencias mantenidas con la patronal en el Ministerio de Trabajo. En la mayoría de los casos, la UTA oficia como director de orquesta de cuantas reorganizaciones empresarias y negociados se producen en el transporte de pasajeros. La burocracia de Palacios está tan agarrada con el Estado capitalista, que ejerce un poder de veto sobre los subsidios que se entregan a las patronales del transporte. Las deudas que mantiene una empresa con la Obra Social son utilizadas por la UTA para chantajearlos, como está ocurriendo en la actualidad con TDO, aprovechando su carácter de acreedora en el concurso y en deudas postconcursoales. El sindicato ha amenazado varias veces con pedir la quiebra de la empresa y es uno de los responsables de los últimos embargos que han dado pie a varios allanamientos policiales. El hostigamiento de la UTA apunta a precipitar la caída de la línea y preparar las condiciones para el desembarco de un nuevo grupo empresario, con el cual está vinculado.

Quiebra, huelga general y plan obrero de recuperación de la línea

La situación había pasado a ser insostenible y se acercaba un desenlace.

La movilización había comenzado a cosechar sus frutos. El subsecre-

tario de Transporte nacional, acompañado de un equipo de profesionales de su confianza, se comprometió a hacer un relevamiento de la línea y proceder a sacar un dictamen. Esto constituía un triunfo de la lucha de los compañeros de TDO, quienes venían pidiendo la intervención transitoria de la línea por parte del Estado, frente a la crisis terminal en que se encontraba la empresa.

Normalmente, lo que ocurre en situaciones similares es que los trabajadores son los "convidados de piedra" y el "pato de la boda" de los arreglos que, a sus espaldas, establecen los grupos empresarios, con la complicidad de la UTA. Esta vez, y gracias a la gran acción desplegada por los trabajadores del TDO, el cuadro era distinto.

Los trabajadores de TDO acompañaron su reclamo con un trabajo muy pormenorizado, donde se traza un diagnóstico de la empresa y se plantea un detallado plan de reactivación de la línea.

El diagnóstico con que se arranca en el análisis es que "no sobran choferes", sino que lo que faltan son unidades. En otras palabras, que la responsabilidad de la situación que atraviesa la línea obedece a la inoperancia y hasta el sabotaje empresario, que ha conducido a la empresa a un virtual vaciamiento. Esto es lo que explica que, mientras las líneas de pasajeros experimentaron en promedio una merma de público del 13%, en TDO la reducción haya llegado al 50%. La "crisis general del país" —en la que pretende refugiarse la patronal para justificar el estado actual de la empresa— explica, por lo tanto, muy parcialmente el actual deterioro de la línea, que tiene su principal fuente de alimentación en el manejo y conducta de sus actuales socios.

Consecuentemente con este diagnóstico, el trabajo realizado permite apreciar que, en un nuevo escenario, restablecido el servicio con las frecuencias y la calidad que el público usuario reclama y necesita, y desembarazada la línea de las deudas que la patronal arrastra y acumula, y de la masa societaria que constituye una carga parasitaria, la empresa es absolutamente viable.

El plan elaborado por los trabajadores plantea una transformación completa de la línea, que debería pasar de las actuales 121 a 247 unidades en circulación. La explotación de la línea en manos de la cooperativa permitiría pagar no sólo la totalidad de los haberes en tiempo y for-

ma, incluidas las cargas sociales, sino hacer frente, de acuerdo a los parámetros que se recomiendan en la materia, al mantenimiento de las unidades y pagar puntualmente a los proveedores; y, además de todo ello, arrojaría un superávit mensual, lo que permitiría la renovación de tres unidades por mes y su reemplazo por unidades nuevas, cero kilómetro. En el plazo de 7 años, holgadamente se estaría en condiciones de renovar la totalidad del parque automotor.

Este escenario contrasta sensiblemente con el cuadro actual, en el cual la empresa está al borde de la cesación de pagos, acumulando deudas con los trabajadores y proveedores, mientras el servicio se deteriora a pasos acelerados y una gran cantidad de unidades quedan fuera de circulación.

Para el período de transición, con la mira puesta en llegar a este estado óptimo que se ha fijado como meta, el informe parte de dos escenarios. El primero de ellos consistiría en la entrega de un subsidio por parte del Estado de 960 mil pesos, que sería desembolsado mensualmente en el transcurso de doce meses a razón de 80 mil pesos por mes. Como se puede apreciar en la proyección realizada, al cabo de quince meses la empresa podría acercarse a los parámetros deseados en materia de unidades, prestando el servicio con las 247 unidades planificadas, que serían propiedad de la cooperativa.

El segundo escenario se funda en un crédito blando por un monto similar al del subsidio —es decir, 960 mil pesos— pero que, en este caso, se desembolsarían en una única vez, al comienzo de la explotación de la línea por parte de la cooperativa. La devolución del crédito se haría por un sistema de cuotas fijas mensuales por el lapso de cinco años y con una tasa de 1% mensual (es decir, una tasa nominal anual del 12%), que es la que utilizan diversas reparticiones públicas para refinanciar deuda en caso de moratorias impositivas, previsionales y por otros conceptos. Aun en ese escenario, se constata que la rehabilitación de la línea sería sumamente rápida. La recaudación ascendente, que se iría obteniendo al poner en circulación nuevas unidades, permitiría holgadamente absorber la cuota del préstamo.

En ambos escenarios se desenvuelve la misma estrategia, que consiste en ir incorporando, de acuerdo a las posibilidades financieras, nue-

vas unidades en circulación. Esta política se concentraría en aprovechar la existencia de más de 100 unidades que, en la actualidad, están fuera de circulación. La estimación es que aprovechando las partes recuperables de unas y de otras, se estaría en condiciones de rehabilitar 48 unidades (a razón de ocho por mes) y ponerlas nuevamente a funcionar. Juntamente con ello, se apelaría al alquiler y a la compra de unidades. Con el transcurso del tiempo, el alquiler de unidades iría descendiendo, mientras que subiría la cantidad de unidades compradas. Es decir, se recurriría al alquiler en una primera etapa, como recurso excepcional y de transición hasta que la cooperativa tenga la suficiente capacidad financiera para valerse exclusivamente de unidades propias.

La estrategia aquí expuesta es la opuesta a la que desenvolvía el Directorio. En lugar del círculo vicioso patronal, que conduce al deterioro y desaparición de la línea, aquí se plantea un círculo virtuoso que, a través de la gestión obrera, lleva a la reconstrucción de la línea, privilegiando los intereses de los trabajadores —quienes preservan su trabajo y condiciones salariales— y el público usuario, que será beneficiado por una notoria mejora del servicio.

La decisión de la patronal de rebajar la cuota diaria del salario que venían cobrando los trabajadores fue el detonante para que los choferes de TDO decidieran paralizar los servicios. Ingresábamos en el final de mayo de 2003. Una combativa asamblea general, que congregó a gran parte del personal de la línea, decidió ir a la huelga en defensa del salario. De nada sirvió la oferta tardía del Directorio de dar marcha atrás con el recorte. Los trabajadores, cansados de tanto manoseo, esta vez reclamaron "que se vayan todos". Los compañeros de TDO son plenamente conscientes de que no hay salida posible si la actual patronal responsable del vaciamiento de la línea continúa al frente de la empresa. El deterioro del servicio se venía dando por día y hasta por horas. En apenas un par de semanas, unas 20 unidades dejaron de circular, al no contar con el mantenimiento básico. Ni hablar de las penurias por la falta de combustible, que llegó al punto de que varias unidades tuvieron que dejar varados a los pasajeros, obligándolos a descender en medio de la ruta. La situación pasó, por lo tanto, a ser insostenible.

La empresa fue virtualmente ocupada por los compañeros, quienes

controlan todos los movimientos dentro y fuera del establecimiento. La vigilancia obrera impidió que la patronal se llevara documentación de la empresa, así como archivos reservados de las computadoras.

La huelga que arrancó el día martes 27, fue acompañada al día siguiente con una gran movilización que culminó en Plaza de Mayo, frente a la Secretaría de Transporte. El centro de la ciudad fue conmovido por la presencia de los trabajadores de TDO, quienes irrumpieron en la City porteña con cuarenta micros.

El Micrazo de TDO dio sus resultados. La delegación obrera fue recibida por el nuevo secretario de Transporte, Jaime, apenas a horas de ser nombrado por el presidente Kirchner. Las febriles negociaciones con la Secretaría, que se prolongaron hasta el viernes 30, dieron lugar a un compromiso donde se sentaron las bases de una solución al conflicto. El acta firmada por la Secretaría plantea "un auxilio económico" del Estado para asegurar la continuidad del servicio, garantizando la "totalidad de los puestos de trabajo". El auxilio económico iría destinado a la cobertura de los "insumos básicos, en primer lugar el combustible y los salarios de los trabajadores". La Secretaría de Transporte nombraría a funcionarios para monitorear el cumplimiento del plan de acción y preservaría los pisos (permisos de explotación), mientras se prolongue esta situación. Esta propuesta se hace extensiva a la provincia y a los municipios afectados por los recorridos, y se tomaría contacto con el juez del concurso para interiorizarlo de ella. El objetivo sería establecer con el juzgado un régimen de transición en el manejo de la línea, previa remoción del actual directorio, que evite la quiebra y el desguace de la línea, y permita avanzar, entretanto, en una solución definitiva y de fondo del conflicto.

En menos de 24 horas, hubo un segundo Micrazo. Veintiséis micros, desde Merlo al Obelisco y a Plaza de Mayo, acompañaron a la delegación de TDO que se entrevistó con el secretario de Transporte. El martes 3, nuevamente, la ciudad fue conmovida por una movilización de los trabajadores de TDO. El presidente Kirchner estaría a punto de firmar el otorgamiento de un auxilio económico estatal a la línea, que permitiría normalizar el pago de salarios y el suministro de combustible. El acuerdo contemplaría un aporte económico extraordinario del Estado

nacional de 15.000 litros diarios de gasoil, durante un plazo de 30 días y un subsidio de 360 pesos por trabajador, destinado a pagar las deudas salariales. El Estado nacional y provincial se comprometerían, asimismo, en este proceso de transición, a preservar los pisos y permisos de explotación. Una mesa de trabajo entre representantes del Estado y la delegación gremial fiscalizaría el cumplimiento del acuerdo.

El acuerdo será elevado al juez del concurso, a quienes los trabajadores le reclamarán que proceda a desplazar al Directorio y a nombrar una administración "ad hoc" bajo el control de los trabajadores.

Luego de doce días de paro general y de ocupación de la terminal en Merlo; de incesantes movilizaciones, entre las cuales figuran tres memorables micrazos a Plaza de Mayo, los trabajadores de TDO arrancaron un impresionante triunfo.

El juez que interviene en el concurso de la empresa había decretado la quiebra con continuidad y revalidó a los tres síndicos que habían sido testigos todos estos años del vaciamiento alevoso que se constató en la línea. La propuesta que elevó esta nada flamante sindicatura —emulando a las patronales más negreras del ramo, lo cual es mucho decir— consistió en tomar a 450 trabajadores y dejar en disponibilidad a la otra mitad, cuyo reingreso iba a depender de la ampliación del número de unidades que se lograran hacer circular. Los trabajadores "disponibles" debían conformarse con un sueldo de 350 pesos.

Esta propuesta, así como otras que los síndicos improvisaron sobre la marcha para "suavizar" algunas de sus aristas, fue rechazada de plano por los casi mil choferes de TDO.

A diferencia de lo ocurrido con otras líneas (la Río, la 501, la Internacional y otras decenas de empresas que entraron en quiebra, y terminaron con el cierre, el desguace y un tendal de trabajadores en la calle), los trabajadores de TDO lograron defender la totalidad de los puestos de trabajo y que se les reconozca en forma íntegra el sueldo de convenio, incluidos todos los adicionales como viáticos y el decreto de los 200 pesos. La sindicatura reconoció los días caídos con motivo del conflicto laboral y se comprometió a estudiar el otorgamiento de una asignación extraordinaria para compensar los cuatro días de junio que entraron dentro de la quiebra y que, legalmente, habían pasado a formar parte de la deuda

salarial de los trabajadores.

Pero lo más llamativo del acuerdo es que se ha comprometido al Estado nacional en la solución del problema. Por un lado, la Secretaría de Transporte dispuso la provisión de 15.000 litros diarios de gasoil por el plazo de dos meses, permitiendo, por esta vía, la reanudación del servicio. Por otro lado, se conformó una "Mesa de Trabajo" con representantes de los trabajadores, de la sindicatura y de la Secretaría de Transporte (un hecho inédito, sin precedentes) para velar por el cumplimiento de todas las resoluciones adoptadas y considerar la solución de fondo al conflicto planteado. Esta "Mesa de Trabajo" es una gran conquista de los trabajadores de TDO, pues significa la negociación directa, pasando por encima de la UTA y del poder político de la provincia de Buenos Aires, y de los municipios, que venían conspirando para desguazar la línea, absorber sus pisos y arreglar con grupos empresarios interesados en quedarse con el botín. La determinación de los trabajadores de TDO hizo naufragar las maniobras de Palacios y Fernández.

A partir de este acuerdo, se abría una nueva etapa en la lucha de TDO, teniendo en cuenta el antagonismo existente entre los intereses de la sindicatura y los de los trabajadores. "No se nos escapa que asistimos a un equilibrio precario, teniendo en cuenta los propósitos de los síndicos, que velan por los intereses de los acreedores". "El síndico —dice la Ley de Quiebras— puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, sólo excepcionalmente si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio" (artículo 189). El principio rector que debe guiar la conducta de la sindicatura es "la ventaja que resultaría para los acreedores... la enajenación de la empresa en marcha" (artículo 190). En otras palabras, la función del síndico es liquidar la empresa en las mejores condiciones para los acreedores. La situación creada con la sentencia de quiebra de TDO pone al rojo vivo la necesidad de avanzar en una salida independiente de los trabajadores, que privilegie sus intereses y los de los usuarios —y no de los vaciadores—, la cual pasa por la lucha por la expropiación de la línea y la gestión obrera de la misma".

La lucha por la gestión obrera

El balance de la gestión de la sindicatura es lapidario. A más de seis meses de decretada la quiebra, en TDO continúa el deterioro de las unidades y el atraso en los pagos. Los síndicos de la quiebra son incapaces de mantener la empresa a flote. Estos síndicos son los mismos que en el pasado, bajo el concurso, hicieron la vista gorda ante el alevoso vaciamiento de los antiguos accionistas. De acuerdo a algunos trascendidos, este estudio de síndicos, especializado en "administrar" empresas en quiebra, se encuentra sometido a una causa penal por cohecho, prevaricato, defraudación e incumplimiento de obligaciones de funcionario público por su intervención en otro juicio. Las escuchas telefónicas que respaldan las acusaciones revelan que los síndicos reclaman una abultada suma de dinero para acomodar el informe y las "recomendaciones" que debían proporcionar al juez de la quiebra.

En estos seis largos meses, los trabajadores tuvieron que salir al frente de lo que podemos denominar una verdadera conspiración, en la que están metidos grupos empresarios, intendentes y la propia UTA.

Empresas de la zona están intentando adueñarse de los "pisos" (permisos de explotación) de TDO, poniendo en circulación sus propios micros en ciertos recorridos que le pertenecen a ésta. Esto ocurrió en Merlo con la 216, empresa que viene monopolizando el transporte de la zona que fue neutralizado; ahora se vuelve a reproducir en Castelar con la línea 238 (la TUM). Este desembarco sólo se puede dar con el guiño o, al menos, la vista gorda de las autoridades municipales y de la provincia, que actúan en connivencia con la UTA, para precipitar la quiebra y el desguace de la línea, y repartir el botín entre los distintos grupos empresarios.

Un punto culminante de esta cruzada lo constituyó el proyecto de ordenanza en Morón, en virtud del cual se le quitaba el "piso" distrital a TDO (línea 635) y se lo cedían a otra empresa a través del llamado de una licitación.

Los trabajadores de TDO le salieron al cruce al proyecto. Las calles de Morón aparecieron inundadas de volantes y afiches, firmado por el Cuerpo de Delegados de TDO, en la que se denunciaba este ataque: "Es-

ta ordenanza, nacida del riñón del duhaldismo, cuya bancada venía motorizando su sanción legislativa, con la complicidad de la UTA, pretende ser presentado como una resolución "en beneficio de los usuarios".

Falso. Aquí no hay ningún interés en el público usuario. Aquí lo que hay en marcha es un gran negociado, como ya ha ocurrido con otras líneas. Los grupos económicos que están concentrando en sus manos la actividad del transporte de pasajeros en la zona, desde hace mucho tiempo vienen conspirando para desguazar a TDO, repartirse el botín y apropiarse de sus "pisos". El pato de la boda seremos los trabajadores (despidos, rebajas salariales y mayor superexplotación) y el público usuario, que tendrá que soportar la supresión de los recorridos menos rentables y un aumento de las tarifas. TDO cobra 0,75 y 1 peso por trayecto. Las otras líneas cobran 1,25 pesos.

Falso. Los mismos concejales, que se aprestan a votar la ordenanza en Morón y que pretenden hacerlo después en Merlo, hicieron la vista gorda durante años ante el vaciamiento de la empresa y la pésima calidad de las prestaciones. Se acuerdan, ahora, súbitamente, del deterioro del servicio, justo en el momento en que los trabajadores estamos enfrentando el vaciamiento, hemos organizado una cooperativa y nos proponemos tomar en nuestras manos la conducción del servicio y reorganizarlo para colocarlo al servicio de la comunidad, brindado las prestaciones que el pueblo se merece y necesita.

Falso. Aquí no hay ningún interés en los usuarios, los cuales soportan diariamente en carne propia el desabastecimiento y la falta de especialidades en el Hospital de Morón, para no hablar del ahogo, la desatención y penurias que se viven en el Hospital Posadas. Ni hablar de la falta de cloacas, de servicios y obras básicas, y del abandono en que se encuentran las escuelas. Los concejales son cómplices de esta situación.

Falso. Los mismos sectores políticos que hoy impulsan estas ordenanzas y que están en el gobierno, tanto nacional como provincial, son responsables de la ruina en que se encuentran los ferrocarriles. Todos sabemos las condiciones en que se viaja en los trenes. Mientras se pretende hundir a TDO y dejar en la calle a sus casi mil trabajadores, se acaba de premiar a los concesionarios privados de los ferrocarriles, dándoles un subsidio adicional de 18 millones de pesos mensuales.

Se pretende enfrentar a los trabajadores con la población, cuando ambos son víctimas de la misma clase social y de los mismos intereses que condujeron al vaciamiento del país y, por extensión, de su sistema de transporte.

El día que se trató la ordenanza, centenares de trabajadores acompañados por centenares de usuarios, confundidos en un único cántico: "TDO es de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode", se congregaron frente a la entrada del Concejo Deliberante de Morón. Este fue el escenario en el que el pasado jueves 27 de noviembre, tuvieron que sesionar los concejales, quienes tenían incluido en el orden del día el tratamiento de una ordenanza que disponía la caducidad de los pisos comunales (permisos de explotación de los recorridos) de TDO, que habría llevado al virtual cierre de la línea.

Los distintos bloques, empezando por el del propio intendente Sabatella, autor del proyecto (y todavía hay quienes pretenden exhibirlo como un modelo de progresismo), pasando por la UCR y siguiendo por el PJ, tuvieron que dar marcha atrás con la ordenanza y mandarlo a comisión (una forma elegante de disimular su recule).

La concentración fue la culminación de una vigorosa campaña que arrancó con una asamblea general que aprobó la paralización del servicio y la movilización, y que fue acompañada con una vasta agitación, incluida una gran aficheada denunciando el hecho en toda la zona y, especialmente, en la localidad de Morón.

Luego de impedir la caída de los pisos del ramal de Morón y de neutralizar similar medida en Merlo, los trabajadores han trazado un plan para imponer la entrega de la empresa a manos de la Cooperativa de Gestión Obrera.

Una importante delegación de choferes, junto con usuarios, se movilizó al juzgado para presentar el informe elaborado por el Cuerpo de Delegados sobre la empresa.

Los síndicos ya han recibido más de 3 millones de pesos en subsidios (gasoil, repuestos, sueldos), o sea la misma cifra que en el proyecto de expropiación de la empresa presentado por los trabajadores alcanzaba para recomponer TDO y en seis meses tener 250 coches andando.

En manos de los síndicos sólo sirvió para recomponer 24 coches (en-

cima en forma precaria), pintar edificios y repintar unidades. Actualmente se encuentran circulando no más de 130 unidades, en jornadas de 22 horas, lo que implica que se van cayendo en el trayecto. Por esto, no cumplen el servicio, no recaudan y ahondan el hundimiento de la empresa. Los delegados acaban de descubrir una deuda con proveedores de repuestos de 200.000 pesos, que fue incorporada al informe ante el juez. En lugar de destinarse los fondos para recuperar los colectivos, se destinó parte de ese dinero al pago de los acreedores, que, encima, son los que vienen secuestrando unidades (Banco Boston).

El taller, a su turno, está a cargo de gente que estuvo al frente del mismo en todo el período Russo, que demostró su incapacidad para dirigir y descubrir anomalías, y hasta sabotajes que pasaron en todo ese período. La realidad es que el taller no funciona con repuestos o sin ellos. En los últimos meses, ya no se recuperan unidades sino que se repintan las que ya están funcionando sin incrementar el parque de unidades.

Se ha conseguido una declaración de todos los bloques del Concejo Deliberante de Morón a favor de la expropiación y su entrega a la Cooperativa de Trabajadores de TDO. La lucha de los compañeros de TDO entra en un tramo decisivo.

Cualquiera sean los avatares de la lucha en el próximo período, lo que es indiscutible es que la década de lucha librada por los trabajadores de TDO arroja enseñanzas fundamentales, que deben ser asimiladas por el conjunto de la clase obrera.

Conclusiones y perspectivas

¿Cuál es el porvenir de las fábricas ocupadas? ¿Estamos en presencia de un movimiento que se está paulatinamente extinguiendo? ¿El vaciamiento y la ocupación de fábricas es un fenómeno en vías de desaparición?

“El ciclo del conflicto de las empresas recuperadas parece no haber terminado, sino que se mantiene en lo que va del año 2003, es decir continúan recuperándose empresas quebradas o en crisis y existe la posibilidad de que el fenómeno se extienda con fuerza hacia las cientos de fábricas deshabitadas y abandonadas”¹. Si se hace una comparación de las empresas ocupadas y puesta a funcionar, el fenómeno se amplió en forma considerable respecto al 2002.

El proceso de ocupaciones y recuperaciones de fábricas pegó un verdadero salto en el 2003. Las Legislaturas de la Capital y de la provincia de Buenos Aires vienen de votar decenas de expropiaciones (incluida la de Sasstru), a lo que se agrega la de Renacer (Aurora Grundig) en Tierra del Fuego. La burguesía no puede sustraerse al cuadro político del Argentinazo y se ha visto forzada a ceder a la presión obrera y seguir apelando a las expropiaciones como un recurso extremo para canalizarla. Las invocaciones expresadas en distintos órganos de la burguesía, dirigidas a poner freno a las expropiaciones, no han impedido que este fenómeno se abra paso. La declaración de quiebra de Brukman terminó por demoler las excusas legales que Ibarra venía esgrimando para dilatar la expropiación y obligó finalmente a la Legislatura a sancionarla. Además de Brukman, tuvieron lugar las expropiaciones de Viniplast, Conforti y, más recientemente, Clínica Medrano. Y están en lista de espera varias más (Bauen), lo cual plantea un terreno de confrontación con el gobierno porteño, que viene demorando una definición. Ni hablar del territorio bonaerense, donde en este mismo lapso ya se han aprobado al menos una treintena de leyes.

¹Fábricas y empresas recuperadas. Centro Cultural de la Cooperación. Perspectivas, pág. 146.

Sin desmentir estas evidencias, es legítimo preguntarse, de todos modos, si esta oleada de empresas ocupadas no representa una secuela del pasado, es decir los ecos del colapso que estalló a finales del 2001. Si fuera así, aunque todavía no se vieran sus consecuencias, el panorama y las perspectivas serían diferentes, y estaríamos, por lo tanto, entrando en un punto de inflexión. Bajo esas circunstancias, el fenómeno quedaría acotado y este movimiento sería parte del recuerdo.

Según *La Nación*, el número de quiebras en el 2003 se multiplicó por dos en relación al año anterior. Si nos guiamos por ese dato, tendríamos una constatación de que estaríamos lejos de que se haya operado un viraje. Pero algunas instituciones, como Veraz, se han encargado de señalar que el indicador es engañoso pues "(2002) fue un año atípico en la materia, en la que influyeron las limitaciones en las ejecuciones, los amparos y también los acuerdos formalizados por fuera del marco judicial". Según la misma entidad "los pedidos de quiebra disminuyeron un 35 por ciento en octubre, en relación con igual mes del año pasado, lo que demuestra una recuperación de la cadena de pagos de la economía". Los 482 pedidos de quiebra presentados el mes pasado, en los juzgados de la Capital Federal, representan un aumento del 4,1% respecto de septiembre, pero un 35 por ciento menos que el registrado en octubre del año pasado".

¿Hemos salido del cuadro de catástrofe o estamos en vías de hacerlo?

El programa de Kirchner y del arco progresista que se integró a su gobierno, pretende por enésima vez un capitalismo "honesto" y "nacional", adaptado a la era de la "globalización". Kirchner sigue los pasos de su par brasileño. Con Lula, el programa de asociación con el imperialismo y de salvataje de los intereses sociales que sostuvieron el "neoliberalismo" alcanzó en estos dos años una dimensión continental. El gobierno del PT se presentó sin disimulo como el programa del "anti-argentínazo".

Pero la "burguesía nacional" que Kirchner quiere reconstituir, reclama "sueldos" de planes Jefes y Jefas para reactivar la produc-

ción y convenios laborales aún más flexibles —lo que demuestra, precisamente, que la recuperación depende de una mayor explotación—. Mientras que la reactivación del comercio ha despertado económicamente a algunos sectores medios, la presión contra las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, como consecuencia del carácter artificial de una recuperación provocada por una maxi-devaluación, se ha acentuado. Contablemente, el superávit fiscal es real; económicamente no, porque se apoya en la cesación de pagos, la depresión salarial y el hundimiento de los servicios básicos. Son crecientes los comentarios que indican que para pagar la deuda que no está en default, a partir del 2005, el gobierno deberá endeudarse de nuevo en el "mercado local". Para eso está pergeñando transferir todos los remanentes de la jubilación estatal a las Afjp —y establecer una jubilación asistencial de 100 pesos para los trabajadores en negro y desocupados.

Todos los "analistas económicos" coinciden, a su turno, en señalar la ventaja del repunte de los precios internacionales de las exportaciones argentinas (soja y petróleo), que hicieron las delicias de los pulpos (que pasaron del menemismo al kirchnerismo con el mismo entusiasmo) y permitieron retomar los pagos al FMI, el pacto con Bush y los subsidios tanto a la burguesía argentina pesificada como a los bancos. Es necesario no olvidar que ese "excedente económico" es la consecuencia de una pauperización fenomenal; no solamente los salarios están un cincuenta por ciento debajo de los bajos salarios del 2001; lo mismo ocurre con todos los gastos de salud, educación y jubilaciones.

La "recuperación" de la que se jacta el gobierno, no deja de tener un carácter extremadamente precario. Aun los analistas más optimistas, reconocen que el PBI está por debajo de octubre de 2001. Es cierto que se ha llegado a la misma cantidad de bienes y servicios, pero hace dos años ésta representaba 285.000 millones de dólares anuales y ahora sólo 130.000 millones de dólares; la economía se ha desvalorizado un 60%. El poder adquisitivo de la economía argentina dentro de la economía mundial es, para decirlo más exactamente, un 60% inferior al de hace dos años. La inversión se ha "recupe-

²Página/12, 4 de noviembre de 2003.

rado" al 13% del PBI, o sea que es de 20.000 millones de dólares, pero esto sólo cubre la amortización del instrumental vigente. El pago de intereses al exterior por parte de las empresas representa el 30% de esa inversión, 6.000 millones de dólares, como consecuencia de la devaluación.

En resumen, la recuperación que se pretende desenvolver —y de los cuales los medios de comunicación dan cuenta— representa un horizonte catastrófico para las masas y una carga fenomenal para la nación, cuyos recursos irían destinados integralmente al rescate del capital nacional y extranjero. En este contexto, no es aventurado señalar que esta nueva tentativa, como ya ha ocurrido en el pasado, no sacará al país de su empantanamiento.

Las perspectivas que se abren en el movimiento de fábricas ocupadas están directamente vinculadas a esta evolución más general de la crisis capitalista. La recuperación, además de ser precaria —tal cual lo analizamos, dista mucho de ser uniforme. Hay sectores de la economía, que se han reactivado, en especial aquellos vinculados a la exportación o a la sustitución de importaciones, beneficiados, encima, por la desvalorización operada por los salarios y la pesificación de sus deudas (licuación de pasivos). Aprovechando estas circunstancias, a diferencia de lo que ocurría en el 2001 y en parte del 2002, aparecen en escena grupos capitalistas interesados en invertir y absorber empresas del rubro que estén virtualmente en quiebra. Pero aun en estos casos, los planes de salvataje son a expensas de un desguace y un recortamiento de las empresas, cuya consecuencia inmediata es la pérdida de su puesto de trabajo de centenares de trabajadores. Gatic es, quizás, el ejemplo ilustrativo de este proceso.

Pero, además, las empresas beneficiadas con la devaluación reciben como contrapartida los perjuicios de ésta. Una de cal y otra de arena. La devaluación termina siendo un boomerang para su salida de la crisis.

“A partir de la devaluación doméstica acaecida en febrero de 2002, el encarecimiento de los insumos y el incipiente estado de la situación de las importaciones, las cooperativas analizadas atrave-

saron dificultades en el abastecimiento de los materiales que requieren sus correspondientes procesos industriales. Al encarecimiento de los insumos importados, se le sumó el alto costo de los productos elaborados en el país, ofrecido por grandes empresas que operan en mercados altamente concentrados. A su vez, esas empresas oligopólicas han fijado en este período condiciones de pago y precios que no se condicen con la alteración real de sus estructuras de costos, incluso incrementando los importes en productos, cuyo componente importado es nulo o muy reducido, o en momentos en que la cotización del dólar se ha mantenido estable. Por otra parte, de acuerdo a otros estudios realizados, el impacto negativo asociado a esa concentración económica trasciende a los casos de las empresas recuperadas analizadas en este libro, desalentando la reactivación de la producción local de pequeña y mediana escala”.

Entonces, si bien en términos teóricos, las nuevas condiciones económicas “suponen mayores oportunidades para el crecimiento de las actividades relacionadas con la situación de los productos importados, se ve condicionado ese crecimiento por los mayores costos asociados con la provisión de sus insumos, las exigencias de las nuevas modalidades de pago establecidas por sus proveedores y la inaccesibilidad a instrumentos crediticios que les permitan reunir el capital de trabajo suficiente para hacer frente a esos costos y esas exigencias”³.

Si estas consideraciones son válidas para los sectores más beneficiados por la devaluación, con más razón se verifican para sectores que han permanecido ajenos a sus ventajas. Nos referimos, entre otros, a los que comercializan productos no transables (es decir, que no son susceptibles de ser colocados en el mercado externo, su comercialización se circunscribe al mercado local). Uno de los sectores más afectados dentro de esta categoría, son empresas de servicios como el transporte, que no han podido trasladar el aumento de sus costos por efecto de la devaluación a los precios. En esta rama, no hay día que pase sin que se conozca la noticia de una nueva quiebra

³Empresas recuperadas. Ciudad de Buenos Aires. “Conclusiones y Perspectivas: Restricciones externas, abastecimiento y financiamiento”, pág. 73.

va quiebra y un nueve cierre (a fin de año se ha producido la caída de la Lujanera y el ingreso de la compañía Caraza en una virtual cesación de pagos). Los subsidios generosos que vienen recibiendo las empresas de transporte no han servido para detener este colapso. En una situación igual o peor se encuentran todas las líneas de aeronavegación comercial radicadas en el país. Otra rama afectada es la salud. Ha pasado a ser moneda corriente el cierre de clínicas y hospitales privados, y no es un secreto que decenas de entidades están en lista de espera, al borde del abismo. En la actualidad, uno de los casos más difundidos es el de la Clínica Lerena, en Lomas, que fue víctima de un vaciamiento de sus dueños, quienes luego de negociaciones infructuosas, acaban de admitir que el centro marcha hacia su cierre definitivo, procediendo a dejar en la calle a la totalidad de su personal. A este panorama se agrega la situación explosiva que se está viviendo en el Correo, Aguas Argentinas y en general en decenas de empresas de servicios privatizadas, que han entrado en crisis y donde está en discusión su futuro, en términos inmediatos, y las alternativas de salida para superar el colapso en que se encuentran.

También, el contexto internacional de la crisis aporta a este panorama. Casos como el de Parmalat son emblemáticos. Su caída en Italia arrastró a su gigantesca filial brasileña y amenaza a su filial local. Pero en distinta medida, lo mismo afecta la situación de Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas y otras arrastradas por las dificultades, y la insolvencia de sus controlantes extranjeras.

Este horizonte pone de relieve que los métodos de acción directa, los métodos piqueteros estarán a la orden del día y envolverá a sectores más concentrados y estratégicos de la economía. TDO (casi 1.000 trabajadores) y Gatic (4.500) son un botón de muestra.

Quien es más consciente que nadie que este frente de tormenta no sólo no se ha disipado, sino que amenaza, propagarse es la propia burguesía. En relación a este punto, existe una división patronal. *La Nación* acaba de sacar un editorial en el que da cuenta de la expansión del fenómeno de quiebras y falencias empresarias, y pronostica que seguirá extendiéndose. "Es altamente probable que ... el número

de casos ... continúe creciendo". Todo un diagnóstico, viniendo de este vocero señero de la clase dirigente argentina sobre los límites de la recuperación kirchnerista. *La Nación* exhorta a jueces y funcionarios a poner fin al salvataje de empresas ocupadas, que se vienen implementando, ya sea por vía judicial o legislativa a través de las expropiaciones. "El salvataje de empresas que no son viables lleva a sostener malos empleos, sin perspectivas de progreso social o una utilización ineficiente de los fondos públicos o bien tener que apelar a una protección que encarece los bienes producidos". Para el diario mitrista, no hay que estorbar el proceso de crisis y concentración capitalista, y dejar actuar libremente las fuerzas del mercado, pero no actúa con la misma vara cuando el salvataje va dirigido a bancos y grupos capitalistas en crisis, y no tan en crisis. "Es preferible —de acuerdo al editorial— aplicar los fondos públicos a subsidiar el desempleo o a tareas civiles de interés ciudadano. Al menos, de esta manera, no se perpetuarán las pérdidas ni se impedirá el reemplazo de empresas improductivas por nuevos productores más eficientes". En otras palabras, políticas de caridad y contención social, pero sin interferir el régimen de explotación y más aun cuando estas acciones pueden poner en tela de juicio los derechos de propiedad.

Estas exhortaciones no han podido impedir, sin embargo, que este proceso se siga abriendo paso, que sigue teniendo como motor las propias contradicciones del régimen de explotación capitalista, la cual ofrece el combustible necesario sobre el cual se recrea las tendencias a la rebelión popular.

El propio capital socava las bases de su recuperación. En una conferencia de prensa, a comienzos de 2004, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, el secretario de Cultura de la Nación, Torcuato Di Tella, reconoció algo fundamental "... el poder, en realidad, está en manos de grupos económicos de los que depende la estabilidad del país. Así te pueden hacer un piquete económico". Efectivamente, el problema es el capital. El "problema" y no solamente para Di Tella, sino para el conjunto del Estado, es que "los grupos económicos de los que depende la estabilidad del país" sólo pueden funcionar desestabilizando constantemente al país y alimentando, por consiguiente... las

bases de la rebelión popular; todo lo cual —como lo admitió también Di Tella en esta misma Conferencia—, “puede terminar en una revolución social”.

Las fábricas ocupadas son una expresión del Argentinazo. La persistencia del fenómeno de la llamada “gestión obrera” es una prueba más de que la etapa inaugurada el 19 y 20 de diciembre sigue dominando la arena política.

Que el movimiento piquetero, en el segundo aniversario de la rebelión popular de diciembre de 2001, se encuentre en el centro del escenario y del debate nacional es, por sí mismo, un testimonio irrefutable de la vigencia y actualidad del Argentinazo. Las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre son las hijas revolucionarias del movimiento piquetero, forjado en una década de puebladas, de marchas, de cortes de ruta, de huelgas generales y de luchas que recorrieron los confines de todo el país. Fueron las Asambleas Nacionales piqueteras de ese mismo año, 2001, las que levantaron la consigna *Fuera De la Rúa y Cavallo*. Los piquetes, retomando una tradición histórica, se transformaron en una suerte de marca nacional. Así, no fue el Argentinazo el que parió a la Argentina piquetera, sino que fue esta última la que parió la insurgencia del pueblo, cuando la clase media porteña se sumó, con sus cacerolas y en masa, a las calles, a las plazas y a los centros de poder.

La vigencia del movimiento piquetero, al que la burguesía trató y trata por todos los medios de echar atrás, es, entonces, la actualidad del propio Argentinazo. ¿No es notable que en medio de una furibunda campaña para aislar a los piqueteros, la clase media haya salido a hacer un piquete masivo frente a la Comisaría del barrio porteño de Villa Urquiza, acusada de complicidad con los recientes asaltos a restaurantes? Cuando más crece la campaña a favor de la “seguridad” en las “calles”, más se apropian las masas, que son el objetivo de esa misma campaña, de los “métodos piqueteros”. Los bancarios vienen acompañando sus huelgas con grandes piquetes en la city porteña. Los ferroviarios cortan las vías en defensa de sus reclamos. Los maestros neuquinos cortan los puentes, acompañados por el pueblo. Los ahorristas estafados y los deudores hipotecarios

cortan las arterias estratégicas del centro porteño, protestando contra los bancos y el poder político.

La pedagogía del piquete se ha convertido en una escuela nacional. No hay reclamo que no acabe en la calle, en el escrache, en la acción directa. No olvidemos que De la Rúa preparó su propio derrumbe cuando perdió su batalla por separar a los “saqueadores” de la pequeña burguesía, apelando al estado de sitio que acabó “metiéndose en el culo”. Es la misma batalla que perdió Duhalde cuando fracasó la provocación criminal del Puente Pueyrredón.

Cuando una metodología, como en este caso, la del “piquete” se adueña de todas las clases y capas que salen por lo más diversos reclamos, no hay duda de que asistimos a un fenómeno político, a una conciencia de conjunto y no a una cuestión sectorial, confinada a una reivindicación social aislada. El movimiento piquetero trasciende la contingencia y se proyecta como una alternativa general: expresa la tendencia de la clase obrera a reconstituirse como la clase que concentra la oposición histórica al capitalismo y que se propone reconstruir la nación, y la sociedad sobre nuevas bases sociales. El movimiento de fábricas ocupadas se inscribe y es parte de esta tendencia. ¿Pueden caber dudas de su significado político cuando las ocupaciones de fábricas ponen en tela de juicio y desafían el derecho de propiedad de los capitalistas? Los trabajadores, a través de su acción directa, mediante la gestión obrera y poniendo las fábricas nuevamente en funcionamiento, están desconociendo a los viejos propietarios y ponen al rojo vivo la necesidad de expropiar al capital.

Esta visión no es precisamente la que tiene, de un modo general, la izquierda para quienes “el 19 y 20 de diciembre fueron un punto de inflexión, pero, más allá, de caracterizaciones sobredimensionadas y hasta delirantes, no estuvo en juego el poder real de la sociedad, no obstante la profunda crisis del capitalismo local, que aún persiste”⁴. No importa que hayan caído cuatro presidentes en menos de 10 días y que esa caída haya sido bajo la presión directa de la movilización popular que marchó sobre los centros del poder político. Si bajo esas circunstancias, no hay una cuestión de poder, habría que

⁴Página/12, columna de opinión de Eduardo Lucita.

preguntarse qué habría que esperar para que la haya. Quien no tenía duda de la naturaleza y el alcance de la crisis en curso, fue, en cambio, la burguesía, quien se dio los medios y comenzó a operar para arrebatarse el triunfo al pueblo y colocar un gobierno representativo de sus intereses. La caracterización contraria —mientras se deshoja la margarita en torno de las limitaciones de la rebelión popular— más allá de un ejercicio estéril de onanismo, lleva irremediablemente a cederle el terreno y la iniciativa a la clase capitalista.

El supuesto “realismo” que se pretende exhibir, por otro lado, viene como anillo al dedo para justificar una política de resignación. “En alguna ocasión —dice Lucita— intenté explicarles (refiriéndose a los trabajadores de Brukman) que el control obrero es para un momento de alza revolucionaria de la lucha de clases, que se trata de un doble poder que dura poco tiempo, luego de la crisis se resuelve para uno u otro lado”. Si el control obrero está excluido, como sostiene el autor, lo que queda es... la autogestión en el marco del actual régimen social, una experiencia incómoda, si tenemos en cuenta, como nos aclara el columnista, que “no está en juego el poder real de la sociedad”. Descartada la capacidad transformadora de la gestión obrera, la función que se le asigna a ésta es de carácter moral. “Los trabajadores sin patrón han ingresado a la riquísima historia de nuestro movimiento obrero por la puerta grande, permanecerán allí como testigos de conciencia, para nosotros y las próximas generaciones, de que su lucha, nuestra lucha, es por algo más que un acto de legítima justicia... Que así sea”. Faltaría agregar “amén” y estamos más cerca de un sermón que de una columna de opinión, donde el autor se reserva para sí el papel de sacerdote, actuando como custodio y portavoz de las verdades de “igualdad y justicia” que habría que dejar como legado para la posteridad. Y hablando de sermones y sacerdotes, Lucita habría logrado un milagro, algo semejante a resolver ni más ni menos que la cuadratura del círculo, pues habría superado los escollos infranqueables con que se estrellaron Owen, Fourier, Saint Simon y tantos otros socialistas utópicos. “Estoy seguro que los trabajadores de Brukman, como muchos otros, no caerán en las desviaciones y deformaciones que, bajo la presión del

mercado y la ley de valor —malgre Toni Negri— caen muchas cooperativas (diferenciales salariales, estratificación interna, productividades y tiempos de explotación, ausencia de democracia interna...). El viejo sueño de los falansterios o de los talleres sociales hecho realidad. Un régimen de producción igualitaria que podría abrirse paso y funcionar a espaldas del capitalismo, y sin necesidad de tirarlo abajo. Después de todo este desarrollo, es útil preguntarse y más fácil responder de qué lado provienen las “caracterizaciones sobredimensionadas y hasta delirantes”.

Mediante Duhalde y Kirchner, la burguesía logró retomar la iniciativa política al imponer una salida electoral. Dos años después, sorteada la “transición”, comienza su gestión definitiva el régimen que es la contracara del “que se vayan todos”.

Con la colaboración del progresismo y la izquierda, se impulsa un intento por echar políticamente atrás al movimiento piquetero y armar inclusive una base propia en su interior. El mismo operativo se extiende, como lo explicamos, al movimiento de fábricas ocupadas: el Estado pretende meter una cuña, en especial en sus expresiones más combativas. Son maniobras, sin embargo, de corto alcance, cuando ninguna reivindicación fundamental de los trabajadores y el pueblo ha sido satisfecha y el “ajuste” se descarga sobre sus espaldas. El capital político de un gobierno sometido al FMI no tiene más remedio que agotarse. Como es bien sabido, la popularidad presidencial, en casos anteriores, fue un fenómeno efímero y concluyó pinchándose más temprano que tarde; nada indica que Kirchner sea la excepción.

Prueba de ello, es lo ocurrido en la Plaza, con motivo del segundo aniversario del 19 y 20 de diciembre. La conmemoración del Argentinazo ha dejado establecida una nueva relación política en el país. En la lucha de clases que se está desarrollando para determinar el desenlace que debe tener el colapso capitalista y la rebelión popular del 2001, ya no terciar solamente el FMI y el Tesoro norteamericano; la burguesía nacional y la patria exportadora; o el clero y la Bonaerense. El movimiento piquetero ha vuelto a transformarse en un factor de primer orden, esto luego de hacer frente, con clari-

dad política, a la nueva tentativa burguesa pseudo-antiimperialista de Kirchner de reconstrucción del capitalismo y del Estado sobre las viejas bases. Cuando nos referimos al movimiento piquetero tenemos más en cuenta que nunca a la clase obrera, como lo prueba la intervención creciente de sindicatos antiburocráticos y delegados sindicales en este movimiento.

En tránsito hacia una nueva etapa

El movimiento de fábricas recuperadas está surcado por tendencias contradictorias: las que lo conducen a afirmarse como gestiones obreras independientes y las que lo impulsan a integrarse al orden social vigente y transformarse en Pymes capitalistas. El balance de este último año, arroja como saldo el predominio de la segunda de estas tendencias. Asistimos a un regresión política, donde caudillos y nucleamientos vinculados al aparato político del Estado han logrado un marcado control de las fábricas y cooperativas en manos de los trabajadores.

La activa intervención de estos personajes con estrechas relaciones con los partidos y funcionarios del régimen ha permitido mantener una contención y canalizar un movimiento que continuó desenvolviéndose en el 2003.

Esta tendencia ha podido prosperar y hasta conquistar una viva adhesión entre los trabajadores, como resultado de la escasa estructuración del movimiento de fábricas ocupadas, la no entrada en acción de las grandes concentraciones proletarias, la dispersión entre las diversas empresas en lucha y su débil fusión, todavía, con el movimiento piquetero y los sindicatos, y representaciones sindicales combativas. A esa atomización ha contribuido la acción de la centroizquierda y de la Pastoral Social, pero también de la izquierda, quienes conspiran con la tarea de poner en pie un movimiento de conjunto de las fábricas en lucha y su unidad con el resto de la clase obrera.

En este marco, los trabajadores fueron colocados ante la disyuntiva de aceptar este producto adulterado mal llamado "expropiación" o, de lo contrario, asumir las consecuencias de un desalojo. Se

trata de una extorsión que es instrumentada arteralmente por el Estado, pero que además cuenta con el respaldo de un amplio arco político que va desde el PJ a la UCR y que se extiende al ARI e Izquierda Unida. La centroizquierda y la izquierda no sólo no denunciaron esa extorsión, sino que han intervenido activamente en el diseño y redacción de los proyectos de ley truchos, y en el armado del dispositivo que ha culminado en su aprobación. Se pretende justificar esta conducta sosteniendo que no se ha hecho otra cosa que ser "portavoz" de lo que los trabajadores reclamaban al gobierno cuando, en realidad, han obrado en sentido inverso, como correa de transmisión del gobierno sobre los trabajadores; planteando que había que circunscribir los reclamos en función de lo que el Estado patronal estaba dispuesto a aceptar. Presentadas así las cosas, el menú que se ofrece emerge como el único disponible: o se lo toma o se lo deja. No cabe la menor duda de que estamos en presencia de un grosero chantaje. Los trabajadores no son los responsables de esta situación, sino sus víctimas. Izquierda Unida y, en especial, el MST hacen caso omiso de todas estas evidencias y no tienen el menor empacho en camuflar este proceso extorsivo, presentándolo como un "paso adelante" (acompañado, por supuesto, de la frase ritual, adaptada a la circunstancia, de que esto "no es suficiente" y de que "seguiremos peleando en el futuro por el resto de los reclamos").

Pero estas leyes tienen un alcance más vasto. No se nos puede escapar el otro componente que anima la conducta de la burguesía. Concebida como un medio para canalizar la presión obrera, al mismo tiempo, esas expropiaciones obran como un recurso para confinar el movimiento a los estrechos márgenes de la autogestión, aislarlo del movimiento de lucha más general de la clase obrera y, en esa medida, preservar esas empresas recuperadas como un terreno para una ulterior reconstrucción de las mismas, sobre bases capitalistas.

La reforma a la Ley de Quiebras apunta en esa dirección. A los trabajadores se les facilitarían los medios legales para que se hagan cargo de la continuidad de la empresa, pero bajo esa nueva figura los trabajadores siguen atados a la quiebra, bajo el arbitrio del juez y a merced de los acreedores. Se trata de una versión más desarro-

llada de las actuales "quiebras con continuidad", en otras palabras, una variación de la legislación ya vigente. Los trabajadores administran el activo pero sin liberarse de las deudas.

La reforma le otorgaría prioridad a los trabajadores para quedarse con la fábrica, pero no se trata de ningún regalo, pues si los trabajadores optaran por ese camino, deberán, en primer lugar, capitalizar la deuda laboral, es decir, comprar los bienes con las sumas que los antiguos dueños les adeuden en concepto de salarios atrasados e indemnizaciones y, en segundo lugar, seguir aportando económicamente, una vez que pongan nuevamente en marcha la producción, aun a expensas, si hiciera falta, de su propio salario.

En lugar de rematarse los bienes a moneda de quiebra, los terminan comprando los propios trabajadores, pero a los valores de mercado incrementados por su propia gestión, cuando ésta resultara exitosa. Esto representa un colosal rescate del capital en quiebra, quien termina recibiendo un resarcimiento económico sideral e impensado. El esfuerzo obrero termina yendo a parar al bolsillo de los acreedores.

La reforma a la Ley de Quiebras iría acompañada por la creación de "sociedades anónimas laborales". En el proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo, las cooperativas obreras pasarían a reconvertirse en esta nueva modalidad societaria. Esta nueva figura legal facilita el traspaso de la titularidad del capital de una mano a otra y, en esa medida, abre las puertas para el desembarco de capitales privados en las empresas recuperadas. Con la excusa de la falta de capital de trabajo —un problema apremiante para gran parte de las empresas bajo gestión obrera— se institucionaliza el ingreso de grupos capitalistas, quienes podrían meter su cuña, suscribiendo acciones y terminar adueñándose de la empresa, desplazando a los obreros y concentrando el paquete accionario, como ocurre habitualmente con las tradicionales sociedades anónimas. La nueva "asociación entre el capital y el trabajo", que se proclama desde los círculos gubernamentales, no es más que una pantalla para una profunda colonización patronal de las fábricas bajo gestión obrera.

La reforma de la Ley de Quiebras es una confesión de que la insolvencia y la cesación de pagos pende sobre la cabeza de centenares de empresas y, al mismo tiempo, una tentativa de encauzarlas y encarar la reconstrucción de las mismas sobre sus bases capitalistas tradicionales. Se buscaría "judicializar" los conflictos y derivar al Poder Judicial la presión de los trabajadores, que hoy está concentrada en el Poder Ejecutivo y Legislativo. El kirchnerismo alienta esta orientación, pero no está claro si esta iniciativa goza de suficiente "consenso" en las filas de la burguesía y hasta qué punto no terminaría desatando la beligerancia del gran capital, en momentos en que el gobierno ha concluido sometiendo a las presiones del FMI y del imperialismo. Lo cierto es que el ímpetu "reformista" inicial parece haberse frenado.

En sintonía con esta orientación, el Estado está tratando de tener cada vez una mayor tutela sobre las fábricas recuperadas. La nueva reglamentación dispuesta recientemente por el Inaes (organismo gubernamental que controla las cooperativas), establece una impresionante regimentación sobre las gestiones obreras. El Inaes se reserva para sí el derecho de participar en la constitución de las cooperativas (quienes deberán comunicar a ese organismo la realización de su asamblea constitutiva con 15 días de anticipación) y de examinar los proyectos productivos, y hasta de vetarlos y no otorgar la personería, si consideran que los proyectos no son viables. Al mismo tiempo, la nueva disposición establece una injerencia permanente de ese organismo en la vida de la fábrica, condicionando las decisiones soberanas de las asociaciones que formen los trabajadores.

Este intervencionismo se extiende también a Brukman, Sasetru y Zanón —es decir, las expresiones más avanzadas de control y gestión obreras—. La pretensión del Estado es meter una cuña en esas fábricas para quebrar la gestión obrera independiente y despejar el camino a este vasto proceso de colonización patronal que describimos. La expropiación trucha de Brukman, que ni siquiera cubre el valor de la maquinaria y habilita el ingreso de los carneros a la planta; el nombramiento de interventores, desplazando al directorio en Zanón y el reciente fallo de la Corte Suprema habilitando el in-

greso de los mismos a la planta; así como la provocación montada con injerencia del Inaes y punteros del PJ en Sasetru, revelan el alcance del operativo en curso. Por supuesto, esta coacción está unida al sabotaje económico a estos emprendimientos, que no reciben ningún tipo de auxilio estatal. En otras palabras, el ahogo económico es funcional a la escalada política. Este operativo se inscribe en la ofensiva más general que el gobierno está llevando a cabo contra el movimiento piquetero, dirigido a dividirlo, cooptar a fracciones de éste y aislar a sus sectores más combativos.

Apreciado este panorama de conjunto, lo menos que puede decirse es que el control punteril progubernamental y el desenlace provisorio que ha tenido este movimiento tiene una base frágil.

La política de la burguesía del garrote y la zanahoria, de cooptación y aislamiento, ataques y concesiones, procurando tirar la pelota para adelante no deja de tener un carácter precario. La estrategia gubernamental acumula un sinfín de contradicciones explosivas que, más temprano que tarde, van a estallar, tales como el vencimiento de las expropiaciones transitorias, la falta de capital de trabajo, el ahogo por reconocimiento de deudas de los vaciadores.

Las expectativas de encontrar una salida para las fábricas recuperadas, cobijándose a la sombra del nuevo gobierno, al que se pretendió identificar con el progresismo, se han demostrado completamente infundadas.

Las salidas impuestas por el gobierno tienen un carácter endeble. La etapa en que ingresamos va a tropezar con los límites insalvables de la actual recuperación económica y, sobre todo, la nueva realidad política creada después del último 20 de diciembre.

Programa

Todas estas cuestiones plantean la necesidad de contar con un programa que unifique la intervención de los trabajadores frente al nuevo periodo que se abre.

En las empresas cuya crisis está en un estado muy avanzado que, como describimos, se extiende a ramas enteras y plantas im-

portantes (transporte, salud, empresas de servicios privatizadas, Parmalat, etcétera), el control obrero se coloca a la orden del día. El control obrero debe dirigirse a fiscalizar las cuentas (para lo cual debe exigirse la apertura de los registros de la empresa), pero debe ir más lejos y exigir el control de la recaudación, y de los fondos, es decir, incursionar en el movimiento financiero de modo de impedir que el dinero sea retirado por la patronal y asegurar, por esa vía, el cobro de los sueldos y el pago de los insumos básicos, imprescindibles para el funcionamiento de la empresa. Es emblemática la experiencia en ese sentido de Transporte del Oeste. Pero, del mismo modo, los trabajadores de la Clínica Lerena han establecido una semiintervención sobre el movimiento financiero de ese centro de salud.

En la lucha contra el vaciamiento patronal, el control obrero incluye, si hiciera falta, el poder de veto de los trabajadores sobre los gastos, de manera de poner un freno al manejo discrecional de la caja. El control obrero se plantea también en el ámbito productivo y operativo de la empresa: ejercer un control sobre los inventarios de mercaderías, el abastecimiento de materias primas, insumos y las maquinarias para impedir que sean sustraídas por la patronal, y neutralizar el sabotaje económico característico de esas instancias.

El control de los trabajadores pasa a ser fundamental cuando existe la perspectiva de traspaso de la empresa. Ya señalamos que, en la actualidad, por referencia al 2001 y 2002, empieza a haber más candidatos interesados en hacerse cargo de las empresas en quiebra. En este cuadro, la elaboración del pliego de condiciones es fundamental y debe estar presidido por la defensa de la totalidad de los puestos de trabajo, el salario y el convenio. Un ejemplo de lo expuesto es Transporte del Oeste, donde los trabajadores acaban de forzar a la sindicatura a incluir en un acta que el llamado a licitación para traspasar la línea se hará sobre la base de la absorción de todo el plantel, el reconocimiento de la antigüedad y el salario de convenio que, en la actualidad, vienen percibiendo y la obligación del grupo empresario de asumir la totalidad de los recorridos, es decir, el paquete total, no admitiéndose el desguace de la línea.

El control obrero constituye una escuela y hace madurar las condiciones para un escalón superior, como es la gestión obrera. Pero esta decisión no va a ser obra de un ultimátum. La gestión obrera terminará de hacerse carne cuando los trabajadores perciben que se han agotado otras alternativas tradicionales. La gestión obrera está planteada en íntima vinculación con la plataforma de condiciones que los trabajadores exigen en caso de un traspaso de manos de la titularidad de la empresa y contrastarla con las opciones patronales, en caso de que éstas no estén dispuestas a respetarlas. Sólo a través de este proceso preparatorio, la causa de la gestión obrera puede ir conquistando la conciencia de los trabajadores, venciendo las resistencias y prejuicios ancestrales que anidan en las filas de la clase obrera y preparar el terreno, por esa vía, para que los trabajadores tomen la decisión de llevarla a la práctica. Por último, aunque el proceso no culmine con la implementación de una gestión obrera, el solo hecho de que los obreros enarboles la expropiación y la gestión obrera como alternativa, constituye por sí solo un arma fundamental para neutralizar el chantaje al que usualmente apela la patronal, quien plantea en términos de ultimátum: "o aceptan esto o se quedan en la calle, con las manos vacías". La respuesta a esta extorsión es clara: "Si los patrones no son capaces de garantizar las condiciones que exigimos, los trabajadores estamos en condiciones de hacernos cargo de la empresa".

Frente al colapso de la empresa y una virtual cesación de pagos, las consignas nombradas se articulan con el reclamo de que "el gobierno ponga la plata durante la transición, mientras se avanza en una solución de fondo". Un ejemplo muy ilustrativo de ello es Transporte del Oeste, en el cual se le arrancó al Estado (por segunda vez) el otorgamiento de un subsidio a la empresa para garantizar que todos los trabajadores puedan seguir cobrando sus salarios. En este caso, se logró dar vuelta el escenario habitual en que los trabajadores quedan absolutamente librados a su suerte, sin cobrar un peso. Huelga señalar que esa situación desesperante crea el caldo de cultivo ideal para hacer pasar las reestructuraciones y negociados empresarios, que se cocinan a espaldas de los trabajadores. Este cuer-

po de consignas, debidamente articulados, según la circunstancias, tiene como presupuesto la acción directa, lo cual plantea la huelga, los cortes, las marchas y por sobre todas las cosas, la ocupación de toda empresa que cierra y despida o haya un proceso de vaciamiento. Y si no se vislumbra una solución, se plantea, como ya ha ocurrido en centenares de empresas, ponerla a producir sin esperar el visto bueno de nadie.

Un capítulo especial, lo merecen las fábricas que ya están en manos de sus trabajadores. No es exagerado decir que de las 170 empresas que se engloban bajo el nombre genérico de "recuperadas", apenas veinticinco o a lo sumo treinta han logrado traspasar un umbral de producción que salga de la subsistencia. Un grupo selecto de ellas han logrado ubicarse bien frente a la competencia y, entre ellas, se encuentran Zanello, Gip Metal, Papelera Platense. Las restantes sobreviven y los ingresos apenas alcanzan para retirar una suma mensual, que está por debajo del convenio o de otras empresas del ramo, explotadas por sus patrones. Brukman está retirando 150 pesos por semana y está a la espera de un subsidio por parte del Estado para reacondicionar las máquinas e instalaciones dañadas durante la etapa del desalojo. Al igual que otros casos similares, el ingreso se reduce a los planes de Jefas y Jefes o de autoempleo otorgados por el Gobierno de la Ciudad. En lugar de poner el dinero, lo único que ha confirmado el gobierno de la Ciudad es la decisión de quitarle los planes de autoempleo que le permitían a los trabajadores reunir a fin de mes otros 150 pesos. Hay otras que, inclusive, están por debajo de esa línea. El planteo de que el gobierno ponga el dinero para los salarios hasta que la propia fábrica esté en condiciones de abonarlos, es una consigna fundamental. En otras palabras, una suerte de garantía salarial mediante un fondo compensador aportado por el Estado. Ya hemos señalado, por otra parte, los profundos obstáculos que tropieza cualquier gestión obrera para despejar, donde a la ausencia de capital se le une el encarecimiento de los insumos y la falta de crédito por parte de los proveedores. Está colocado sobre el tapete la batalla por el otorgamiento de subsidios no reintegrables, poniendo de relieve en la agitación política el contras-

te existente entre la ausencia de recursos para las fábricas recuperadas y la compensación para los bancos, y los subsidios a exportadores y empresas privatizadas, y por sobre todo, el pago de la deuda externa. Otra cuestión a destacar es que el dinero que se niega a las fábricas ocupadas aparece para los nuevos microemprendimientos. Después de tanto cacarear por la transparencia, estamos frente a un caso clásico de clientelismo, que será financiado a través de fondos fiduciarios y entregado su manejo a punteros. Quiere decir que el dinero terminará esfumándose en nuevos episodios de corrupción.

Por otra parte, persiste, no es difícil imaginárselo, una barrera casi infranqueable para la mayoría de las fábricas recuperadas que es la comercialización. Aun las que han logrado restablecer la capacidad de producción tropiezan con el escollo insalvable del mercado donde enfrentan la competencia despiadada de los grupos capitalistas. En este contexto, cobra extrema actualidad la lucha por el reconocimiento de las fábricas bajo gestión obrera como proveedores privilegiados del Estado. Renacer (ex Aurora Grundig) arrancó con un pedido del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego de 300 lavarropas. Esto asegura un mes de trabajo, según manifestaciones realizadas por los representantes de los trabajadores, que valoraron el convenio, aunque no deja de ser una gota en el océano. Se plantea arrancarle al Estado la compra de productos que elaboran las fábricas recuperadas, en momentos en que existe una impresionante demanda insatisfecha de millones de familias carenciadas.

No puede sorprender a nadie que, en este cuadro, se vaya acentuando la escisión entre las fábricas ocupadas que logran una inserción en el mercado y las que apenas sobreviven. Esto no deja de tener su repercusión al interior de los nucleamientos de fábricas recuperadas, sometidos al fuego cruzado de tendencias contradictorias entre empresas exitosas, por un lado, en que se afianza la tendencia a su transformación en Pymes capitalistas y una posición más pasiva y conservadora por un lado, y las postergadas, por el otro, donde la necesidad las obliga a replantearse una acción contra el régimen.

Como telón de fondo está el vencimiento de las expropiaciones transitorias. Aunque el gobierno, muy probablemente, opte por prorrogar los vencimientos, como ya ocurrió con Gip Metal y Yaguané, no deja de ser un momento de crisis y vuelve a poner al desnudo que, tanto Kirchner como Solá e Ibarra, no están dispuestos a poner un peso para las fábricas vaciadas, ni siquiera para las indemnizaciones. Va a resurgir con más fuerza la necesidad de una batalla contra el sabotaje del gobierno y enfrentar la precariedad en que se encuentran las fábricas ocupadas. Del otro extremo —el editorial de *La Nación* es un adelanto, van a surgir voces y presiones que van a aprovechar ese hecho para llamar a poner fin a estas medidas.

La lucha contra la injerencia del Estado y sus punteros sólo puede prosperar si está asociada a la lucha por este programa. El cien por ciento del manejo de la fábrica en todas sus facetas (productivas, económicas, financieras y comerciales) debería ser un resorte de los propios trabajadores y no, como ahora sucede en numerosos casos, un cuerpo extraño a ellos. En este marco, la reivindicación de la soberanía de las asambleas de fábrica y que la cooperativa esté sometida a las decisiones de ella, cobra una inusitada vigencia.

Estamos frente a un periodo de transición con un final abierto, cuyo desenlace esta condicionado a la evolución mas general del escenario político. Lo que sí es claro es que así como el fenómeno de las fabricas ocupadas nació como subproducto de la bancarrota capitalista, va a replantearse como parte de esa bancarrota. A lo largo de este libro y, en particular, en su ultimo capitulo, hemos destacado la precariedad y fragilidad histórica de esta nueva tentativa de "salida" de la burguesía nacional, esta vez, de las manos del kirchnerismo. Si esta caracterización es acertada, las tendencias a la rebelión popular van a recrearse en forma proporcional a la incapacidad de esta nueva tentativa para satisfacer las necesidades del pueblo. De aquí puede surgir el nuevo combustible capaz de darle un nuevo impulso a las ocupaciones de fabrica y extender este fenómeno a centros vitales de la economía. Esta bocanada de aire fresco permitirá darle otras proyecciones y perspectivas al movimiento de fábricas ocupadas, invertir las tendencias actuales y sustraerlo del

virtual copamiento por parte de los agentes del Estado al que está sometido en el presente.

Un cambio de perspectivas como el que señalamos replantea la necesidad de una red nacional de fábricas bajo gestión obrera, desde la cual se luche por el control obrero de las empresas vaciadas o en quiebra, para que los vaciadores paguen los platos rotos y el Estado otorgue subsidios no reintegrables que garanticen la continuidad de las fábricas. La entrada en una nueva etapa pondrá a la orden del día la puesta en pie de una central de fábricas, capaz de darle otra estatura y proyección a la lucha contra el Estado capitalista, y encarar una movilización nacional por la nacionalización de la banca y directores obreros en su conducción, es decir, apropiarse de los resortes estratégicos de la economía para redirccionarlos en función de las necesidades populares.

Esto supone un plan económico independiente de los trabajadores y plantea la cuestión de quién gobierna la Argentina: si la clase obrera o la clase capitalista. La gestión obrera nos conduce a la cuestión del poder.

Estamos en presencia de un fenómeno de un alcance gigantesco. El fracaso de todas las tentativas encabezadas por la burguesía nacional por dar una salida pone de relieve que el país no puede reconstruirse sobre sus antiguas bases sociales. Este hecho realza la función histórica que la clase obrera está llamada a jugar. Aunque no ha pasado de ser una experiencia acotada, la gestión obrera asoma e irrumpe en el escenario nacional, como una alternativa, pues establece los principios de una transformación social y de una reorganización integral del país, sobre nuevos fundamentos y bases sociales.

ANEXOS

La Gestión Obrera y la Internacional Comunista

Como se verá, la siguiente resolución, aprobada en 1921, parece escrito para nuestros días. Por cierto, no se trata de que la Internacional Sindical Roja, nacida al impulso de la Revolución Rusa, tuviera la bola de cristal o una capacidad excepcional de pronóstico, sino, simplemente, de la determinación de una época histórica y de las tareas centrales que de ella se desprenden.

Resolución sobre el control obrero¹

1 El análisis de la vida económica de nuestros días demuestra de un modo inconfundible que los recursos materiales y las fuerzas productivas de la sociedad han entrado en una contradicción áspera e insuperable con las relaciones de producción y propiedad vigentes.² Durante la guerra mundial, esta contradicción se volvió evidente para los elementos de la vanguardia del proletariado. Finali-

¹ Aprobado en el I Congreso de la Internacional Sindical Roja, que sesionó en Moscú entre el 3 y el 19 de julio de 1921.

² Tal contradicción indica la madurez histórica de la revolución proletaria, que ha cesado la época de las revoluciones burguesas. Ese asunto fue tema de debate intenso a comienzos del siglo XX, incluso entre Lenin y Trotsky. El primero aún defendía la vigencia de la revolución democrática, que sólo terminó de desechar en sus famosas *Tesis de abril*, en 1917. En cambio, Trotsky sostenía que el imperialismo —significa, entre otras cosas, la fusión del capital industrial y el capital bancario y la constitución de monopolios gigantescos— abría una época histórica de guerras y revoluciones, y la posibilidad de dar al proletariado Internacional una estrategia única, la estrategia de la dictadura del proletariado. Trotsky había comenzado a elaborar su tesis de la revolución permanente a partir de 1904 con su amigo alemán Helphand Parvus y le dio forma definitiva en su libro *1905: Resultados y perspectivas*. En los países atrasados como Rusia, decía Trotsky, las tareas democrático burguesas pendientes —el desarrollo industrial, el capitalismo agrario, la eliminación del atraso y el hambre— sólo podría cumplirlas la clase obrera en el poder. Una magnífica exposición de esa misma postura la hace Lenin en su artículo *El cuarto aniversario de la Revolución de Octubre*, escrito en 1921.

zada la guerra, la crisis mundial que golpeó sin distinciones a los países vencedores, vencidos y neutrales, ha hecho consciente de esta verdad a las vastas masas proletarias.

La guerra, que continúa sin interrupciones a pesar de la paz de Versalles,³ y la crisis, convertida en crónica y general, a pesar de la extrema necesidad de reactivar la producción, ha despertado en los trabajadores, y en especial en el proletariado de todo el mundo, la preocupación por la existencia futura. Mientras tanto, las primeras tentativas de resolver el problema ya han puesto en evidencia cómo la contradicción ha alcanzado un grado tal, que la burguesía, hasta ahora clase dirigente de la producción, se está convirtiendo en el agente desorganizador; es decir, que no contribuye a desenvolverla sino que la obstaculiza, se convierte en un estorbo.

La clase obrera, que está ligada más que los otros elementos de la sociedad a la producción en los grandes centros industriales, en las fábricas y en los talleres, ha comprendido, antes y más que cualquier otro, que esta contradicción es insostenible y que por añadidura tal contradicción por sobre todo produce la masacre de los obreros en la guerra o su exterminio en masa por efecto de la desocupación.

Es por eso que en las filas obreras surge espontáneamente la necesidad de poner en claro la función que tiene la burguesía en la or-

ganización de nuestros días, de examinar cómo ella satisface esa tarea. De esto deriva la aspiración de proceder prácticamente a la reorganización de todo el sistema productivo, según los intereses de los trabajadores.

Esa tendencia es en realidad el prólogo de la solución de la contradicción, del derrocamiento del obstáculo fundamental constituido por el régimen capitalista, mediante la violencia de la revolución social y se concreta en la forma del control obrero sobre la producción. La forma embrionaria del control obrero se explica en las simples tentativas realizadas por los obreros para instaurar en las empresas la supervisión sobre el trabajo, sobre las compras y sobre el estado de los instrumentos de trabajo, de verificar en qué medida el cierre de la empresa o la reducción del trabajo representan verdaderamente una necesidad, o si es más bien el resultado de la mala gestión de los empresarios. Sin embargo, en la práctica los obreros llegan bien rápidamente a la conclusión de que la simple verificación y el control pasivo no alcanzan para impedir a los capitalistas desorganizar el trabajo en la empresa, persiguiendo intereses personales de clase.

El procedimiento actual de los capitalistas de todo el mundo, que aplican el sistema de comprimir en masa artificialmente la producción, mediante la reducción del número de jornadas de trabajo (*short time*), o el cierre; la liquidación o el despido en masa, etc., confirma la insuficiencia de dicha forma de control. Igualmente se demuestra insuficiente el intento desesperado, realizado por trabajadores de varios establecimientos, de salvar la producción y continuar el trabajo incluso contra la voluntad del empresario. En este caso, comprobado en su momento incluso en Rusia, después de la revolución de febrero,⁴ y probado en Italia, Alemania, Inglaterra y otros lugares, se revela de otro modo el carácter esencial de la nueva posición en la que se encuentra la clase obrera frente a la produc-

³ El Tratado de Versalles, que puso fin a la I Guerra Mundial, se firmó el 28 de junio de 1919. El presidente norteamericano, Woodrow Wilson, habló de "una paz sin victoria", pero, en verdad, se trató de una rendición incondicional de Alemania y demostró que se había tratado de una guerra de rapiña, de reparto de mercados entre las potencias imperialistas. Alemania, entre otras concesiones, perdió 40 mil kilómetros cuadrados de territorio, 6 millones de habitantes y la mitad de sus recursos de carbón y de hierro, además de verse condenada a pagar indemnizaciones de guerra que John Keynes calculó en 40 mil millones de dólares de la época. La Internacional Comunista señaló que Versalles hacía inevitable una nueva guerra, es decir otra masacre contra el proletariado europeo. Por su parte, Lenin indicó que la rapiña entre imperialistas constituía una guerra permanente, que en ciertos momentos adquiría la forma de guerra comercial y en otras de choques bélicos directos.

⁴ Como se sabe, en febrero de 1917 una sublevación popular, acompañada por motines en los cuarteles, derrocó al zar y llevó al poder a la derecha "democrática". En octubre, una nueva revolución dejó la conducción del Estado en manos de los soviets, dirigidos ya por los bolcheviques.

ción, en heredera directa de la burguesía, que ahora se comporta evidentemente como agente desorganizador de la producción por sus propios intereses de clase.

3. Semejantes cambios en la conciencia y en las aspiraciones de las masas trabajadoras golpean irreparablemente al movimiento sindical de viejo estilo, el cual se limitaba a la simple lucha por la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera en los límites del régimen capitalista.

Los viejos sindicatos, ligados por medio de la propia burocracia con el aparato capitalista y enteramente sometidos a él, se revelan totalmente incapaces de comprender las nuevas tareas de producción que incumben a la clase obrera y mucho menos de resolverlas prácticamente.

Ésta es la razón por la cual surgen actualmente con fuerza imperiosa y se desarrollan con inusitada rapidez nuevas organizaciones obreras, que continúan sirviéndose por ahora de las viejas armas de los sindicatos, es decir de la huelga como medio de lucha revolucionaria, pero que aspiran al mismo tiempo a apoderarse de la producción.

La actividad concreta de los consejos de fábrica y de taller se manifiesta ahora no sólo en la organización de la huelga sino también, al mismo tiempo, en la apropiación de funciones que pertenecían a los empresarios, en especial la provisión de materias primas, de combustible, de medios financieros, en la ocupación integral de la empresa sabotada, sometida a cierre o abandonada por los empresarios.

Es por eso que ya en el presente estadio del control obrero, tanto la burguesía como los dirigentes del viejo movimiento sindical se esfuerzan desesperadamente en sustituir el control obrero revolucionario por la antes mencionada burocracia industrial, por medio de comisiones paritarias, de la participación de los obreros en las utilidades, etc.; es decir, con artificios "democráticos" basados en la teoría burguesa de la "igualdad de derechos" entre el trabajo y el capital, sobre la base —en fin— de la conservación de la propiedad privada de los medios de producción.⁵ Es-

te concepto de "igualdad de derechos", cultivado con cuidado por los sindicalistas de Inglaterra, consagrado en el X Congreso de sindicatos de Alemania (1919), y siempre imperante en la Confederación General del Trabajo en Francia,⁶ no es otra cosa que una tentativa concreta de engañar a las masas obreras desnaturalizando el control revolucionario, de distraerla así de sus urgentes tareas revolucionarias y de dirigirla hacia los viejos y fracasados conceptos burgueses de la Internacional amarilla de los sindicatos.⁷

4. Exactamente el mismo significado tienen los esfuerzos que los dirigentes amarillos de los sindicatos realizan por contraponer al control revolucionario de los obreros el principio de la atribución del control al gobierno, concepto fervorosamente aprobado por la burguesía, que sabe perfectamente sacar provecho de la así llamada socialización para sus propios intereses de clase. Así, se intenta diligentemente esconder el hecho de que la consigna de trasladar la propiedad de los medios de producción al Estado no significa todavía que se hayan convertido en propiedad de toda la población, sino solamente que el control y la gestión de la producción pasa de un determinado grupo de representantes privados de la clase dominante al control de la clase entera.⁸ La teoría del control estatal presupone que los órganos

⁵ El derecho a la propiedad privada burguesa implica conculcar todo principio de igualdad de derechos, transformada por aquél en una ficción. En su libro *Para leer El Capital*, Engels explica que, ante "derechos iguales" entre capitalistas y trabajadores, decide la fuerza. Esto es: en última instancia, no se trata de un problema legal sino de la relación social entre clases en conflicto. Para estudiar la cuestión desde el punto de vista filosófico, véase *Crítica a la filosofía del derecho de Hegel*, de Carlos Marx.

⁶ Los sindicatos ingleses estaban controlados por los llamados *tradeunionistas* reformistas partidarios de la reconciliación de clases. En Alemania y en Francia, las organizaciones sindicales ya se encontraban bajo dominio de la socialdemocracia conciliadora.

⁷ Se refiere a la organización internacional de sindicatos socialdemócratas, opuesta a la Internacional Sindical Roja. Ésta era, trasladada al plano sindical, la lucha entre la II Internacional, socialdemócrata, llamada "internacional amarilla" por Lenin, y la III Internacional o Internacional Comunista.

administrativos encargados de gestionar la producción estén compuestos por representantes designados por los obreros y el gobierno, o de los obreros, los empresarios y el gobierno. Los representantes del gobierno se consideran intérpretes de toda la población, mientras los representantes de los obreros son considerados representantes de un determinado grupo de clase. De allí resulta la falsedad fundamental del concepto de la representación democrática sobre la base paritaria, completamente inaceptable para el control obrero revolucionario, el cual se apoya en la negación del Estado moderno en tanto es un instrumento de la burguesía, y le opone el Estado obrero, intérprete de los intereses reales de todos los trabajadores.

El control obrero no es conciliable con la nacionalización burguesa ni con el pasaje de la producción al Estado burgués. Toda tentativa de tal conciliación desemboca inevitablemente en el hecho de que la burguesía, que todavía conserva en la práctica la efectiva autonomía en la gestión de la producción, descarga toda la responsabilidad de la situación sobre la clase obrera. Por otra parte, esa tentativa de conciliar lo irreconciliable puede provocar fácilmente la descomposición de las nuevas células revolucionarias del movimiento sindical en los talleres y en las fábricas, cosa muy peligrosa dada la tendencia de la burocracia sindical a subordinarlas a su influencia perversa, beneficiándose de su actual disgregación, de la ausencia de una acción coordinada.⁹

⁹ Siempre debe recordarse que el Estado representa los intereses más generales de la burguesía, y por eso mismo sus actos bien pueden oponerse a los intereses de éste o aquél burgués individual, e incluso de sectores enteros de la clase dominante. En ciertos casos, ante la quiebra de la burguesía en su conjunto, o ante procesos revolucionarios profundos, la estatización ha sido el recurso último para salvar al régimen capitalista: eso sucedió, por ejemplo, tras la revolución boliviana en 1952.

⁹ Como decíamos, el documento parece referirse al fenómeno argentino de las fábricas ocupadas bajo gestión obrera, sobre cuya necesidad de coordinación hemos hablado en abundancia durante todo el texto. Sólo resulta conveniente recordar que el documento de la Internacional fue escrito hace más de 80 años. Esto es: la actualidad de un análisis político no está dada por los años transcurridos desde su elaboración, sino por

5. Por otra parte, resulta no menos peligroso para el proletariado el concepto pseudorrevolucionario, muy difundido entre los obreros de todos los países, según el cual sería posible que la clase obrera obtenga resultados eficaces mediante el control sobre la producción, antes incluso de que el capital sea aplastado.

Las tristes vicisitudes del control obrero en Italia, quebrado por los flexibles dirigentes del proletariado,¹⁰ han dado una prueba tan convincente, que deberían disuadir a los agitadores obreros revolucionarios de los otros países de volver a intentarlas.

Es de importancia capital tener en cuenta también el hecho de que la aplicación integral del control obrero no es posible sin que abarque *no sólo el lado técnico de la producción, sino también —algo mucho más importante— el lado financiero de ésta.*¹¹

Sólo con la plena aplicación del control financiero, los obreros estarán en condiciones de observar de manera distinta los mecanismos esenciales de toda la estructura capitalista. Por medio del control financiero, los obreros comienzan a constatar concretamente la dependencia de la propia empresa industrial de los consorcios financieros y de la banca, no sólo nacional sino también internacional.

su correspondencia con una época histórica determinada.

¹⁰ Después de la I Guerra Mundial, Italia vivió una crisis económica catastrófica. Decenas de miles de oficiales y soldados licenciados del Ejército no encontraban trabajo, mientras los precios hacían inalcanzables para la gran mayoría de la población la canasta de productos básicos. Dirigido por el ingeniero napolitano Amedeo Bordiga y el intelectual turinés Antonio Gramsci, el Partido Comunista, adherido a la III Internacional, comenzó a crecer de manera aluvional, mientras en las fábricas de Turín se constituían por doquier los consejos obreros, los *soviets*. Empero, los sindicatos, en manos del ala centrista del Partido Socialista, conducida por Giacinto Serratti, lograron que el movimiento no se extendiera y que los propios consejos se convirtieran en organismos de conciliación de clases. En 1920, una huelga general en todo el Piamonte, con ocupaciones de talleres y fábricas, fue aplastada militarmente. Así se abrió camino a la victoria del fascismo, cuyo líder, Benito Mussolini, había sido hasta 1912 uno de los jefes del ala izquierda del PSI y director del periódico socialista *Avanti*.

¹¹ Subrayados en el original.

¹² Subrayado en el original.

¹³ La Internacional sindical de Amsterdam agrupaba a los sindicatos dirigidos por la bu-

La divulgación de los secretos comerciales, industriales y especialmente financieros, da al proletariado la visión neta de la primera fuente de sabotaje universal realizado por la burguesía, y así se establecen las bases fundamentales del sistema de cierres, de reducción del tiempo de trabajo (*short time*), y de varios otros procedimientos, tendientes, mediante la desocupación artificial, a imponer la reducción de los salarios, al aumento de las horas de trabajo y la destrucción de la organización obrera.

6. Esto porque la lucha por el control financiero empuja a la clase obrera al choque inmediato y decisivo con la burguesía, que sustenta su fuerza política en gran parte sobre la conservación de la fuerza financiera.

En este estadio, la lucha por el control obrero asume inevitablemente un tono puramente político y requiere una guía política.

En los casos siempre frecuentes de ocupación de los establecimientos por parte de los obreros y, en el mismo momento, la imposibilidad de gestionarlas sin dominar también el aparato financiero, hacen surgir entre los obreros la tarea clara y urgente de apoderarse de todo el sistema financiero y, por medio de éste, de toda la industria.

En esta fase del control obrero, la contradicción señalada en el punto 1 se resuelve en la lucha por el poder entre el proletariado y la burguesía. Esto es, en la revolución social.¹²

En el desarrollo de esta lucha decisiva, tanto más larga y fatigosa cuanto más organizada y culta sea la burguesía de cada país, ya no se trata sólo de controlar al empresario, de impedir su "mal comportamiento", de luchar contra el sabotaje, de continuar a cualquier costo el trabajo en los establecimientos, etc., sino que urge tomar el lugar de los empresarios y excluir de la producción a los capitalistas en cuanto clase, apoderándose de la gestión de toda la producción del país y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de tal gestión.

Por eso, en esta fase el control se transforma en acción combativa de la clase obrera, en tanto organizadora de la producción, en el

rocracia sindical socialdemócrata, a la cual ya nos hemos referido.

interés no sólo de los grupos aislados de la clase obrera en cada taller, mina o línea ferroviaria, sino más bien de todo el proletariado del país.

7. La victoria del proletariado sobre la burguesía, inevitable sobre todo porque la burguesía no está en condiciones de conservar en su poder la producción, lleva al proletariado a edificar su propio Estado en condiciones muy difíciles, sobre todo porque la victoria está ligada, por la fuerza de las cosas, con la descomposición y la ruina del viejo aparato capitalista de gestión de la producción.

En estas circunstancias, resulta muy difícil mantener el poder sobre la producción, al día siguiente de la revolución social.

El sabotaje oculto de parte no sólo de los capitalistas sino también de aquellos elementos que están más próximos a ellos, que viven bajo su protección, se vuelve patente y sistemático. Las fábricas, los talleres de los establecimientos estatales, las escuelas medias y superiores, quedan carentes de elementos dirigentes. La clase obrera se ve obligada a prodigar sus mejores fuerzas, no sólo en la defensa material de la revolución, sino también en las funciones administrativas. En ese momento, las funciones de las organizaciones de masas, incluyendo no sólo a los estratos dirigentes del proletariado (Partido Comunista) sino también a la enorme masa de proletarios "sin partido", se vuelve más importante que nunca. Sin embargo, la organización económica del proletariado puede penetrar en lo más profundo de la clase obrera sólo mediante la creación de núcleos aptos en cada fábrica y taller. Es por esa razón que la cuestión de las relaciones recíprocas entre los consejos de fábrica y los sindicatos asume, en el momento presente, tanta importancia. Está demostrado por la experiencia que la instauración de núcleos revolucionarios de producción bajo la forma de consejos de fábrica, es necesaria sobre todo donde el movimiento sindical está poco desarrollado, o está dominado por elementos oportunistas.

Pero la acción aislada de los consejos de fábrica puede quedar desnaturalizada y paralizada por la burguesía si no está generalizada y extendida a todo el país, bajo la guía de la vanguardia de la clase obrera. Surge así la necesidad de utilizar el aparato de los sindicatos y de

sus federaciones para nuestros objetivos, subordinando a ellos los consejos de fábrica, y transformándolos de esta manera en potentes órganos de control de las masas y en órganos para asumir la producción.

8. Pero esta reorganización de los sindicatos en el interés de la revolución social no puede ser lograda si no se verifican dos condiciones fundamentales:

a) Que los sindicatos estén constituidos no según el viejo criterio profesional, por oficio, sino siguiendo el criterio de la producción, por industria, lo que permite unir a todos los obreros y empleados de cada establecimiento y de cada rama industrial en torno de determinados problemas de la producción;

b) Que en cada industria exista un fuerte y sólido grupo revolucionario, capaz de enfrentar la obra contrarrevolucionaria de la burocracia sindical amarilla, de reaccionar contra su política corruptora, y de mantener a las masas organizadas de fábricas y talleres sobre el terreno de la lucha revolucionaria por el control de la producción y por su gestión permanente.

Luchando resueltamente contra las tentativas que realiza Amsterdam¹³ por desviar el movimiento revolucionario del proletariado hacia un infructuoso control estatal en el marco del régimen capitalista y, en último análisis, en el interés de este régimen, los sindicatos rojos,¹⁴ precisamente, deben prestar la máxima atención a la práctica del control, constituyendo esto una escuela excelente de preparación para el proletariado, tendiente a tomar el poder. Esto quiere decir que antes de la revolución social, en el propio curso del proceso de su preparación, es necesario poner en todas partes en el orden del día el control obrero, no sólo en cuanto consigna revolucionaria capaz de unir a las masas obreras y hacerlas más revolucionarias, sino también como un instrumento de educación económica y política, con vistas al futuro próximo.

¹³ Como quedó dicho, se denominaba sindicatos rojos a los dirigidos por los partidos comunistas de los diversos países, agrupados en la Internacional Sindical Roja.

¹⁴ En otras palabras: si bien la revolución es una catástrofe social, el desplazamiento abrupto y violento de la burguesía del poder del Estado y su reemplazo por la clase

El mantenimiento del poder político después de la revolución social, depende en gran parte del grado alcanzado por esta preparación anterior.¹⁵ Ya que la consolidación de la revolución social presupone que el proletariado, en esta fase del control obrero, había sabido apoderarse del mecanismo de la producción y ponerla en funcionamiento pleno, volviéndose así capaz de resolver no sólo política sino también económicamente, la contradicción expuesta en el punto 1.

Con una oportuna preparación, esta tarea se vuelve factible porque el obrero de una u otra forma se habitúa a ejercer el control y a actuar como empresario. Enseguida, se le hace manifiesto el nexo entre las diversas ramas de la industria, y a partir de ahí el mecanismo de la producción de todo el país. Y así, la llegada de la revolución social y el inevitable pasaje a la nacionalización de la banca, es decir del sistema financiero, del transporte, de las principales fuentes de materias primas, de las grandes empresas industriales, etc., sólo gracias al control obrero bien organizado puede el poder obrero disponer de una cantidad suficiente de obreros, capaces no sólo de luchar por la revolución social sino también de construir, con la estructura industrial heredada, un nuevo régimen económico socialista, nuevos órganos de la producción y de la distribución.

En esta fase, el control obrero asume el nuevo aspecto de la participación de los sindicatos en la formación de los órganos económicos para la gestión de la producción: con esto se convierte en un elemento constructor de la economía estatal, se convierte en el control de la clase obrera ejercido por medio de los consejos y de sus organismos económicos.

obrero y las grandes masas populares oprimidas, éstas, en ese momento, ya tienen su entrenamiento en el ejercicio del gobierno. Ese entrenamiento está dado por los consejos obreros, los organismos de doble poder. En ese sentido, cumple un papel relevante la gestión obrera, la administración de la producción por parte de los trabajadores desde antes del asalto revolucionario al poder político.

Conclusiones generales

- a) El control obrero es una escuela indispensable e importantísima para las vastas masas proletarias en su trabajo de preparación de la revolución social.
- b) En todos los países capitalistas, el control obrero debe ser puesto en el orden del día como grito de batalla del movimiento sindical, y usado eficazmente para divulgar los secretos comerciales, mercantiles y financieros.
- c) El control obrero debe ser ampliamente empleado como medio para transformar los viejos sindicatos en órganos de lucha de la clase obrera.
- d) El control obrero debe ser empleado como medio para reconstruir rápidamente los sindicatos por industria y no por profesión, sistema éste superado y por ello dañino para el movimiento revolucionario.
- e) El control obrero es incompatible con la propuesta planteada por la burguesía de "sistema paritario", de "nacionalización", etc., y supone la contraposición de la dictadura proletaria a la dictadura burguesa.
- f) En la aplicación del control técnico, financiero o mixto, como durante la ocupación de empresas, es particularmente necesario atraer a las vastas masas proletarias, incluso a las más atrasadas, a la discusión de los problemas referentes al control. Al mismo tiempo es necesario, en el proceso de la realización del control, confeccionar un padrón de los obreros más activos y capaces, preparándolos para la función dirigente correspondiente en la organización de la producción.
- g) Para establecer regularmente el control obrero, es necesario que los sindicatos dirijan y combinen el trabajo de los consejos de fábrica de las empresas de cada industria, previniendo de esta manera los infaltables intentos de alimentar el "patriotismo de fábrica", inevitables si el control es disperso.
- h) Los sindicatos, desde el inicio mismo del control, deben ayudar activamente a la obra de los consejos de fábrica y de empresa, estableciendo a tal fin disposiciones especiales, ilustrando la cuestión

del control en la prensa cotidiana y haciéndole amplia propaganda en las fábricas y talleres, no sólo mediante las explicaciones de los objetivos del control, sino también por medio de informes sobre los resultados del control en la empresa aislada y su grupo, a realizarse en las reuniones de fábrica, en las conferencias locales, etc.

i) Para llevar adelante estos problemas en los sindicatos no adheridos a la táctica de la Internacional Sindical Roja, es necesaria la formación de un compacto centro revolucionario, que tienda sobre todo a reconstruir los sindicatos por industria y a mantener el carácter revolucionario de la lucha por el poder obrero.

Resolución sobre empresas ocupadas y en lucha

Asambleas Nacionales de Trabajadores (ocupados y desocupados)
Encuentro Nacional de Empresas ocupadas y en lucha
Convocantes a la 2ª Asamblea Nacional de Trabajadores
(Bloque Piquetero Nacional, MIJD, Sindicatos y delegados clasistas)

El Encuentro de Empresas Ocupadas y en Lucha, reunido el 24 de agosto de 2002 en la fábrica Grissinópolis, con la presencia de 850 delegados y representantes de fábricas, sindicatos y Asambleas Populares, se dirige a todos los trabajadores del país para transmitirles el planteamiento y el plan de lucha votados.

1) Asistimos a la bancarrota de un sistema de producción. Los patronos huyen de las fábricas, revelando más que nunca que la clase capitalista es incapaz de hacerse cargo de la producción. Su función social y económica está agotada. Esto pone a la orden del día la necesidad de una transformación social, en la que los trabajadores estamos llamados a jugar un papel protagónico.

El principal obstáculo para la producción es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, mientras la superexplotación fue llevada a su máximo nivel. La política de flexibilidad laboral no sirvió, sin embargo, para que las empresas salieran a flote.

El problema no es, por lo tanto, el costo laboral sino el costo empresario. Grissinópolis, Chilavert, Ghelco, Brukman, Zanón, así como las decenas de plantas en la misma condición, son "viables"; lo que las hace "inviables" son la voracidad y el parasitismo patronales. La mejor demostración de que esto es así la dan los numerosos ejemplos de producción bajo control obrero.

2) El Encuentro llama a impulsar la gestión obrera de las fábricas mediante la expropiación de las máquinas, de los edificios, del capital de las empresas y su entrega a los trabajadores.

No se trata de fábricas autogestionarias, donde el obrero viva la ficción de que se ha transformado en patrón y salga a probar suerte y termine destruido por la competencia capitalista. Tampoco somos partidarios de la estatización capitalista. La mera estatización no sólo es una medida económica de rescate del capital privado. Es también una intervención política del Estado capitalista en defensa del sistema de explotación de los trabajadores.

3) El Encuentro advierte y llama a combatir todos los condicionamientos que se interponen en el desarrollo de una gestión obrera. El primero consiste en la pretensión de que los obreros nos hagamos cargo de las deudas empresarias —que se convierte en una hipoteca ilevantable— y, encima, pongamos plata, renunciemos a nuestras indemnizaciones o los créditos laborales que la patronal nos adeuda por atrasos y diferencias salariales.

Un segundo obstáculo es que los trabajadores contamos apenas con el "uso precario" de la planta, por el cual debemos pagar un alquiler. Estamos sometidos por lo tanto al arbitrio del dueño o del juez, quienes pueden disponer en cualquier momento el desalojo del establecimiento.

Las expropiaciones aprobadas hasta el momento en las Legislaturas no pasan de una "declaración". El Poder Ejecutivo puede no efectivizar la expropiación en el plazo autorizado, con lo cual los obreros se encuentran forzados a tener que asumir la compra de los activos si quieren evitar el cierre.

En tercer lugar, la falta de capital de trabajo (materias primas, servicios, salarios) termina convirtiendo a los trabajadores en rehenes del propio dueño o de otro grupo económico, que es el que adelanta los fondos para el pago de insumos.

Frente a la situación expuesta, planteamos un conjunto de medidas imprescindibles para el porvenir de la gestión obrera:

a) Expropiación de los activos y su entrega gratuita a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días.

b) Las deudas deben ser asumidas por los dueños, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal.

c) Otorgamiento de un subsidio no reintegrable, que permita a

los trabajadores contar con el capital de trabajo necesario para hacer arrancar el proceso de producción.

d) Transformación de todas las fábricas en manos de los trabajadores en proveedores privilegiados del Estado, de modo que los productos elaborados en ellas sirvan para abastecer las necesidades de hospitales, escuelas, asistencia social, vivienda y otras áreas públicas.

4) Llamamos a ocupar toda fábrica que despida, suspenda, que esté en proceso de vaciamiento, y a ponerla nuevamente a producir.

Debemos adelantarnos a los acontecimientos. Cuando se decreta la quiebra o se llama a un concurso de acreedores, la destrucción de la empresa ya está avanzada o totalmente consumada. Los trabajadores tenemos que intervenir ante el primer síntoma que detectemos e impedir que este proceso de vaciamiento avance.

Exigimos la apertura de los libros, cuentas e inventarios de todas las empresas y su supervisión por parte de los trabajadores. Cualquier atraso salarial o diferimiento en el pago de las cargas sociales es una causa suficiente para que dicha supervisión se extienda al movimiento diario de fondos de la empresa. Esa fiscalización obrera debe tener como función principal garantizar que la recaudación vaya en primer lugar al pago de los salarios obreros.

Cuando el atraso en el pago de las remuneraciones o las jubilaciones o la obra social se extienda por más de dos meses y en dos oportunidades en el año en forma discontinua, se suspenda o despida, o haya manejos irregulares que hagan presumir un vaciamiento (traslado de maquinarias, falta de provisión de materia prima, etc.), estos hechos deben ser tomados como indicadores de la incapacidad empresaria para continuar al frente de la empresa. La patronal debe ser relevada de sus funciones y la gestión de la empresa debe ser asumida por los trabajadores como un punto de partida y un tránsito en la lucha por la expropiación.

5) La lucha por la reapertura de las fábricas debe extenderse inclusive a las plantas que ya están cerradas. El Encuentro llama a elaborar un listado de establecimientos inactivos y reclamar el auxilio del Estado para ponerlos en funcionamiento, lo que, concurren-

temente con un plan de obras públicas, permita absorber la mano de obra desocupada.

Este reclamo termina por fusionar a trabajadores ocupados y desocupados en un único movimiento común de lucha por la defensa y recuperación de puestos genuinos de trabajo.

6) El Encuentro llama a reforzar los fondos de huelga de las empresas en lucha. No sólo se trata de la herramienta tradicional para garantizar la subsistencia de los trabajadores en lucha. La recolección de recursos es fundamental para apuntalar los comienzos del emprendimiento obrero, e impedir que el ahogo económico termine por hundir la nueva experiencia que están recorriendo los trabajadores.

7) La reciente aprobación en Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura de Buenos Aires de los proyectos de Chilavert y Ghelco es un paso que debe reforzar la lucha por la aprobación definitiva junto a los proyectos de Brukman y Grissinópoli que plantean la expropiación con cargo de la quiebra a los accionistas y no a los trabajadores, y su puesta bajo control obrero. Las seis horas de subtes aprobadas por la misma Legislatura en medio de una gran movilización de los obreros de Metrovías son una conquista de toda la clase obrera que brinda una palanca en la lucha por los puestos genuinos de trabajo.

8) El Encuentro destaca el papel de las Asambleas Populares, las cuales están llamadas a ser la red social de apoyo de las fábricas en lucha. Ese papel ya lo están jugando distintas Asambleas, como lo revelan los ejemplos de Brukman, Chilavert y Grissinópoli. Son las Asambleas las que contribuyen con la subsistencia de los trabajadores, reclaman al Estado bolsones de comida, arman redes solidarias y, lo más importante, ponen el cuerpo y encabezan la movilización de todo el barrio ante cualquier tentativa de desalojo. El mismo papel ha jugado el conjunto del movimiento clasista, piquetero, estudiantil y popular en Neuquén alrededor de Zanón, y de conjunto las organizaciones piqueteras más combativas en todo el país, como la movilización masiva del Bloque Piquetero Nacional con Brukman y El Gráfico.

El fortalecimiento de este vínculo, generalizándolo a todas las fá-

bricas ocupadas, pasa a cumplir un rol estratégico para el triunfo de la lucha planteada.

9) La salida comercial de los productos de las empresas bajo control de los trabajadores plantea otro terreno de lucha para las fábricas ocupadas, para las Asambleas Populares, sindicatos y organizaciones piqueteras, dirigido a enfrentar la competencia capitalista y transformar "el compra control obrero" en una gran causa política de los explotados y el pueblo.

10) El Encuentro llama a la creación de una central única de empresas ocupadas o bajo gestión obrera. Impulsamos que las fábricas en manos de trabajadores se federen, se unan al movimiento piquetero y a los sindicatos clasistas y elaboren en común un plan de lucha para promover la ocupación de toda fábrica en proceso de vaciamiento, que adeude salarios o que suspenda o despidan, y crear, de esta forma, un polo centralizador de la acción de los trabajadores para luchar contra el capital y contra el Estado capitalista.

Una federación de fábricas ocupadas y en lucha permitirá librar a otra escala la lucha contra la presión capitalista y darle una dimensión nacional a la lucha por el auxilio económico del Estado a las fábricas bajo gestión obrera, lo que plantea la nacionalización de los bancos y la creación de una banca estatal única, capaz de facilitar el acceso al crédito a las fábricas autogestionadas y en cuyo directorio deberían incorporarse representantes de las fábricas ocupadas, elegibles y revocables en cualquier momento por el colectivo de trabajadores.

11) Frente al abandono y huida de los capitalistas, la clase obrera aparece, en la práctica, como la clase capacitada de hacerse cargo de la reorganización del país, sobre nuevas bases sociales. El control de las fábricas plantea el control del país. La cuestión del poder está colocada a la orden del día. La propia crisis que ha llegado a un estadio terminal reclama desplazar a la clase capitalista, que se vayan todos y que gobiernen los trabajadores. El Encuentro asume el programa de acción que aquí se desarrolla bajo esta perspectiva política.

(Votado con 4 abstenciones)

Proyecto de Ley de Estatización bajo control de los trabajadores de Brukman Confecciones

Artículo 1°. Se expropia la planta de Brukman Confecciones, ubicada en la calle Jujuy 554, de esta Ciudad.

Artículo 2°. La propiedad de la empresa se transfiere al Estado de la Ciudad, quien será el encargado de mantener el funcionamiento de la empresa bajo las condiciones indicadas en la presente ley.

Artículo 3°. El Gobierno de la Ciudad reorganizará la producción con vistas a producir indumentaria y artículos afines, para abastecer prioritariamente a las distintas reparticiones y organismos públicos que actúan bajo su dependencia. A tales efectos, se elaborará un plan que deberá estar culminado en un plazo máximo de 30 días. Dicho plan debe apuntar a aumentar la escala de producción y de ese modo, aprovechar la totalidad de la capacidad instalada.

Artículo 4°. El establecimiento se pondrá en funcionamiento incluyendo a toda la nómina del personal que en la actualidad forma parte de la empresa.

Artículo 5°. Los trabajadores que en la actualidad forman parte del establecimiento, como aquellos que se tomen en el futuro como resultado del plan indicado en el artículo 2, cobrarán un salario neto que no podrá ser inferior a 800 pesos. El Gobierno de la Ciudad se hará cargo del pago de las obligaciones laborales y de la seguridad social que surge la legislación vigente.

Artículo 6°. La estatización de la planta no implica solidaridad, por parte del Estado, respecto de las deudas contraídas por la firma. Las mismas deberán ser respondidas con los bienes y patrimonios de los accionistas.

Artículo 7°. Se crea un Consejo de 7 (siete) miembros, electos en asamblea por los trabajadores de la planta, que tendrá como función controlar y fiscalizar el cumplimiento e implementación de las disposiciones contenidas en la presente ley.

FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

El día 18 de diciembre de 2001, los trabajadores de la planta Brukman Confecciones, ubicada en Jujuy 554, de esta Ciudad, y que funciona legalmente bajo el nombre de Cebex Argentina SA, fue ocupada por sus trabajadores, situación que se prolonga hasta el momento actual.

La decisión de ocupar fue una respuesta de los trabajadores a la crisis terminal de esta empresa, dedicada a la confección de prendas de vestir. Los dueños de la misma, los hermanos Brukman, hicieron abandono del establecimiento. Temiendo un vaciamiento, los trabajadores permanecieron en la planta, cuidando sus bienes. Así, transcurrieron dos meses largos, sin noticias de los dueños y los trabajadores sin cobrar sus salarios. Esta situación es la culminación de un largo proceso de vaciamiento y voracidad patronal, que ha costado, inclusive, la vida de trabajadores de la empresa. La patronal adeuda cinco meses de salarios, habiendo sustituido esta paga por la entrega de 5 pesos semanales. En estas condiciones, el día 30 de noviembre de 2001 fallece el obrero Marcelo Rojas, que se desempeñaba como planchador. Rojas, que padecía de bronquitis crónica, muere por carecer de recursos necesarios para poder comprar la medicación correspondiente. Los dueños ni siquiera accedieron a pagar el salario en el momento en que el nombrado estaba internado, pese al pedido expreso efectuado por sus familiares. La misma situación se plantea hoy con la operaria Elvira Peralta, cuya dolencia —padece un cáncer— se ha agravado al no poder continuar con el suministro de medicamentos ni los tratamientos que la nombrada tenía prescritos.

Pero se trata, en verdad, de las expresiones más agraviantes de una larga política de abusos y superexplotación. Hace cinco años que la empresa Brukman no abona el aguinaldo ni las vacaciones, llegando al extremo de no abonar ni los salarios, como se describiera anteriormente. Esta conducta fue acompañada por una implacable persecución de los trabajadores, incurriendo los dueños en prácticas antisindicales y discriminatorias contra el personal, especialmente contra aquellos de nacionalidad extranjera. También han incurrido en el des-

conocimiento del convenio y de las normas legales vigentes. Los trabajadores de Brukman no han podido contar en repetidas oportunidades con el servicio de la Obra Social, debido a que no se efectuaban los aportes correspondientes.

Estando la firma bajo concurso de acreedores en la Justicia, ello no ha sido un obstáculo para que los dueños promovieran actos de vaciamiento, como retirar insumos, maquinarias y grandes cantidades de productos terminados sin realizar ningún tipo de registro; y dejar de abonar los servicios públicos indispensables para la producción —como la luz eléctrica, el gas y el teléfono. Estamos en presencia de actos ilícitos que están en abierta contradicción con las disposiciones legales, en general, y con la propia ley de concursos en particular, que obliga a los propietarios a garantizar el funcionamiento y continuidad de la empresa.

El abandono de los dueños contrasta con la actitud de los trabajadores, que a lo largo de estos dos meses han mantenido el funcionamiento del establecimiento, logrando abonar los servicios públicos necesarios para la producción, reparar maquinaria averiada, reponer los insumos necesarios y reestablecer la relación con proveedores que habían cortado relación con los Brukman.

Este conflicto revela la inoperancia e ineptitud patronales, donde el principal obstáculo para la producción es el propio capital y no los trabajadores. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, a punto tal que la mano de obra pasó a ser casi gratuita (a razón de 5 pesos por semana), mientras la superexplotación fue llevada, como contrapartida, a su máximo nivel, con su secuela de despidos y víctimas fatales. Esta política no sirvió, sin embargo, para que la empresa saliera a flote y despegara económicamente. El llamado “concurso preventivo”, al igual que en otros casos similares, ha sido un biombo para vaciar a la empresa y organizar la huida de los dueños, quienes, previamente, colocaron su patrimonio personal a buen resguardo.

El caso Brukman es altamente revelador respecto de la incompatibilidad existente entre las posibilidades de producción y las relaciones de producción imperantes. Un parque de maquinarias moderno, instalaciones y establecimiento adecuados, con capacidad para emplear a

más de 400 personas, corre el riesgo de convertirse en chatarra, mientras existen demandas sociales insatisfechas de carácter apremiante, entre las que se incluyen los productos de origen textil. Ni hablar de los recursos humanos disponibles y calificados, que son condenados a la desocupación.

Brukman testimonia el proceso de descomposición económica del actual régimen social, que, en un orden general, se expresa en el descalabro sin precedentes que atraviesa la nación. La propuesta de expropiación de la empresa Brukman y su pase a manos del Gobierno de la Ciudad que se presenta en este proyecto se inscribe en un principio general de reorganización de la sociedad bajo la dirección de los trabajadores. Este principio, aplicado a dicho establecimiento, permitirá reconvertir la producción y orientarla prioritariamente a la satisfacción de necesidades sociales, tales como el suministro de guardapolvos y sábanas para los hospitales o ropas de trabajo u otros artículos textiles imprescindibles para instituciones públicas. El Gobierno de la Ciudad estará en condiciones de adquirir estos productos de primera necesidad con la menor intermediación y la mayor transparencia posible. El control de los trabajadores que aquí se propone permitirá que el establecimiento trabaje en los mejores términos posibles, ya que son los trabajadores quienes conocen el proceso de trabajo y la maquinaria involucrada con el mismo.

Consecuentemente con ello, el proyecto plantea que el personal actual de la planta—como aquel que se tome en el futuro a partir del plan de expansión que se contempla en el propio texto—, desempeñará sus funciones tomando, como piso, el nivel salarial y condiciones de trabajo vigentes cuando la planta operaba normalmente en manos privadas.

El "ahorro" no será obra de reducciones salariales—como vino ocurriendo hasta ahora— sino de poner fin al derroche y la ineficiencia empresarias. El solo aumento de la escala de producción y la supresión de la enorme capacidad ociosa que hoy arrastra la empresa permitirá reducir sensiblemente los costos de producción. En sintonía con ello, el proyecto contempla la elaboración de un plan que debe apuntar a la utilización a pleno de la capacidad de producción instalada, previendo la apertura de nuevos turnos y creación de nuevos puestos de trabajo.

Ha trascendido que el gobierno de la Ciudad, por medio de la Corporación del Sur, tomaría la iniciativa de reabrir al menos tres fábricas—que habían cerrado por la crisis— y formar una sociedad del Estado destinada a producir alimentos a costo 75% inferior a los precios de mercado, elaborando 20 mil raciones diarias para ser distribuidas entre la población indigente de la Ciudad. No cabe la menor duda de que con la puesta en funcionamiento de la firma Brukman bajo propiedad del gobierno de la Ciudad se podría poner en práctica una experiencia piloto similar con idénticas expectativas en lo que a los resultados se refiere.

La expropiación de la empresa, por otra parte, está sancionada por la propia realidad. Al abandono de la planta se suma el hecho de que Cebex SA (dueña de Brukman) mantiene deudas multimillonarias, principalmente con el Estado, tanto en el ámbito nacional como en el de la Ciudad de Buenos Aires. Dichas deudas superan ampliamente el patrimonio de la empresa, de modo que el Estado, en caso de apropiarse de la empresa no haría otra cosa que recuperar una acreencia que legítimamente le pertenece. De ningún modo esto puede concebirse como un blanqueo, un olvido o un jubileo. Ni la sociedad ni los trabajadores tienen por qué cargar con la ineptitud e inoperancia patronales. La crisis tienen que pagarla sus responsables. Por eso, la ley plantea en uno de sus artículos que los dueños deben responder con sus bienes y patrimonio por las deudas contraídas.

Por último, pero tanto o más importante que los puntos anteriores, el proyecto plantea el control de los trabajadores de este proceso. Tal como lo indica la experiencia de Brukman, como la que viene siendo recorrida en las asambleas populares, en los cacerolazos, cortes de ruta y piquetazos, son ellos los verdaderamente interesados en darle una salida a Brukman y a toda la riqueza social existente en la Ciudad y en el país en términos del interés nacional y de la mayoría trabajadora. Son ellos y sus organizaciones los que pueden sacar al país de la catástrofe capitalista.

Jorge Altamira

Diputado - Partido Obrero - Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Por la gestión obrera en Grissinópolis

Proyecto de ley presentado por Jorge Altamira

Artículo 1º: Se expropián los inmuebles, maquinarias, herramientas, insumos, marcas y demás activos pertenecientes o afectados a la fábrica Savio S.A., ubicada en la calle Charlone 43/61, de esta Ciudad.

Artículo 2º: El Poder Ejecutivo procederá a efectivizar la expropiación en un plazo máximo de 30 días de sancionada la presente ley.

Artículo 3º: Los bienes expropiados indicados en el artículo 1º serán donados a la Cooperativa de Trabajo "La Nueva Esperanza", que nuclea a los trabajadores de la fábrica y que pasará a hacerse cargo del funcionamiento de la empresa bajo las condiciones indicadas en la presente ley.

Artículo 4º: La Cooperativa contará con la asistencia técnica del Gobierno de la Ciudad para reorganizar la producción de alimentos para abastecer al mercado local, incluyendo las distintas reparticiones y organismos públicos que dependen del Estado de la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad arbitrará los medios para convertir a la fábrica bajo gestión obrera en proveedor privilegiado de la Ciudad. A los fines señalados, se elaborará un plan en un plazo máximo de 30 días. Dicho plan debe apuntar a aumentar la producción hasta aprovechar la totalidad de la capacidad instalada.

Artículo 5º: La expropiación de la planta no implica solidaridad, por parte del Estado, respecto de las deudas contraídas por la firma. Las mismas deberán ser respondidas con los bienes y patrimonios de los accionistas.

Artículo 6º: El Estado de la Ciudad otorgará un subsidio extraordinario de 50.000 pesos (pesos cincuenta mil), coincidente con la entrada en funciones de la nueva gestión obrera, a los fines de dotarla del capital de trabajo necesario para dar el arranque inicial al proceso de producción.

Por la gestión obrera en Grissinópolis

Artículo 7º: Se crea un Consejo de 5 (cinco) miembros, electo en asamblea por los trabajadores de la planta, que tendrá como función controlar y fiscalizar el cumplimiento e implementación de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 8º: Comuníquese, etcétera.

Fundamentos

Señor Presidente:

Introducción

A la par del presente proyecto de expropiación de Grisines Savio S.A. están ya en tratamiento parlamentario, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, otros tres proyectos correspondientes a las fábricas Chilavert, Gheico y Brukman. En la provincia de Buenos Aires, el proceso está aún más avanzado, ya que data de junio del 2000, momento en que se aprobó la expropiación de la fábrica metalúrgica Gip Metal de la localidad de Avellaneda. Existen, en la actualidad, 14 empresas con proyectos de expropiación aprobados, ya sea en el ámbito de la Legislatura bonaerense o de Concejos Deliberantes del conurbano (entre ellas, la Baskonia, Panificación Cinco, Rioplatense, San Jorge). En varias de ellas, los trabajadores ya han reabierto la planta y han comenzado a producir.

Estos antecedentes nos dan una medida de la dimensión del problema social que está en juego y de la viabilidad del presente proyecto de ley.

Antecedentes

Hace dos meses que los trabajadores de la fábrica Savio S.A. (Grissinópolis) vienen ocupando la planta, ubicada en la calle Charlone 55, de esta Ciudad.

La decisión de ocupar fue una respuesta de los trabajadores a la crisis terminal que estaba viviendo esta fábrica de la alimentación,

dedicada a la fabricación de grisines, rebozador y bizcochos. Los dueños de la misma, que abarcan 16 socios, habían hecho abandono del establecimiento.

Esta situación es la culminación de un largo proceso en que los trabajadores del establecimiento han sido víctimas de la voracidad patronal.

La empresa Grissinópolis hace 4 años que no abonaba la quincena completa. Los trabajadores no cobraban el presentismo, que ascendía a 30 pesos por quincena. La patronal los obligaba a firmar los recibos pero no abonaba dicha suma, que correspondía legalmente a los trabajadores. Este recorte se hacía sobre salarios extremadamente exiguos, ya que el jornal del personal era de 1,60 peso la hora. Ni hablar de las deudas previsionales o por Obra Social. Se estima que la deuda jubilatoria ascendía al momento de la ocupación de la fábrica a más de 300.000 pesos. Se recibieron cartas-documento de la Obra Social, del Sindicato de la Alimentación y de la ART por falta de pago. Los descuentos a los trabajadores que marca la ley fueron realizados, pero no depositados.

En la última etapa, la situación se deterioró aún más. Los trabajadores empezaron a recibir apenas 20 patacones por semana, que ni siquiera les alcanzaban para viajar. Luego, los trabajadores pasaron directamente a no cobrar un solo peso, situación que se prolongó durante 9 meses. El presidente del directorio propuso trabajar 6 horas diarias sin derecho a refrigerio y sin goce de sueldo, otorgándole a cada trabajador 4 cajas de grisines para vender para pagar el boleto de colectivo... a cuenta de la deuda salarial. El siguiente paso fue lanzar un "proyecto" que consistía en trabajar 6 horas diarias sin goce de sueldo y rotar al personal, suspendiendo 5 personas por semana, seleccionadas por el capataz. Los trabajadores que no estuvieran de acuerdo con la propuesta deberían retirarse de la empresa y recibirían un vale a cuenta de 10 pesos! Esta "propuesta" fue la gota que rebalsó el vaso y precipitó la decisión del personal de ocupar el establecimiento.

Esta política negra corrió en forma paralela al progresivo vaciamiento de la empresa, que se constata especialmente a partir de

1998. Aparecen en los registros de la sociedad —según lo manifiestan trabajadores de la planta— pagos por servicios que jamás se realizaron, sobrepagos en ciertos insumos y el abultamiento de los costos de construcción de algunas obras realizadas en el predio de la fábrica, ello sin contar el desvío que se habría hecho con parte de la harina comprada por la empresa que se habría dirigido a los depósitos de las panaderías que directivos de la sociedad poseían al margen y paralelamente a Grissinópolis.

El hecho de que la firma se encuentre bajo concurso preventivo en la Justicia no ha sido un obstáculo para que continuaran estas prácticas y actos de vaciamiento. Aprovechando las modificaciones introducidas por la nueva Ley de Quiebras, que autoriza que "acreedores" o "terceros" se adueñen de la empresa (cram-down), apareció un grupo de abogados, identificados bajo la razón social "Bourne Financial Corporation", dispuestos a absorber la planta. Este grupo se hizo cargo de la administración provisoria de la empresa (desde fines de diciembre al 28 de enero), pero esto no redundó en ningún beneficio para su actividad: la planta continuó parada, no se pagaron los sueldos atrasados, y ni siquiera se normalizó el pago de las nuevas quincenas.

Existen razones fundadas para sostener que estamos en presencia de una maniobra especulativa dirigida a armar una gran negocio inmobiliario. Esta maniobra contaría con el guiño de alguno de los accionistas. El interés de los gerenciadores residiría en comprar la fábrica a precios irrisorios, para quedarse con el inmueble y luego venderlo, previo desmantelamiento de la planta. Como la ley obligaría a la continuidad de la empresa luego del cram-down, ha trascendido que esta corporación internacional mantendría un parte ínfima del personal, para ofrecer una simulación de continuidad.

Por lo pronto, un grupo de los actuales socios, que se consideran afectados por tales manejos, ha interpuesto una querrela penal por defraudación y estafa. De todos modos, en caso de prosperar la entrega de la fábrica a este grupo gerenciador estaríamos ante las puertas de un cierre definitivo.

El costo empresario

Este conflicto es altamente emblemático pues revela que el principal obstáculo para la producción es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, hasta el punto tal que la mano de obra pasó a ser gratuita mientras la superexplotación fue llevada, como contrapartida, a su máximo nivel. Esta política de flexibilidad laboral llevada hasta sus últimas consecuencias, no sirvió, sin embargo, para que la empresa saliera a flote. Mientras los obreros veían reducir sus condiciones de vida a niveles inauditos, los patrones vaciaban la empresa y desviaban los recursos que ésta generaba a sus propios negocios personales, que tenían por fuera de la empresa.

Grissinópolis es "viable". Una medida de ello lo dan los recursos que generó durante años, que permitieron que ni más ni menos que 15 socios vivieran de ella. Lo que la hace inviable es la voracidad y el parasitismo patronal. La mejor demostración de que esto es así la dan los propios trabajadores. Como vienen ocurriendo en muchas fábricas vaciadas, los obreros de Grissinópolis están en pleno preparativos para reabrir la fábrica. Los capitalistas cierran las fábricas, los trabajadores las ponen nuevamente a producir.

El caso Grissinópolis es sumamente revelador de la incompatibilidad existente entre las posibilidades de producción y las relaciones de producción imperantes. Un parque de maquinarias, instalaciones y establecimiento adecuados con capacidad para emplear a más de 60 personas, corre el riesgo de desaparecer, mientras existen demandas alimentarias desesperantes sin satisfacer.

Proyecto de ley

La propuesta de expropiación de los bienes de la empresa Grissinópolis y su entrega a los trabajadores, parte de estas constataciones, y se inspira en un principio general de reorganización de la sociedad, sobre nuevas bases sociales, encabezada por los trabajadores. Este principio aplicado a dicho establecimiento permitirá recon-

vertir la producción y orientarla a la satisfacción de necesidades sociales, tales como el suministro de alimentos para los hospitales, escuelas, instituciones públicas y población más carenciada. Ni qué hablar que esto redundará inclusive en un mejor servicio, aumentando la calidad y abaratando el producto.

El "ahorro" no será a expensas del salario sino del fin del derroche y la ineficiencia empresarias. El solo aumento de la escala de producción y la supresión de la enorme capacidad ociosa que hoy arrastra la empresa, permitirá reducir sensiblemente los costos de producción. En sintonía con ello, el proyecto contempla la elaboración de un plan que apunta a la utilización a pleno de la capacidad de producción instalada, previendo la apertura de nuevos turnos y la creación de nuevos puestos de trabajo.

De ningún modo esta expropiación puede concebirse como un blanqueo, o un jubileo y menos aun un premio para la patronal vaciadora. Ni la sociedad ni los trabajadores tienen por qué cargar con la ineptitud empresaria y sus maniobras dolosas. La crisis tienen que pagarla sus responsables, los que la provocaron. Por eso, la ley plantea en uno de sus artículos que los dueños deben responder con sus bienes y patrimonio por las deudas contraídas. En lugar de pagarse una indemnización al capital en quiebra, como normalmente ocurre, ese dinero debe ser dirigido a apuntalar el emprendimiento obrero, bajo la forma de un subsidio extraordinario no reintegrable a favor de los trabajadores.

Por último, pero tanto o más importante, el proyecto plantea el control de los trabajadores de este proceso, que como lo indica tanto la experiencia de las fábricas ocupadas como la experiencia que viene siendo recorrida en las asambleas populares, en los cacerolazos, cortes de ruta y piquetazos, son los verdaderamente interesados en defender el patrimonio y los reclamos y aspiraciones populares. Son ellos y sus organizaciones los que pueden sacar al país de la catástrofe capitalista.

Proyecto de ley de expropiación de TDO bajo control obrero

Artículo 1°: Se expropian los edificios, vehículos, materiales, herramientas, repuestos, insumos y demás bienes de uso que en la actualidad están afectados al suministro del servicio de Transporte del Oeste y cuyo detalle se encuentra transcripto en un anexo a la presente.

Artículo 2°: El Poder Ejecutivo procederá a efectivizar la expropiación en un plazo máximo de treinta días de sancionada la presente ley.

Artículo 3°: Los bienes expropiados, indicados en el artículo 1°, serán donados a la organización que, a tales efectos, formarán los trabajadores de esta línea de transporte, quienes tomarán en sus manos la administración y conducción del servicio.

Artículo 4°: El Estado provincial hará entrega a la Gestión Obrera de TDO del combustible necesario para garantizar normalmente el servicio a los precios vigentes al 31 de diciembre de 2001.

Artículo 5°: El Estado provincial otorgará una subsidio extraordinario de 3.000.000 de pesos (tres millones), coincidente con la entrada en funciones de la nueva gestión obrera al frente del servicio con el objetivo de crear un fondo destinado al reacondicionamiento de las unidades existentes y a una paulatina renovación y ampliación del parque automotor y mejora progresiva de la calidad del servicio.

Artículo 6°: El Estado provincial gestionará ante las autoridades nacionales de transporte (CNRT y Secretaría de Transporte): a) el otorgamiento a la futura gestión obrera del permiso de explotación de los recorridos, cuya concesión detenta en la actualidad la empresa TDO; b) un plazo de gracia de cinco años a los fines de adaptar la antigüedad de los modelos de la flota de vehículos a las normativas y disposiciones vigentes.

Artículo 7°: Se exime a la gestión obrera del pago de peajes, patentes, impuestos municipales, provinciales, nacionales y de cualquier otro gravamen vigentes en el ámbito de la provincia.

Artículo 8°: Se crea un Consejo de 7 (siete) miembros electo en asamblea por los trabajadores, que tendrá como función controlar el cumplimiento e implementación de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Fundamentos

El transporte de pasajeros se encuentra en una crisis final. Diferentes líneas están al borde del colapso: adeudan salarios por varios meses; no reponen los insumos; disminuyen las frecuencias —en especial, las nocturnas—; se cancelan servicios por falta de combustible; a las unidades que salen a la calle no se le hace el mantenimiento elemental —para no hablar del deterioro que experimenta el parque automotor. La patronal pretende resolver la crisis sobre los choferes y el público usuario. El gobierno le acaba de otorgar a las empresas un subsidio de 750 pesos por unidad. Este subsidio se financia con un aumento de la tasa al gasoil de 5 a 8 centavos, o sea 22 millones mensuales y 260 millones al año. Los empresarios siguen, de todos modos, reclamando el aumento del boleto.

El subsidio no ha detenido, sin embargo, la caída, ni el default de las empresas.

El colapso ha dado lugar al copamiento del transporte por parte de grandes grupos empresarios. Las “absorciones” de líneas se hacen a expensas de los trabajadores: una parte considerable del personal queda en la calle y los que quedan en sus puestos sufren pérdidas de salarios, y condiciones de trabajo más desfavorables. Ese “ahorro” no ha redundado, sin embargo, en una mejora del servicio. La política de las nuevas administraciones es aumentar los márgenes de rentabilidad sin invertir un peso o haciendo inversiones insignificantes.

Una radiografía patética de esta situación la tenemos en la empresa de transporte Río de la Plata. El servicio de la empresa se ha deteriorado, inclusive a un ritmo superior, desde el momento que el gerenciamiento de la Río de la Plata pasó a manos de Expresos Paraná, del grupo Colcam, concesionaria de Mercedes Benz, una de las corporaciones que viene copando monopólicamente el mercado. Este grupo

estuvo hasta hace unos meses atrás conduciendo la firma en que renunció, aunque, en la práctica, varios de los gerentes de zona que ella designó bajo su mandato, siguen administrando la empresa.

TDO es también víctima de la puja de distintos grupos monopólicos del transporte, que especulan con el desguace de la línea, la supresión de servicios, es decir, la danmificación de los trabajadores y usuarios.

Los trabajadores de TDO llevan un atraso de tres meses en el sueldo, del medio aguinaldo, así como la no concreción del pago de los 100 pesos establecidos por ley. De los 285 vehículos con que contaba la empresa apenas dos años atrás, en la actualidad, apenas circulan unos 160. El colmo fue la confiscación de 17 unidades por los bancos acreedores. Hay 300 trabajadores, por esta razón haciendo banco. Hay ramales como el de la 635 que se encuentran en peligro de caída del piso, por no renovación de la concesión municipal.

Salta a la vista que estamos en presencia de un vaciamiento. Las alternativas ensayadas hasta ahora han fracasado y han terminado agravando la crisis de la empresa. El propio concurso preventivo tramitado en la Justicia no ha sido un obstáculo para que continuaran las prácticas y actos de vaciamiento.

Las "soluciones" tradicionales —que consisten en la entrega de la concesión a otros grupos patronales— puede llegar a constituir una "salida" para los dueños, que se desembarazan de sus deudas o para sus acreedores pero no para los trabajadores, que pagan el costo de esta reorganización a través de un tendal de despidos y superexplotación.

En la empresa TDO, del mismo modo que en todas las empresas cerradas o con cierre inminente, hace falta una reorganización que dé prioridad a los intereses y aspiraciones de los trabajadores.

La expropiación de los bienes de la empresa y su entrega a los trabajadores —simultáneamente con el permiso de explotación—, que plantea la presente ley, se inspira en esta necesidad.

El servicio de transporte es viable. Lo que lo hace inviable es la voracidad y parasitismo patronal. El problema no reside en el costo laboral sino en el costo empresario. La mejor demostración de que esto

es así lo están señalando decenas de fábricas vaciadas, que han sido reabiertas por iniciativa de los obreros. Los capitalistas cierran las fábricas, los trabajadores las ponen nuevamente a producir.

En sintonía con esto, el proyecto plantea la gestión obrera de la línea. El solo acto de poner fin al derroche, la ineficiencia y el vaciamiento empresario, redundará en forma inmediata en la calidad y mejora del servicio.

Como muestra valen los diez meses de control obrero —desde octubre del 2001— que han permitido un importante abaratamiento de costos, luego de haber verificado una serie de manejos ilícitos por parte de la patronal: robo de gas oil o sobreprecio en repuestos. Se ha logrado colocar en funcionamiento y defender unidades que se encontraban inhabilitadas por falta de mantenimiento o en peligro de ser confiscadas por los acreedores. La comisión de control obrero ha constatado lo que configura un ignominiosa deuda con los trabajadores: la retención por parte de la patronal de los aportes previsionales, de la cuota de obra social y de los aportes sindicales. Consecuentemente con esta orientación, la ley plantea un auxilio del Estado. Los fondos públicos que en la actualidad van destinados al salvataje de la patronal, es decir a financiar el vaciamiento, son dirigidos a sostener el emprendimiento obrero. En lugar de rescatar al capital, la ley promueve resarcir a los trabajadores, obligando al Estado a suministrar los recursos para garantizar la continuidad del servicio.

La expropiación no puede ni debe convertirse en un premio para la patronal vaciadora. Los accionistas de TDO deben responder por las deudas que mantiene la empresa —y que, en la actualidad, asciende a varias decenas de millones de pesos— con sus propios bienes y patrimonio personal. El ahorro de no pagarle de la indemnización a las patronales, es destinado a la creación de un fondo que permitirá una paulatina renovación de las unidades y el mejoramiento de la calidad del servicio.

Discurso de Jorge Altamira en la Legislatura*

Señora presidenta: A mediados de diciembre de este año se cumplirán dos años de la ocupación de la empresa Brukman por sus trabajadores. Cito la fecha, porque ocurrió pocas horas antes de uno de los movimientos sociales y políticos más extraordinarios de nuestro pueblo. Me refiero a las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Y por la circunstancia de producirse con 24 horas de anticipación, la ocupación de Brukman en estas jornadas históricas tiene un lugar fundamental: la adelanta, la pronostica, la anticipa.

En los debates que en el futuro pueda haber sobre el carácter social y político del "Argentinazo", la ocupación de Brukman tendrá que ser considerada seriamente, porque es la manifestación de la intervención de la clase obrera en esta gesta social y política; la que en definitiva le dará su proyección y su alcance.

Me llama la atención que hasta ahora no se hayan asociado estas fechas. Son fundamentales. Contra lo que se dijo acá, la intervención de las organizaciones políticas en la ocupación fue inferior a cero. El hecho extraordinario de la ocupación de Brukman es que trabajadores que durante mucho tiempo se encontraron disciplinados al autoritarismo patronal, un día dijeron que eso debía acabar y ocuparon su empresa. Para nosotros, los militantes marxistas, esto es lo que importa, porque revela la tendencia propia del obrero a emanciparse, más allá de las consignas que le pueda dirigir un teórico. Brukman confirma esta tesis histórica, la que le da valor científico a nuestras acciones políticas.

En realidad, fue una ocupación *sui generis*: el patrón huyó, y prácticamente dejó las llaves. (...) Había acometido un vaciamiento completo. Estaba hambreado al más o menos centenar y medio de

* Este discurso fue pronunciado por Jorge Altamira en la sesión de octubre de 2003, en la Legislatura, cuando se trató y aprobó la Ley de Expropiación de Brukman.

trabajadores que había allí.

En esta deformación de los hechos que hemos escuchado acá, hay algo más que una diatriba y una provocación. Hay un afán de adulterar la naturaleza del proceso histórico para que los habitantes y los trabajadores de nuestro país no saquen las conclusiones que corresponden. Cuando digo que el 18 de diciembre próximo se cumplirán dos años de una lucha fenomenal, que ha conocido diversas características, varios intentos de desalojo contra empresas ocupadas —y una represión inaudita cuando fue desalojada—, quiero decir que estos dos años enaltecen al movimiento obrero y representan una acusación a esta Legislatura que nadie podrá disimular con la expresión de que "se están alcanzando los consensos necesarios".

En momentos cruciales, cuando ya existían antecedentes de la aplicación de la ley de expropiación en concepto de utilidad pública, hubo una maniobra política del Gobierno de la Ciudad, alegando que había que esperar la sanción de la quiebra, cuando en realidad el gobierno sabía —y varios diputados que me precedieron en el uso de la palabra lo han vuelto a decir— que el concurso era una maniobra fraudulenta de la patronal.

¿O acaso no sabían la jueza de la quiebra, o el secretario de Desarrollo Económico, que el 40 por ciento de la deuda que tenía esta empresa era con una empresa propia, la empresa Meadows, instalada en Uruguay, y que se trataba de una operación de fraude en la que se iban a vaciar las cajas del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Ciudad y de los otros acreedores? Si el proceso culminó finalmente con la declaración de la quiebra, obedece única mente a la lucha de los trabajadores, porque se produjo luego de reiteradas prórrogas por parte de la jueza. Aquí estuvo el secretario de Desarrollo Económico, en una reunión de esa comisión, y aun habiendo un proceso de quiebra que no había concluido, les dijo a los trabajadores: "Les resuelvo el problema, pero se tienen que trasladar de edificio; encuentro la plata para comprar las máquinas". Estaba dispuesto a cualquier tipo de solución, pero no a aplicar el proceso de expropiación.

Es una acusación a la Legislatura, que durante dos años no asu-

mió la responsabilidad de dictar la expropiación de la empresa Brukman a favor de los trabajadores. ¡Y hasta desde el punto de vista del Derecho, que se ha aludido acá, tenemos que indemnizar a los trabajadores que han pasado noches enteras en una carpa, no han visto a sus hijos y han sufrido la represión! (Aplausos) (...). ¿Quién le devuelve a los trabajadores de Brukman el lacerante sacrificio que han hecho junto con sus familias, la depresión, la decepción, la angustia, la idea de que en un país con seis millones de desocupados ellos podían estar al borde de integrar esa legión de compañeros sin trabajo?

Fue una lucha del movimiento obrero la que llevó a esta quiebra; una lucha de este movimiento piquetero al que aquí se denigra. Pero hay que recordar que en una asamblea realizada en el estadio de Lanús, la Asamblea Nacional de Trabajadores, ante 25 mil trabajadores, decidió transformar una vez más la lucha de Brukman en una lucha común, y fue presentada al presidente de la República en una reunión con el Bloque Piquetero, primero a Duhalde y después a Kirchner, así como el tema de otros sindicatos. Ésta es una cuestión fundamental.

La expropiación parcial

Esta Legislatura, que hoy no tiene nada que reivindicar porque es responsable de esta situación, presenta un proyecto de ley que tiene profundas limitaciones. Voy a señalar dos, y quiero advertirles a los compañeros presentes que peleen para lograr que estas modificaciones —probablemente una más importante que la otra— sean votadas.

En primer lugar, ¿por qué el concepto de indemnización está limitado a 150 mil pesos? El síndico tasó la maquinaria en 370 mil pesos. ¿Qué pasa con las maquinarias cuyo valor va más allá de los 150 mil pesos? ¿No van a ser entregadas a los trabajadores de Brukman? En segundo lugar, ¿por qué hablamos de 150 mil pesos luego de que esta Legislatura votó que para los casos de expropiación íbamos a utilizar el concepto de moneda de quiebra? En ese sentido mo-

dificamos la ley de expropiación. ¿Por qué no pagamos con moneda de quiebra esta expropiación y les entregamos a los trabajadores íntegramente la maquinaria, no hasta un monto determinado que puede llevar a que se excluya otra parte de esa maquinaria?

Esta Legislatura demoró, y por algo lo hizo, el tratamiento de este tema; y el resultado que tenemos aquí es muy mutilado. Los compañeros van a empezar sin capital de trabajo; probablemente, no van a contar con toda la maquinaria, de acuerdo con lo que surge de aquí, teniendo que hacer un esfuerzo tremendo para sobrevivir. Este es un proyecto de ley que plantea sólo la expropiación parcial.

Un diputado dijo que a estos trabajadores, de acuerdo con un proyecto original, se los quería transformar en empleados del Estado. ¡Me hubiera gustado escuchar esto cuando Martínez de Hoz y Alvaro Alsogaray nacionalizaron la Italo por millones de pesos, enriquecieron las cuentas de Alemann y de los banqueros suizos y transformaron por medio de un fraude a los empleados de la Italo en empleados del Estado! (Aplausos). Eso es lo que no quiero. Acá se plantean dos sentimientos. En primer lugar, que marchemos y aprobemos la expropiación de la empresa. Y, por otro lado, quiero fijar dos conceptos fundamentales: tiene que ser una expropiación total y con moneda de quiebra. ¿O los trabajadores van a estar, dentro de dos años, teniendo que comprar las maquinarias, y ya no a moneda de quiebra sino a valor de mercado? Esto es una confiscación del salario. Se habla de la dignidad del trabajo. ¿Realmente se la respeta? ¿Pueden trabajar dos años para pagar tres veces más caro lo que hoy tendrían a un tercio de su valor? Eso es una confiscación del esfuerzo del trabajador. Cada vez que los círculos burgueses muestran alguna generosidad, a los compañeros trabajadores les digo que se agarren los bolsillos, porque alguna estafa está en juego. Entonces, esta expropiación tiene un costo: lo que van a tener que comprar lo van a tener que trabajar durante dos años y pagarlo el doble. ¿Por qué no aplicamos la moneda de quiebra ya?

Me dijo mi asesor, colaborador y compañero, que se acaba de enterar de que Ibarra vetó la modificación de la ley de expropiación relativa al pago en moneda de quiebra. ¿Qué significa este veto? ¿Que

hay que pagarle a los vaciadores más allá de lo que dicta el mercado? ¿Cómo es que un diputado defensor del mercado en esta Legislatura no pidió que se respeten las leyes del mercado, y que expropiemos con moneda de quiebra? No, dijo: "Acá me hago el 'burro', porque tengo que defender a los empresarios y a los capitalistas, ya que a ellos no les convienen las leyes de mercado en una quiebra; entonces, me hago el 'burro' con el mercado: aplico el mercado al mayor valor, no al menor". Es una vieja tendencia de la especulación capitalista.

Entonces, acá hay que modificar este artículo. La expropiación tiene que ser integral, no parcial, y con moneda de quiebra.

Los carneros, no

Este punto que propongo modificar tiene que ver con uno ya adelantado por otros diputados y que se refiere a que esta ley sí es totalitaria (...). Porque en el Artículo 8° se obliga a la cooperativa constituida a integrar nuevos trabajadores, y esto en medio de discursos que enaltecen el sistema cooperativo. ¿En qué consiste el sistema cooperativo? Se trata de un grupo de personas que se asocian y deciden democráticamente, no de acuerdo con el que tiene mayor capital.

En este proyecto les dicen: "Ustedes tienen la obligación de meter a otros. Cuando se reúnan en asambleas, no importa lo que ustedes piensen, tienen que meter a otros"; y, si no lo hacen, esta ley de expropiación se cae. Es un chantaje. La Legislatura dice: "Viva la dignidad del trabajo"; pero está extorsionando a todo el mundo.

Esto tiene que ver con el artículo anterior, porque con estos artículos estamos ante una maniobra para confiscar a la cooperativa de gestión obrera de Brukman en favor de un negociado de otras características. Porque en todas estas gestiones y movimientos proliferan los abogados, que son dirigentes y presidentes; pero no son dirigentes ni presidentes los obreros de la cooperativa. Y, cuando mañana se necesite financiamiento, con una debida modificación de la composición del directorio de una cooperativa, vamos a tenerlas traba-

jando en una dirección completamente diferente de la intención que tiene esta votación. ¿Saben lo que me recuerda, hablando de stalinismo? A lo que hicieron los rusos. Los burócratas rusos se robaron la propiedad estatal de Rusia exactamente con este método: se privatizó todo entregando acciones a los obreros; luego, grupos especuladores fueron acumulando estas acciones, y después diez oligarcas se quedaron con los activos más valiosos del mundo.

¡No voy a rifar dos años de lucha! ¡Yo no hice el sacrificio que hicieron ellos, pero tengo una responsabilidad: si ocupó este lugar es para advertirles que no se dejen robar, que hay que modificar este artículo, y si esto no se hace, hagan prevalecer la soberanía de la asamblea! ¡Ustedes lucharon dos años, y la fábrica es para ustedes! (Aplausos).

"Un golpe de Estado contra los trabajadores"

En el tratamiento de la ley "en particular", Altamira profundizó la denuncia contra la tentativa de confiscación de la gestión obrera, a manos de agentes del PJ y el riquismo.

Señora presidenta: Me voy a anticipar a los argumentos de quienes van a defender este artículo (8°). Recién escuchamos a la diputada Laura Moresi citar el informe técnico que, aludiendo a la falta de capital de trabajo y de subsidios, decía que la viabilidad del emprendimiento tenía que ver con el capital humano. ¿Qué significa esto? Que la viabilidad del emprendimiento depende de la voluntad política, social, humana y personal de los que se van a hacer cargo de este emprendimiento. Y los únicos que han demostrado la plena voluntad de ello son los integrantes de la Cooperativa 18 de Diciembre, los que ocuparon la fábrica, los que resistieron a la represión, los que levantaron la carpa. Porque acá no hay un problema de asimilación de distintos trabajadores o de los ex trabajadores de la empresa. Acá el problema político es quién es el sujeto que quiere llevar esta empresa adelante; y quién es el sujeto que, usado por la patronal en distintas circunstancias —y lo hemos visto en la Comisión de Desarrollo Económico en noviembre del año pasado cuando,

usando a esta gente que no intervino, se quiso bloquear la discusión del proceso de expropiación— quiso interferir este proceso.

No me cabe duda de que el artículo 8° es ilegal, ya que ninguna ley le puede imponer a una asociación que tenga una conformación contraria a la voluntad de los que la componen. Pero esto forma parte de un pequeño golpe de Estado, porque alterando la composición de la cooperativa se quiere llevar el proceso de Brukman en otra dirección. Por eso hice alusión a los robos de los activos por la nomenclatura rusa, que siguieron el mismo procedimiento. (...) Mañana, con un golpe de Estado, los compañeros quedan en minoría. Y algún intrigante, manejando las cosas desde atrás y con las leyes de quiebra que se quieren modificar, va a ir imponiendo otra orientación. Y lo que es un emprendimiento obrero, se va a transformar en una empresa capitalista de características comunes, que beneficie sólo a algunos. (...) Quiero adelantar dos cosas. A los diputados les reclamo que no voten este artículo que es ilegal, y quiero advertir que éste es un proceso político que no sólo tiene que ver con Brukman. La semana pasada me informé de un intento de golpe de estas características en la cooperativa que dirige la fábrica Sasetru. Modificaron su composición para favorecer a algunos punteros de la zona de Avellaneda que quieren, ahora, capitalizar lo que fue una lucha tan tremenda como la de los compañeros de Brukman, que fue protagonizada por los compañeros de Sasetru y que contó con el apoyo de los trabajadores de Brukman. Inclusive, hay un intento por modificar la composición societaria en Zanón. ¿Para qué se acude a los estudios de abogados? Para resolver en la trastienda una serie de cosas que no pudieron resolverse en el curso de la lucha. No pudieron desalojar a los obreros de Zanón. El pueblo de Neuquén los respaldó y, entonces, ahora viene una modificación de la composición societaria, un cambio de la Ley de Quiebras y un manejo de este tipo. Estos son los métodos de la nomenclatura rusa aplicados al movimiento de trabajadores más profundo que ha habido en este país. Este no es sólo un abrazo de oso. Es una puñalada por la espalda. Es un caballo de Troya. Lo denuncié vehementemente. Estos son los métodos de copamiento de empresas por figuras que en este país están repu-

diadas. Por lo tanto, este artículo debe ser votado en contra y derogado. (Aplausos.)

En el mes de octubre del año 2002, en una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, se presentó el reclamo de que fuera reconocida como parte en los debates de dicha comisión una lista de personas que integraban los trabajadores a los que se estaba haciendo alusión en su momento, y ésta no fue apoyada.

La Comisión de Desarrollo Económico, a propuesta de los representantes de la "Cooperativa 18 de Diciembre" allí presentes, dijo que no se podía admitir a estos trabajadores, y eso fue en presencia de todos los miembros de esta comisión. ¿Es así o no, diputada Bisutti? Ella me hace sí con la cabeza, al igual que otros diputados.

En ese momento, nadie se acordó del "colectivo obrero"! En ese momento, el colectivo obrero eran todos aquellos que estaban luchando. Todos sabemos que los otros eran la quinta columna de la patronal, y hoy se suben al colectivo obrero.

La fábrica Zanón se enorgullece de que en el proceso de gestión obrera haya estado incorporando a trabajadores y con una característica interesante: no sólo incorpora a trabajadores a medida que aumentó la producción, sino que se preocupa de ellos, en el sentido de que perteneciendo a organizaciones de lucha, ingresan a la fábrica en forma pluralista. (...) Otra empresa, Sasetru, incorporó trabajadores..., pero éste no es el punto. El punto es que los que tienen que decidir si a esta cooperativa se incorporan otros trabajadores son los propios compañeros reunidos en asamblea, y no los diputados de esta Legislatura. (Aplausos.) Eso es elevar la conciencia; eso es la democracia; eso es el trabajo colectivo, y no introducir elementos que durante dos años han trabajado por la destrucción de la cooperativa, por la destrucción de la gestión obrera. ¿A quién van a responder estos últimos dentro de la cooperativa frente a las dificultades que se vayan planteando? A los punteros que están promoviendo este Artículo 8°.

Cronología

Año 1999/2000

- Los trabajadores de TDO se movilizan al Ministerio de Trabajo de La Plata, contra la amenaza de cierre de la línea.
- 21 de agosto. Los trabajadores de Gip Metal ocupan la fábrica, después de que los dueños echaran a todos y de haber pedido la quiebra.
- 15 de julio. Muere un trabajador de Zanón durante la jornada laboral. Como señal de protesta, los compañeros paralizan la fábrica durante 9 días.
- Diciembre. Se les otorga la expropiación a los trabajadores de Gip Metal (hoy Luz y Fuerza).

Año 2001

- Mayo/abril. Los trabajadores de Zanón hacen un paro de treinta y cuatro días. En protesta de las maniobras "patronales-acreedores", impidiendo la participación de la nueva Comisión Interna en las negociaciones.
- Junio. La Legislatura bonaerense aprueba la expropiación de Yaguané.
- 27 de julio. Los trabajadores de "Hipermercados Tigre" (Rosario) deciden ocupar una de las sucursales (después de cinco meses de salarios adeudados). Se elabora la propuesta de un supermercado solidario (el que se declara de interés ministerial en marzo de 2002).
- 1° de octubre. Los trabajadores de Zanón ocupan la fábrica. Previamente, la jueza laboral Rivero de Taiana había decretado el lock-out patronal ofensivo de Zanón
- 18 de diciembre. Abandono de la patronal de Brukman. Los trabajadores ocupan la fábrica.

Cronología

- Octubre. Los trabajadores de TDO entran en huelga e imponen el control obrero de la recaudación, las cuentas y el movimiento operativo de la empresa.
- 19 y 20 de diciembre. Argentinazo.

Año 2002

- Enero. Cierra Ghelco, dejando a 90 familias en la calle. Los trabajadores resisten durante tres meses en la puerta de la fábrica con una carpa.
- 15 y 16 de febrero. Primera Asamblea Nacional de Trabajadores.
- 2 de marzo. Los trabajadores de Zanón comienzan a producir en la fábrica bajo gestión obrera, con una línea de producción.
- 17 de abril. Los trabajadores despedidos de Panificación 5 y las asambleas populares de Munro y Carapachay resuelven que los trabajadores ocupen la fábrica (que se encontraba cerrada desde octubre del 2000).
- 12 de mayo. Primer intento de desalojo a los trabajadores de Chilavert. Los vecinos, las asambleas barriales y el Impa impiden el cambio de cerradura, que ya se estaba efectuando.
- 20 de mayo. Se sanciona la ley de expropiación a los trabajadores de Panificación 5, hoy cooperativa El Aguante.
- 24 de mayo. Segundo intento de desalojo a los trabajadores de Chilavert.
- 3 de junio. Los trabajadores de Grissinópolis se organizan y hacen su primera huelga.
- 13 de junio. Los trabajadores de la Clínica Junín (de Córdoba) reactivan la clínica bajo control obrero.
- 22 y 23 de junio. Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores.
- 26 de junio. Masacre del Puente Pueyrredón. Asesinatos de Kosteki y Santillán.
- 10 de agosto. Se realiza en Grissinópolis un plenario en el que participan Asambleas Populares, el Polo Obrero, Metrovías, organizaciones políticas, estudiantes universitarios y populares. Se organiza la solidaridad contra el cierre de la fábrica y la defensa

- de los puestos de trabajo y la cesión de la misma a un grupo especulador.
- 13 de agosto. Los trabajadores del diario Epoca de Corrientes, ocupan la planta.
- 16 de agosto. Se les autoriza a los trabajadores de Chilavert retomar la producción.
- 23 de agosto. Movilización de los trabajadores de TDO. Logrando frenar la concesión del piso de recorrido de la línea 635.
- 24 de agosto. Primer Encuentro Nacional de Empresas ocupadas y en lucha, convocado por la Asamblea Nacional de Trabajadores, en Grissinopóli.
- 29 de agosto. Inauguración formal de la Cooperativa de Trabajo Vieytes (ex Ghelco).
- 3 de septiembre. Intentan desalojar a los trabajadores de Lavalán. A pesar de la aprobación de un proyecto por parte de la Legislatura bonaerense. Esta provocación es aplastada por la acción de los trabajadores, las asambleas, las organizaciones piqueteras y los partidos.
- Septiembre. Primer Encuentro Nacional de Empresas Recuperadas. Realizado en La Baskonia.
- 10 de septiembre. Gran marcha piquetera por el control obrero. Más de tres mil trabajadores marchan desde Brukman hasta la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se presentan proyectos de expropiación de distintas fábricas.
- 12 de septiembre. Se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación a las cooperativas de Trabajo Chilavert y Vieytes.
- 28 y 29 de septiembre. Tercera Asamblea Nacional de Trabajadores.
- 3 de octubre. Los trabajadores de Brukman se hacen presentes en la Legislatura, acompañados de delegaciones del movimiento piquetero y de distintas asambleas, donde fueron recibidos por diputados de la Comisión Económica, haciendo entrega de su petitorio a través del Diputado Altamira.
- 4 de octubre. Los trabajadores de la línea de transporte "Libertador San Martín" (Merlo) ocupan la empresa en defensa de sus puestos de trabajo.

- 1° de octubre. Segundo intento de desalojo a los trabajadores de Zanón. Rompehuelgas intentan, con la anuencia de la policía, entrar a la fábrica, provocando muchos heridos.
- 10 de octubre se declara de utilidad pública a la Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Ltda. (ex Grissinópoli Savio S.A).
- 24 de noviembre. Segundo intento de desalojo a los trabajadores de Brukman. A las 6 a.m. del domingo, policías del grupo Halcón irrumpieron en la fábrica. A las 10 de la mañana había 200 personas en la puerta y, a las 11:30 a.m., recuperan la fábrica los trabajadores.

Año 2003

- 30 de enero. Se ocupa Sasetru.
- 6 de febrero. Los trabajadores del Supermercado San Cayetano deciden ocupar la sucursal de Bella Vista.
- 18 de marzo. Segundo micrazo de TDO.
- 22 de marzo. Los trabajadores de lácteos AFA, ocupan la fábrica.
- 25 de marzo. Desalojan de la planta a los trabajadores de Sasetru.
- 2 de abril. 10.000 piqueteros marchan a La Plata y rodean la Legislatura bonaerense reclamando la inmediata expropiación de Sasetru.
- 5 y 6 de abril. Cuarta Asamblea Nacional de Trabajadores.
- 8 de abril. Intentan desalojar por tercera vez a los trabajadores de Zanón. Más de 1.500 vecinos defendieron la fábrica.
- 12 de abril. Tercer encuentro de fábricas ocupadas. La misma se llevó a cabo en la Cooperativa Vieytes (ex Ghelco).
- 18 de abril. El viernes a la madrugada se desaloja a los trabajadores de Brukman.
- 18 de abril. La patronal de Lapa huye, luego de vaciar la empresa, y deja en la calle a 800 trabajadores.
- 21 de abril. Represión feroz, del gobierno de Duhalde, a los trabajadores de Brukman y a los miles de manifestantes presentes.
- 14 de mayo. Más de 10.000 compañeros cortan el Puente Pueyrredón durante dos horas. Marchando después para la Legislatura de

Buenos Aires y a la Plaza de Mayo, apoyando a los trabajadores de Brukman, Sasetru, TDO y todas las empresas en lucha bajo gestión obrera. Teniendo la medida alcance nacional en más de diez provincias.

-23 de mayo. "Actazo por Sasetru". En plaza Alsina, más de dos mil compañeros fueron al acto por la reapertura de la fábrica.

-27 de mayo. Los trabajadores de TDO paralizan los servicios; movilizándose, al día siguiente, a Plaza de Mayo con cuarenta micros.

-8 de junio. Triunfa la huelga de TDO. Se firma el acta acuerdo en que se reconoce la totalidad de los puestos de trabajo y la formación de una Mesa de Trabajo.

-14 de julio. Los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo "La Vasquita" (ex AFA) son desalojados.

-17 de julio. Gran marcha por Brukman. Miles de trabajadores piqueteros marcharon a la Legislatura para reclamar por la expropiación. Marchando en dos columnas: una que sale desde Brukman con 2.000 compañeros y la otra que sale desde el Ministerio de Trabajo, con más de 15.000 personas.

-Agosto. Reingreso de los trabajadores de Sasetru a la fábrica.

-2 y 3 de agosto. Quinta Asamblea nacional de Trabajadores.

-30 de octubre. La Legislatura porteña aprueba la expropiación de Brukman. Después de un año y medio de dilaciones.

Bibliografía

El Argentinazo, Jorge Altamira. Editorial Rumbos, año 2002.

Historia del movimiento piquetero, Luis Oviedo. Editorial Rumbos, año 2001.

Formas de trabajo e Historia, Pablo Rieznik. Editorial Biblos, año 2003.

El gran engaño. La izquierda y su lucha por el poder en la zona republicana. Burnett Bolloten. BUC (Biblioteca universitaria contemporánea), Editorial Caralt.

El obrero colectivizado, Víctor Alba.

Diario Personal, Felipe Díaz Sandino.

"Espontaneísmo en la revolución española". Eric Monpo, en *Balance - Cuadernos de historia del movimiento obrero internacional y de la guerra de España*, Universidad de Barcelona, España.

Colectividades Libertarias en España, Gastón Levan, editorial Reconstruir.

"Revolución y contrarrevolución en España, temas en debate", Jordi Escuer, fuente Internet.

La revolución y la guerra de España. P. Broue y E. Temine. Fondo de Cultura Económica.

Los consejos de fábrica en la Rusia de 1917, Ana M. Pankratova. Editorial Anagrama.

Los cuatro primeros Congresos de la Internacional Comunista. Cuadernos de Pasado y presente.

Contra la Cultura del Trabajo. Sartelli, Rieznik, Heller y otros. Colección Hacha y Tiza. Edición R. y R. 2003

Derecho a la Pereza. Título original de la edición francesa consultada "Droit a la pareisse". Edición Mille e une nuits, marzo 1994.

La comuna, P.O. Lissagay. Editorial Estela, marzo 1971.

El Capital, Carlos Marx, Ediciones Siglo XXI, Primera Edición, 1981.

